**Orden del Día de la Segunda Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**9 de septiembre del año 2020.**

**1.-** Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.

**2.-** Declaratoria de apertura de la Sesión.

**3.-** Lectura, Discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de la Sesión.

**4.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta de la Sesión anterior.

**5.-** Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.

**6.-** Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión anterior.

**7.-** Lectura de Iniciativas de Diputadas y Diputados:

**A.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional,por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, por el que se adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley de Protección a la Maternidad en el Estado de Coahuila, con el objeto de incluir dentro del programa integral de apoyo a las mujeres embarazadas, del Instituto Coahuilense de las Mujeres, las estrategias necesarias para que se oriente y se les dé seguimiento a las madres en el cuidado del recién nacido, a fin de proteger la vida y los derechos de los menores en su infancia temprana, lo que les garantizará una vida libre y plena.

**B.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, por la que se modifica el contenido del artículo 244 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; con la finalidad de establecer que los presupuestos de egresos se entregarán junto con las leyes de ingresos a más tardar el 15 de octubre de cada año.

**C.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de contribuciones ambientales.

**D.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, por el que se abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**E.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona,por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 15 de la fracción I, del artículo 335, de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de agravar las sanciones a quien impida, obstaculice o niegue el servicio de transporte público a las personas que se desempeñan en un servicio de salud o laboran en una institución de salud pública o privada, durante una emergencia sanitaria decretada por autoridad competente.

**F.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño por el que se propone reformar el artículo 4°; el párrafo segundo del artículo 6°, así como el párrafo primero y segundo del artículo 61, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el efecto de prever expresamente en dicho ordenamiento, que los remanentes del valor de los bienes sobre los que se declare judicialmente la extinción de dominio, serán destinados mediante el acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, un 30 por ciento a la infraestructura y equipamiento del sector educativo, otro 30 por ciento a la infraestructura y equipamiento del sector salud, un 20 por ciento para los programas sociales de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, y el otro 20 por ciento restante para las áreas de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, así como que el ministerio público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio, solo cuando existan las causas lógico jurídicas que justifiquen tal actuación, y dichas circunstancias sean expresadas fundadamente en tal determinación.

**G.-** Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática,por la que se reforma el párrafo segundo el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva oficiosa.

**H.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María del Rosario Contreras Pérez, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de establecer el tiempo en que se puede solicitar por la parte interesada, la ampliación de los términos y plazos establecidos dentro del procedimiento administrativo.

**I.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, por la que se deroga la fracción II, del artículo 111; se adiciona el artículo 280, se modifica en su totalidad el título noveno, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza; así mismo se adiciona el artículo 200 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza; a fin de crear y armonizar el andamiaje jurídico del Congreso en relación a las disposiciones federales y locales en materia de transparencia y acceso a la información.

**J.-** Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática,por la que se reforma la fracción IX del apartado b del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**,** en materia de prisión preventiva oficiosa.

**K.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, mediante la cual se reforman diversos artículos del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de homologar nuestra legislación del Estado con el Código Penal Federal, en relación a la figura de prisión preventiva oficiosa y endurecer las penas a quien cometa el delito abuso sexual y corrupción de menores.

**L.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, por la que se modifica el contenido del artículo 427 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza; a fin de precisar el delito relacionado con la autorización de construcciones de vivienda en zonas de alto riesgo de inundaciones, deslaves y derrumbes de suelo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado, estableciendo responsabilidades más precisas y penalidades más altas.

**M.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud; en materia de orientación educativa de índole sexual y planificación familiar.

**N.-** Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Fernando Izaguirre Valdés,por la que se modifican diversas disposiciones legales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a razón de que solo el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas en materia de familia, siendo esta, además, una medida que menoscaba las atribuciones de los congresos locales relacionadas con la protección de los derechos de las niñas y niños de nuestro país.

**Ñ.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona**,** por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de regular el acceso de menores de edad a los servicios hospedaje prestados por el sector turístico.

**O.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputada María Esperanza Chapa García, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir en dicha legislación a la posvencion, como una forma de brindar ayuda a familiares de las personas que se han quitado la vida.

**P.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; en materia de atención inmediata para la búsqueda de mujeres y niñas en situación de desaparición o extravió.

**Q.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**8.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:

**A.-** Dictamen de laComisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás diputadas y diputados que las suscriben.

**B.-** Dictamen de laComisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 65 y se adiciona un párrafo al artículo 70, recorriéndose los actuales párrafos, todos de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Dip. Jaime Bueno Zertuche del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás diputadas y diputados que las suscriben.

**C.-** Dictamen de laComisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar un párrafo catorce al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional” conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**D.-** Dictamen de laComisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación al oficio del Lic. Gerardo Xavier de Hoyos Perales, Presidente Municipal de Morelos, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa del fallecimiento de la Profesora María Magdalena de Hoyos de Hoyos, Regidora Plurinominal del Ayuntamiento de dicho Municipio, lo anterior para lo que corresponda.

**E.-** Dictamen de laComisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación al oficio de la Tec. Nadia Haidé Jaramillo Rodríguez, Presidenta Municipal de Viesca, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa del fallecimiento del C. Nabor rodríguez García, Séptimo Regidor del Ayuntamiento de dicho Municipio, lo anterior para lo que corresponda.

**F.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al escrito de denuncia formulada por los CC. César Flores Sosa, Theodoro Kalionchiz de la Fuente y José Ariel Venegas Castilla Regidores del Ayuntamiento de Monclova, mediante la cual solicitan se inicie el Procedimiento de Juicio Político en contra del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, por incurrir en actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, previstos en las fracciones II, V, VII y VIII del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**G.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación a un oficio suscrito por el Lic. Alejandro González Farías, Secretario del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa e insta se dé trámite correspondiente a la solicitud de licencia por más de quince días y por tiempo indefinido al C. Carlos Alberto Rodríguez Alcantar, al cargo de Primer Regidor de dicho Ayuntamiento, así como la sustitución respectiva.

**H.-** Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar el primer párrafo del artículo 98 del Código Municipal para Estado de Coahuila de Zaragoza.

**I.-** Dictamen de la Comisión de Igualdad y no Discriminación, con relación a una Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el contenido de la fracción VI, pasando la actual redacción a la siguiente fracción, que se crea, del artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; con objeto de fortalecer las competencias de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social que le otorga esta ley; planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**J.-** Dictamen de la Comisión de Deporte y Juventud, con relación a una Iniciativa de Decreto por la cual se reforman los artículos 9, 20, 24, 25 y 26 de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de homologar la denominación de las Secretarías del ramo conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila; Planteada por la Diputada Josefina Garza Barrera, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben

**K.-** Dictamen de la Comisión de Deporte y Juventud, con relación a una Iniciativa de Decreto por la cual se reforma el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza; Planteada por la Diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben

**L.-** Dictamen de la Comisión de Igualdad y no Discriminación, con relación a una Iniciativa de Decreto por la cual se reforma diverso contenido de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; cuya propuesta es garantizar la vigencia plena del estado de derecho, así como el impulso de una cultura de respeto a los derechos humanos y de denuncia de actos de violencia, mediante la adopción de garantías y soluciones a las personas que denuncien tales conductas; suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**M.-** Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, por el que se adiciona el inciso c) a la fracción I del artículo 5º, así como los artículos 28 bis y 28 bis 1 a la Ley para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de impulsar los apoyos y financiamientos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado.

**N.-** Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Coahuila, para regular la prestación del servicio de hospedaje que se ofrece a través de plataformas digitales.

**Ñ.-** Acuerdode la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por la Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, para que rectifique la decisión de reducir el presupuesto de los centros de atención para estudiantes con discapacidad (CAED).

**O.-** Acuerdo de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, con relación al oficio suscrito por la Secretaria del Ayuntamiento de General Cepeda, Mediante el cual solicita que el Pleno del Congreso, acuerde hacer un extrañamiento a los Regidores Luis Enrique Alemán Espinoza y Juan Amado Marines Hernández para que se abstengan de hacer acusaciones infundadas.

**P.-** Acuerdo de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, con relación al escrito suscrito por la Síndica de Minoría y los Regidores Tercero, Cuarta, Sexta, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primera, Décimo Segundo, Décimo Tercera, Décimo Cuarto del Ayuntamiento de Matamoros, mediante el cual solicitan a este Congreso integre una comisión para que se realicen las investigaciones pertinentes sobre actos y omisiones en que han incurrido servidores públicos de la administración municipal de dicho Municipio.

**Q.-** Acuerdo de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “mediante el cual se exhorta respetuosamente a los propietarios de las rutas, de camiones, unidades de taxis, y en general todos los que pertenezcan a algún transporte público del Estado, para que en la medida de sus posibilidades, consideren instalar unidades de cámaras y monitoreo satelital, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios”.

**R.-** Acuerdode la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada Rosa Nilda González Noriega, “con objeto de que esta Soberanía por conducto de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, considere la posibilidad de solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado, reconsidere los lineamientos que tiene para la operación de las unidades de transporte público, buscando que puedan brindar el servicio las que se encuentran en buenas condiciones físicas y mecánicas, y no solo por su modelo.

**9.-** Proposiciones de Grupos Parlamentarios, Fracción Parlamentaria y Diputadas y Diputados:

**A.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos de esta LXI Legislatura, “Con el objeto de que esta Soberanía solicite a la Secretaría de Salud Federal, al Consejo Nacional de Salud y al Instituto Nacional de Migración, informen a este Poder Legislativo las cifras y datos en su poder referentes al impacto el Cóvid-19 en la población migrante del país, y en su caso, el total de recursos financieros, de infraestructura y humanos que fueron destinados para apoyar a dicho sector durante la pandemia y hasta la fecha presente”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**B.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Diana Patricia González Soto, “Con el objeto de exhortar a la Secretaría de Salud Federal, para que implementen campañas de concientización sobre el uso del oxímetro de pulso o pulsioxímetro en las familias mexicanas como una medida de prevención del covid-19, ya que permite detectar alteraciones en la saturación de oxígeno y así buscar atención médica antes de que presenten mayores complicaciones”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**C.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos de Coahuila (CEAS) a fin de que realice las gestiones y acciones necesarias para obtener el pago del adeudo que Altos Hornos de México (AHMSA) tiene con ellos, y que a su vez le permita cumplir con el pago al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS) de Monclova-Frontera, con quien la CEAS tiene un considerable adeudo”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**D.-** Proposición con Punto de acuerdo que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Con la finalidad de exhortar a la Junta Local del INE a brindar información oportuna para quienes tramitan su credencial de elector”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**E.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional(MORENA), “Con objeto de exhortar al Instituto Electoral de Coahuila a difundir, por todos los medios posibles, los protocolos y medidas sanitarias que se adoptarán para prevenir y evitar contagios durante la jornada electoral del 18 de octubre del presente año”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**F.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática, “A través de la que se exhorta respetuosamente a la Jueza Penal Silvia Catalina Ortiz Castañeda y al Ministerio Público Jesús Osvaldo Hernández Santos, así como al Centro de Justicia y Empoderamiento a la Mujer, a que en el ámbito de sus competencias, realicen todas las acciones necesarias para sancionar el delito de abuso sexual contenido en la carpeta de investigación 1653/2020”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**G.-** Proposición con Punto de Acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, “Por medio del cual solicita a la Comisión Federal de Electricidad, proporcione el suministro de energía eléctrica de manera adecuada, en el municipio de San Pedro, Coahuila, toda vez, que tanto en la zona urbana como rural del mismo, desde hace más de un mes, existe un pésimo servicio de energía, que está ocasionando problemas a la ciudadanía”.

**H.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con objeto de que este H. Pleno solicite al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública que informe a este Poder Legislativo lo siguiente: 1) Las razones por las que fue retirada de su sitio web la información de las controversias constitucionales interpuestas por la ASE, identificadas con los números C.C. 02/2019 y C.C. 03/ 2019; 2) El contenido de estas controversias y su estatus actual, y; 3) En caso de estar concluidas, se entregue a este H. Congreso, por conducto de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, una copia de ambas, incluyendo la sentencia recaída a cada una”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**I.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Berino Granados, “Con el objeto de solicitar al Congreso de la Unión, en el marco del mes del testamento, no incluir en su agenda legislativa reforma alguna que tenga por objeto gravar con impuesto sobre la renta la adquisición de bienes a través de herencias, legados y donaciones, pues esto constituiría una carga fiscal adicional en la regularización del patrimonio de las personas”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**J.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con objeto de que este H. Pleno solicite a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, inicien de oficio una amplia investigación a las instituciones bancarias del país que presentan los mayores índices de quejas por fraudes cometidos en perjuicio de sus clientes, especialmente en los delitos relacionados con autorización de créditos no solicitados y pagados a suplantadores, saqueo de los recursos de las cuentas de débito, ahorro y nomina, y pagos y transferencias no autorizadas por el cuentahabiente, a fin de deslindar responsabilidades por los fraudes cometidos en perjuicio de miles de personas, y verificar si no existe responsabilidad de los bancos en esto, y en su caso, si están aplicando los protocolos de seguridad y las garantías que por ley deben proveer para protegerlos de este tipo de acciones”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**K.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía, efectúe un respetuoso exhorto al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores “INFONAVIT”, Carlos Martínez Velázquez, para que velando por la función principal de interés social y de orden público de dicho Instituto, que es el de proporcionar a los trabajadores mexicanos créditos hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la adquisición y mejoras materiales de viviendas, ordene inmediatamente una investigación por un presunto fraude a la ley, al simularse en perjuicio de los trabajadores acreditados o deudores de dicho Instituto, un falso procedimiento de Mediación Civil-Mercantil, ante mediadores privados certificados por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyo procedimiento es simulado o falso, dado que no se llevan a cabo, sino que solo se hace constar tal procedimiento en formatos ya elaborados con cláusulas ya predeterminadas por el “INFONAVIT”, en donde bajo la promesa de reducir el costo de las mensualidades de las hipotecas, les hacen firmar clausulas perjudiciales en contra de los derechos de los trabajadores, mismos que han sido engañados por esa ilegal forma de operación, entre los que hay muchos ciudadanos Coahuilenses afectados, investigación que deberá de concluir en la sanción a los responsables de esa indebida y fraudulenta operación contractual, y que además se deje sin efecto alguno las cláusulas identificadas en tales formatos de convenio como “NOVENA”, en la que indebida e ilegalmente, se están traicionando los principios y la naturaleza social del Instituto, porque se está obligando a los trabajadores deudores del “INFONAVIT”, a renunciar al cargo de “Depositario Judicial” del inmueble que habitan, para que inmediatamente el acreedor, es decir, el propio Instituto, tome posesión material del inmueble objeto de la hipoteca, lo cual conlleva al desalojo automático del trabajador de su vivienda, lo cual aparte de provenir de un acto simulado y falso, dicha cláusula atenta en contra de los derechos de posesión y habitación de la vivienda por parte de los trabajadores”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**L.-** Proposición con Punto de acuerdo que presenta el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Finanzas y Salud, del Gobierno del Estado de Coahuila, a que presenten ante esta Legislatura una propuesta de apoyo integral a los familiares del personal de salud que ha perdido la vida en el Estado de Coahuila, a causa del coronavirus covid-19”.

**10.-** Agenda Política:

**A.-** Pronunciamiento que presenta el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre “El inició del actual y último periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura”.

**B.-** Pronunciamiento que presenta la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, “Por la Conmemoración de la Heroica Defensa del Territorio Nacional ante la invasión norteamericana, y la batalla del Castillo de Chapultepec”.

**C.-** Pronunciamiento del Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor del Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila, entorno a la violencia contra las mujeres y los feminicidios”.

**D.-** Pronunciamiento que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” “En relación con la consulta ciudadana para el eventual enjuiciamiento a los ex presidentes de la República: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país”.

**11.-** Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima Sesión.

**MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 10 HORAS, CON 23 MINUTOS, DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, DIO INICIO LA SESIÓN ESTANDO PRESENTES LA 24 DE 25 DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA, PASADO LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN Y VALIDOS LOS TRABAJOS QUE EN ELLA SE TRATARAN.

**1.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADO EL ORDEN DEL DÍA, DISPENSÁNDOSE SU LECTURA.

**2.-** LA PRESIDENCIA LLEVO A CABO LA DECLARATORIA DE APERTURA DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

**3.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MINUTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA, DISPENSÁNDOSE SU LECTURA.

**4.-** SE DIO LECTURA DEL INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**5.-** LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES, DIO LECTURA AL INFORME DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO PERÍODO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

**6.-** SE DIO LECTURA A UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 158-X A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, PARA REGULAR QUE LAS SESIONES DE CABILDO DE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN LLEVARSE A CABO EN FORMA VIRTUAL, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**7.-** SE DIO LECTURA A UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 158-G DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA, A EFECTO DE QUE LOS MUNICIPIOS DE CUATRO CIÉNEGAS, MÚZQUIZ, PARRAS Y SAN PEDRO, PASEN A TENER LA DENOMINACIÓN DE CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, MELCHOR MÚZQUIZ, PARRAS DE LA FUENTE Y SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**8.-** SE DIO LECTURA A UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 154 PÁRRAFO SEGUNDO FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES, PARA IMPLEMENTAR LA INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**9.-** LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE A SOLICITUD DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PRESENTARON INICIATIVAS Y QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN LOS PUNTOS DEL 9-A AL 9-N DEL ORDEN DEL DÍA PREVIAMENTE APROBADO, SE DISPENSÓ LA LECTURA DE LAS MISMAS, TODA VEZ QUE LAS REFERIDAS INICIATIVAS SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA PARLAMENTARIA DE LA PÁGINA DEL CONGRESO, POR LO QUE DICHA SOLICITUD SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS:

**10.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON RELACIÓN A LAS AGRAVANTES DEL DELITO DE EXTORSIÓN, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.

**11.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR LAS FRACCIONES II Y IV, DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO.

**12.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY PARA LA AUTORIZACIÓN DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTAA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZÁRES.

**13.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 7 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PRESENTADA POR LA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ.

**14.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 71 Y 73 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADA EDGAR SÁNCHEZ GARZA.

**15.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 Y LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 22 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS Y SU DONACIÓN ALTRUISTA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JOSEFINA GARZA BARRERA.

**16.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE COAHUILA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE PRESENTÓ DIANA PATRICIA GONZÁLES SOTO.

**17.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO, QUE PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ.

**18.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

**19.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO 6, DE LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE.

**20.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 32 DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE COAHUILA SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.

**21.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.

**22.-** PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE.

**23.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA QUE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA APRUEBE QUE SE INSCRIBA CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL NOMBRE DE LA ACTIVISTA NANCY CÁRDENAS MARTÍNEZ, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS Y ACTIVIDADES CÍVICAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.

**24.-** SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, POR EL QUE SE PROPONEN AL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, COMO INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE DESIGNARÁ AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN A LOS CIUDADANOS:

**1. JESÚS CONTRERAS GARCÍA**

**2. CARLOS ALBERTO ARREDONDO SIBAJA**

**3. KARLA PATRICIA VALDÉS GARCÍA**

**4. MARTHA VIRGINIA JASSO OYERVIDES**

**5. ANA CECILIA MATA RODRÍGUEZ**

POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A LOS CIUDADANOS:

**1. NARCISO CABALLERO LÓPEZ**

**2. JESÚS MARÍA RAMÓN AGUIRRE**

**3. CAROLINA GUADALUPE TORRES MARTÍNEZ**

**4. SERGIO FERNANDO ALANÍS ORTEGA**

**25.-** APROBADO LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA LLEVO A CABO LA TOMA DE PROTESTA DE LOS MENCIONADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN ENCARGADA DE DESIGNAR AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

**26.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN CON VISTA DEL SENTIR DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO Y SE RECORREN LOS DEMÁS A LAS SIGUIENTES POSICIONES DEL ARTÍCULO 7° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADO POR LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ.

**27.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN CON VISTA DEL SENTIR DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ.

**28.-** SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN CON VISTA DEL SENTIR DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO.

**29.-** SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS Y EN OS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 74-C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR.

**30.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LACOMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RELATIVO A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**31.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE SE AUTORICE A DESINCORPORAR DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, UN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 5,406.67 M2., UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “SANTA LUCÍA” DE ESTA CIUDAD, CON EL FIN DE ENAJENARLO A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, PARA SER DESTINADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL.

**32.-** SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA VALIDACIÓN DE UN ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO, PARA ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO, UN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 1,823.96 M2., UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “QUINTAS SAN ISIDRO” DE ESA CIUDAD, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL “PARQUE ESPAÑA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.”, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REMODELACIÓN DEL PARQUE ESPAÑA PARA CREAR UN PASEO PÚBLICO GENERAL, EL CUAL SE DESINCORPORO CON DECRETO NÚMERO 630 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2020.

**33.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA VALIDACIÓN DE UN ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO, PARA ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO UNA PORCIÓN DE TERRENO DE UNA SUPERFICIE DE 15,018.96 M2., UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “LAS TERESITAS” DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA SER DESTINADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EL CUAL SE DESINCORPORO CON DECRETO NÚMERO 156 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2001.

**34.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA VALIDACIÓN DE UN ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO, PARA ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO, UN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 751.32 M2., UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “CAÑADAS DEL MIRADOR”, A FAVOR DE “CARITAS DE SALTILLO A.C.”, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL ASISTENCIAL, EN VIRTUD DE QUE EL DECRETO NÚMERO 370 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, EN EL QUE SE AUTORIZÓ ESTA OPERACIÓN CON ANTERIORIDAD, QUEDO SIN VIGENCIA.

**SE CONOCIÓ Y RESOLVIÓ SOBRE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO:**

**35.-** SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS “EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ANALICE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS Y TOMANDO EN CUENTA EL DATO REAL QUE DIO A CONOCER EL INEGI SOBRE EL DESPLOME DEL (-) 17 % DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SE REORIENTE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA ECONÓMICA, QUE PERMITA PROMOVER, ORIENTAR, FOMENTAR Y ESTIMULAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS Y EVITAR UNA RECESIÓN ECONÓMICA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS.

**36.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “SOLICITAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ATIENDAN LA GRAVE SITUACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN MONCLOVA, COAHUILA, YA QUE SÓLO CUENTA CON CUATRO CAMAS PARA ATENDER A PACIENTES CON COVID-19; LO QUE ES INSUFICIENTE PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA REGIÓN, OCASIONANDO QUE TENGAN QUE SER TRASLADADOS A OTROS HOSPITALES E INCLUSO A OTRAS CIUDADES PONIENDO EN MAYOR RIESGO SUS VIDAS”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA.

**37.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, PARA QUE EN SU FUNCIÓN DE MEDIADOR, BUSQUE UNA PRONTA SOLUCIÓN AL FRAUDE DEL QUE FUERON OBJETO DIVERSOS CUENTAHABIENTES BANCARIOS COAHUILENSES”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR.

**38.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, A QUE DENTRO DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIAS REALICE TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA SE LLEVE A JUICIO A LOS IMPLICADOS EN EL FEMINICIDIO DE LIDIA MARÍA FLORES SOTO”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.

**39.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “PARA QUE, POR CONDUCTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ÉSTA INSTRUYA A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES DE ESTA SOBERANÍA, A FIN DE QUE, A LA BREVEDAD POSIBLE, LANCE LA CONVOCATORIA E INICIE LOS PREPARATIVOS RELATIVOS A LA ENTREGA, EN SESIÓN SOLEMNE, DE GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS A COAHUILENSES DESTACADOS, CONFORME A LO PREVISTO PARA TAL EFECTO EN LA LEY DE CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSE BENITO RAMÍREZ ROSAS.

**40.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE UN PLAN EMERGENTE, PARA RECUPERAR Y/O SUBSANAR LAS PERDIDAS FORMALES E INFORMALES DE TRABAJO”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ.

**41.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR AL TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; AL SECRETARIO DE SALUD, DOCTOR JORGE CARLOS ALCOCER VARELA; AL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, ZOE ROBLEDO ABURTO, PARA EL EFECTO DE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE CONSTITUYAN UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD, COMPUESTO DE MÉDICOS, ENFERMERAS, FARMACÉUTICOS, TERAPEUTAS FÍSICOS, OCUPACIONALES, DE LENGUAJE, NUTRICIONISTAS, TRABAJADORES SOCIALES, TERAPEUTAS RESPIRATORIOS, PSICOLÓGICOS, CLÍNICOS, Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS, PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE ATENCIÓN OPORTUNA Y TRATAMIENTO MÉDICO INTEGRAL, PARA FACILITAR LA VIDA A QUIENES PADECEN LA GRAVE ENFERMEDAD DE “ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA”, Y ASÍ SE PUEDAN MANTENER TAN MÓVILES, CÓMODOS E INDEPENDIENTES COMO SEA POSIBLE, Y SE LES TUTELE ÍNTEGRAMENTE SU DERECHO HUMANO A LA SALUD, CON UN ACCESO OPORTUNO A LOS MEDICAMENTOS QUE LOS CIENTÍFICOS MÉDICOS QUE HAN ESTUDIADO ESA ENFERMEDAD HAN PROBADO CON ÉXITO EN OTROS PAÍSES, MISMOS QUE PUEDEN REDUCIR EL DAÑO NEURONAL DE ESOS CIUDADANOS QUE SON VÍCTIMAS DE TAN GRAVE PADECIMIENTO EN NUESTRO PAÍS, Y PARTICULARMENTE EN NUESTRO ESTADO”, QUE PRESSNTÓ EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO.

**43.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESENTADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “EXHORTAR AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE NUESTRO ESTADO Y CON LAS DEPENDENCIAS QUE ESTIME NECESARIAS, SE PROMUEVAN ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR EL BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES DURANTE ESTA PANDEMIA”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, LA PRESIDENCIA LA TURNÓ PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA.

**44.-** SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS “SOLICITAR A ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXPRESE SU DESAPROBACIÓN A LAS PRÁCTICAS MEDIANTE LAS CUALES SE PRETENDE SILENCIAR A QUIENES DISIENTEN DE LA MAYORÍA EN LOS CONGRESOS LOCALES, CUALQUIERA QUE SEA LA VÍA QUE PARA ESTE INDEBIDO EJERCICIO SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO, YA SEA A TRAVÉS DE LAS PRESIONES O EL CHANTAJE POLÍTICO SOBRE LOS LEGISLADORES DISIDENTES, SU COOPTACIÓN Y, PEOR AÚN, LA AMENAZA DE DESTITUCIÓN DEL CARGO”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA.

**45.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “SOLICITAR A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA INVESTIGAR Y ATENDER LOS CASOS DE TRATA DE PERSONAS QUE DURANTE LA PANDEMIA REGISTRARON UN INCREMENTO EN COAHUILA”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA.

**AGENDA POLÍTICA:**

**46.-** SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, “EN CONTRA DE TODOS LOS ACTOS, OMISIONES Y CONDUCTAS NEGLIGENTES COMETIDAS POR LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, MISMAS QUE PROPICIAN UN AMBIENTE DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD PARA LAS MUJERES EN NUESTRO ESTADO; LO ANTERIOR, DERIVADO DEL LAMENTABLE FEMINICIDIO DE NIDIA MARÍA FLORES SOTO, RECIÉN SUSCITADO EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA”.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DIO POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 14 HORAS, CON 44 MINUTOS, DEL MISMO DÍA, CITANDO A LA SEGUNDA SESIÓN A LAS 10:00 HORAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

**DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO.**

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO.**  **SECRETARIA** | **DIP. BLANCA EPPEN CANALES.**  **SECRETARIA** |

**INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

**RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO**

**9 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**1.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE DICHO MUNICIPIO, PARA ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO UN INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA PUEBLO INSURGENTE, A FAVOR DE SUS ACTUALES POSEEDORES, EN VIRTUD DE QUE EL DECRETO 362, EN EL QUE SE AUTORIZÓ ANTERIORMENTE ESTA OPERACIÓN, QUEDO SIN VIGENCIA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**2.-** COPIA DE OFICIO DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Y CRÉDITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DIRIGIDO A LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE TRANSPARENCIA DE DICHA SECRETARÍA, MEDIANTE EL CUAL LE ENVÍA LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

**3.-** OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL ENVÍAN UN ACURDO PARLAMENTARIO APROBADO EN EL CUAL SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, GENEREN LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA SUSPENDER CUALQUIER CORTE DE ENERGÍA EN LOS DOMICILIOS DE LAS FAMILIAS MEXICANAS; SE CANCELE CUALQUIER INCREMENTO EN EL COSTO DEL SERVICIO Y SE ESTABLEZCA UN PLAN DE DESCUENTOS AL 50%, AL REGRESAR A LA NORMALIDAD, EN ADEUDOS NO PAGADOS DURANTE EL PERIODO QUE DURA LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, LO ANTERIOR CON EL FIN DE SOLICITAR LA ADHESIÓN AL MISMO DE ESTE CONGRESO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS**

**4.-** OFICIO DE LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, MEDIANTE EL CUAL ADJUNTA UN EJEMPLAR DEL INFORME DE LABORES DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO.

**DE ENTERADO Y A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA.**

**5.-** INICIATIVA POPULAR PRESENTADA POR EL CIUDADANO CÉSAR MENCHACA LUNA, MEDIANTE LA CUAL PLANTEA LA CREACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON EL TRÁMITE DE DICHA INICIATIVA, CONFORME A LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**6.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIMÉNEZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EN SESIÓN DE CABILDO FUE APROBADO EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE DICHO MUNICIPIO.

**DE ENTERADO**

**7.-** OFICIO REMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR LA CUAL SE NOTIFICA AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA, LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 216/2020, INTERPUESTA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, EN CONTRA DEL ARTÍCULO 85 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE GANADERÍA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES**

**8.-** OFICIO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, MEDIANTE EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESTE CONGRESO, QUE EN SESIÓN DE CABILDO CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE, SE APROBÓ LA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN AL CARGO DE NOVENO REGIDOR POR PARTE DEL INGENIERO HÉCTOR EDUARDO AROCHA GÓMEZ.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**9.-** OFICIO DE LA DIRECTORA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PARA PONER FIN A TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CELEBRADA EN EL MES DE MARZO PASADO, SE ACORDÓ QUE PARA EL ADECUADO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DICHA COMISIÓN SE CONTARA CON LA REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS SECTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES; ES POR ELLO QUE SE EXTIENDE UNA INVITACIÓN A ESTE PODER LEGISLATIVO PARA INTEGRARSE COMO MIEMBRO DE ESTA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN** **ESPECIAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.**

**10.-** ESCRITO PRESENTADO POR LA SINDICA DE MINORIA, CUARTA Y DECIMA REGIDORAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARRAS, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTAN SU INCONFORMIDAD EXPONIENDO LAS IRREGULARIDADES SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DESARROLLADOS EN LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS.**

**11.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA LOCALIZACIÓN, RECUPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN FORENSE DE PERSONAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**INFORME SOBRE EL TRAMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS EN LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

Sobre el tramite realizado respecto de las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión celebrada el 1 de septiembre de 2020, el pleno del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, informa lo siguiente:

**1.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió al Titular del Poder Ejecutivo Federal la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Berino Granados, “Mediante el cual se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Economía, analice la situación económica del país y tomando en cuenta el dato real que dio a conocer el INEGI sobre el desplome del (-) 17 % del producto interno bruto, al cierre del segundo trimestre del presente año, se reoriente la política nacional en materia económica, que permita promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo económico del país y evitar una recesión económica”, para los efectos procedentes.

**2.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Director General del ISSSTE la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud al Titular del Ejecutivo Federal, así como al Director General del ISSSTE para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, atiendan la grave situación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Monclova, Coahuila, ya que sólo cuenta con cuatro camas para atender a pacientes con COVID-19; lo que es insuficiente para los derechohabientes de la región, ocasionando que tengan que ser trasladados a otros hospitales e incluso a otras ciudades poniendo en mayor riesgo sus vidas”, para los efectos procedentes.

**3.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió al Presidente de la CONDUSEF la Proposición con Punto de acuerdo planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en su función de mediador, busque una pronta solución al fraude del que fueron objeto diversos cuentahabientes bancarios coahuilenses”, para los efectos procedentes.

**4.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática, “A través de la que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado, a que dentro de su ámbito de competencias realice todas las acciones necesarias para que de manera pronta y expedita se lleve a juicio a los implicados en el feminicidio de Lidia María Flores Soto”, para los efectos procedentes.

**5.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Junta de gobierno del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, “Con objeto de que, por conducto de la Junta de Gobierno, ésta instruya respetuosamente a las comisiones correspondientes de esta Soberanía, a fin de que, a la brevedad posible, lance la convocatoria e inicie los preparativos relativos a la entrega, en sesión solemne, de galardones y reconocimientos a coahuilenses destacados, conforme a lo previsto para tal efecto en la Ley de Condecoraciones y Reconocimientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para los efectos procedentes.

**6.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que, en el ámbito de su competencia, realice un plan emergente, para recuperar y/o subsanar las perdidas formales e informales de trabajo”, para los efectos procedentes.

**7.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Salud Federal y al Director General del IMSS, la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía, efectúe un respetuoso exhorto al Titular de la Presidencia de la Republica, Andrés Manuel López Obrador; al Secretario de Salud, Doctor Jorge Carlos Alcocer Varela; al Director General del IMSS, Zoe Robledo Aburto, para el efecto de que a la brevedad posible constituyan un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud, compuesto de médicos, enfermeras, farmacéuticos, terapeutas físicos, ocupacionales, de lenguaje, nutricionistas, trabajadores sociales, terapeutas respiratorios, psicológicos, clínicos, y demás que sean necesarios, para el diseño de un plan de atención oportuna y tratamiento médico integral, para facilitar la vida a quienes padecen la grave enfermedad de “ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA”, y así se puedan mantener tan móviles, cómodos e independientes como sea posible, y se les tutele íntegramente su Derecho Humano a la Salud, con un acceso oportuno a los medicamentos que los científicos médicos que han estudiado esa enfermedad han probado con éxito en otros países, mismos que pueden reducir el daño neuronal de esos ciudadanos que son víctimas de tan grave padecimiento en nuestro País, y particularmente en nuestro Estado”, para los efectos procedentes.

**8.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María Esperanza Chapa García, “Con el objeto de exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que en coordinación con la Secretaría de Salud de nuestro Estado y con las dependencias que estime necesarias, se promuevan acciones encaminadas a lograr el bienestar emocional de los adultos mayores durante esta pandemia”, para los efectos procedentes.

**9.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió a la totalidad de los Congresos locales de las entidades Federativas de la República Mexicana, la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “A través del cual solicita a esta Asamblea Legislativa, exprese su desaprobación a las prácticas mediante las cuales se pretende silenciar a quienes disienten de la mayoría en los Congresos locales, cualquiera que sea la vía que para este indebido ejercicio se ponga en funcionamiento, ya sea a través de las presiones o el chantaje político sobre los legisladores disidentes, su cooptación y, peor aún, la amenaza de destitución del cargo”, para los efectos procedentes.

**10.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Fiscalía General del Estado para investigar y atender los casos de trata de personas que durante la pandemia registraron un incremento en Coahuila”, para los efectos procedentes.

**A T E N T A M E N T E.**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA**

**DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**

**(RÚBRICA)**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD EN EL ESTADO DE COAHUILA, CON EL OBJETO DE INCLUIR DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LAS MUJERES EMBARAZADAS, DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS MUJERES, LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE SE ORIENTE Y SE LES DE SEGUIMIENTO A LAS MADRES EN EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO, A FIN DE PROTEGER LA VIDA Y LOS DERECHOS DE LOS MENORES EN SU INFANCIA TEMPRANA, LO QUE LES GARANTIZARÁ UNA VIDA LIBRE Y PLENA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Graciela Fernández Almaraz, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este Honorable Pleno del Congreso, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley de Protección a la Maternidad en el Estado de Coahuila, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

A la etapa de los 0 a los 5 años de edad se le conoce como infancia temprana, la cual es determinante para que las niñas y niños desarrollen habilidades y capacidades que servirán de base y que sin duda serán de gran utilidad para su vida adulta.

Durante los primeros meses de vida de un menor de edad, es crucial su pleno desarrollo, en esta etapa es cuando se le debe de garantizar su buena alimentación, bienestar social, así como una atención médica certificada, que prevenga cualquier enfermedad, o bien ayude a combatirla, en general un cuidado total de su persona.

Su crecimiento va en todos los ámbitos, desde el físico, cognitivo, psicológico y social, gracias a ello desarrollan habilidades motoras, sociales y cognitivas que marcarán en gran parte su personalidad de vida infantil, adolescente y adulta.

Es en esta etapa, los menores tienen plena dependencia de los padres, principalmente de su madre, quienes son imprescindibles para su alimentación y cuidado, y así es como comenzarán a descubrir el mundo que les rodea.

A partir del sexto mes al primer año, el infante aumenta su independencia y curiosidad por explorarlo todo, aumentando con ello los riesgos a los que se expondrá en su desarrollo.

Debemos tomar en cuenta que la vida de un menor depende de la o las personas quienes lo crían y educan, algunas de estas personas suelen ser adolescentes quienes se convierten en madres y padres por falta de una orientación adecuada.

Actualmente uno de los problemas sociales preocupantes a nivel gobierno, es el embarazo en adolescentes, más en nuestro país, ya que ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, pero lo más preocupante es que de cada 100 adolescentes sexualmente activas, solamente 40 utilizan algún método anticonceptivo.

El embarazo en adolescente, según diferentes puntos de vista y comentarios de expertos, afirman que es debido a diferentes factores entre los que destacan las familias desintegradas, la violencia intrafamiliar y la pobreza.

A raíz de un embarazo no deseado o planeado en los adolescentes, cambia su proyecto de vida, presentándose factores como la desesperación, angustia, frustración, miedo, la gran mayoría se ven obligados a dejar sus estudios, para empezar a trabajar, lo que conlleva a largo plazo al descuido en el desarrollo óptimo de sus hijos.

Nuestro Estado actualmente ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, en lo que respecta a los índices de embarazos en adolescentes, los cuales se registran entre las edades de 12 a 18 años, esto a pesar de constantes campañas para prevenirlos, el adolescente no se encuentra preparado tanto físicamente, como mentalmente para una responsabilidad de tal magnitud, desencadenando consecuencias psicológicas no solo en su persona, si no también en su hijo.

Desgraciadamentes hemos visto casos en el Estado, donde bebés son tirados a basureros, ríos, abandonados en iglesias, escuelas o cualquier otro lugar público, y es ahí donde debemos de poner mayor atención, dar un seguimiento pleno a esas madres y padres de familia que se ven orillados a realizar tan desafortunados actos.

La vergüenza, la culpa, la falta de confianza y el hecho de que este tema sea tabú dentro de una familia y de la sociedad, puede ocasionar que se vivan los problemas en silencio y en soledad.

Las madres especialmente si se encuentran en una situación social, personal o familiar complicada o se perciben con una clara incapacidad de poder hacerse responsables de un bebé, suelen percibir un profundo conflicto interno respecto a la idea de tener o no a su bebé, adentrándose en una especie de círculo vicioso que les atrapa el pensamiento.

Por lo que en esta fase consideramos especialmente fundamental el apoyo social y profesional que les ayude a clarificar su situación concreta, así mismo es oportuno que se les faciliten los recursos y posibilidades que les ofrecer la sociedad y el Estado.

Los bebés que nacen en familias en las que no son deseados, suelen sufrir diferentes enfermedades, dificultades y traumas, además de que corren el riesgo de ser abandonados y/o maltratados por sus propios progenitores.

Si son hijos de madres muy jóvenes pueden nacer con alguna deficiencia mental o física, ya que las células sexuales podrían ser inmaduras, además podrían nacer prematuramente, con bajo peso o con enfermedades infecciosas.

Ayudarlas, orientarlas, atenderlas y acompañarlas a pasar por el mal momento que han estado viviendo, sería una buena herramienta para que ellas llegarán a una madurez y así estaríamos propiciando que la vida del menor estará segura en sus manos, llevarían una vida digna y un pleno desarrollo en nuestra sociedad.

Las dificultades a las cuales se enfrentan las madres y padres en el cuidado de los menores de edad también pueden pasar en quienes se encuentran en situaciones de riesgo, quienes pueden poner en peligro la integridad física del infante y de ellos mismos.

Localizar, orientar y acompañar a todos aquellas que no tengan la posibilidad de acercarse, ya sea por miedo o cualquier otra circunstancia, y hacerles saber a las madres que no estarán solas, que contarán con el apoyo necesario para poder salir adelante, y desarrollarse y realizar sus sueños o metas trazadas en la vida, es una de las principales justificaciones de nuestro proyecto de reforma.

Además de continuar con los trabajos y esfuerzos realizados, por las dependencias e instituciones de nuestro Estado, es importante que nos sumemos todos, a través de foros a futuras madres y padres en los cuales se atiendan puntos centrales como el cuidado y atención de los infantes, atención psicológica, atención médica, apoyo para la inclusión social, o bien apoyar o capacitar en un nuevo emprendimiento u autoempleo, con el cual logre salir adelante las nuevas generaciones, y se logre el objetivo, que principalmente es garantizar una vida libre y plena de los menores, a través del cuidado de sus progenitores.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO:**

**ÚNICO.-** Se adiciona la fracción VI del artículo 11 de la Ley de Protección a la Maternidad en el Estado de Coahuila, para quedar de la siguiente manera:

**Artículo 11. …**

**I a la V. …**

**VI. Las estrategias para que, en coordinación con la autoridad competente, orienten y den seguimiento a las madres en el cuidado del recién nacido, con el fin de proteger la vida y los derechos de los menores en su infancia temprana, lo que les garantizará una vida libre y plena.**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO:** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A SEPTIEMBRE DEL 2020.**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Iniciativa que presenta la diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; de conformidad a las atribuciones establecidas en los artículos 59 Fracción I, y 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que**  **se modifica el contenido del artículo 244 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con base en la siguiente:**

Exposición de motivos

El Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece lo siguiente:

*ARTÍCULO 28.- Las iniciativas de Leyes de ingresos de los Municipios se formularán de conformidad con éste Código, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, del Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables, y serán presentadas al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda, para su discusión, aprobación en su caso y publicación en el Periódico Oficial del Estado.*

*Estas iniciativas deberán contener en su texto el presupuesto de ingresos, indicando las contribuciones y el ingreso estimado de cada una de ellas para el ejercicio fiscal de que se trate; así como los demás ingresos que espera recibir el municipio e incorporar las partidas que cada municipio estime como fuente de ingresos para cada ejercicio fiscal, considerando en todo caso el orden establecido en este Código.*

En los hechos, son comunes los retrasos en la presentación de las leyes de ingresos, pero no tan comunes como los que suceden con los presupuestos de egresos, pues en el pasado era costumbre y creencia equivocada suponer que existía discrecionalidad para presentar los presupuestos de egresos, incluso no pocos ayuntamientos manifestaban creer que no tenían tal obligación, y que esta aplicaba sólo a las leyes de ingresos.

Debido a esto, el Congreso del Estado ha tenido a bien modificar de forma gradual el marco jurídico de la materia para establecer plazos ciertos en materia de presentación de cuentas públicas, leyes de ingresos, presupuesto y modificaciones presupuestales.

En Coahuila, el Código Financiero y el Código Municipal deben estar armonizados en cuanto a lo que se refiere a obligaciones financieras y fiscales, ya que ambos ordenamientos son del mismo nivel jerárquico.

Actualmente, el Código Municipal de nuestro estado dispone:

*ARTÍCULO 244. En materia de obtención y administración de los ingresos, los ayuntamientos formularán anualmente su presupuesto, determinando las cantidades que obtendrán por cada concepto en el ejercicio fiscal siguiente. Durante el mes de octubre de cada año, acompañando a la iniciativa de ley de ingresos, el ayuntamiento someterá el presupuesto de ingresos a la consideración y opinión del Congreso del Estado.*

Y consideramos que en dicho artículo debe establecerse la fecha límite establecida en el Código Financiero, para evitar cualquier conflicto de antinomia o discrepancia entre ambos en relación con esta obligación de los municipios.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de

DECRETO

**ARTÍCULO ÚNICO****:** Se modifica el contenido del artículo 244 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 244.** En materia de obtención y administración de los ingresos, los ayuntamientos formularán anualmente su presupuesto, determinando las cantidades que obtendrán por cada concepto en el ejercicio fiscal siguiente. A más tardar el día 15 del mes de Octubre de cada año, acompañando a la iniciativa de ley de ingresos, el ayuntamiento someterá el presupuesto de ingresos a la consideración y opinión del Congreso del Estado.

…

TRANSITORIOS

**Único.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 09 de septiembre de 2020**

DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA DE COAHUILA, EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES AMBIENTALES.**

El que suscribe, **Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,** Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado por el Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila**, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares** en ejercicio de la facultad legislativa que concede el artículo 59 fracción I, 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, someto a consideración del pleno de ésta Honorable Representación iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el Capítulo VI denominado Contribuciones Ambientales de la Emisión de Gases a la Atmósfera, al Título IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás. Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019.

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos.

A pesar de que las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron alrededor de un 6 % en este año debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a detener. Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores.

Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia.

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad mejorado.

Dentro del objetivo número 13 de la Agenda 2030 los estados que integran la Organización de las Naciones Unidas establecieron adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, debido a que:

*“El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. En un futuro se prevé que las consecuencias serán peores. Los patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar están aumentando, los eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están ahora en los niveles más altos de la historia. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados”[[1]](#footnote-1)*

El artículo 22 de la Ley de Planeación para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se establece que compete a las dependencias y entidades de la administración pública del estado asegurar la congruencia de los programas sectoriales, regionales y especiales con el Plan Estatal, se formula el Programa Especial de Energía en el marco del Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable y su objetivo específico Industria energética y minería, con el propósito de especificar el alcance de los planteamientos del Plan en relación con el desarrollo energético del estado.

Sin embargo, Coahuila presenta importantes pasivos ambientales. La actividad industrial y la generación de energía eléctrica mediante el consumo de carbón sitúan al estado en el segundo lugar nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, con una generación de 13 toneladas por habitante. Estos gases son los principales generadores del fenómeno que conocemos como cambio climático.[[2]](#footnote-2)

Rubros como el equipamiento de las ciudades, la planeación urbana, la protección al medio ambiente, el suministro de agua, la disposición y el tratamiento de residuos líquidos y sólidos urbanos, la construcción de la infraestructura estratégica de desarrollo, así como la mejora regulatoria y la eficacia de las instituciones en la prestación de sus servicios, son compromisos que se han dejado establecidos para su atención desde el Ejecutivo Estatal.

La extensión del territorio, el clima, la topografía y variedad de ecosistemas, aunado a la vocación industrial, minera y energética, plantean un verdadero reto para consolidar a Coahuila como un estado sustentable, donde el derecho de sus habitantes a disfrutar de un medio ambiente sano sea garantizado.

Legalmente, el cambio climático es una realidad aceptada por el Estado mexicano, y las propias disposiciones en la materia nos mandatan a tomar acciones respecto a los efectos del cambio climático y de los combustibles fósiles, considerando el Principio de Precaución ante un riesgo inminente, como lo es el cambio climático y sus consecuencias en la salud humana por lo que debemos transitar hacia una economía baja en emisiones de carbono y que cuide la salud sobre todas las cosas.

De conformidad con el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en relación con las obligaciones de protección y garantía, los Estados se encuentran constreñidos a llevar a cabo medidas específicas para el cumplimiento de sus compromisos contraídos a nivel internacional en relación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los cuales son objeto de esta queja, en especial en relación a medidas económicas y técnicas, las cuales son precisamente las requeridas para mitigar y controlar la contaminación atmosférica urbana.

Dicho artículo del señala la obligación de implementar medidas técnicas y económicas de manera progresiva, para propiciar un cumplimiento paulatino a lo largo de un periodo de tiempo, con la finalidad y objetivo principal de lograr la plena efectividad de los derechos, cuya progresividad representa en el mismo sentido, que su cumplimiento no sea tan oneroso. Esta misma obligación se reconoció igualmente en el artículo desde el primer artículo constitucional en México.

Ahora bien, el 29 de abril se resuelve por parte del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional", en adelante "Acuerdo CENACE", mismo que es publicado en fecha 1 de mayo de 2020 en el "BUZÓN DE NOTIFICACIONES" del "sistema de información del Mercado. Área Pública"; en el que, se determina la suspensión de pruebas pre operativas de las Centrales Eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial; mandata las operaciones de Unidades de Central Eléctrica (Must Run) que son a base de combustóleo y otros agentes contaminantes, y modifica materialmente el "Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen los Criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red".

Materialmente, el “Acuerdo CENACE" elimina el proceso de pruebas para incorporar energías renovables en la matriz energética, bajo premisas falsas como la baja en la demanda de energía. Cabe destacar que, a la fecha de elaboración del presente, el CENACE se ha mantenido la prohibición a las energías renovables, pero se le ha instruido levantar la suspensión de pruebas de generación de energía renovable tras la obtención de suspensiones en favor de múltiples empresas en sus juicios de amparo.

En el "Acuerdo CENACE" en su Considerando Noveno, refiere una serie de confabulaciones fuera de sustento o razonamiento jurídico lógico, al insistir que a la Secretaría de Energía le corresponde establecer la política energética del país así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, promover "que la participación de los particulares en las actividades del sector sea en los términos de la legislación", "atendiendo entre otros, al criterio de soberanía y la seguridad energéticas".

En ninguna parte del citado Considerando Noveno explica que la participación de los particulares en las actividades del sector energético represente por si algo que atente en contra del criterio de soberanía energética ni un riesgo al suministro de energía en forma alguna. Asimismo, no existe una definición legal u orientadora que fundamente legalmente lo que signifique ni se deba entender por ese criterio.

La Secretaría de Energía confirma y profundiza el alcance del “Acuerdo CENACE" con el "ACUERDO por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional." -en adelante la "Política SENER”-, toda vez que guardan una amplia y profunda relación. La "Política SENER", brinda soporte al "Acuerdo CENACE", el cual la misma Secretaria de Energía reconoce ordenó al CENACE para brindar "certeza en la continuidad y seguridad en el sistema eléctrico durante esta contingencia".

De forma adicional, la "Política SENER" busca legitimar e impulsar los la prohibición y restricción de las pruebas e incorporación de las energías renovables como las fotovoltaicas y eólicas en el país.

La Secretarla de Energía se justifica mediante un comunicado de fecha 16 de mayo de 2020, aludiendo la emergencia sanitaria en el marco del COVID-19, diciendo que *"hoy vivimos las consecuencias de la pandemia y es de notar que se redujo de manera drástica la demanda eléctrica en el sector industrial y comercial, con lo cual aumentó el preexistente desbalance entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda, lo que compromete la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de salud durante la emergencia. Por eso, desde la Secretarla de Energía, estamos trabajando en la definición oportuna de medidas correctivas."[[3]](#footnote-3)*

SENER en ninguno de sus documentos ni estudios demuestra que la reducción de la demanda comprometa la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico. Estas son cuestiones diferentes entre sí, en caso de haber menor demanda se reduce la tensión de las líneas de transmisión y en su caso, se adecua el volumen de generación; pero eso no debe implicar y de ninguna forma lógica lo hace, excluir el proceso de incorporación de energías renovables.

La Secretaría de Energía se escuda de forma injustificada en el contexto de emergencia sanitaria para destruir a las energías renovables con el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional" (Política SENER). Con ello, se vulnera el principio de progresividad y no retroactividad en materia de derechos humanos, especialmente en lo que concierne el derecho a un medio ambiente sano, el uso de fuentes de energías no contaminantes, y la transición energética; que permitan contar con una atmósfera limpia, lo que se traduce en una mejor calidad de aire y menores riesgos a la salud.

La SENER obliga a los usuarios finales a tomar electricidad que sea suministrada por centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad que generen energía con combustibles contaminantes a precios mayores que los generadores privados, arriesgando reiteradamente nuestra salud en el proceso.

La "Política SENER" desvirtúa la viabilidad de las energías Impías en la matriz energética del país impactando negativamente la salud de los mexicanos y los compromisos del país en materia de medio ambiente.

Adicionalmente trae como efecto colateral el aumento del precio de la generación de energía al usar combustóleo y otras fuentes contaminantes y, suspende por un plazo indefinido la entrada en vigor de pruebas de operación de plantas de energías renovables.

Es inconcebible que en el país se continúen utilizando fuentes de energía contaminantes y excluyendo la participación de fuentes renovables y no contaminantes como la eólica y fotovoltaica, en perjuicio de la población; prolongando el régimen de contaminación que existe en el país.

Como es sabido, los tratados internacionales de los que México es parte constituyen ley suprema y obligan, en la República, por sobre diversas disposiciones legales, incluyendo leyes generales. Así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En calidad de gobernados, la violación de los Tratados constituye una afectación indebida a la esfera de derechos a un medio ambiente sano, al adoptarse medidas que tienen por objeto y efecto ir en sentido contrario a los compromisos adoptados por México en materia de cuidado del medio ambiente. En efecto, el Acuerdo es violatorio del Acuerdo de París, adoptado por México en abril de 2016 y ratificado el 21 de septiembre del mismo año, publicado en el DOF el 4 de noviembre de 2016.

En ese sentido, la sentencia AR 610/2019 hace referencia al artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Cambio Climático (que reflejó en leyes internas los compromisos asumidos por México en el Acuerdo de París), en el que se establece el compromiso de México para reducir de manera no condicionada en un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero y un 51% por ciento sus emisiones de carbono negro al año 2020.

Es menester considerar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido la Recomendación General 32/2018, relativa a violaciones humanos a la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano ocasionados por la contaminación atmosférica urbana.

Dicha recomendación fue efectuada en virtud de una queja en relación a la falta de actualización de los límites máximos de contaminantes criterio de las normas oficiales mexicanas en materia de salud ambiental, así como sobre la inadecuada distribución en todo el territorio nacional de gasolina y diésel con las calidades satisfactorias, para el adecuado funcionamiento en vehículos automotores y bajas emisiones a la atmósfera, lo que considera la CNDH son circunstancias que influyen directamente en el disfrute de un medio ambiente saludable y en la salud de las personas. Lo que claramente es un paralelo en el fondo y en la forma, a lo que está avalando la SENER, con la distinción que la fuente de energía final es energía eléctrica en este caso.

A su vez, es claro que la entrada en operación de plantas llamadas "must run", o de reserva, entre las que se encuentran las de combustóleo, está vinculada con una estrategia para deshacerse del combustóleo generado en las refinerías, más que a atender una emergencia sanitaria ni garantizar una política de soberanía energética. Es claro que actualmente, si se estaban procesando aproximadamente 400 mil barriles diarios en las refinerías y generando un 26% por ciento de combustóleo y ahora se pretende incrementar la producción se generarán más barriles de un producto que no se compra actualmente en el mundo, pero que ahora lo podrán quemarán las centrales de CFE como si fuera un incinerador de basura, con todas las consecuencias a la salud que ello conlleva.

En este mismo orden de ideas, nos es imperativo señalar que el principio de progresividad en materia de derechos humanos que ha sido reconocido expresamente por la SCJN y lo identifica como la protección efectiva y real de los derechos humanos atendiendo a la gradualidad y progresividad, lo que consiste en reconocer que la efectividad de los derechos humanos no es inmediata, sino que requiere de construcción de objetivos medibles a plazos y, que el disfrute de los derechos humanos siempre debe mejorar con el paso del tiempo, lo que en la recomendación atañe a la contaminación atmosférica urbana. No es potestativo para la Autoridad demorar el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos.

Es obligación de las Autoridades ampliar el alcance y protección de los derechos humanos, en el sentido de que hay exigencias positivas y negativas impuestas para todas las autoridades. EI desarrollo gradual de las disposiciones que crean o aplican normas, lo anterior como un *"deber positivo de progresar”*, es una obligación para la Autoridad.*[[4]](#footnote-4)*

De manera general, la política estatal de cambio climático procura la prevención, considerando que ésta es la medida más eficaz para evitar los daños al medio ambiente, así como el uso de instrumentos económicos en la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, con el propósito de generar beneficios económicos a quienes los implementen y trasladar los costos sociales a los agentes económicos que produzcan riesgos o daños al medio ambiente.

Ahora bien, tomando en consideración las implicaciones sobre el mercado de las energías limpias derivadas de los dos acuerdos emitidos por el Ejecutivo Federal, a través del CENACE y la Secretaría de Energía, la presente iniciativa propone el establecimiento de contribuciones ambientales, específicamente, el impuesto por Emisión de Gases a la Atmósfera, con el fin, no solo de generar ingresos necesarios para sufragar los gastos públicos sino también, de fortalecer las capacidades estatales de respuesta al cambio climático y para reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente a los efectos adversos provocados por actividades económicas directamente incentivadas por la Federación.

El impuesto a que esta iniciativa se refiere, además de los fines recaudatorios propios de cualquier contribución, se implementa con la finalidad (fin extrafiscal) de internalizar las externalidades negativas que existen en los mercados cuando hay un efecto negativo no compensado a una tercera persona derivado de las acciones de otra.

Es decir, la externalidad negativa es la contaminación ambiental que producen ciertas actividades, la cual repercute en el bienestar de los habitantes de Coahuila y representa un costo social que debe ser compensado. Para internalizar la externalidad, es necesario alinear las políticas públicas para reorientar los incentivos correctos que modifiquen la conducta de quienes generan la externalidad, en este caso, a través de una contribución específica.

En este sentido, es fundamental que los montos recaudados por dicho concepto se destinen al costo social que dichas actividades representan para los habitantes de nuestro Estado. La contribución ambiental que ahora se propone se vincula esencialmente con los deberes asumidos por el Estado Mexicano en materia de cambio climático, de modo que el monto de lo recaudado se invertiría prioritariamente en corregir las consecuencias directas de las externalidades, esto es, al aumento de la concentración de contaminantes, el costo de su mitigación y la resiliencia integral de las afectaciones al medioambiente y a la salud.

Nuestra legislación estatal dentro de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece dentro de sus objetivos principales garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar y, definir los principios y los criterios de la política ambiental en la entidad, así como normar los instrumentos y procedimientos para su aplicación; así como también la utilización conjunta de instrumentos económicos con otros de naturaleza similar de la política ambiental, en especial cuando se trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se garantice la integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población.

Es de resaltar que, si bien es cierto que nuestra Carta Magna, en su artículo 73, fracción XXIX, establece las contribuciones que son facultad exclusiva de la Federación, dentro de las cuales se encuentran aquellas relacionadas con energía eléctrica, así como gasolinas y productos derivados del petróleo, también es cierto que dichas actividades generan contaminantes y repercusiones para el medio ambiente, sin que hasta el momento existan sanciones o cargas que se les puedan atribuir, siendo que los principales afectados de dichas actividades que generan contaminantes son las entidades federativas y sus habitantes.

Es decir, tal y como lo analizó y determinó el Pleno de la Suprema Corte, existen bases constitucionales plenas para que este H. Congreso del Estado discuta, delibere y apruebe e imponga tributos de esta naturaleza, ya que no está grabando ninguna actividad reservada a la Federación, ni se está contraviniendo el deber parcial de abstención tributaria que implica la adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal.[[5]](#footnote-5)

No omito hacer mención que estados como Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Nuevo León, presentado ante sus congresos locales iniciativas que buscan desincentivar la emisión de gases contaminantes que contribuyen al cambio climático, a lo que han denominado "contribuciones verdes".

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ÚNICO. -** Se adiciona el Capítulo VI denominado Contribuciones Ambientales de la Emisión de Gases a la Atmósfera, al Título IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

***CAPÍTULO VI***

***CONTRIBUCIONES AMBIENTALES***

***DE LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA***

***OBJETO GENERAL***

***Artículo 192 bis.-*** *El objetivo y finalidad de estas contribuciones es que la Hacienda Pública del Estado cuente con recursos que le permitan financiar las políticas y programas de adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, al fomento de la sustentabilidad en las actividades económicas, industriales y productivas en el Estado, así como para cumplir con las obligaciones de protección a la salud, al ambiente y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, de conformidad con lo establecido por los artículos 4, 25 y 73 fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*Así mismo, estas contribuciones tienen como finalidad que los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de causación, aporten a la hacienda pública en proporción a la afectación a los componentes del medio ambiente y los efectos negativos generados por el sustrato económico que llevan a cabo, cuando éste produzca emisiones de carbono y otros gases a la atmósfera.*

***Artículo 192 bis 1.-*** *Para los efectos de este Capítulo serán aplicables de manera supletoria la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, la ley para la adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones estatales vigentes en materia de derecho al medio ambiente sano, que no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal y, los principios de progresividad e indubio pro natura.*

*Para determinar la base gravable, las autoridades fiscales podrán considerar:*

1. *Los libros y registro sean cual fuera su denominación, que los sujetos obligados al pago del impuesto deban llevar conforme a las disposiciones legales, sean de carácter fiscal, mercantil o para dar cumplimiento a las normas en materia de ecología y medio ambiente y;*
2. *Cuando no sea posible determinar la base gravable en los términos de la fracción anterior, las autoridades fiscales podrán estimar la cantidad conforme a la información que se obtenga de otras autoridades, terceros, estudios científicos o tecnológicos, considerando el tipo de actividades realizadas por el contribuyente y la producción o venta del periodo en el que se causó la contribución.*

***SECCIÓN I***

***DE LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA***

***EL OBJETO***

***Artículo 192 bis 2.-*** *Son objeto de esta contribución las emisiones a la atmósfera de sustancias generadas por los procesos productivos que se desarrollen en el estado y que afecten al territorio del mismo.*

*Para los efectos de este artículo, se considera emisión a la atmósfera, la expulsión directa o indirecta de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y, hexafluoruro de azufre, ya se unitariamente o de cualquier combinación de ellos que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que impactan en el deterioro ambiental.*

***DE LOS SUJETOS***

***Artículo 192 bis 3.-*** *Son sujetos y están obligados al pago de esta contribución, las personas físicas, las personas morales, unidades económicas residentes en el estado o cualquier sujeto de derecho en el estado con independencia de su denominación, así como los residentes fuera de Coahuila que tengan instalaciones o fuentes fijas en las que se desarrollen las actividades que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas dentro del Estado.*

*También comprendidos como sujetos de este impuesto, la Federación, el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados federales, estatales y municipales, las empresas productivas del Estado, las empresas de participación mayoritaria de carácter federal y estatal, las empresas con participación federal o estatal, las empresas de participación municipal, los fideicomisos, los fideicomisos constituidos por cualquiera de los poderes de cualquier orden de gobierno, así como las personas de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza o de cualquier entidad federativa.*

***DE LA BASE***

***Artículo 192 bis 4.-*** *Es base de esta contribución la masa de emisiones contaminantes gravadas que se realicen desde las instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas.*

*Para la determinación de la base gravable, el contribuyente la realizará mediante medición o estimación directa de las emisiones que genere y, en su caso, se tomará como referencia el último Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como de los reportes de emisiones estatal.*

*Para la determinación de las toneladas emitidas, el contribuyente realizará la conversión de los gases establecidos en el artículo 192 bis 2 de esta ley en bióxido de carbono (CO2), multiplicando la tonelada del tipo de gas emitido por el factor relacionado conforme a la tabla siguiente:*

**

***Artículo 192 bis 5.-*** *La contribución se causará en el momento que los contribuyentes realicen emisiones a la atmósfera, gravadas por este impuesto y que afectan en el territorio del estado, aplicando una cuota impositiva por el equivalente a tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por tonelada emitida de bióxido de carbono o la conversión del mismo, establecida en el artículo anterior.*

*Así mismo, pare el caso de que se exceda de la unidad de medida señalada en el párrafo anterior como tonelada, sin que las emisiones alcancen la siguiente unidad de forma directamente proporcional a la porción que exceda de la tonelada correspondiente.*

*Los contribuyentes podrán acreditar a su favor la inversión o ejercicio de recursos para conseguir, incorporar, mejorar o impulsar procesos o tecnologías tendientes a emitir menores volúmenes de agentes contaminantes objeto de este impuesto.*

*Igualmente se podrá acreditar a su favor el ejercicio de recursos o inversión en investigación y desarrollo en tecnología, procesos, o producción tendiente a la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera o al medio ambiente.*

***Artículo 192 bis 6.-*** *Se hará el entero a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponda al mismo, mediante los formularios que para esos efectos apruebe y publique la Secretaría.*

***Artículo 192 bis 7.-*** *Los contribuyentes estarán obligados a presentar aviso de inscripción ante la Secretaría y llevar un Libro de Registro de Emisiones Contaminantes, que estará a disposición de la Secretaría y de las autoridades estatales en materia de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente del Gobierno de Estado de Coahuila, para efectos de la gestión del mismo y como medio de control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la normativa medioambiental.*

*En el Libro de Registro de Emisiones Contaminantes se consignarán los datos siguientes:*

1. *Volumen y tipología del combustible, así como materias primas consumidas y producidas;*
2. *Composición química básica del combustible consumido y producido;*
3. *Cálculo de las emisiones a la atmósfera realizado en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley;*
4. *En su caso, datos de concentración resultantes de los monitores o mecanismos de control o de medición instalados, y;*
5. *Cualquier otro que se establezca mediante publicación reglamentaria por parte de la Secretaría o de las autoridades en materia de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente del Gobierno del Estado.*

***SECCIÓN II***

***DESTINO DE LOS IMPUESTOS***

***Artículo 192 bis 8.-*** *Los ingresos que se obtengan de la recaudación de la contribución establecida en este capítulo, se destinarán al sostenimiento de las siguientes actividades, rubros y obligaciones:*

1. *Las previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley General de Cambio Climático;*
2. *A los objetivos de los Instrumentos económicos establecidos en la Sección IV artículos 31 al 34 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Coahuila de Zaragoza;*
3. *La prevista en el artículo 47 de la Ley de Transición Energética;*
4. *Obras, infraestructura y operación de los servicios de salud en el estado;*
5. *Obras, infraestructura, preservación, manejo o remediación del equilibrio ecológico;*
6. *Acciones estatales de inspección y vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y de cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables;*
7. *Procesos de investigación y desarrollo, construcción y equipamiento de laboratorios o centros de investigación para la disminución de emisiones contaminantes y afectaciones al medio ambiente, y;*
8. *Generación de proyectos para desarrollo sustentable y sostenible que protejan al ambiente.*

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2021.

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ"**

**SALTILLO, COAHUILA A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía el presente proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El 23 de abril de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, invalidó la fracción X, del artículo 293, del Código Penal para el Estado de Baja California, donde se establecía que comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría, que obligue al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, por extensión, el Pleno invalidó las porciones de los artículos 289 Bis, 307 Bis y 307 Ter, del mismo ordenamiento, donde se hace referencia al delito de tortura.[[6]](#footnote-6)

Asimismo, en otro asunto, la SCJN invalidó el artículo 301, fracción IX, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, donde se establecía que comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que obligue a cualquier persona a declarar, usando la incomunicación, la intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra su dignidad.[[7]](#footnote-7)

En ambos casos, el Pleno reiteró sus precedentes en los que ha establecido que en virtud de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución General, publicada el 10 de julio de 2015, se reservó como facultad exclusiva del Congreso de la Unión el expedir leyes generales que establezcan los tipos penales y sanciones, entre otras, en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Motivo por el cual, los congresos locales carecen de competencia para legislar en ese ámbito.[[8]](#footnote-8)

En el caso de Coahuila, la Ley para prevenir y sancionar la tortura, fue expedida el 11 de julio de 2014 y en ella se establecieron los tipos penales referentes a la tortura como a otros tratos crueles inhumanos y degradantes, sin embargo, la misma ya no puede ser aplicada, en virtud de que en el año 2015 el Congreso de la Unión se reservó como ya se dijo la facultad de expedir leyes que establezcan los tipos penales a los que se ha hecho referencia.

En otras palabras, la ley a que se ha hecho referencia es vigente pero no válida, en virtud de que cualquier aplicación de la misma carece de efectividad y podría ser controvertida en los tribunales federales. Además que de que los servidores públicos que atienden los casos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, forzosamente están obligados a aplicar la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, expedida el 26 de junio de 2017, por lo que la ley estatal carece ya de toda aplicación práctica.

Lo anterior no quiere decir que la tortura así como otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se dejarán de prevenir y sancionar en Estado de Coahuila, lo único que cambia es la ley aplicable pues como ya mencionamos ésta será la Ley General.

En suma, siguiendo los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideramos necesario abrogar esta ley para evitar confusiones en los operadores jurídicos y en la ciudadanía y por que como hemos argumentado consideramos que la misma ya no tiene eficacia, validez ni aplicación en la práctica.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**Artículo 1º.-** Se abroga la Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**Único.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 9 de septiembre del 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 15 DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 335, DE LA LEY DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL PROPÓSITO DE AGRAVAR LAS SANCIONES A QUIEN IMPIDA, OBSTACULICE O NIEGUE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO A LAS PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN EN UN SERVICIO DE SALUD O LABORAN EN UNA INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA O PRIVADA, DURANTE UNA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR AUTORIDAD COMPETENTE.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Andrés Loya Cardona conjuntamente con los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al numeral 15 de la fracción I del artículo 335 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de agravar las sanciones a quien impida, obstaculice o niegue el servicio de transporte público a las personas que se desempeñan en un servicio de salud o laboran en una institución de salud pública o privada, durante una emergencia sanitaria decretada por autoridad competente, misma que se presenta bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En estos momentos difíciles, en los que la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 ha modificado nuestra forma de convivencia y puesto a prueba los sistemas de salud de todo el mundo, las sociedades han encontrado fortaleza en la valentía, compromiso y solidaridad mostrada por los profesionales de la salud, médicos, enfermeras y demás personal hospitalario, quienes trabajan jornadas extraordinarias con el fin de proteger y salvar la vida de miles de personas que luchan con esta enfermedad.

La labor que realizan los profesionales de la salud diariamente es reflejo del gran temple, sacrificio y vocación que guardan; basta analizar los últimos datos que esta terrible pandemia ha dejado. El número de muertes relacionados con coronavirus en el mundo superan ya los 871 mil. En México, esta cifra alcanza las 66 mil 329 defunciones,[[9]](#footnote-9) dentro de los cuales se han confirmado mil 320 decesos entre personal de salud, situando a nuestro país como el primer lugar mundial en personal de salud fallecido por COVID-19, por encima de Estados Unidos, del Reino Unido y Brasil,[[10]](#footnote-10) según un informe de Aministía Internacional publicado en días pasados.[[11]](#footnote-11)

De acuerdo con las cifras difundidas por esta organización, 97 mil 632 enfermeros, doctores y otros empleados de hospitales en México han sido diagnosticados con coronavirus desde que comenzó la pandemia, aproximadamente el 17 por ciento de todos los casos en el país hasta ese momento.[[12]](#footnote-12) El 42 por ciento de las infecciones han sido de enfermeros, los médicos conforman un 27 por ciento y otros trabajadores como técnicos, asistentes y personal de limpieza y mantenimiento representan el 31 por ciento.

Ante este escenario los trabajadores de la salud en México se han manifestado en múltiples ocasiones para exigir que se les proporcione el equipo de protección personal adecuado para resguardar su seguridad y la capacitación necesaria para el control efectivo de las infecciones.

Aunado a lo anterior, los profesionales de la medicina y demás personal hospitalario, han sido objeto de agresiones, actos de discriminación o incluso delitos. En algunos sectores de la población existe un desconocimiento e ignorancia generalizada, lo que sumado al temor de contagio han provocado conductas irracionales, de intolerancia, estigmatización, discriminación e incluso odio y violencia en contra de los trabajadores de los hospitales. Con tristeza hemos visto como se les ha prohibido el acceso a tiendas departamentales, han sido objeto de actos de vandalismo a sus hogares, han sufrido hostigamiento vecinal, daños a su propiedad, agresiones verbales y físicas, o se les ha negado la prestación de algún servicio privado o público.

De acuerdo con las Observaciones sobre Violaiones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19,[[13]](#footnote-13) emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, durante los meses de abril y mayo del presente año se registraron 103 agresiones de diversos tipos en el marco de la emergencia sanitaria. Además de la Ciudad de México (19 casos) y Jalisco (15 casos), lamentablemente destacan Coahuila junto con Hidalgo, con siete casos cada uno. Los principales ataques cometidos contra el personal de salud son agresiones físicas (45 casos), agresiones verbales (25), insultos escritos (dos) y 31 consideradas "de otro tipo".

Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 55 agresiones al personal de enfermería en 14 entidades del país en el mes de mayo. A ello deben considerarse también las quejas presentadas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que durante el periodo del 19 de marzo al 09 de junio reportaron un total de 343 peticiones en contra de actos de discriminación relacionados con COVID-19, de los cuales el 23 por ciento se realizó en contra de personas trabajadoras en unidades médicas (39), médicos (22) y personal de enfermería (18).

Ante ello, la Organización de las Naciones Unidas ha instado a los gobiernos, tanto al federal como a los estatales, a adoptar medidas urgentes que sirvan para garantizar la salud física y mental de los profesionales sanitarios.

Para contrarrestar esta situación, este Honorable Congreso aprobó en fechas pasadas una reforma al Código Penal de Coahuila con el objeto de incluir en los delitos de lesiones y homicidio calificados, cuando se cometan en contra de personas que desempeñen un cargo, profesión, oficio o actividad relacionados con la prestación de servicios de salud, misma que fue publicada el 26 de junio del presente año.[[14]](#footnote-14) Esta iniciativa fue un gran paso para garantizar la integridad y la vida de quienes laboran en los centros de salud.

Uno de los actos de discriminación que ha sido denunciado ante instancias públicas, así como en medios de comunicación, es la negativa u obstaculización de un servicio, ya sea público o privado, incluyendo el transporte público. Choferes de taxis y operadores de transporte público, incluso pasajeros, han negado el servicio a médicos, enfermeras o personas que trabajan en hospitales, ya sea al salir de sus trabajos rumbo a sus hogares o viceversa.

Estas acciones representan claros actos de discriminación que afectan seriamente los derechos fundamentales de quienes se desempeñan en el sector sanitario y comprometen el cumplimiento de los fines prioritarios de preservar la salud y salvaguardar la vida.

No cabe duda de que, como sociedad, debemos demostrar mayor sensibilidad y respeto con el personal que día a día arriesga su vida por cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Como legisladores, debemos asumir la responsabilidad de prever normas que inhiban y, en su caso, sancionen este tipo de conductas, promoviendo un ambiente de respeto y reconocimiento a su labor. La bata blanca y el uniforme hospitalario deben ser símbolos de admiración, no de estigmatización.

Actualmente, la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado de Coahuila de Zaragoza contempla sanciones para quienes nieguen, sin causa justificada, el servicio público de transporte, consistente en multa de cinco a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; para el caso de que se obstaculice, impida o niegue el servicio a adultos mayores, niños, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, la multa será de diez a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Con la presente iniciativa se agravarían las sanciones para quienes nieguen el servicio público de transporte a todas aquellas personas que se desempeñan dentro de los servicios de salud.

Para las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario es fundamental garantizar la seguridad e integridad de los profesionales de la salud y personal hospitalario en general, generando condiciones que les permitan desarrollar con tranquilidad su trabajo y sus actividades diarias.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se **adiciona** un segundo párrafo al numeral 15 de la fracción I del artículo 335 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 335.** …

**I.** …

**1.** **a 14.** …

**15.** Por negar, sin causa justificada, el servicio público de transporte, multa de cinco a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; para el caso de que se obstaculice, impida o niegue el servicio a adultos mayores, niños, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, la multa será de diez a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente;

**Se sancionará con multa de treinta a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando se obstaculice, impida o niegue el servicio a una persona que se desempeñe en un cargo, profesión, oficio o actividad relacionados con la prestación de servicios de salud, o que labore en una institución de salud pública o privada, durante una emergencia sanitaria declarada por autoridad competente.**

**16.** **a 22.** …

**II.** …

1. **a 26**. …

…

…

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 09 de septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PRESENTE.-**

**INICIATIVA QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, EN CONJUNTO CON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”; EN EJERCICIO DE LA FACULTAD LEGISLATIVA QUE CONCEDE EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN V; 144 FRACCIÓN I; 158, 159 Y 160 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE LA CUAL PRESENTAMOS** **LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 4°; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 6°, ASÍ COMO EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 61, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EFECTO DE PREVER EXPRESAMENTE EN DICHO ORDENAMIENTO, QUE LOS REMANENTES DEL VALOR DE LOS BIENES SOBRE LOS QUE SE DECLARE JUDICIALMENTE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO, SERÁN DESTINADOS MEDIANTE EL ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, UN 30 POR CIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO, OTRO 30 POR CIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SECTOR SALUD, UN 20 POR CIENTO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL, Y EL OTRO 20 POR CIENTO RESTANTE PARA LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ASÍ COMO QUE EL MINISTERIO PUBLICO PODRÁ DESISTIRSE DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, SOLO CUANDO EXISTAN LAS CAUSAS LÓGICO JURÍDICAS QUE JUSTIFIQUEN TAL ACTUACIÓN, Y DICHAS CIRCUNSTANCIAS SEAN EXPRESADAS FUNDADAMENTE EN TAL DETERMINACIÓN, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Ley de Extinción de Dominio, es el instrumento legal de orden público y de interés social que tiene por objeto regular la extinción de la propiedad de los bienes en favor del Estado, mediante una resolución judicial, lo cual conlleva a la perdida de tales derechos, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño, ni para quien se ostente o comporte como tal.

Mediante la Acción de Extinción de Dominio procederá su aplicación a favor del Estado, en relación con cualquier bien sobre el que se ejerza un derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido, sin perjuicio de los recursos legales que el ciudadano que se considere afectado pueda interponer para demostrar legalmente la procedencia licita de tales bienes, y su actuación de buena fe, o que estaba impedido para conocer la utilización ilícita de los mismos.

Tal Acción de Extinción conforme al texto de la ley, le compete exclusivamente al Ministerio Publico, quien en preparación de la misma puede emplear la información que se genere en las averiguaciones previas o carpetas de investigación que se integren conforme a los delitos que están persiguiendo, compareciendo ante un Juez Civil, para formular la petición correspondiente en el cual deberá de justificar legalmente su planteamiento, exponiendo las razones y documentos idóneos que legitimen la acción de extinción de dominio de la que se trata, siempre y cuando existan elementos suficientes para determinar que los bienes de los que se pide su extinción a favor del Estado, se compruebe que son producto de hechos ilícitos derivados de los delitos de secuestro, narcomenudeo, robo de vehículos, trata de personas, y enriquecimiento ilícito, en donde en tal litigio jurídico, solo versara sobre los bienes que estén relacionados o vinculados a tales actos delictivos, y bajo los siguientes supuestos, que dichos bienes hayan sido o resulten un instrumento, objeto o producto del delito investigado, que hayan sido destinados para ocultar, o transformar y disimular los bienes que fueron producto del ilícito, y de aquellos que fueron utilizados por un tercero para la comisión de los delitos, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notifico a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

Ahora bien, conforme al texto actual de la Ley en mención, ésta establece expresamente lo siguiente “Articulo 4. Destino de los bienes. Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicaran en favor del Estado y serán destinados, mediante acuerdo del Titular del Ejecutivo, que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, al bienestar social, la seguridad pública y la procuración de justicia.”.

En relación con lo antes expuesto, el artículo 61 del mismo ordenamiento, dice literalmente: “Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez aplicados los recursos correspondientes en términos del artículo 59 de esta ley, se utilizaran para el bienestar social y el mejoramiento de la seguridad pública y de la procuración de la justicia. Dichos remanentes se destinarán en un 50 por ciento al bienestar social, asignándose a los programas y actividades a cargo de las Secretarias de Desarrollo Social, de Salud, y de Educación, conforme al acuerdo que dicte el Ejecutivo del Estado. El otro 50 por ciento se asignará a partes iguales para los programas y actividades de la Secretaria de Gobierno en el Área de Seguridad Publica y Fiscalía General del Estado”.

Así mismo, el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley Citada, literalmente dice: “El Ministerio Publico podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del Fiscal General del Estado. En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio”.

Como puede observarse de las disposiciones legales antes citadas, están deben de reformarse en su articulado, dado que hay que precisar con mayor claridad y precisión que los **remanentes del valor de los bienes que resulten del ejercicio de la acción de extinción de dominio, una vez aplicados los recursos correspondientes en términos del artículo 59 de esta ley, se utilizaran en un 30 por ciento para mejorar la infraestructura hospitalaria y equipamiento del Sector Salud del Estado, otro 30 por ciento para el Sector Educativo Estatal, un 20 por ciento para los programas sociales dela Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, y un 20 por ciento dividido en partes iguales para las áreas de Seguridad Publica y la Fiscalía General del Estado.**

Lo anterior se estima oportuno y necesario, dado que actualmente los rubros de salud y educación son las áreas gubernamentales más sentidas de los ciudadanos, sin menospreciar las acciones de tipo comunitario que desarrollan tanto la Secretarias de Inclusión y Desarrollo Social, la de Seguridad Pública y la de Procuración de Justicia a través de la Fiscalía General, quienes como es de nuestro conocimiento pueden accesar a diversos recursos en sus respectivos ramos, de ahí, que la distribución que se plantea en esta iniciativa resulte más benévola para el sentir de los coahuilenses, en lo que corresponde a la aplicación a favor del Estado de los bienes que provengan de hechos ilícitos, con motivo de la acción de extinción de dominio decretadas por la autoridad judicial correspondiente, para que tales fondos sean aplicados en un mayor porcentaje al beneficio de la protección de la salud y la mejora en la educación de los coahuilenses.

En ese mismo tenor, resulta conveniente dejar expresamente establecido en dicho ordenamiento jurídico, que el Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio, solo cuando existan las causas lógico jurídicas que justifiquen tal actuación, y dichas circunstancias sean expresadas fundadamente en tal determinación, de ahí, que por las razones anteriormente expuestas, ponga a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de:

**DECRETO:**

**ARTÍCULO ÚNICO. - SE REFORMA EL ARTÍCULO 4°; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 6°, ASÍ COMO EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 61, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 4…**

Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicaran en favor del Estado y serán destinados, mediante acuerdo del Titular del Ejecutivo, que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, **a la mejora de la infraestructura y equipamiento del sector salud, del sector educativo, a los programas sociales de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social,** la seguridad pública y la procuración de justicia.

**Articulo 6….**

**…**

El Ministerio ´Publico podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del Fiscal General del Estado, **solo cuando existan las causas lógico jurídicas que justifiquen tal actuación, y dichas circunstancias sean expresadas fundadamente en tal determinación.** En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio.

**Artículo 61…**

Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez aplicados los recursos correspondientes en términos del artículo 59 de esta ley, se utilizaran para **la mejora de la infraestructura y equipamiento del sector salud, del sector educativo, a los programas sociales de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social,** la seguridad pública y la procuración de justicia.

Dichos remanentes se destinarán en un **30 por ciento para mejorar la infraestructura hospitalaria y equipamiento del sector salud del estado, otro 30 por ciento para el sector educativo estatal, un 20 por ciento para los programas sociales de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, y un 20 por ciento dividido en partes iguales para las áreas de Seguridad Publica y la Fiscalía General del Estado.**

**TRANSITORIOS**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ATENTAMENTE**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR PARA TODOS”**

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO EL ARTÍCULO 165 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo segundo el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La figura de la prisión preventiva oficiosa, consiste en que los jueces penales ordenen la detención de una persona por el tiempo que dure el juicio cuando se trata de ciertos delitos. De acuerdo con la Exposición de Motivos del Senado de la República, esta forma de detención se plantea como una herramienta para “contar con la certeza de que en los delitos de mayor impacto, los imputados permanecerán bajo la custodia del sistema de justicia penal, asegurando así a las víctimas y el buen manejo de la investigación”. Además, por la forma que está regulada, la prisión preventiva oficiosa, se trata más bien, de una pena anticipada, en detrimento del derecho a la presunción de inocencia como lo ha señalado el catedrático de Derecho Penal, Carlos Ríos.[[15]](#footnote-15)

De acuerdo con los investigadores José Antonio Guevara Bermúdez y Lucía Guadalupe Chávez Vargas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos: No existe evidencia que constate que la prisión preventiva oficiosa sea una medida eficaz en la investigación para resolver el problema de la inseguridad o que haya resultado útil para disuadir la comisión de los delitos. Tampoco ha mostrado que esa figura haga más profesionales y eficientes a las procuradurías o fiscalías del país, ni que logren más sentencias condenatorias.[[16]](#footnote-16)

La prisión preventiva oficiosa, ha traído grandes problemas, no sólo a quienes se les ha aplicado esta figura, ya que en la mayoría de los casos las personas privadas de su libertad sin una sentencia condenatoria, pierden sus empleos, la comunicación con sus familiares y sufren deterioro en su salud física y psicológica. Además representa un gran problema estructural debido a que gran parte de las personas que saturan el sistema penitenciario son sujetas a proceso penal sin una sentencia condenatoria.

De acuerdo con el Estudio Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, en el año 2016, el 35% de la población reclusa en los centros penitenciarios estatales, no tenían una sentencia condenatoria, este número ronda los 65 mil 021 personas, de las cuales 93% eran hombres. En otras palabras, en ese año más de 65 mil personas pisaron la cárcel aún y cuando no se había demostrado su culpabilidad. Desgraciadamente, Coahuila no es la excepción a la regla, pues está dentro del promedio nacional con un 35% de personas recluidas sin ser declaradas culpables.[[17]](#footnote-17)

Por otro lado, la población en los centros penitenciarios sigue creciendo, como lo demuestran los datos del Gobierno Federal, pues a junio de 2019, la cifra de población de internos en México ascendía a 200 mil 753 en total, cifra superior a los 197 mil 988 registrados al cierre de 2018. De los más de 200 mil internos actuales, 76 mil 832 son personas bajo un proceso penal que aún no ha concluido. Lo anterior significa que, en promedio, 1 de cada 3 internos en México son “presuntos culpables”, es decir, personas cuya culpabilidad aún no se ha demostrado y siguen sin sentencia.[[18]](#footnote-18)

En palabras del investigador de la UNAM, Guillermo Zepeda Lecuona, la prisión preventiva es una práctica inhumana e irracional, pues de acuerdo con su libro “Los mitos de la prisión preventiva en México” la misma, no disminuye la incidencia delictiva, no contribuye a elevar la seguridad ciudadana, se utiliza contra sujetos considerados “peligrosos” aunque en la mayoría de los casos no se puede probar esa peligrosidad, y no garantiza la reparación del daño.[[19]](#footnote-19)

Coincidomos con los argumentos de los autores citados, no obstante, consideramos que eliminar la figura puede traer algunos problemas a los ministerios públicos y en algunos casos complicar sus trabajos de investigación, por lo que esta iniciativa busca reducir de 2 años a 6 meses el tiempo máximo que una persona puede estar en prisión preventiva oficiosa.

De esta manera se reduciría en 150% el tiempo que una persona puede estar en prisión preventiva y al mismo tiempo, se promueve que los ministerios públicos realicen su trabajo de investigar los delitos de forma pronta y expedita. Si bien la figura no desaparece, sí se vuelve menos restrictiva y menos lesiva para las personas que viven un proceso penal.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el párrafo segundo el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a **seis meses**, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicito que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 09 de septiembre de 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL TIEMPO EN QUE SE PUEDE SOLICITAR POR LA PARTE INTERESADA, LA AMPLIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.**

La suscrita Diputada María del Rosario Contreras Pérez, conjuntamente con las demás Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este Honorable Pleno del Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza,conforme a lasiguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

Los actos administrativos, en una definición simple, son aquellos que efectúa la autoridad administrativa, en ellos se expresa la voluntad de la autoridad creando situaciones jurídicas concretas, por medio de la cuales se pretende satisfacer las necesidades de la comunidad o la colectividad.

Para el autor Arturo Serra Rojas, el acto administrativo es: *“una declaración de voluntad de conocimiento y de juicio, unilateral, concreta y ejecutiva que constituye una decisión ejecutoria que emana de un sujeto: la Administración Pública, en el ejercicio de una potestad administrativa, que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés general”. (sic)*

Estos actos administrativos en el procedimiento deben por ministerio de ley, desarrollarse con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. *(Art. 18 de Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila)*

Necesario es que nuestra exposición de motivos parta de esta definición, ya que nuestro objetivo con esta iniciativa para reformar la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila va íntimamente ligado al procedimiento que origina un acto administrativo.

El procedimiento administrativo es considerado como una garantía que protege al ciudadano de la actuación arbitraria y discrecional de la autoridad administrativa, ya que la normatividad al respecto establece las reglas estrictas del procedimiento, que son conocidas para el ciudadano, evitando dejarlo en un estado de indefensión.

Nos gustaría mencionar los principios generales que enumeran algunos autores para el procedimiento admistrativo, para mayor conocimiento:

* **Principio de unidad:** es decir, es un único proceso que tiene comienzo y fin, todo procedimiento debe resolverse sea cual fuera su forma de haberse iniciado y llegan a su fin ya sea con una resolución, un desistimiento, por su caducidad, por su nulidad, o por un acuerdo de conclusión, etc., actos que deben ser debidamente notificados;
* **Principio de contradicción:** la resolución de un procedimiento administrativo debe estar cimentado en hechos y con fundamentos de derecho, es decir, debe estar motivado y fundamentado, con la comprobación de hechos a través de pruebas, por lo general deben acreditarse los hechos por cualquier medio admisible de derecho;
* **Principio de imparcialidad:** dicho de otra manera, la autoridad en su actuar será imparcial, sin encontrarse en conflicto de interéses, por ello debe bajo los supuestos establecidos, abstenerse si ese fuera el caso y,
* **Principio de oficialidad:** en otros términos, el procedimiento debe por lo general ser impulsado de oficio en todos sus trámites, la autoridad tiene la obligación y responsabilidad de guiar el procedimiento, ordenando que se lleven a cabo las diligencias necesarias para su resolución.

De la misma manera enunciaremos a groso modo las etapas del procedimiento administrativo:

1. **Iniciación**: la cual puede ser de oficio, a petición de parte o bien por una queja y/o denuncia, con ello se crea el expediente administrativo que más tarde se irá complementado con el actuar, tanto de la autoridad, como del interesado y en algunos casos, por terceros interesados;
2. **Instrucción:** aquí en esta etapa se llevan a cabo los actos y trámites necesarios para conocer y comprobar los hechos en lo que basa su actuación el interesado, es decir, aquí presentan sus alegatos, sus pruebas y la autoridad emite sus informes, en algunos procedimientos administrativos es la etapa donde se desarrollan las audiencias necesarias para no dejar en estado de indefensión al interesado, y por último,
3. **Terminación**: esta etapa suele tener variantes en cuanto a la manera en que se da por concluido un procedimiento adminsitrativo, el cual puede terminar con la emisión de una resolución que pondría fin al procedimiento; el desistimiento de parte el interesado, es decir, renuncia a su intencion de seguir con el procedimiento; la caducidad es decir, pasa el tiempo establecido por ley para que pueda ejercer su derecho, cabe hacer mención que esta etapa en su gran mayoría contiene recursos a los que puede recurrir el interesado en caso de no estar conforme con la terminación de dicho procedimiento adminsitrativo.

Nuestra iniciativa impacta en la etapa de la instrucción, consideramos que, si bien es necesario dar la oportunidad de ampliar terminos y plazos, también es necesario no dejar la laguna que tiene esta ley, ya que no ubica el momento procesal oportuno para hacer la solicitud cuando es hecha por la parte interesada.

El beneficio que puede tener esta iniciativa es la celeridad del procedimiento administrativo, respetando en todo momento el derecho del interesado, el cual no se verá menoscabado, si no simplemente condicionado a que lo ejerza dentro de la vigencia del término y/o plazo que le concedio la autoridad administrativa.

Con ello queremos tener la certeza de que el desarrollo de los procedimientos administrativos sean responsabilidad de ambas partes, donde no solo la autoridad estrictamente sigue lo establecido por ley para concluir de una manera rápida y expedita un procedimiento, sino que también el interesado tenga la disposición de ejercer su derecho a la ampliación de los términos y/o plazos en un término que no deja duda a que está dilatando el procedimiento administrativo.

Así mismo, este momento procesal oportuno que proponemos, coadyuva a la etapa de terminación, ya que, en algunas ocasiones al no existir esta circunstancia descrita en la ley, los interesados aprovechaban esta oportunidad para retardar el actuar de la autoridad administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**I N I C I A T I V A C O N P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO. –** Se adiciona un segundo párrafo al artículo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de como sigue:

**Artículo 39.-** …

La petición de parte interesada para solicitar la ampliación de término o plazos establecidos en la ley, deberá presentarse y decretarse su procedencia antes del vencimiento del plazo o término original.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** | |  |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  | |  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** | |  |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  | |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** | |  |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  | |  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** | |  |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  |  | | | |
|  | **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | | |

LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE HOJA, FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 39 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

Iniciativa que presenta el Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 22 Fracción V, 144 Fracción I, 158, 159 Y 160 de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, por la que se deroga la fracción II, del artículo 111; se adiciona el artículo 280, se modifica en su totalidad el TITULO NOVENO, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza; así mismo se adiciona el artículo 200 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en base a la siguiente:

**Exposición de motivos**

En los últimos años, la administración pública ha implementado políticas de transparencia y rendición de cuentas, al igual que este poder legislativo quien en aras de cumplir con dichas políticas a partir del año 2019, se ha asumido esa responsabilidad por parte de los titulares de la de la Junta de Gobierno, para que este H. Congreso se constituyera como un parlamento abierto, esto como resultado de las peticiones de la sociedad, contando además con los mecanismos de transparencia parlamentaria, instaurado años atrás, permitiendo que exista una comunicación directa entre el Congreso y la ciudadanía, ello atendiendo a la reforma constitucional en materia de Transparencia, garantizando a los ciudadanos su derecho al acceso a la información, a la apertura gubernamental, participación ciudadana y la rendición de cuentas.

En esta LXI Legislatura, por primera vez en su historia, existe una alternancia de los Presidentes de la Junta de Gobierno y de la Mesa directiva, lo que ha despertado un activismo en materia de transparencia, pues desde las diversas perspectivas, se ha promovido y apelado a un cambio institucional de sus gobernantes y de nosotros los representantes populares, buscando siempre brindar una gestión abierta y participativa, por ello se han impulsado una serie de acciones concretas para avanzar en la apertura del Congreso, promoviendo los principios de Parlamento Abierto, en todos sus áreas, lo cual ha implicado realizar compromisos puntuales para garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la labor legislativa, pero para lograr cumplir con nuestros objetivos en aras de la máxima publicidad de nuestros actos, debemos adecuar nuestra Ley Orgánica, pues cuenta con un capítulo obsoleto, en específico el artículo 291, que establece lineamientos en materia de acceso a la información, protección de datos personales y publicidad de los trabajos legislativos; el cual de manera literal dice: “se sujeta a la observancia de la Constitución Política Local, en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y en los demás ordenamientos que regulen aspectos relacionados con esta materia”, redacción que deviene inaplicable, pues desde el año 2017 se creó la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, distinta a la Ley de Acceso a la Información Pública, y que regulan diversos supuestos, existiendo entonces la imperiosa necesidad de homologar y actualizar este capítulo al resto de los ordenamientos legales aplicables a la materia.

Es de destacarse que este H. Congreso, cuenta con una Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, integrada por Diputadas y Diputados, y según el artículo 111 fracción II, de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se les confiere el dar seguimiento a las solicitudes de información pública que realicen los ciudadanos en la materia de la Ley de Acceso a la Información Pública, tratándose de asuntos que sean competencia de la Legislatura, sin embargo, en la práctica quien atiende las solicitudes, da respuesta y seguimiento, es la Dirección de Asuntos Jurídicos, a quien por acuerdo de la Junta de Gobierno, se le nombró como responsable de dicha Unidad, sin embargo se debe adecuar el marco normativo a la realidad, ello con la finalidad de que si bien es cierto, ya existe una área específica encargada de cumplir las obligaciones de transparencia que establece la ley, en la práctica no existe concordancia con lo legal, resultando necesario, que en la Ley Orgánica, exista un apartado que regule de manera especial y especifica sus actuaciones, sin trastocar la atribución de la Comisión de vigilar las actividades propias de la unidad, para que las respuestas a las solicitudes se hagan de manera eficiente en los tiempos marcados por la ley, según la fracción VI, del artículo 111 de la Ley antes referida.

Nos sirve como apoyo, el análisis de las acciones implementadas por los Congresos de los estados de Quintana Roo, Baja California, Guanajuato, entre otros, donde se advierte que existen unidades o direcciones encargadas de esta área de suma importancia, cuyo objeto de creación es precisamente cumplir con las obligación de garantizar el acceso y transparencia de la información generada por los Congresos, en consecuencia, es menester que esta Legislatura, contribuya a esas políticas de transparencia y rendición de cuentas, logrando un parlamento abierto, en el que exista una Unidad de Transparencia y Accesoa la Información Pública y Protección de Datos Personales, distinta a otra área de este Poder Legislativo, que goce de autonomía de gestión a fin de cumplir con sus funciones y las disposiciones aplicables, con el personal con conocimiento y experiencia en la materia, que garantice la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, debiendo publicar y poner a disposición de la ciudadanía la información que como sujeto obligado la Ley Estatal y Nacional determine.

Es por todo lo anterior, que existe la imperiosa necesidad de crear el andamiaje jurídico para cumplir con la obligación que como servidores públicos tenemos respecto a la transparencia y rendición de cuentas.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se deroga la fracción II, del artículo 111; se adiciona el artículo 280, agregando la **Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,** se modifica en su totalidad el TITULO NOVENO, así mismo se adiciona el artículo 200 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

…

*Artículo 111.-*

*II.* ***Se deroga.***

…

**…**

ARTÍCULO 280.- Además de las dependencias señaladas en los preceptos anteriores, se contará con las siguientes direcciones: Asuntos Legislativos, Administración, Asuntos Jurídicos y Documentación e Información Legislativa; la ***Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;…***

…

TITULO NOVENO

***DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PODER LEGISLATIVO***

***CAPÍTULO ÚNICO***

***ARTÍCULO 290.- En materia de acceso a la información pública, el Poder Legislativo observará lo establecido en la Constitución Política Local, en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los demás ordenamientos que regulen aspectos relacionados con esta materia.***

***ARTÍCULO 291.- La Unidad d e Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, es un órgano dependiente de la Oficialía Mayor que funge como el enlace entre el Poder Legislativo y el solicitante, será la responsable de la atención de las solicitudes de información que formulen los ciudadanos ante este poder, gozarán de*** ***autonomía de gestión a fin de cumplir con sus funciones y las disposiciones aplicables de la ley en la materia.***

***ARTÍCULO 292. La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo deberá publicar y poner a disposición del público, además de la información a que se refiere el artículo 21, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la siguiente información:***

***I. La agenda legislativa;***

***II. La gaceta parlamentaria;***

***III. El orden del día;***

***IV. La agenda semanal;***

***V. El diario de debates;***

***VI. Las versiones estenográficas de las sesiones;***

***VII. La asistencia de los diputados de cada una de sus sesiones del pleno, de la comisión permanente y de las comisiones;***

***VIII. Las iniciativas de ley, decretos, declaratorias, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;***

***IX. Las leyes, decretos, declaratorias y acuerdos aprobados por la Legislatura o la comisión permanente;***

***X. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones, de las sesiones del pleno y de la comisión permanente, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;***

***XI. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos;***

***XII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;***

***XIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, órganos de representación y centros de estudio u órganos de investigación;***

***XIV. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, órganos de representación y centros de estudio u órganos de investigación;***

***XV. La dirección donde se encuentren ubicadas las casas de atención ciudadana de aquellos diputados que cuenten con una;***

***XVI. Los informes de actividades que presentan los diputados, en términos de lo dispuesto en esta Ley;***

***XVII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realice el Instituto de Investigaciones Legislativas, y***

***XVIII.Las demás que estipulen las leyes de la materia.***

***ARTÍCULO 293. La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, a través de su titular, tendrá las siguientes funciones:***

1. ***Recabar, publicar, difundir y actualizar la información a que se refiere el artículo anterior y actualizarla periódicamente, conforme la normatividad aplicable;***
2. ***Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y darles seguimiento hasta la entrega de la misma, en la forma y modalidad que la haya pedido el interesado conforme a la normatividad aplicable;***
3. ***Auxiliar y asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la Información que lleguen al Poder Legislativo, y en su caso, orientarlos acerca de los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;***
4. ***Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información y en su caso asesorar a las áreas correspondientes;***
5. ***Efectuar las notificaciones a los solicitantes, conforme a la ley de la materia;***
6. ***Proponer al comité de transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;***
7. ***Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;***
8. ***Llevar un registro y actualizarlo mensualmente, con respecto a las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;***
9. ***Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;***
10. ***Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Poder Legislativo;***
11. ***Garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información;***
12. ***Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con los lineamientos que en la materia se expidan;***
13. ***Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada atención a las solicitudes de acceso a la información pública;***
14. ***Elaborar un programa para facilitar la obtención de información pública, que deberá ser actualizado periódicamente;***
15. ***Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de ésta;***
16. ***Proponer al presidente de la Junta, la concertación de acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente;***
17. ***Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de la materia y en las demás disposiciones aplicables;***
18. ***Compilar los índices de los documentos clasificados como reservados y actualizarlos de forma semestral, y***

***XIX. Las demás que se señale la normatividad aplicable.***

*…*

Artículo 200.- El Congreso del Estado contará también con las siguientes direcciones: Asuntos Legislativos, Administración, Asuntos Jurídicos y Documentación e Información Legislativa; la ***Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;***

….

**T R A N S I T O R I O S**

***PRIMERO.-*** *EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL* PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**SEGUNDO.-** *SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL PRESENTE DECRETO.*

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 09 de septiembre de 2020**

DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |
| DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ | DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA |

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción IX del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La figura de la prisión preventiva oficiosa, consiste en que los jueces penales ordenen la detención de una persona por el tiempo que dure el juicio cuando se trata de ciertos delitos. De acuerdo con la Exposición de Motivos del Senado de la República, esta forma de detención se plantea como una herramienta para “contar con la certeza de que en los delitos de mayor impacto, los imputados permanecerán bajo la custodia del sistema de justicia penal, asegurando así a las víctimas y el buen manejo de la investigación”. Además, por la forma que está regulada, la prisión preventiva oficiosa, se trata más bien, de una pena anticipada, en detrimento del derecho a la presunción de inocencia como lo ha señalado el catedrático de Derecho Penal, Carlos Ríos.[[20]](#footnote-20)

De acuerdo con los investigadores José Antonio Guevara Bermúdez y Lucía Guadalupe Chávez Vargas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos: No existe evidencia que constate que la prisión preventiva oficiosa sea una medida eficaz en la investigación, para resolver el problema de la inseguridad o que haya resultado de alguna forma útil para disuadir la comisión de los delitos. Tampoco ha mostrado que esa figura haga más profesionales y eficientes a las procuradurías o fiscalías del país, ni que logren más sentencias condenatorias.[[21]](#footnote-21)

La prisión preventiva oficiosa sí ha traído grandes problemas, no sólo a quienes se les ha aplicado esta figura, ya que en la mayoría de los casos las personas privadas de su libertad sin una sentencia condenatoria, pierden sus empleos, la comunicación con sus familiares y sufren deterioro en su salud física y psicológica. Además representa un gran problema estructural debido a que gran parte de las personas que saturan el sistema penitenciario son sujetas a proceso penal sin una sentencia condenatoria.

De acuerdo con el Estudio Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, en el año 2016, el 35% de la población reclusa en los centros penitenciarios estatales, no tenían una sentencia condenatoria, este número ronda los 65 mil 021 personas de las cuales 93% eran hombres. En otras palabras en ese año más de 65 mil personas pisaron la cárcel aún y cuando no se había demostrado su culpabilidad. Desgraciadamente, Coahuila no es la excepción a la regla, pues está dentro del promedio nacional con un 35% de personas recluidas sin ser declaradas culpables.[[22]](#footnote-22)

Por otro lado, la población en los centros penitenciarios sigue creciendo, como lo demuestran los datos del Gobierno Federal, pues a junio de 2019, la cifra de población de internos en México ascendía a 200 mil 753 en total, cifra superior a los 197 mil 988 registrados al cierre de 2018. De los más 200 mil internos actuales, 76 mil 832 son personas bajo un proceso penal que aún no ha concluido. Lo anterior significa que, en promedio, 1 de cada 3 internos en México son “presuntos culpables”, es decir, personas cuya culpabilidad aún no se ha demostrado y siguen sin sentencia.[[23]](#footnote-23)

En palabras del investigador de la UNAM, Guillermo Zepeda Lecuona, la prisión preventiva es una práctica inhumana e irracional, pues de acuerdo con su libro “Los mitos de la prisión preventiva en México” la misma, no disminuye la incidencia delictiva, no contribuye a elevar la seguridad ciudadana, se utiliza contra sujetos considerados “peligrosos” aunque en la mayoría de los casos no se puede probar esa peligrosidad, y no garantiza la reparación del daño.[[24]](#footnote-24)

Coincidimos con los argumentos de los autores citados, no obstante, consideramos que eliminar la figura puede traer algunos problemas a los ministerios públicos y en algunos casos complicar sus trabajos de investigación, por lo que la propuesta que traemos con esta iniciativa es reducir de 2 años a 6 meses el tiempo máximo que una persona puede estar en prisión preventiva oficiosa.

De esta manera se reduciría en 150% el tiempo que una persona puede estar en prisión preventiva y al mismo tiempo, se promueve que los ministerios públicos realicen su trabajo de investigar los delitos de forma pronta y expedita. Si bien la figura no desaparece, sí se vuelve menos restrictiva y menos lesiva para las personas que viven un proceso penal.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma la fracción IX del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 20….

B…

I…

VIII…

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a **seis meses**, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicito que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 09 de septiembre de 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE HOMOLOGAR NUESTRA LEGISLACIÓN DEL ESTADO CON EL CODIGO PENAL FEDERAL, EN RELACIÓN A LA FIGURA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA Y ENDURECER LAS PENAS A QUIEN COMETA EL DELITO ABUSO SEXUAL Y CORRUPCIÓN DE MENORES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 226, el primero y segundo párrafos del artículo 227, la fracción I del artículo 229 y la fracción I del artículo 237 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

Recientemente el Senado de la República aprobó algunas reformas realizadas en materia de prisión preventiva oficiosa, impulsada por la Diputada priísta Mariana Rodríguez Mier, para poder dar cumplimiento a la reforma del artículo 19 Constitucional, del año pasado, que consistió en adicionar ciertos delitos a este artículo, para considerarlos graves y meritorios de esta medida cautelar, todo esto a fin de brindar mayor certeza jurídica a los mexicanos, armonizar el marco jurídico y lograr aplicar plenamente esta medida cautelar, evitando de esta manera que se malinterprete la impartición de justicia.

Otra de las causas por las que se instauraron estos cambios en nuestros diversos marcos jurídicos, es la impunidad que la sociedad ha enfrentado, pero principalmente es, que los imputados puedan pretender evadir la acción de la justicia, por esta razón es importante establecer ciertas medidas para los delitos de alto impacto que afecten bienes jurídicos fundamentales, prevaleciendo siempre salvaguardar la integridad de las personas que han sido víctimas de un acto ilícito; de esta manera se garantizará que los imputados puedan llevar a cabo su proceso, privándolos de su libertad, mediante esta importante figura de prisión preventiva oficiosa.

En el mismo sentido, es importante destacar que nuestro actual Código Penal de Coahuila, contempla en el artículo 13, la figura de la prisión preventiva oficiosa y factores de riesgo que indican dicha medida cautelar, la cual será ordenada oficiosamente en los supuestos del artículo 19 Constitucional, y conforme a lo previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo esta tesitura señalamos específicamente el apartado A, fracción III que es referente al abuso sexual, y la fracción IV los delitos de corrupción de menores o de incapaces.

En esta misma postura el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 150, indica los supuestos en los que se puede ordenar la detención de una persona, puntualizando específicamente en la fracción I, que la prisión preventiva oficiosa se decretará “cuando el término aritmético sea mayor de cinco años de prisión”.

Por lo que nos resulta necesario, actualizar nuestro marco jurídico penal, para permitir que las instituciones de seguridad, brinden certeza, sean más eficientes y capaces, homologando los delitos y penas establecidas en el Código Penal Federal a nuestro Código Penal de Coahuila, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; por lo que esencialmente deben prevalecer las disposiciones federales, por cuestión de armonización legislativa, establecida en el artículo 133 Constitucional, siendo un imperativo para de nuestro trabajo en este Congreso Local.

Actualmente nuestro Código Penal del Estado, contempla que la pena por cometer el delito de abuso sexual, será de dos a seis años de prisión, y respecto al delito de corrupción de menores, específicamente en lo que refiere al exhibicionismo sexual, ingestión de bebidas alcohólicas o narcóticos, o comisión de un hecho delictuoso, contempla como pena de dos a cuatro años de prisión; para efectos de detención por caso urgente y posteriormente se pueda decretar la prisión preventiva oficiosa, el término medio aritmético deberá ser mayor de cinco años de prisión, es por esto que proponemos en la presente iniciativa, se armonicen, nuestras disposiciones estatales con el Código Penal Federal, a fin de que las penas por estos delitos alcancen el término medio aritmético y se pueda decretar la prisión preventiva oficiosa, de esta manera se evitará que los imputados por estos delitos no se sustraigan de la acción de la justicia.

En tenor de lo anterior, podemos afirmar que nuestro Estado, está en un proceso de cambio y transformación por lo que requerimos cambiar el paradigma y actualizar nuestras disposiciones jurídicas, que permitan reforzar la credibilidad en las instituciones que se encargan de proveer justicia.

En razón de lo anteriormente mencionado, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se reforma: el primer párrafo del artículo 226, el primero y segundo párrafos del artículo 227, la fracción I del artículo 229 y la fracción I del artículo 237 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 226 (Abuso sexual)**

Se aplicará de **seis a diez** años de prisióny multa, a quien sin el propósito de llegar a la cópula y sin consentimiento de una persona de cualquier sexo, mayor de quince años de edad, ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico.

…

**Artículo 227 (Abuso sexual de persona incapaz)**

Se impondrá de **seis a trece** años de prisión y multa, a quien, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o decidir conforme a esa comprensión; o por cualquier circunstancia no pueda resistirlo.

Si se emplea violencia física, psicológica o moral suficiente para intimidar a la víctima y cometer el delito, **se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo**. Si en el supuesto del párrafo precedente se infieren lesiones a la víctima, las mismas se considerarán calificadas y se aplicarán las reglas de concurso de delitos que procedan.

…

**Artículo 229 (Violación equiparada, violación impropia y abuso sexual contra persona menor de quince años)**

**I. a la II. …**

**III.** (Abuso sexual en persona menor de quince años)

Se considera abuso sexual y se impondrá de **seis a trece** años de prisión y multa, a quien sin el propósito de llegar a la cópula y con o sin consentimiento de una persona menor de quince años de edad, de uno u otro sexo, ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico.

**Artículo 237 (Corrupción de menores o de incapaces)**

Habrá corrupción de menores o de incapaces, cuando se realice cualquiera de las conductas previstas y sancionadas en las fracciones siguientes:

1. **(Exhibicionismo sexual, ingestión de bebidas alcohólicas o narcóticos, o comisión de un hecho delictuoso)**

Se impondrá de **siete a doce** años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa, a quien sin que actúe con los fines a que se refiere el artículo 16 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, determine a una persona menor de dieciocho años de edad, o a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, a realizar con sus órganos genitales desnudos, y/o en su caso, con sus mamas desnudas si es mujer, actos de exhibicionismo de clara índole sexual, simulados o no, ante el mismo determinador o terceras personas; o en tres o más ocasiones distintas haga que el menor o incapaz ingiera bebidas alcohólicas hasta alcanzar un estado de ebriedad que lo haga trastabillar; o ilegalmente haga que consuma narcóticos, o lo determine a cometer o participar en un hecho delictuoso determinado, aunque éste no se lleve a cabo.

1. **a la VI. …**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE**

Iniciativa que presenta el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; en ejercicio de la facultad legislativa que me conceden los artículos 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso Local, presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se modifica el contenido del artículo 427 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza; con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En México, como en muchos países, el crecimiento de la población, y por ende de la mancha urbana, ha traído desde hace más de 15 años nuevos y complejos problemas que las autoridades, en muchos casos, deciden no enfrentar y pasan por alto, dejando a grandes grupos humanos en riesgo de sufrir cuantiosas pérdidas materiales, daños a la salud y la perdida de la vida misma. Nos referimos a los fraccionamientos construidos en zonas de alto riesgo de inundación, deslaves y derrumbes del suelo. Fraccionamientos que, para su edificación y en apariencia, sus desarrolladores cumplieron con todos los requisitos de la ley y de la reglamentación municipal para ser construidos. Pero no es así, no hubo cumplimiento sino simulación, no existió apego a derecho y formalidades de parte de las autoridades, sólo corrupción simple y llana.

No hablaremos en esta iniciativa del otro caso, de los asentamientos humanos irregulares, tema que merece un trato aparte, amplio y detallado que también abordaremos en otras iniciativas.

Los factores que han llevado al grave fenómeno de la construcción de fraccionamientos en zonas de alto riesgo, prohibida por la normatividad es compleja y simple de entender a la vez, en primer lugar, tenemos el crecimiento acelerado de las ciudades, especialmente de las más grandes en cada estado, aunque el fenómeno no es ajeno a municipios más pequeños. Luego tenemos la migración constante de las zonas rurales y de otras ciudades a las grandes urbes en busca de una mejor calidad de vida de parte de jóvenes en busca de empleo, y de familias enteras que huyen de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la inseguridad de sus regiones o simplemente, deciden emprender la aventura de probar suerte en otro lugar.

Pero todo lo antes mencionado no es justificación para crear viviendas en zonas de inundación, deslave o hundimientos de terreno, no. La realidad es que solo es un factor para generar demanda de vivienda, lo cual es a final de cuentas parte de una realidad social y económica. La industria inmobiliaria genera decenas de miles de empleos en el país y no es “pecado” alentarla.

Tomamos los siguientes apuntes del artículo que se cita, publicado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en junio de 2017, por medio de su revista:

Fuente: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24222017000300005>

“…En el mundo, las inundaciones son consideradas como el desastre natural más dañino y peligroso. Según datos de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, de los desastres que se presentan en el orbe relacionados con el agua, 50% corresponde a inundaciones, por encima de hambrunas, sequías y epidemias. El número de eventos ha crecido a una velocidad vertiginosa, particularmente en áreas urbanas, impactando de manera negativa el funcionamiento normal de los sectores social, de servicio, económico y financiero, entre otros, dejando en mayor vulnerabilidad a la población con menos recursos. Las inundaciones en México son un tema de fondo, pues en la actualidad son el fenómeno que causa más daños económicos en el país. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que cerca de 41% del territorio nacional y 31 millones de personas están expuestas a fenómenos hidrometeorológicos…” **Fin de la cita.**

Si bien, analizar los aspectos ambientales, hidrológicos, de mecánica de suelos y los relacionados con el cambio climático resulta esencial, estamos hablando de todos los trabajos previos, estudios y análisis que se deben hacer de parte de las autoridades y los desarrolladores para llegar a la parte final que nos interesa del proceso: La autorización de un nuevo fraccionamiento que, se supone, fue permitido en zona segura, sin riesgo de inundaciones, deslaves o hundimiento de suelos….!Pero en los hechos no fue así¡

Las razones para que se construyan fraccionamientos en zonas de alto riesgo o prohibidas confluyen todas en una sola: corrupción. El desarrollador quiere ganar dinero vendiendo o rentando sus viviendas, la autoridad municipal quiere hacer lo mismo allanando el camino y las “dificultades” al desarrollador.

En otros casos, la corrupción se da entre quienes hacen los estudios previos de riesgo, de mecánica de suelos, de factores hidrológicos, etcétera, falsificando los resultados, ocultando la verdad a cambio de jugosas cantidades de dinero. Cualquiera sea el caso, las autoridades que otorgan las licencias y permisos finales cargan con toda la responsabilidad, con toda la culpa, pues tienen el deber de verificar todo, de revisar el atlas de riesgo, de pedir opinión a los comités competentes, de analizar los antecedentes de la zona y de verificar que se cumplan todos los requisitos de ley.

La Ley de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece:

*Artículo 23. Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, conformarán y apoyarán la operación de los siguientes órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural:*

*I. El Consejo Estatal Consultivo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;*

*II. Los consejos consultivos de desarrollo metropolitano y de conurbaciones;*

*III. Los consejos municipales de desarrollo urbano.*

*Artículo 120. Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de riesgo, conforme a los planes y programas de desarrollo urbano o atlas de riesgo, las autoridades, previo a otorgar cualquier autorización para una acción urbanística, deberán solicitar un estudio de prevención de riesgo que identifique las medidas para su mitigación, en los términos de las disposiciones de la Ley General de Protección Civil, la Ley de Protección Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, las normas oficiales mexicanas que se expidan, esta Ley y demás disposiciones aplicables.*

*Las autoridades podrán solicitar la opinión técnica de expertos y de otras autoridades u organismos competentes a fin de contar con los suficientes elementos que le permitan integrar la resolución que en derecho proceda.*

*Artículo 121. Independientemente de los casos a que alude el artículo 120 de esta Ley, por su escala y efecto, deberán contar con estudios de prevención de riesgo cuando no exista regulación expresa, las obras e instalaciones siguientes:*

*…*

*V. La construcción de fraccionamientos habitacionales;*

*Artículo 122. Los estudios de prevención de riesgo a que aluden los artículos 120 y 121 de este ordenamiento, contendrán las especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que determine la autoridad competente de conformidad con las disposiciones en materia de protección civil, de esta Ley y demás disposiciones aplicables.*

*Artículo 123. No se permitirá el aprovechamiento urbano o construcción de viviendas en terrenos inestables o con problemas geológicos, tales como:*

*I. Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial, en barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos casos, a efectos de resonancia;*

*II. Antiguos brazos o lechos secos de ríos, arroyos o lagos;*

*III. Terrenos sobre-hidratados que, al licuar y abatir su nivel freático, pierden su capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles a asentamientos diferenciales;*

*IV. Faldas de cerros, en particular las que presentan sus estratos y fracturas orientadas en la misma dirección de sus pendientes, observando además en su material una frágil cohesión susceptible al deslizamiento o derrumbe;*

*V. Gravas sobre estratos de arcilla inestable o expansiva y los mantos de ceniza;*

*VI. En zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas, o con problemas de hundimiento o alta compresibilidad;*

*VII. Áreas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pie de laderas, cuyo material tenga poca cohesión, con tendencia al desprendimiento por lluvias, sobresaturación hidráulica, sobrepeso, o movimientos vibratorios o sísmicos, dejando una franja mínima de seguridad de veinticinco metros entre las bases de éstas y el desarrollo urbano;*

*VIII. Al pie de taludes artificiales, en el margen mínimo de seguridad señalado anteriormente;*

*IX. Terrenos arenosos o dunas, por sus características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, corrosión o alto contenido orgánico;*

*X. En zonas con relieve muy accidentado o con pendientes mayores a treinta y cinco por ciento, sin realizar las obras de prevención, conforme al estudio de riesgo correspondiente.*

*Artículo 124. No se permitirá ningún proceso de ocupación del territorio, con obras permanentes, para asentamiento humano en:*

*I. Áreas por debajo del nivel máximo de inundación en zonas con ese riesgo;*

*II. El interior u orillas de los lechos de los lagos, lagunas y presas, o en los cauces de ríos, arroyos y canales. La prohibición incluye el estricto respeto a la superficie, determinada por el registro máximo de caudal o de inundación en sus superficies o secciones más una franja de amortiguamiento determinada por la autoridad competente;*

*III. Terrenos localizados por debajo de la cota de máximo crecimiento hidráulico, determinado por la autoridad competente;*

*IV. Aguas abajo o al pie de la cortina de una presa, o en terrenos localizados por debajo del nivel hidráulico máximo señalado en los puntos anteriores y susceptibles a constantes y prolongadas inundaciones;*

*V. Terrenos sobre depresiones del relieve altamente inundables por la impermeabilización de suelo durante períodos intensos o constantes de lluvias, o terrenos pantanosos;*

*VI. Zonas ubicadas al borde superior o en la parte baja de depresiones, montículos o barrancos con inclinación de paredones en riesgo de aludes;*

*VII. Las demás que señalen las autoridades.*

*Artículo 125. Los planes y programas de desarrollo urbano deberán identificar las zonas de riesgo, considerando las indicadas en los atlas de riesgo y demás instrumentos aplicables.*

*En todas las acciones urbanísticas que impliquen el uso, ocupación o expansión del área urbana, las autoridades estatales o municipales deberán asegurarse que no se ocupen áreas de riesgo, sin que se tomen las medidas de prevención correspondientes.*

*Las autoridades estatales y municipales realizarán las modificaciones necesarias a los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para que las zonas consideradas como de riesgo no mitigable, se clasifiquen como no urbanizables y donde se asignen usos compatibles con dicha condición, prohibiendo en todo caso el uso y construcción de viviendas.*

*Artículo 126. Es obligación de las autoridades estatales y municipales en su ámbito de atribuciones, asegurarse que, previamente a la expedición de las constancias, autorizaciones, permisos y licencias para el crecimiento urbano y para cualquier acción urbanística, cambios de uso de suelo o impactos ambientales, se dé cumplimiento a los estudios y disposiciones en materia de prevención de riesgos en los asentamientos humanos a que se refiere este capítulo, y en ningún caso podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o asentamientos humanos en zonas de alto riesgo que no hubieran tomado medidas de mitigación previas. En tales zonas estará estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificación de carácter permanente.*

*….*

*Artículo 127. Es obligación de las autoridades estatales y municipales asegurarse que en las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen, se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en los asentamientos humanos que establece esta Ley, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley General de Protección Civil y demás disposiciones aplicables.*

Lamentablemente, la practica corrupta de autorizar fraccionamientos en zonas de riesgo persiste, y las consecuencias son, en muchos casos, fatales, pues implican la pérdida de vidas humanas. Además de las pérdidas materiales y patrimoniales, personas que con gran ilusión invirtieron sus ahorros, quizás lo ahorrado durante toda una vida, en viviendas, además de mal construidas, edificadas sobre zonas peligrosas. Y ni qué decir de quienes pagarán estas casas por medio de costosos créditos hipotecarios que los atarán a deudas de 10, 12, o 15 años en promedio, pagando al final, muchas veces, un valor por encima del real del inmueble (además).

Nuestro Código Penal establece lo siguiente:

*Artículo 427 (Autorice o no impida asentamientos humanos en áreas restringidas)*

*Se impondrá de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar un cargo, empleo o comisión en cualquier entidad oficial del Estado o de sus municipios, y de cinco a diez años del derecho a celebrar con aquellas entidades contratos o convenios de prestación de servicios profesionales o de cualquier otra naturaleza, al servidor público que sin que se satisfagan los requisitos legales ambientales, autorice asentamientos humanos en un área natural protegida o en un distrito de conservación, de competencia del Estado o de cualquiera de sus municipios, declarados así y publicados conforme a las disposiciones legales aplicables, o bien en un zona de reserva conforme a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, o en una zona dictaminada como de alto riesgo para la seguridad de construcciones, o para la vida o salud de las personas.*

En esto tenemos que la penalidad es muy baja para este tipo de delitos y los daños que se causan a las personas. Asimismo, falta especificar más detalladamente todos los supuestos que corresponden a la realidad.

En este tenor, revisamos 18 Códigos penales de los estados, encontrando lo siguiente:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Artículo 241. Fraude específico. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior a quien:

I. a XXII. (…)

XXIII. La persona física o jurídica que enajenen bienes inmuebles pertenecientes a un conjunto habitacional, fraccionamiento o condominios cuya construcción se llevó a cabo en predios ubicados en zonas o áreas consideradas no urbanizables o de riesgo grave o de alto riesgo en los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano o en los atlas de riesgos nacional, estatal o municipal expedidos por las autoridades competentes, ocultando al comprador esta condición o habiendo obtenido las licencias correspondientes oculten al comprador que no eran mitigables o que no se realizaron las obras de mitigación en términos de la legislación en la materia.

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Artículo 262 Ter. A quien autorice la ejecución de construcciones susceptibles de ser ocupadas por personas que se ubiquen en zonas de riesgo de conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Ley General de Protección Civil, el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se le impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y de cien a mil días multa.

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO

Artículo 253 Bis. Se impondrán de dos a cuatro años de prisión; destitución del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación de uno, y hasta por tres años para desempeñar otro, y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los servidores públicos que de manera dolosa, contraviniendo la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano:

I. Aprueben modificaciones de zonificación primaria señalada en los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, respecto de inmuebles o en licencias de urbanización, construcción o edificación;

II. Emitan dictámenes que modifiquen o contravengan las determinaciones de zonificación primaria de los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, aplicable de forma específica al inmueble para el que sea solicitado; o

III. Autoricen licencias o permisos que excedan o contravengan las determinaciones de número máximo de niveles, coeficientes de ocupación y utilización del suelo, áreas de restricción, unidades de vivienda o unidades comerciales y de servicios, señalados en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano.

Artículo 253 Ter. Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los propietarios de inmuebles, sus promotores, representantes legales y constructores que de manera dolosa lleven a cabo acciones de urbanización, construcción o edificación, cuya autorización al momento de su ejecución viole la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano.

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTÍCULO 413.- Comete el delito de fraccionamiento ilegal de inmuebles, el que por sí o por interpósita persona, fraccione o divida en lotes, un terreno de cualquier naturaleza, con o sin edificaciones, propio o ajeno, transfiera o prometa transferir, la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho de un inmueble, cualquiera que sea su régimen jurídico o condición, careciendo de las licencias, autorizaciones o permisos de la autoridad administrativa correspondiente.

Al responsable de este delito, se le impondrá de seis a doce años de prisión y multa de quinientos a mil días.

Para efectos punibles, se considera que incurren en la misma responsabilidad:

I. Quien, teniendo las licencias, autorizaciones o permisos correspondientes, incumpla con las obligaciones previstas en las fracciones IX, XI y XII, del artículo 151, de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit;

II. Aquél que sin contar con las licencias, autorizaciones o permisos de la autoridad administrativa, o incumpliéndolos, realice u ordene realizar cualquier tipo de publicidad ofreciendo en lotes o fracciones, un terreno de cualquier naturaleza, propio o ajeno, para vivienda, comercio o industria, con o sin edificaciones, y

III. El tercero que enajene, prometa hacerlo o comercialice, lotes de terreno que hayan sido fraccionados o divididos sin contar con las licencias, autorizaciones o permisos de la autoridad administrativa, o teniéndolos no cumpla con los requisitos establecidos para ese efecto.

La pena establecida en el presente artículo se aplicará también al servidor público que valiéndose de su encargo expida, autorice u otorgue licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otra disposición análoga, que permita fraccionar en lotes, un terreno de cualquier naturaleza, o en su caso edificar construcciones, sin que se reúnan las condiciones exigidas por las leyes, planes o programas de desarrollo urbano vigentes, o bien que los expidan sin estar autorizado para ello. Las licencias, permisos, autorizaciones o disposiciones análogas a que se hace referencia, estarán afectadas de nulidad absoluta.

La pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más, cuando las conductas previstas en el presente capítulo se realicen en áreas protegidas o de preservación ecológica, o en zonas no consideradas aptas para vivienda, por los planes y programas de desarrollo urbano respectivos.

En este orden de ideas, consideramos que el delito establecido en el artículo 427 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza debe ser adecuado a la realidad que vivimos en Coahuila.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se modifica el contenido del artículo 427 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

Artículo 427…

Se impondrá de **cinco** a **diez** años de prisión y de **quinientos** a **ochocientos** días multa, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar un cargo, empleo o comisión en cualquier entidad oficial del Estado o de sus municipios, y de cinco a diez años del derecho a celebrar con aquellas entidades contratos o convenios de prestación de servicios profesionales o de cualquier otra naturaleza, al servidor público que sin que se satisfagan los requisitos legales ambientales, autorice asentamientos humanos en un área natural protegida o en un distrito de conservación, de competencia del Estado o de cualquiera de sus municipios, declarados así y publicados conforme a las disposiciones legales aplicables, o bien en un zona de reserva conforme a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, o en una zona dictaminada como de alto riesgo para la seguridad de construcciones **y viviendas**, o para la vida o salud de las personas.

Se impondrá desde la mitad del mínimo a la mitad del máximo de las penas previstas en el párrafo primero de este artículo, además de destitución **e inhabilitación hasta por diez años** al servidor público que no impida o no efectúe los actos necesarios y posibles para impedir asentamientos humanos en los lugares señalados en el párrafo anterior, cuando aquéllos se estén efectuando, a pesar de estar a su cargo la obligación de evitarlos.

**La misma pena señalada en el párrafo anterior se impondrá a al servidor público que falsifique, oculte o altere los estudios correspondientes a fin de conceder de forma indebida la autorización para llevar a cabo las construcciones.**

**Quienes realicen las acciones señaladas en el presente artículo deberán además responder junto con los desarrolladores responsables por los daños causados en los términos de este Código y demás leyes aplicables.**

…

**TRANSITORIOS**

**Único.** - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Saltillo, Coahuila a 09 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**

**DIP. MARCELO DE JESUS TORRES CORIÑO DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ**

**DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES**

**DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE SALUD; EN MATERIA DE ORIENTACION EDUCATIVA DE INDOLE SEXUAL Y PLANIFICACION FAMILIAR.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Verónica Boreque Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

La educación sexual es una enseñanza de alto impacto psicológico y de gran calidad de vivencia para quienes la reciben; comprende una amplia variedad de temas relacionados con la intimidad personal, el sexo y la sexualidad, la procreación y planificación familiar, entre otros; explorar valores y creencias sobre estos temas nos da como resultado la obtención de las herramientas para manejar correctamente la salud sexual.

Este tipo de educación está diseñada para ayudar principalmente a la gente joven, para que estos reciban la información y toda la motivación oportuna que les apoye a tomar decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad a lo largo de sus vidas.

Es de suma importancia que se dé a conocer este tipo de educación, que se divulgue la información de esta índole con la finalidad de encarrilar a todos nuestros jóvenes dentro de un estilo de vida sano respecto a su vida íntima.

No cabe duda de que conocer o no del tema sirve de parteaguas para una vida sexual activa con o sin responsabilidad; para mal, cada vez va disminuyendo la edad promedio en la que las y los jóvenes comienzan su vida sexual, y muchos de ellos, sino es que la mayoría, una vez que la mantienen activa, continúan sin la orientación debida. Derivado de lo anterior es que vemos necesario tomar medidas que frenen estas acciones, sabiendo que la primera vía para lograrlo es la enseñanza del respeto a los valores y la moral, a los derechos y a las obligaciones, y por supuesto, a su entorno en general.

Y es que, aunque existen sin fin de acciones a favor, podemos percatarnos que aquellas situaciones derivadas de una falta de educación sexual van en aumento, aun y cuando se han aplicado estrategias y políticas públicas encaminadas en aminorar esta problemática social.

Por ejemplo, no hemos dejado los primeros lugares a nivel nacional en embarazo adolescente desde hace un par de años, dato muy triste, ya que eso nos posiciona como una sociedad sin noción o sin intención de enseñar a nuestros jóvenes sobre la naturalidad de un acto que deben saber ejercer de manera comprometida, responsable e infaliblemente consciente de todo lo que conlleva y repercute.

No hablemos del aborto no seguro e ilegal, que, si somos claros, aunque hoy día los números reflejan que en este rubro vamos avanzando para bien, no podemos negar que existen muchos casos sin reportar que dentro de sus casas practican un aborto sigiloso y muchas veces mortal, por el hecho de no haber sabido cuidarse con algún método anticonceptivo.

Igualmente, la dura situación que viven cientos de madres adolescentes en etapa estudiantil, o las que además son solteras y viven solas; tristemente se exigen tanto a sí mismas, que en algún momento deben optar por trabajar y tener un sustento familiar o estudiar y aferrarse a sus sueños.

Todo esto sin duda es reflejo de una falta de educación sexual, y por ende, repetir los patrones con los que se educaba en generaciones pasadas, que aunque siendo estos los mejores o no, intentan instruir a las nuevas generaciones, pero no resultan efectivas ya que no van a la par con lo requerido por la nueva modernidad social.

Al encontrarnos con todo esto, inmediatamente podemos asegurar que entonces muy poca es la gente que piensa realmente, conforme tiempos y formas, sobre su vida sexual y el desempeño de la misma, sobre cómo, cuándo y con quien tener una familia y en todos esos temas que para muchos serian “formales”. Y claro que lo son, por ello muchos le restan la importancia que tienen, porque ello mismos están faltos de formalidad, situación que buscamos revertir en todo momento con trabajos como el que hoy presento ante esta soberanía.

Tomando todo lo anterior como parámetro, buscamos inculcar a nuestros jóvenes que conscientes de su entorno y antes de su deseo por hacer lo que su voluntad les indique, actúen convenientemente para mejorar ellos mismos y para que todos generalmente mejoren. Que piense en sí mismo, en su familia, en la persona involucrada y todo lo que conlleva un reflejo de su enseñanza, de sus valores y su buena educación.

Tenemos que recalcar la responsabilidad que deben imprimir las y los jóvenes a diario durante su interacción social, sobre todo en este tipo de temas, donde se involucran a terceros.

Sabemos que las acciones emprendidas en estos rubros por el Estado, a través de sus distintas dependencias, funcionan, y que los resultados se ven notoriamente, por ello proponemos reforzar dichas acciones, para lograr afianzar los avances ya obtenidos en esta materia, y seguir creyendo firmemente en el crecimiento social; en este caso, queremos sumar acciones positivas a las ya existentes a fin de controlar estos tipos de fenómenos sociales que impacta directamente en las y los jóvenes, y por supuesto en toda nuestra sociedad en general.

Es por eso, Diputadas y Diputados que se presenta ante este H. Pleno del Congreso el siguiente:

**P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO. –** Se **reforma**: el primer párrafo del artículo 62, la fracción III del artículo 63, el artículo 64 y se **adiciona**: un segundo párrafo a la fracción I del artículo 63 y un tercer párrafo al artículo 65, todos de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:

**Artículo 62.** La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir **la** **promoción y difusión de** la información **de índole sexual** y la orientación educativa para **niñas, niños,** adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir **el embarazo adolescente, el embarazo no deseado, así como** el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número **conforme a sus posibilidades físicas**; todo ello, mediante una correcta información **preventiva y** anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa hacia la pareja.

…

…

**Artículo 63.** Los servicios de planificación familiar comprenden:

I …

**Dicha comunicación educativa comprenderá la atención e información destinada y segmentada específicamente a la juventud y adolescencia, sin distinción ni discriminación de edad, garantizando el acceso a los métodos de planificación familiar establecidos y asegurando su aplicación desde su requerimiento.**

II…

III. La asesoría **y aplicación durante** la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado, **así como** la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con la política establecida por el Consejo Nacional de Población;

IV al VI…

**Artículo 64.** Los Comités de Salud a que se refiere el Artículo 53 de esta Ley, promoverán en las poblaciones y comunidades semiurbanas y rurales en el Estado **la impartición de** pláticas de orientación **y** **talleres de atención** en materia de planificación familiar y educación sexual. **Principalmente** las **autoridades** e instituciones de salud y educativas, **como centros de salud, hospitales y escuelas,** brindarán al efecto el apoyo necesario

**Artículo 65.** ....

...

**Igualmente elaborará y definirá las bases para la creación de programas de atención a embarazos no planificados y/o no deseados, a fin de integrarlos en las acciones correspondientes a la planificación familiar.**

**T R A N S I T O R I O S.**

**PRIMERO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,**

**LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PRESENTE. -**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDES, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A RAZÓN DE QUE SOLO EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE FAMILIA, SIENDO ESTA, ADEMÁS, UNA MEDIDA QUE MENOSCABA LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONGRESOS LOCALES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE NUESTRO PAÍS, Y**

**CONSIDERANDO**

Que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el inciso 1 de su artículo 23, menciona que: *“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.*

Que en el inciso 3 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reza que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Que al poner en contexto la universalidad del término familia, se engloba, implícitamente, la protección a las niñas y niños.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, establece lo siguiente:

*“*

1. *En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.*
2. *Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.*
3. *Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su persona, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”*

Además, en el artículo 4 del texto internacional citado, menciona que:

*“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán las medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”*

Que el párrafo noveno del artículo 4° de nuestra Constitución Federal reza que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Que la acción legislativa debe ser un preponderante para la implementación de normas que garanticen el desarrollo armónico de las familias mexicanas, ya que son, en definitiva, el núcleo más importante que debe ser protegido por las leyes estatales y federales en nuestro país.

Que por lo anterior, someto a consideración a esta Honorable Soberanía la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La protección de la familia es una acción que requiere esfuerzos tanto de la sociedad en general como del Estado, siendo este último, el responsable de generar políticas públicas que establezcan bases sólidas, tanto en el ramo administrativo como en el legislativo.

En concordancia con lo anterior, debemos conocer el concepto familia, que es, el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco o adopción, considerada, como una comunidad natural y universal con base afectiva. Esto trae, de manera inherente, actos jurídicos donde existen preceptos normativos que son seguidos y aplicados por las autoridades en el tema familia.

En este sentido, cada entidad federativa a través de sus Congresos Locales, tienen la facultad de adecuar las leyes de acuerdo a la necesidad social particular, ante esto, observamos que el Congreso de la Unión no debe atribuírsele exclusivamente el tema de familia y su ámbito procesal.

El sustento jurídico de dicha afirmación se encuentra establecida en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde a la letra dice:

***“El Congreso tiene facultad:***

***…***

***XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución ...”***

Siguiendo este precepto Constitucional, el 11 de noviembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del Tribunal Pleno, invalidó el decreto 932 publicado el 22 de septiembre de 2017, por medio del cual fueron reformadas diversas disposiciones de los Códigos Procesal Civil y de Procedimientos Familiares, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, al determinar que invadía la facultad reservada al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal civil y familiar.

Dicha postura se contrapone a las consideraciones mencionadas por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que esta reconoce que la familia es un “elemento natural y fundamental de la sociedad”, lo que constituye un “derecho a la protección por parte de la sociedad y el Estado”, de manera que este último se encuentra obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de las niñas y niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar.

Impedir la capacidad legislativa de los congresos locales en materia procesal familiar complica e inhibe toda posibilidad de que los estados puedan legislar para hacer más ágiles los procesos, establecer mecanismos alternos de solución, crear procesos o juicios sumarios, y un sinfín de modificaciones procesales que abonarían a una mayor eficientes en la materia

Cosa contraria sucede actualmente en los Congresos Locales, pues se encuentran en vacatio legis en materia familiar y procedimientos familiares, es decir, los entes legislativos estatales no tienen permitido ejercer la acción legislativa en las materias ya mencionadas.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, basándonos en sus principios de doctrina, podemos decir que las familias son el cauce principal de la solidaridad entre generaciones, además de que es el grupo en el que se desarrollan los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y el perfeccionamiento de la persona en la sociedad, y es momento de implementar las adecuaciones necesarias para que cada congreso local tenga la libertad de legislar en materia de familia y busquen el bien mayor para todas y todos.

**Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la fracción IV del artículo 21 y la fracción I del artículo 152 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 135 y 136 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sometemos ante esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de**

**DECRETO**

**ÚNICO. – SE MODIFICA LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 73.** …

Del I al XXIX…

***XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, y***

**XXXI.** …

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. –** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de la Federación.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente decreto.

***ATENTAMENTE***

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**

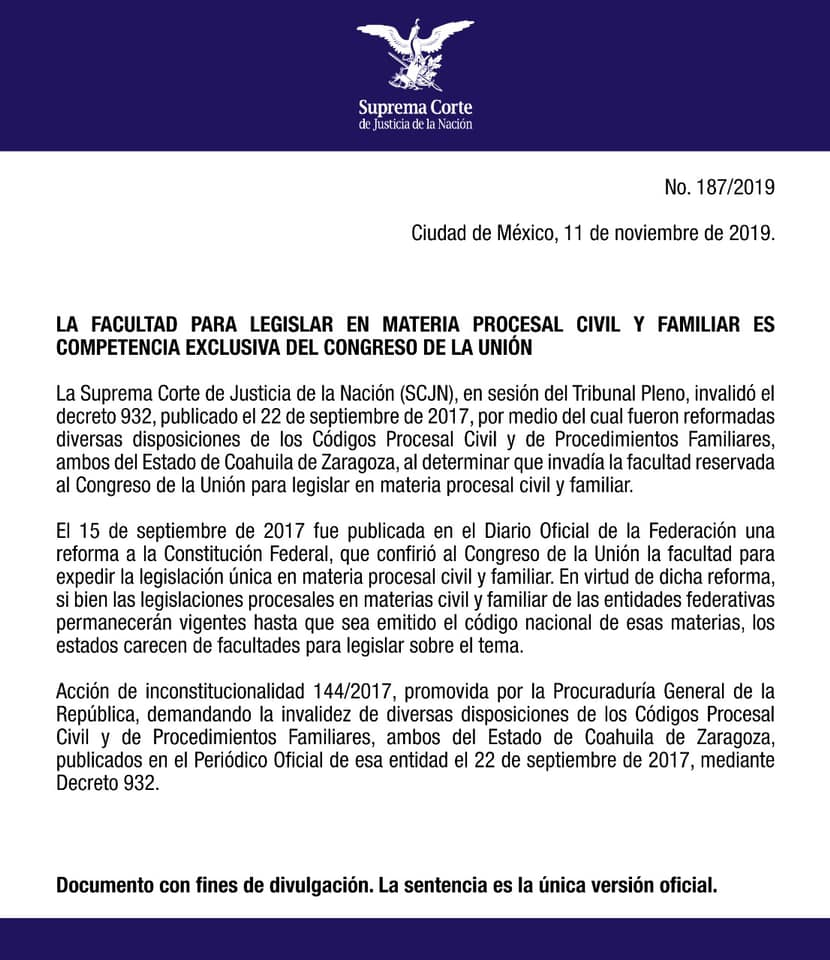
**DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO**

**DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ DIP. BLANCA EPPEN CANALES**

**DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE**

**DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN**

Fuente:



**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL PROPÓSITO DE REGULAR EL ACCESO DE MENORES DE EDAD A LOS SERVICIOS HOSPEDAJE PRESTADOS POR EL SECTOR TURÍSTICO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Andrés Loya Cardona conjuntamente con los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa mediante la cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de regular el acceso de menores de edad a los servicios de hospedaje prestados por el sector turístico, misma que se presenta bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

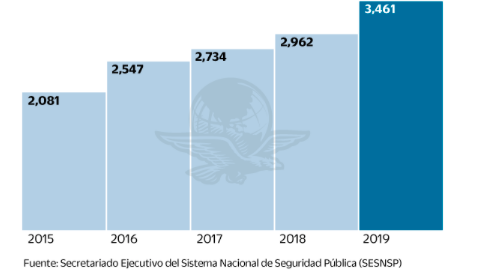
La violencia sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de las niñas y niños que lo sufren. Se puede manifestar en forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, o dentro de las comunidades, y no distingue condición económica o social.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes es una realidad en todos los países. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 150 millones de niñas y 73 millones de niños han experimentado relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual que implican contacto físico, aunque con seguridad éste es un cálculo discreto. Lamentablemente, según estudios de la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico (OCDE) México ocupa el primer lugar en violencia sexual infantil; se estima que en el país cada año hay 4.5 millones de menores de edad víctimas de algún delito de carácter sexual.[[25]](#footnote-25)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la tasa de violación de niñas y niños es de 1,764 por cada 100 mil. Además, cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos. De mil casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, solo 10 van a juicio; y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor.[[26]](#footnote-26)

Tan sólo en el año 2019, la cifra de violencia sexual infantil registró un alarmante incremento en el país, con 3,461 denuncias por el delito de violación equiparada, lo que representa un incremento del 15 por ciento con relación al año anterior, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con esta instancia, 10 estados de la República concentraron este año el 86% de las denuncias: Estado de México, Puebla, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Coahuila y Zacatecas.[[27]](#footnote-27)





Asimismo, conforme al Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas 2019, las Procuradurías y Fiscalías Generales en los ámbitos federal y estatal, identificaron a nivel nacional a 5,245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de las cuales el 27 por ciento son niñas, niños y adolescentes.[[28]](#footnote-28) De estos delitos, el 70 por ciento lo constituyen víctimas de algún delito de ámbito sexual.

De igual forma este informe considera un monitoreo de medios de comunicación a notas periodísticas impresas y electrónicas en materia de trata de personas, realizado entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2017, que identificó que la Ciudad de México es la entidad federativa de la que más se publican notas en torno a trata de personas con fines de explotación sexual. Le siguen los estados de Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Michoacán y el Estado de México.

Por su parte en nuestro Estado, según un reporte realizado por el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila señaló que el 30 por ciento de abusos sexuales denunciados en Coahuila durante el año 2019, fueron cometidos en contra de mujeres menores de quince años.[[29]](#footnote-29)

Estos datos son devastadores y muestran claramente la urgente necesidad de actuar con prontitud e implementar mecanismos de medición y prevención puntuales para erradicar esta problemática.

El interés superior de la niñez es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales. Al efecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece que es obligación del Estado proteger a los niños y niñas de todas las formas de malos tratos perpetrados por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. En 2016, México se sumó́ como uno de los países pioneros a la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, comprometiéndose a implementar como una prioridad nacional, acciones concretas que contribuyan a prevenir y atender la violencia a corto plazo.

Ahora bien, este atroz crimen utiliza en muchas ocasiones los servicios de hospedaje como refugio para perpetrar este delito. Si bien el turismo es una de las mayores industrias a nivel mundial, generadora de más empleos y recursos económicos que cualquier otra en el mundo, en los últimos tiempos se ha ido reconociendo como un problema emergente asociado a esta actividad, su utilización dentro de la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes.

Ante ello, la UNICEF ha puesto en marcha en algunos países una iniciativa que insta a los establecimientos turísticos a incluir una política corporativa ética en contra de la explotación sexual de los niños, a formar a su personal para detectar casos de explotación infantil y a firmar una cláusula en los contratos con sus proveedores en la que declaren su rechazo común a la explotación infantil. Lo anterior como parte del Código contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, apoyado por la misma UNICEF y la Organización Mundial del Turismo.[[30]](#footnote-30) A la fecha 1,030 empresas de 42 países en todo el mundo han suscrito este Código, incluyendo 23 establecimientos de giro turístico asentados en México.

El gremio hotelero representa un aliado fundamental para la protección y defensa de los derechos de la infancia. Empresas del sector, grandes y pequeñas, pueden contribuir de forma directa para prevenir los delitos de violencia sexual contra menores de edad y ejercer con ello su responsabilidad social para con el medio en que opera.

México cuenta con un amplio marco normativo en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado a nivel nacional por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como por los diversos tratados y convenios internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano, como el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo contra la Trata de Personas). En tanto a nivel local, cada entidad federativa cuenta con un orden jurídico que refuerza el entramado de políticas públicas para la protección de la niñez.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, normativa que establece competencias y formas de coordinación entre el Gobierno Federal y los de las entidades federativas y municipios, atribuye de forma específica a la Secretaría de Turismo Federal el deber de diseñar programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, capacitando al personal de las áreas de servicio de dicho sector e implementando campañas para prevenir y desalentar la proliferación de este delito. Esta misma ley obliga a las autoridades de las entidades federativas y municipales a supervisar negocios que puedan ser propicios para la comisión del delito, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicios de internet, baños públicos, entre otros.

Por su parte, el artículo 47 de esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, entre otros. De lo que se desprende claramente la responsabilidad primordial que tiene el Estado de proteger los derechos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Ahora bien, en nuestro Estado se han realizado importantes esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia sexual contra menores. Destaca de forma especial el Diagnóstico sobre factores de riesgo y condiciones para la trata de personas en el Estado de Coahuila,[[31]](#footnote-31) que fue base en el diseño de políticas públicas de prevención y atención de dicho fenómeno. Según señala este instrumento, la reciente prohibición de los giros negros en la entidad provocó que los casos de trata de personas con fines de explotación sexual hayan sido detectados principalmente en casas de citas clandestinas, hoteles y moteles.

Ante esta realidad y considerando que los servicios de hospedaje son sitios propicios a ser utilizados por quienes pretenden cometer este tipo de delitos contra niños, niñas y adolescentes, se vuelve imprescindible adoptar medidas legislativas tendientes a prevenir y desalentar la comisión de estos actos, con el fin primordial de preservar y garantizar los derechos de la infancia.

Por lo anterior, la presente iniciativa pretende incorporar dentro de la Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza, una regulación más detallada sobre el acceso de menores de edad a los servicios de hospedaje prestados por el sector turístico en la entidad que permita prevenir que se vulneren los derechos de los menores, estableciendo además la obligatoriedad de dar aviso a las autoridades competentes, cuando se advierta la posible comisión de un acto delictivo que atente contra la libertad, dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes. Acciones como ésta ya se han impulsado en otras entidades como Nuevo León y Oaxaca.

Regular el ingreso de menores a los servicios hoteleros guarda congruencia con lo establecido en nuestro ordenamiento turístico que dispone expresamente, en su artículo 37, que no se considerarán prácticas discriminatorias en contra de las personas, las tarifas y precios para el uso, consumo o disfrute, de los bienes o servicios ofertados, ni los requisitos de edad a las restricciones para el uso de instalaciones turísticas, cuando sean de carácter general y guarden relación directa con la especialización que el prestador de servicios turísticos decida otorgar, y siempre que las mismas no sean violatorias de otras leyes. Asimismo, es coherente con los protocolos de actuación sugeridos por la UNICEF, previstos en el Manual para la prevención de la explotación comerciar de niños, niñas y adolescentes desde el sector turismo.[[32]](#footnote-32)

Para las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario, es prioridad establecer un marco legislativo adecuado que contribuya a salvaguardar a la infancia de toda manifestación de violencia o maltrato, creando un entorno de protección. Por lo anteriormente expuesto, se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se **adicionan** las fracciones XII y XIII al artículo 39, recorriendo las ulteriores, el artículo 40 Bis, y las fracciones VI y VII del artículo 44, recorriendo las ulteriores, a la Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 39.** …

**I.** a la **XI. …**

1. **Informar, capacitar y sensibilizar a su personal sobre la problemática de la explotación sexual comercial infantil asociada al turismo o cualquier otro tipo de violencia sexual contra menores, y la forma de proceder cuando se advierta la posible comisión de este delito;**
2. **Informar a las autoridades competentes sobre cualquier acto, hecho u omisión cuando se advierta la posible comisión de un acto delictivo que atente contra la libertad, dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes;**

**XIV.** a la **XVIII. …**

**Artículo 40 Bis. Los prestadores de servicios turísticos que brinden el servicio de hospedaje, además de los deberes establecidos en el artículo anterior, deberán implementar medidas de seguridad para la protección de menores de edad, previa prestación del servicio.**

**Para tal efecto, deberán realizar al menos lo siguiente:**

1. **Solicitar la exhibición de un documento de identificación oficial idóneo que demuestre la mayoría de edad;**
2. **Autorizar el ingreso de niñas, niños y adolescentes a las habitaciones o departamentos de los establecimientos de hospedaje, exclusivamente en compañía de quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda y custodia, o en caso de que el menor sea acompañado por persona distinta, previa exhibición de documento firmado por quien la ejerza o detente, donde conste la autorización para que el menor ingrese a dichos establecimientos en su compañía, y**
3. **Notificar a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado o al Ministerio Público, cuando se advierta la posible comisión de un delito o hecho delictivo contra menores.**

**Artículo 44.** …

1. a la **V. ...**
2. **Exhibir identificación oficial idónea que demuestre su mayoría de edad;**
3. **En caso de hacer uso de los servicios de hospedaje en compañía de un menor de edad, acreditar ser quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia, mediante la documentación idónea. En caso de que el menor sea acompañado por persona distinta, se deberá exhibir documento firmado por quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia, donde conste la autorización, acompañando al efecto copia de documentación oficial de quien autoriza dicho documento;**

**VIII.** a la **IX. …**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 09 de septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE INCLUIR EN DICHA LEGISLACIÓN A LA POSVENCIÓN, COMO UNA FORMA DE BRINDAR AYUDA A FAMILIARES DE LAS PERSONAS QUE SE HAN QUITADO LA VIDA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada María Esperanza Chapa García, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el artículo 1**º**, la fracción III del artículo 3**º** y el artículo 16; y se adiciona la fracción IV al artículo 5**º** de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio…*“Trabajando juntos para la prevención del suicidio”* es el lema que fue proclamado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y por la Organización Mundial de la Salud para los años 2018 a 2020; ya que desde 2003 ambas organizaciones han promovido cada 10 de septiembre el **Día Mundial para la Prevención del Suicidio**, con el objetivo de concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse.

Como ya lo hemos expresado en otras ocasiones, el suicidio es un problema que daña de manera global a las familias, a distintas comunidades y a todos los países.

Datos de la Organización Mundial de la Salud, señalan que a nivel mundial se suicidan cada año un millón de personas, lo que es equivalente a una persona cada 40 segundos. Aunado a lo anterior, se estima que, por cada muerte por suicidio, hubo 20 intentos que no lograron su cometido.

En nuestro Estado, en el 2019 se registraron alrededor de 260 casos de suicidio y en este año se han consumado hasta la fecha más de 160, cifras que son preocupantes, esto sin dejar de lado que en el año 2018 nos encontrábamos entre los primeros 5 lugares a nivel nacional con mayor número de suicidios registrados y que actualmente vivimos en una situación extraordinaria debido al COVID-19, que ha ocasionado un incremento en los casos de depresión entre la población.

Cada vida que se pierde de esta forma, representa a un amigo, un padre, una madre, un hijo, hermano, abuelo, compañero de alguien, que deja una huella profunda por la forma en que terminó su vida, es decir, que afecta a familiares y amigos esa ausencia y sufren las consecuencias del suicidio de su ser querido.

La conducta suicida es un fenómeno complejo en el que influyen factores psicológicos, biológicos, sociales, culturales y ambientales, que puede afectar a personas de cualquier edad, género, cultura o grupo social. Por lo que es esencial que la prevención del suicidio se aborde de una manera integral y transversal; sin embargo, cuando la prevención falla, debemos poner en práctica la posvención.

La posvención consiste en ofrecer apoyo a la familia y entorno cercano de las personas que han fallecido por suicidio. Este proceso es tan importante como la prevención del suicidio, debido a que las personas cercanas generalmente tienen sentimientos encontrados, de tristeza, de dolor, de culpabilidad e incertidumbre, es decir, un estado de ambivalencia. Cuando se consuma un suicidio existen consecuencias que recaen en el entorno familiar, ya que nos encontramos no solo ante un duelo, sino aunado con un trauma por la forma en que se cesó su vida, por ende, lleva más tiempo salir de este proceso de duelo, y muchas veces se desarrollan patologías psiquiátricas, aumentando el riesgo de suicidio en varias generaciones.

Es decir, aquellas acciones e intervenciones posteriores a un suicidio que se realizan a favor de las personas, familia o instituciones relacionadas con quien se quitó la vida, es en lo que radica la posvención.

Es por lo anterior, que estimamos pertinente que además de que se brinde una atención integral en la prevención del suicidio, se incluya dentro de la legislación estatal la posvención como los actos encaminados a la atención de las personas más cercanas de quien comete suicidio, y así estar en posibilidades de evitar mayores consecuencias que repercutan en las familias y en la sociedad, por lo que, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. –** Se reforma: el artículo 1**º**, la fracción III del artículo 3**º** y el artículo 16; y se adiciona: la fracción IV al artículo 5**º** de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 1º.-** La presente Ley es de orden público e interés social y tiene como propósito fundamental la protección de la salud mental y la **disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio en el Estado de Coahuila, a través de la prevención, asistencia y posvención de las víctimas y sus familiares.**

**Artículo 3º.-** La presente Ley comprende los siguientes objetivos específicos:

I. …

II. …

**III.** Capacitar al personal del sistema estatal de salud y de todos los sectores e instituciones involucrados en la atención a personas con ideación suicida y **posvención suicida**.

IV. …

**Artículo 5º.-** Para los efectos de la presente ley, deberá entenderse por:

De la I a la III. …

**IV. Posvención.- Las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo, destinadas a trabajar con personas y familias vinculadas a la persona que se quitó la vida, a fin de apoyarlas a superar esta situación.**

**Artículo 16.-** La capacitación incluirá un programa de formación a los trabajadores de la salud, educación, seguridad, justicia y centros de reinserción social, esto, en las distintas áreas de atención preventiva, **y posvención diseñando un espacio de capacitación continua.**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “ANDRÉS S. VIESCA”**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; EN MATERIA DE ATENCION INMEDIATA PARA LA BUSQUEDA DE MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE DESAPARICION O EXTRAVIO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Verónica Boreque Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

Desde el año 2003, después de más de una década de lo sucedido en la frontera de Chihuahua con relación a sus mujeres y los feminicidios, y derivado de la creación de una Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por el Estado Chihuahua, se creó un vital e importantísimo mecanismo de coordinación interinstitucional denominado Protocolo Alba. Inicialmente este fue implementado en Ciudad Juárez, Chihuahua y posteriormente en otros Estados del territorio mexicano, al ver la necesidad de atender este mal que poco a poco se iba asentando en lo largo y ancho de nuestro país.

Es un instrumento creado con la finalidad de observar una perspectiva de género en todas las investigaciones de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. Funge como un mecanismo operativo de coordinación y reacción inmediata entre autoridades federales, estatales y municipales para coadyuvar en la búsqueda y pronta recuperación de mujeres, niñas, y adolescentes que se encuentran en el riesgo inminente de sufrir daños graves a su integridad por motivos de ausencia, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional. El también denominado “Protocolo Naranja”, contiene una serie de pasos a seguir en el momento que es presentada una denuncia donde se impliquen hechos relacionados a la desaparición de una niña o mujer.

Comprende principalmente las siguientes cuatro fases:

- **Fase Uno:** se levanta el reporte de desaparición ante el Agente del Ministerio Público (MP), conocido como “Alerta Ámbar”, según corresponda, su duración es de por lo menos 24 horas;

- **Fase Dos:** conocida como “Operativo Alba”, el MP convoca a los enlaces operativos del “Grupo Técnico de Colaboración”, para la implementación de acciones tendientes a la localización de la mujer o niña desaparecida; su duración es de 72 a 96 horas a partir del reporte;

- **Fase Tres:** comprende la Investigación de hechos probablemente constitutivos de delito; el MP analizará las acciones realizadas hasta el momento y continuará la investigación con la presunción de la existencia de un delito, acreditando los datos que orienten a ese fin; y, finalmente,

- **Fase Cuatro:** la localización de la mujer o niña, ya sea con o sin vida.

Sin duda alguna, esta búsqueda debe ser inagotable y debe ser parte de las prioridades que atañen a los Estados, a la federación y por supuesto a la sociedad en general, a fin de prevenir y erradicar la violencia contra todas las mujeres. Y es que lógicamente afirmamos que una persona que se encuentre desaparecida, vive una situación de riesgo y desventaja, ya que esta imposibilitada al ejercicio de sus derechos mínimos o el disfrute y goce de su seguridad personal, lo anterior, toda vez que no hay certeza respecto si se encuentra viva o muerta, si puede tomar libremente decisiones para su libre desarrollo, o mínimo si está bien y consciente de tan siquiera saber lo que está viviendo y sufriendo en carne propia.

Todo esto desata una completa pérdida de control sobre las decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones básicas; además de que sus familiares viven en la incertidumbre y el desconocimiento sobre el lugar y las condiciones en las que se encuentra su familiar desaparecido.

Ahí es donde el Estado debe de garantizar y asegurar cada uno de sus pasos hacia el bienestar de su sociedad; tomando en cuenta que la situación de la violencia contra las mujeres en México va en aumento y que el compromiso internacional asumido consiste en garantizar la asistencia y protección de las víctimas de esta corriente negativa, es que debemos poner gran énfasis para la erradicación del problema, estimando la urgencia de instrumentar mecanismos completos y certeros para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Debemos garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familias cuando los hechos de desaparición estén vinculados con la comisión de algún delito.

Sin embargo, lamentablemente, este mecanismo no es conocido ni por las mismas víctimas, mucho menos por la mayoría de la ciudadanía, por lo que propongo adicionar un capítulo específico a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se promueva y divulgue la información contenida respecto a dicho instrumento; que además especifique el objeto, los alcances y el *modus operandi* aplicado durante la activación de dicho Protocolo, todo esto, para que las autoridades del Estado de Coahuila y sus 38 Ayuntamientos tomen con el mayor de los compromisos la búsqueda de cada niña, adolescente o mujer extraviada.

Cada ciudadano y ciudadana debe saber que, para proteger la vida, la libertad personal y la integridad de niñas, adolescentes o mujeres que se encuentran con algún reporte de extravío, existen mecanismos de suma importancia como lo es este Protocolo. Que no solo se respalde mediante la práctica, sino que tenga su razón igualmente en diversos instrumentos jurídicos, leyes y normas, para su búsqueda inmediata y sin demora.

Buscamos que el marco jurídico de dicho Protocolo se vea respaldado también por la normativa local y no solo por instrumentos internacionales como convenciones o tratados, para así, dotar de firmeza y perdurabilidad a este tipo de mecanismos, que, sin duda, han salvado más de una vida. Si bien es cierto, aunque no todos conozcan de dichos mecanismos por no sufrir o conocer algún testimonio cercano de su aplicación, también lo es que nuestra obligación es hacérselos ver, y que cuando lo necesiten, sepan como recurrir a ello. Que dichos instrumentos estén a la disposición de todos, se den a conocer, lo familiaricen y tomen como una medida efectiva para salvación de muchas niñas, adolescentes y mujeres Coahuilenses que viven etapas de sufrimiento.

Es por eso, Diputadas y Diputados que se presenta ante este H. Pleno del Congreso el siguiente:

**P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO. –** Se **adiciona**: el CAPITULO V BIS con los artículos 31 Bis, 31 Bis 1 y 31 Bis 2, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila, para quedar como sigue:

**CAPÍTULO V BIS**

**EL PROTOCOLO ALBA**

**Artículo 31 Bis. El Protocolo Alba es un mecanismo institucional enfocado a la ejecución de actividades conducentes para la localización de niñas, adolescentes y mujeres con reporte de extravío o desaparición.**

**Este Protocolo tiene como objetivo llevar a cabo la búsqueda inmediata, para la localización de niñas, adolescentes o mujeres desaparecidas, con el fin único de proteger su vida, su libertad personal e integridad físico-mental, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno e involucrando a medios de comunicación, sociedad civil y organismos públicos o privados.**

**El Protocolo se activa al instante que se reporta la desaparición de la mujer y/o niña, iniciando así las labores pertinentes y contenidas en el cuerpo de mismo mecanismo, y logrando la localización y el retorno de la víctima. El Protocolo se desactiva hasta el hallazgo de la víctima.**

**Artículo 31 Bis 1. El funcionamiento de este mecanismo se hará de conformidad con lo establecido en el “Protocolo Alba actualizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila en fecha 01 de junio de 2018”.**

**Artículo 31 Bis 2. La aplicación y desahogo del Protocolo será a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en observancia a las etapas procesales establecidas en el mismo documento y de conformidad a las prácticas y experiencia de campo realizadas por dicha autoridad.**

**T R A N S I T O R I O S.**

**PRIMERO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente iniciativa mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual se presenta bajo la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el brote de COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Inicialmente, la mayoría de los casos se notificaron en China y en personas que habían viajado a este país, posteriormente observamos brotes en Estados Unidos, Italia y España, y en todas las regiones del mundo.

Derivado de ello, diversas autoridades se vieron en la necesidad de emitir medidas urgentes de distanciamiento, debido a la facilidad de propagación de este virus, tales como la suspensión temporal de clases presenciales, de actividades de establecimientos comerciales, así como el privilegiar el trabajo en casa, el confinamiento, entre otras; situación que trajo como consecuencia una afección severa al sector económico y social.

Un sector de la población que se ha visto especialmente afectado por la pandemia son las niñas y los niños. Así, resulta alarmante que la pérdida generalizada de puestos de trabajo e ingresos y la inseguridad económica en las familias incremente los niveles de [trabajo infantil](https://www.unicef.org/protection/files/UCW_Summary_Financialcrisis_TCfinal.pdf), explotación sexual y embarazo adolescente.

Asimismo, resulta inquietante que debido a las tensiones adicionales que soportan las familias en relación con la crisis de la pandemia como pérdida de empleos, encierro excesivo y ansiedad por motivos de salud y económicos, agravan el riesgo de violencia en el hogar. El secretario general de las Naciones Unidas se ha referido a un aumento global “[estremecedor](https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052)” de la violencia doméstica vinculada con el COVID-19.

También se ha informado que es menos probable que se detecten casos de abuso infantil durante esta crisis, ya que con el cierre de las escuelas, los docentes tienen menos posibilidades de identificar signos de maltrato.

“*Los riesgos que genera la crisis del COVID-19 para la infancia son inmensos”,* destacó [Jo Becker](https://www.hrw.org/about/people/jo-becker), directora de promoción de derechos de niños y niñas de Human Rights Watch. “*Los gobiernos deben responder con urgencia adoptando medidas que protejan a los niños y las niñas durante la pandemia, y también evaluando cómo cerciorarse de que las acciones que realicen ahora contribuyan a asegurar en la mayor medida posible los derechos de la infancia una vez terminada la crisis”.*

Es menester aludir que, se estima que la cantidad total de muertes por COVID-19 a nivel mundial podría llegar a ser de entre [10 y 40 millones de personas](https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid19-control-measures-impact-global-death-toll), lo que inevitablemente traerá como consecuencia que muchos niños y niñas perderán a uno o ambos padres u otros cuidadores. Estas cifras resultan igual de inquietantes, ya que los niños huérfanos son particularmente vulnerables a la [trata](https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/) y otros tipos de explotación, como explotación sexual, ser obligados a mendigar, vender productos en las calles y otros tipos de trabajo infantil.

Es por lo anteriormente expuesto, que resulta indispensable adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de niñas y niños, lo cual no solo mitigará el posible daño que pueda generarse durante la pandemia, sino que además coadyuvará a largo plazo en el fortalecimiento de la máxima protección del interés superior de la niñez.

En ese tenor, la presente iniciativa pretende reformar la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de:

* Fortalecer la protección de la integridad física y social de los niños y niñas de nuestro estado, mitigando los perjuicios que a corto y largo plazo hayan sido causados por la pandemia, brindando a las familias que así lo requieran, una atención psicosocial adecuada.
* Fortalecer las facultades de la PRONNIF de difundir información que permita identificar y atender casos de violencia y abuso sexual, contra niñas, niños y adolescentes; y
* Garantizar que se atiendan todos los reportes de violencia o situaciones de riesgo, que realicen niñas y niños a través del 9 1 1, eliminando la posibilidad de que estas llamadas se desestimen por provenir de menores de edad.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 4°, y las fracciones VI y XXX del artículo 27; asimismo se adicionan las fracciones XXXI y XXXII del mismo artículo, de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

**Artículo 4.-** …

**I.** …

**II.** Al disfrute del más alto nivel de salud y en ese sentido a ser sujetos de programas de asistencia social cuando se encuentren o vivan circunstancias de desventaja social, que garanticen la protección integral en tanto puedan valerse por sí mismos y que le auxilien a recuperar su salud y equilibrio personal, en caso de daño físico o mental; **así como al acceso a mecanismos de apoyo psicosocial para las niñas, niños y adolescentes.**

...

**III. a XXI. …**

…

**Artículo 27.-** …

**I. a V.** …

**VI.**  Recibir, atender e investigar todo reporte respecto a niños, niñas y adolescentes en riesgo, amenaza, afectación o situación extraordinaria; **garantizando en coordinación con las autoridades competentes la optimización de reportes al 911 para evitar que se desestimen las llamadas que hagan niñas, niños y adolescentes;**

**VII.** a **XXIX. …**

**XXX.** Difundir información que permita identificar y atender casos de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes;

**XXXI.** Aplicar medidas de apremio y sanciones administrativas cuando procedan; y

**XXXII.** Las demás que se deriven de los ordenamientos aplicables.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 09 de septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYACARDONA** |  | **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 03 del mes de junio del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

1. *“Nos encontramos en un momento en que el respeto a los animales va adquiriendo mayor importancia dentro la sociedad. Esta circunstancia se ve reflejada en la legislación penal, a partir de la tipificación de los delitos contra el maltrato y crueldad hacia los animales, lo cual sucedió en nuestra entidad el 29 de noviembre del año 2013, con la publicación de una reforma al entonces vigente Código Penal de Coahuila de Zaragoza.*
2. *El compromiso de la protección a los animales se reforzó con la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales, acontecido el 20 de junio de 2017, misma que aún forma parte de la organización de la Fiscalía del Estado. Sin duda estas acciones marcaron de forma decisiva el firme deber del Estado de velar por la protección y salvaguarda de los animales que se encuentre en Coahuila.*
3. *Ahora bien, pocos meses después de la creación de este ente especializado y de la publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, nuestra codificación penal fue actualizada en su totalidad con la abrogación de la normativa punitiva y la subsecuente entrada en vigor el 27 de octubre de 2017 del vigente Código Penal. En esta nueva legislación, la preocupación por sancionar esta conducta delictiva persistió, manteniendo la punición de conductas contra los animales cuando se trata de crueldades y violencia extrema, fundada en el derecho que tenemos como colectividad y como personas de vivir una vida libre de violencia.*
4. *Este cambio sustancial en la nueva ley modificó el orden normativo que guardaban los delitos cometidos contra los animales en el texto legal, traspasando lo relativo a las conductas punibles cometidas contra los animales –en ese entonces previsto en el Capítulo Quinto del Título Cuarto “Delitos ambientales y de peligro contra la seguridad colectiva”—, hacia el Título Décimo del Libro Segundo “Parte Especial”, Apartado primero, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza.*
5. *A partir de una revisión a la Ley Orgánica de la Fiscalía se observa con meridiana claridad que este ordenamiento no se adecuó al nuevo texto penal sustantivo, refiriendo aún a títulos o capítulos inadecuados para la competencia de los órganos fiscales, como sucede con la ya mencionada Fiscalía Especializada.*
6. *Con motivo de lo anterior, se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar la fracción I del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de adecuar las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales, a lo que establece el Código Penal vigente, dando con ello certeza y seguridad jurídica en el ejercicio de su actuación”.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora, efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en las que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto reformar el Código Penal del Estado, a fin de otorgar un marco legal adecuado para coadyuvar en la erradicación del maltrato y la crueldad hacia los animales.

Como se manifiesta en la presente exposición de motivos, actualmente la protección hacia los animales es un tema cada vez más relevante en la sociedad, por ello en el año 2013 se reformó el Código Penal de nuestro Estado bajo el Decreto número 331, en el cual se adicionan diversos artículos, con el propósito de otorgar la debida protección y salvaguardar la vida de los animales.

Asimismo, mediante Decreto número 332 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual implementa una serie de medidas con el fin de obligar a las personas a adquirir una serie de responsabilidades enfocadas en satisfacer las necesidades físicas y ambientales de los seres vivos, brindando una debida protección y trato digno.

De lo anterior, el iniciador indica que “*el compromiso de la protección a los animales se reforzó con la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales, acontecido el 20 de junio de 2017, misma que aún forma parte de la organización de la Fiscalía del Estado”.*

Sin embargo, con la expedición del nuevo Código Penal de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial en fecha 27 de octubre de 2017, se modificó el orden que guardaban los delitos de crueldad y violencia contra animales, por ello, dentro de la exposición de motivos se indica que, “*a partir de una revisión a la Ley Orgánica de la Fiscalía se observa con meridiana claridad que este ordenamiento no se adecuó al nuevo texto penal sustantivo, refiriendo aún a títulos o capítulos inadecuados para la competencia de los órganos fiscales, como sucede con la ya mencionada Fiscalía Especializada”,* por lo que resulta oportuno realizar las adecuaciones necesarias.

En atención a lo anterior, es que quienes dictaminamos acordamos analizar el objeto y los alcances de la iniciativa, observando lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **VIGENTE** | **PROPUESTA** |
| **Artículo 23. Deberes y atribuciones de la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales.**  Esta Fiscalía tendrá los deberes y atribuciones siguientes:    **I.** La investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos probablemente constitutivos de las figuras típicas descritas en el Título Quinto de los Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales, del Título Segundo del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, y el análisis de su incidencia delictiva;  **II.** La implementación en su caso, de acciones para prevenir y combatir los delitos, de su competencia;  **III.** Las que le otorguen el Fiscal General, la Constitución General, la Constitución del Estado, esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. | 1. **Artículo 23. …** 2. … 3. La investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos probablemente constitutivos de las figuras típicas descritas en el Título **Décimo “Delitos contra animales que afectan al derecho de una vida libre de violencia”, del Libro Segundo “Parte especial”, Apartado Primero,** del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, y el análisis de su incidencia delictiva; 4. II. y III. … |

Es por todo lo anteriormente expuesto, que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos en la importancia de adecuar la remisión que hace la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza al Código Penal del Estado, a fin de ajustar las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales, lo que permitirá seguir otorgando la debida certeza jurídica, salvaguardando la vida de todo ser vivo, situación que resulta crucial para alcanzar un apropiado bienestar y desarrollo de la sociedad de nuestro Estado.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 23. …**

…

1. La investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos probablemente constitutivos de las figuras típicas descritas en el Título Décimo “Delitos contra animales que afectan al derecho de una vida libre de violencia”, del Libro Segundo “Parte especial”, Apartado Primero, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, y el análisis de su incidencia delictiva;

II. a III. …

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 31 de agosto de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 65 y se adiciona un párrafo al artículo 70, recorriéndose los actuales párrafos, todos de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo del Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 03 del mes de junio del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 65 y se adiciona un párrafo al artículo 70, recorriéndose los actuales párrafos, todos de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo del Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 65 y se adiciona un párrafo al artículo 70, recorriéndose los actuales párrafos, todos de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo del Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“El confinamiento ante la pandemia por el Covid-19 provocó un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas en México, según la consultora Nielsen[[33]](#footnote-33) durante el periodo del 5 al 11 de abril del presente año, se registró un incremento del 63% respecto del mismo periodo del año 2019, principalmente en cerveza, sin embargo a raíz de las medidas decretadas a finales de mes de marzo por el Gobierno Federal del cierre de actividades no esenciales, las compañías cerveceras hicieron público su anuncio de detener la producción de manera temporal, lo que tuvo un impacto directo sobre las ventas en los diversos comercios que la distribuyen.*

*Según la consultora, la categoría de cerveza tuvo la segunda demanda en ventas en supermercados creciendo un 83% por debajo de la leche, otras bebidas alcohólicas que también se incrementaron fue el consumo de los vinos de mesa el cual creció un 82%, el vodka 76%, ron y brandy 44%, el whisky 24% y el tequila 5%. El aumento se incrementó durante la semana santa y los días festivos que ha pasado durante el confinamiento.[[34]](#footnote-34)*

*En México hemos sido testigos de diversas noticias lamentables por consumo de alcohol adulterado, durante el mes de mayo se han contabilizado 177 muertes o intoxicaciones en las últimas semanas. Los casos se han registrado en los Estados de Jalisco, Puebla, Campeche, Morelos y Yucatán.*

*Autoridades en Puebla han decomisado más de 200 litro de alcohol que simula agave, en el Estado de Morelos ha registrado 29 muertes en varias comunidades por el consumo de un tipo de mezcal llamado “amargo”, en Jalisco se intoxicaron 81 y al menos 33 personas han muerto por consumir alcohol comprado a granel o de caña de 96 grados, que según investigaciones ha sido adulterado con alcohol metílico o metanol, en Yucatán el 10 de mayo murieron 3 personas por intoxicación etílica.[[35]](#footnote-35)*

*Coahuila no ha sido la excepción, lamentablemente existen diversos casos generados a finales de mes de mayo por consumo de alcohol adulterado, cinco jóvenes originarios del ejido la Constancia de Parras, Coahuila, consumieron alcohol alcanforado, según los hechos narrados por familiares se habrían confundido sus síntomas con una resaca por haber consumido el alcohol mezclado con refresco, siendo atendidos en terapia intensiva por acidosis metabólica, complicación derivada de la mezcla hecha a base de etanol que normalmente es de uso industrial y se utiliza como combustible.[[36]](#footnote-36)*

*El alcohol metílico o conocido como alcohol de madera, se encuentra en el alcohol sólido, es uno de los solventes más comunes universales ya que se encuentra su aplicación tanto en el campo industrial como en diversos productos de uso doméstico, como los son el alcohol de quemar, constituido por alcoholes metílico y etílico, como barniz, punturas de zapatos, limpiavidrios, liquido anticongelante, solvente para lacas entre otros.*

*La Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que el consumo de metanol se absorbe por vía oral, mucosa y pulmonar ataca rápidamente en todos los órganos, en el caso de consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con alcohol desnaturalizado por vía digestiva, origina intoxicaciones graves y mortales, absorbiendo rápidamente en estomago e intestino delgado, provocando acidosis metabólica severa, desórdenes visuales, ceguera, convulsiones, coma, produce alteraciones visuales como, visión borrosa, colores alrededor de los objetos entre otros síntomas.[[37]](#footnote-37)*

*Por considerar un tema relevante y el cual se ha incrementado durante esta pandemia, teniendo graves repercusiones en la salud como en la vida de la comunidad, analizamos la legislación vigente tanto federal como estatal, encontrando en la Ley General de Salud, lo que se considera como producto adulterado, cuando “…Su naturaleza y composición no correspondan a aquéllas con que se etiquete, anuncie, expenda, suministre o cuando no corresponda a las especificaciones de su autorización o**Haya sufrido tratamiento que disimule su alteración, se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas utilizadas. …”[[38]](#footnote-38).*

*De igual manera contempla el producto contaminado y alterado “…Se considera contaminado el producto o materia prima que contenga microorganismos, hormonas, bacteriostáticos, plaguicidas, partículas radioactivas, materia extraña, así como cualquier otra substancia en cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos por la Secretaría de Salud….”[[39]](#footnote-39) , “… .- Se considera alterado un producto o materia prima cuando, por la acción de cualquier causa, haya sufrido modificaciones en su composición intrínseca que:* ***I.*** *Reduzcan su poder nutritivo o terapéutico;* ***II.*** *Lo conviertan en nocivo para la salud, o* ***III.*** *Modifiquen sus características, siempre que éstas tengan repercusión en la calidad sanitaria de los mismos. …”[[40]](#footnote-40)*

*Así mismo y siguiendo con la misma Ley General de Salud establece los diversos supuestos y las sanciones a que se hace acreedores “… A quien, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.*

*A quien adultere, altere, contamine o permita la adulteración, alteración o contaminación de bebidas alcohólicas, se le aplicará:*

1. *Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, en términos de los artículos 206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa;*

***II.*** *Cuando se trate de bebidas alcohólicas alteradas, acorde con la fracción II del artículo 208 de la Ley General de Salud, de tres a siete años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días multa, y*

***III.*** *Cuando se trate de bebidas alcohólicas contaminadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 207 de la Ley General de Salud, de cinco a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.*

*Las mismas penas se aplicarán a quien, a sabiendas, por sí o a través de otro, expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas. …” [[41]](#footnote-41)*

*En cuanto nuestra legislación Estatal la Ley de Salud establece en el artículo 4, fracción XVIII, lo que le corresponde en materia de salubridad general “… Ejercer la verificación y el control sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas de cualquier tipo, de conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables. En lo que corresponde a los establecimientos donde se expendan o suministren al público, bebidas alcohólicas, se aplicará, además, la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza; …”*

*Así mismo la Ley Estatal establece que el Gobierno del Estado en coordinación con las autoridades sanitarias federales y con los municipios, ejecutaran un Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, estableciendo diversas acciones como la prevención, la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y el fomento a realizar actividades cívicas, deportivas y culturales, por citar algunas acciones. [[42]](#footnote-42)*

*En relación a los de los expendios de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. La legislación vigente de Salud en el Estado, contempla la vigilancia, control y promoverá el fomento sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas de conformidad con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la Ley Estatal de Salud y la ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado.[[43]](#footnote-43)*

*Así mismo el Estado cuenta con una Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol, de orden público, interés y observancia general, cuyo objetivo es prevenir y combatir el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, regular la venta, consumo y almacenaje, promover campañas de difusión encaminadas a prevenir el abuso en el consumo, impulsar acciones para prevenir accidentes, estimular la participación de la ciudadanía mediante la práctica de conductor designado. [[44]](#footnote-44)*

*Dicha ley contempla un apartado[[45]](#footnote-45) de las* ***obligaciones*** *de los propietarios u operadores de los establecimientos en los que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, y de los representantes, administradores o encargados de los mismos.*

*Artículo 64.-*

*“ … XX. Vender, expender o entregar para consumo, bebidas alcohólicas libres de adulteración, contaminación o alteración, y con el contenido de alcohol etílico permitido, en los términos de las disposiciones aplicables; …”*

*Citando como una obligación de los propietarios u operadores el vender, expender o entregar para consumo* ***bebidas alcohólicas libres de adulteración, contaminación o alteración, y con el contenido de alcohol etílico permitido.***

*También la legislación Estatal de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol, establece las* ***prohibiciones*** *para propietarios u operadores de los establecimientos que cuenten con licencia para la venta de bebidas alcohólicas, citando en la fracción III:*

*Artículo 65*

***III.*** *Alterar, contaminar o adulterar las bebidas alcohólicas, para su venta, expendio o consumo;*

*Por lo que se propone adicionar a la fracción III del artículo 65, lo que establece la Ley General de Salud en sus artículos 206, 207 y 208, referente a lo que se considera adulterado, contaminado y alterado, lo cual consideramos primordial ya que no contamos con esa definición ni precisión en nuestra legislación estatal por lo que deberá de remitirse a lo que establece la Ley General de Salud en cuanto a esos supuestos.*

*Así mismo y en el mismo tenor la problemática que nos trae a proponer este proyecto de iniciativa de reforma, es en relación a la obligación y prevención derivado de una responsabilidad que contrae el propietario u operador que altere, contamine o adultere las bebidas alcohólicas contemplada en la legislación estatal en sus artículos 64 y 65, requiriendo adicionar en el apartado de sanciones en su numeral 70, de igual manera lo que establece la legislación federal en la Ley General de Salud en su artículo 464 en el cual establece las sanciones a que se hace acreedores ya que en el capítulo de sanciones aplicables por infracción a lo dispuesto por la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol, no se contempla sanción alguna a quien altere, contamine o adultere bebidas alcohólicas para su venta o consumo, por lo que consideramos importante adicionar un párrafo remitiendo estos supuestos a los establecido por la Ley General de Salud en la materia”.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en las que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto reformar la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo del Alcohol en el Estado, a fin de brindar de una mayor protección a los habitantes de la entidad en relación con el delito de la venta de bebidas adulteradas.

La Organización Mundial de la Salud enfatiza que el consumo excesivo de alcohol *“puede tener consecuencias sanitarias y sociales negativas relacionadas con sus propiedades tóxicas y la dependencia que puede producir.*

*Además de las enfermedades crónicas que pueden contraer quienes beben grandes cantidades de alcohol a lo largo de varios años, el consumo de alcohol también se asocia a un aumento del riesgo de padecer afecciones agudas, tales como las lesiones, y en particular las provocadas por accidentes de tránsito”.*

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud indica que *“el consumo de alcohol en las Américas es de aproximadamente un 40% mayor que el promedio mundial”* enfatizando el hecho de que *“el consumo nocivo de alcohol se asocia con una serie de consecuencias sanitarias y sociales, incluyendo las lesiones, las diversas formas de cáncer, la enfermedad crónica del hígado, enfermedades del corazón, la dependencia del alcohol y la violencia doméstica”.*

El confinamiento por la crisis epidemiológica de coronavirus, disparó el consumo de alcohol en México, trayendo como consecuencia un alto número de casos de intoxicación aguda, reportando la Secretaría de Salud, desde el inicio de la cuarentena, la atención médica de 7 mil pacientes en hospitales públicos del país, debido a este problema de salud.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la población de 20 años o más que ha consumido alcohol, ha aumentado de un 53.9% en 2012 a un 63.8% en 2018.

Las cifras anteriormente señaladas resultan alarmantes puesto que entre más se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas, mayor es el riesgo de que se esté ingiriendo alcohol adulterado.

La producción y comercialización de alcohol adulterado es una práctica que ha sido considerada como un problema de salud pública a nivel mundial, el cual se ve agravado por el bajo costo con el que se oferta y que en ciertas circunstancias se llega a vender en comercios formales como restaurantes y bares, poniendo en peligro la vida y la salud de los consumidores.

Es por ello, que la Ley General de Salud establece que:

***Artículo 206****.- Se considera adulterado un producto cuando:*

***I.*** *Su naturaleza y composición no correspondan a aquéllas con que se etiquete, anuncie, expenda, suministre o cuando no corresponda a las especificaciones de su autorización, o*

***II.*** *Haya sufrido tratamiento que disimule su alteración, se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas utilizadas.*

***Artículo 207****.- Se considera contaminado el producto o materia prima que contenga microorganismos, hormonas, bacteriostáticos, plaguicidas, partículas radioactivas, materia extraña, así como cualquier otra substancia en cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos por la Secretaría de Salud.*

***Artículo 208****.- Se considera alterado un producto o materia prima cuando, por la acción de cualquier causa, haya sufrido modificaciones en su composición intrínseca que:*

***I.*** *Reduzcan su poder nutritivo o terapéutico;*

***II.*** *Lo conviertan en nocivo para la salud, o*

***III.*** *Modifiquen sus características, siempre que éstas tengan repercusión en la calidad sanitaria de los mismos.*

***Artículo 464.-*** *A quien, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.*

*A quien adultere, altere, contamine o permita la adulteración, alteración o contaminación de bebidas alcohólicas, se le aplicará:*

***I.*** *Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, en términos de los artículos 206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa;*

***II.*** *Cuando se trate de bebidas alcohólicas alteradas, acorde con la fracción II del artículo 208 de la Ley General de Salud, de tres a siete años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días multa, y*

***III.*** *Cuando se trate de bebidas alcohólicas contaminadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 207 de la Ley General de Salud, de cinco a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.*

*Las mismas penas se aplicarán a quien, a sabiendas, por sí o a través de otro, expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.*

Es por todo lo anteriormente expuesto que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos con el iniciador en la importancia de reformar la Ley para para la Regulación de la Venta y Consumo del Alcohol en el Estado de Coahuila, a fin de precisar los conceptos de producto adulterado, contaminado y alterado e introducir las sanciones contempladas en la Ley General citada, que coadyuve en la mitigación de este problema de salud que afecta a los ciudadanos de nuestra entidad.

En base a todo lo precedentemente abocado, es que resulta oportuna la aprobación de la presente iniciativa, ya que el garantizar una vida sana y promover el bienestar de toda la ciudadanía es indispensable para la construcción de una sociedad próspera.

Del estudio de la presente propuesta de modificación verificamos que, dentro del artículo 70 aún se hacía referencia a sanciones cuantificadas en días de salarios mínimos en lugar de Unidades de Medida y Actualización, por lo que consideramos oportuno realizar la adecuación en lo conducente.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma la fracción III del artículo 65 y el artículo 70, de la Ley para para la Regulación de la Venta y Consumo del Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 65.** …

I. a la II. …

III. Alterar, contaminar o adulterar las bebidas alcohólicas, para su venta, expendio o consumo, bajo las consideraciones establecidas en los artículos 206, 207 y 208 de la Ley General de Salud;

IV. a la XVI. …

…

**ARTÍCULO 70.** Las sanciones aplicables por infracción a lo dispuesto en esta ley serán las siguientes:

**I.** Multa hasta con cien unidades de medida y actualización vigentes, a los propietarios u operadores de los establecimientos a que se refiere esta ley, que cometan por primera vez las siguientes infracciones:

**a)** Omitan exhibir en un lugar visible al interior del establecimiento, la licencia y, en su caso, el refrendo anual;

**b)** Permitan que los clientes violen el horario de consumo;

**c)** Omitan exhibir en lugar visible al público, el cartel oficial emitido por la Secretaría de Salud que contenga la leyenda “El consumo abusivo de alcohol puede producir adicciones y graves problemas de salud”;

**d)** Condicione la prestación de sus servicios a la venta, expendio o consumo de bebidas alcohólicas.

**II.** Multa hasta con doscientas unidades de medida y actualización vigentes a los propietarios u operadores de los establecimientos a que se refiere esta ley que reincidan en las conductas descritas en la fracción anterior;

**III.** Multa hasta con cuatrocientas unidades de medida y actualización vigentes a los propietarios u operadores de los establecimientos a que se refiere esta ley, que cometan por primera vez las siguientes infracciones:

**a)** Abstenerse de informar a la autoridad competente sobre las alteraciones al orden o la comisión de ilícitos o faltas administrativas, así como la presencia de personas con armas blancas o de fuego;

**b)** Anunciarse u operar bajo algún giro distinto a la licencia autorizada;

**c)** Permitir la promoción y venta de productos alcohólicos por su personal fuera del establecimiento;

**d)** Ofrecer, vender o comercializar bebidas alcohólicas en la vía y lugares públicos, así como en los comercios ambulantes, fijos, semifijos, pulgas, tianguis, mercados, mercados rodantes y similares, cuando no cuenten con la licencia o permiso especial correspondiente;

**e)** Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas fuera del área autorizada por la licencia o permiso especial;

**f)** Ofrecer, vender o comercializar bebidas alcohólicas en cualquiera de sus presentaciones, para su venta a través del sistema de servicio para llevar a transeúntes o automovilistas;

**g)** Vender bajo la modalidad conocida como ¨barra libre¨ o cualquier otra que permita el consumo libre sin cobro por cada bebida consumida;

**h)** Expender bebidas alcohólicas en envase abierto para llevar, o permitir a sus clientes salir del establecimiento con bebidas alcohólicas en envase abierto;

**i)** Permitir el consumo de bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento, su estacionamiento y toda área destinada a la operación del mismo para los giros señalados en las fracciones XI, XIII, XV, XXI y XXXV del artículo 4° de esta ley.

**IV.** Multa hasta con quinientas cincuenta unidades de medida y actualización vigentes a los propietarios u operadores de los establecimientos a que se refiere esta ley, que reincidan en las conductas descritas en la fracción anterior;

**V.** Multa hasta con setecientas unidades de medida y actualización vigentes, a los propietarios u operadores de los establecimientos a que se refiere esta ley, que cometan por primera vez las siguientes infracciones:

**a)** Permitir la entrada a menores de edad, a los establecimientos descritos en las fracciones II, IV, IX, XI, XII y XVII del artículo 4°. Tratándose de los establecimientos previstos en la fracción XVII del mismo artículo, permitirles la entrada sin la compañía de sus padres o tutores;

**b)** Vender, servir, obsequiar o permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad o incapaces;

**c)** Vender, servir, obsequiar o permitir el consumo de bebidas alcohólicas a las personas que porten cualquier tipo de armas;

**d)** Vender bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos y durante las fechas y horas de suspensión de actividades que fije la autoridad;

**e)** Permitir el consumo en el interior de los establecimientos cuando se cuenta con licencias para venta en envase cerrado;

**f)** Vender, servir, obsequiar o permitir el consumo de bebidas alcohólicas a militares, oficiales y agentes de tránsito, oficiales y agentes de policía, y demás encargados de la seguridad pública cuando estén en servicio o porten uniforme, así como a las personas que realicen las inspecciones en servicio en dicho establecimiento;

**g)** Expender o vender bebidas alcohólicas en instituciones educativas, centros de reinserción social, instalaciones de gobierno, instituciones de beneficencia, hospitales, sanatorios y similares;

**h)** Ofrecer por sí o por interpósita persona, dinero, objetos o servicios a las personas que realicen la inspección o verificación.

En el caso de los supuestos a que se refiere esta fracción podrá la autoridad imponer además como sanción la clausura temporal hasta por 30 días.

**VI.** Multa hasta con mil quinientas unidades de medida y actualización vigentes a los propietarios u operadores de los establecimientos a que se refiere esta ley, que sean sorprendidos en:

**a)** Reincidir en las conductas descritas en la fracción anterior;

**b)** Vender bebidas alcohólicas sin la licencia, refrendo o permiso especial correspondiente;

**c)** Vender o suministrar bebidas alcohólicas a establecimientos que carezcan de licencia o permiso especial, o se encuentren sancionados con clausura temporal o definitiva, mientras dure la clausura, tratándose de los fabricantes, distribuidores mayoritarios, almacenes y agencias a quienes la autoridad les haya notificado tal medida.

En el caso de los supuestos a que se refiere esta fracción podrá la autoridad imponer además como sanción la clausura temporal hasta por 60 días.

**VII.** Arresto administrativo, hasta por treinta y seis horas, a los propietarios, encargados y/o empleados de los establecimientos a que se refiere esta ley, que obstruyan de cualquier forma las labores de la autoridad;

**VIII.** Clausura temporal hasta por 30 días naturales:

**a)** A los establecimientos que no cumplan con las normas de protección civil, desarrollo urbano y salud;

**b)** Cuando se sorprenda por primera vez vendiendo bebidas alcohólicas que no cuenten con la debida autorización oficial para su venta y consumo;

**IX.** Clausura definitiva y revocación de la licencia para el caso de reincidencia en cualquiera de los supuestos señalados en la fracción anterior, o cuando se sorprenda en la venta de bebidas alcohólicas sin la correspondiente licencia, refrendo o permiso especial vigente.

Se entiende por clausura, como medida cautelar, el acto administrativo, realizado por la autoridad competente, a través del cual se suspenden las actividades dentro de un establecimiento en el que se almacenen, vendan o consuman bebidas alcohólicas, al actualizarse cualquiera de los supuestos establecidos en esta ley o como consecuencia de la imposición de alguna de las sanciones previstas en la misma.

Para el caso de que se ordene la clausura mediante resolución, como consecuencia de la suspensión de los derechos o revocación de la licencia o permiso correspondiente, el personal que designe la autoridad emisora de dicho acto administrativo procederá en los términos de la presente ley y la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza; procediendo además a colocar sellos de papel engomado, mismos que se pegarán en todos los accesos al establecimiento en forma tal que impidan totalmente la entrada al mismo.

**X.** Revocación de licencia y multa de hasta mil quinientas unidades de medida y actualización vigentes cuando:

**a)** Con motivo de la inspección o verificación realizada por la autoridad competente, se detecte que el infractor haya reincidido en una o más infracciones u obligaciones señaladas en esta ley;

**b)** Su titular ceda o arriende la licencia o permiso o los derechos derivados de los mismos o cambie el domicilio del establecimiento, sin la autorización de la Secretaría de Finanzas;

**c)** Su titular constituya o permita que se constituya un gravamen sobre la licencia o permiso;

**d)** Los establecimientos regulados por esta ley, no cumplan con los requisitos de seguridad y salubridad que deben reunir, de conformidad con la ley de la materia y demás disposiciones legales aplicables;

**e)** Se vendan o suministren bebidas alcohólicas fuera de las presentaciones y especificaciones que establece la legislación sanitaria vigente o en contra de la forma que permita el giro correspondiente;

**f)** Los propietarios u operadores de los establecimientos que sean sorprendidos vendiendo bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas;

**g)** Se opere con licencia o permiso suspendidos;

**h)** Se violen las prohibiciones establecidas en la fracción XVI del artículo 65 de esta ley y en el penúltimo párrafo del mismo precepto, o

**i)** Se dé alguno de los supuestos que se prevén en los artículos 100 y 101 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**XI.** Multa hasta con cien unidades de medida y actualización vigentes o arresto a quien:

**a)** Ingiera bebidas alcohólicas en vehículos durante su trayecto;

**b)** Adquiera bebidas alcohólicas en establecimientos o en horarios no autorizados.

**XII.** Cuando se detecte un establecimiento que viole lo dispuesto es en el último párrafo del artículo 65 de esta ley, se procederá de inmediato a su clausura definitiva y se dará vista al Ministerio Público para los efectos conducentes.

Las prohibiciones a que se refiere la fracción III del artículo 65, serán sancionadas conforme lo establecido en el artículo 464 de la Ley General de Salud.

Las sanciones a que se refiere este artículo podrán imponerse conjunta o separadamente sin que en ningún caso exceda la multa del monto equivalente a dos mil quinientos Unidades de Medida y Actualización vigentes.

Las sanciones anteriores serán independientes de las que procedan de conformidad a lo establecido en el Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y las demás disposiciones aplicables.

Al aplicarse las sanciones se tomarán en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, las circunstancias particulares del caso y la reincidencia.

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 31 de agosto de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone adicionar un párrafo catorce al artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 03 del mes de junio del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone adicionar un párrafo catorce al artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone adicionar un párrafo catorce al artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

*“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, reconoce entre otros derechos fundamentales de los mexicanos, el derecho humano a la protección de la salud, y dispone que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Así mismo, en dicho artículo recientemente se ha elevado al rango constitucional los programas sociales del Gobierno Federal a favor de los grupos vulnerables.*

*Acorde a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, Base 1a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o, fracción II, de la Ley General de Salud, el Consejo de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país, y conforme a lo que expresamente dispone el artículo 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, a dicho Consejo le corresponde aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria.*

*En ese sentido, el Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, en donde las disposiciones que emita serán de carácter general y obligatorias en el país.*

*Ahora bien, como es de todos conocido, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del* ***virus SARS-CoV2 (COVID-19),*** *es una pandemia derivada del incremento en el número de casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional, concluyendo los médicos expertos en el tema que en virtud del riesgo pandémico y el comportamiento del COVID-19, la población mundial será afectada severamente.*

*Atendiendo a los graves riesgos para la salud de los seres humanos a nivel mundial, y particularmente en México, aquí en nuestro país, el Consejo de Salubridad General, emitió la correspondiente declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la epidemia del (Covid-19), ordenando de manera inmediata la suspensión de labores y prestación de servicios no esenciales para la población, tanto en el sector público, privado y social, con la finalidad de mitigar la grave dispersión y transmisión de ese mortal virus, a partir del 31 de marzo del presente año.*

*Lamentablemente con la declaratoria de emergencia de salud pública, tal medida sanitaria vino acompañada de una grave crisis económica que ha ocasionado la pérdida de casi un millón de empleos formales, más los empleos informales que también han resultado afectados, dichas circunstancias han ocasionado un impacto negativo tremendo a la economía, y por lo tanto, al ingreso de cada uno de los mexicanos, lo que según expertos del Centro de Análisis Económicos del Tecnológico de Monterrey, tal declaratoria no nada más freno a la actividad productiva, sino que también detuvo la creación de nuevos empleos en nuestro país, derivado de la baja en la confianza de los inversionistas, lo cual afecta los ingresos de muchos ciudadanos.*

*En ese tenor, y conforme al espíritu* *plasmado en el Artículo 123, de la Constitución Federal, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.*

*Asimismo, tal disposición expresamente estipula que los empleadores, inclusive el propio Estado como patrón, serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen.*

*Conforme a lo anterior, desarrollar una actividad laboral productiva y debidamente remunerada, representa una de las facetas más importantes de la vida de un ser humano, ya que nuestro crecimiento y superación se encuentra íntimamente ligado a nuestras actividades productivas, donde recibir una retribución económica es lo que nos hace sentirnos motivados y valorados, y como el trabajo está estrictamente vinculado al esfuerzo y al desarrollo profesional, las actividades productivas que realizamos incidirá en la vida familiar, escolar y recreativa del trabajador y de sus seres queridos, y como en un mundo donde existen distintas limitantes laborales, como el que hoy padecemos por la Pandemia del Covid-19, el poder desenvolverse en un ambiente productivo y de remuneración segura, eso sería la mejor forma de labrarse un futuro mejor.*

*Con base a las premisas anteriormente expuestas, el Partido Acción Nacional, con la presente iniciativa está impulsando que se legisle con la noble y apremiante finalidad de apoyar a los trabajadores formales e informales del país, para que ante la falta de ingresos para ellos y sus familias, derivadas de una parálisis económica como la que estamos padeciendo, se les otorgue a todos ellos un apoyo económico directo, que se denominaría* ***“INGRESO BASICO UNIVERSAL PARA EMERGENCIAS”****, con al menos una cobertura elemental que recomienda el CONEVAL, que asciende a la cantidad mensual de* ***$ 3,207. 00 (TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M. N.)****, debiéndose elevar tal prestación laboral al rango constitucional, como un apoyo social y económico en beneficio de todos aquellos mexicanos desempleados que hoy más que nunca lo necesitan.*

*Tal iniciativa es viable, porque conforme a las propias estadísticas del IMSS, a enero de 2020, hay veinte millones, seiscientos trece mil, quinientos treinta y seis personas inscritas en dicha dependencia, los cuales se consideran como empleados formales, mismas que sumadas a los cerca de treinta y un millones, trescientos catorce mil, doscientos cuarenta y nueve personas, que según el Coneval actúan en la informalidad, se tendría que construir una línea o bolsa de bienestar económica emergente, a favor de ellos por un aproximado de* ***CIENTO SESENTA Y SEIS MIL MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES, CUATROCIENTOS SEIS MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS,*** *como un máximo total, si es que todas esas personas requirieran dicho ingreso básico, lo cual sabemos que no sería así, dado que hay áreas productivas públicas, privadas y sociales, que no paralizaron sus labores, aunado a que ya se están dando pautas para la continuación de otro tipo de servicios y cadenas productivas, que lógicamente incidirá en la activación de la economía, de ahí, que dicho monto estaría yendo a la baja, porque menos trabajadores ocuparían dicho ingreso básico universal.*

*Resulta viable y procedente esta iniciativa, porque el Gobierno Federal en solo cuatro programas sociales, sin demeritar la importancia de cada uno de ellos, como lo son* ***“Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, “Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores”, y “Sembrando Vida”,*** *tienen un presupuesto global asignado por un monto de doscientos seis mil millones, trescientos noventa millones de pesos, para el ejercicio fiscal del 2020, lo cual corrobora que con una reingeniería presupuestaria, pudiera implementarse el denominado programa económico* ***“INGRESO BASICO UNIVERSAL PARA EMERGENCIAS”****, en los términos que se expone en esta iniciativa.*

*Cabe destacar, que programas gubernamentales de apoyo al desempleo, existen en otros países con un gran éxito y respaldo ciudadano, y es este el momento de que en México podamos materializarlo desde la Ley Fundamental, tal y como lo recomienda el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, que en su comunicado número 06 de fecha 11 de mayo de 2020, sugiere como una medida para enfrentar las severas consecuencias que está generando la emergencia sanitaria detonada por el Covid-19, el que se garantice a la población laboral que resultó afectada, un ingreso que le permita acceder a una canasta básica alimentaria, y a subsidios temporales para hacer frente a sus necesidades primordiales, sin descartar una protección social a través de una pensión universal, como la que se propone en esta iniciativa, propuesta legislativa que va en el mismo sentido de lo que aquí ya recientemente aprobamos en esta Sexagésima Primera Legislatura, al elevar al rango Constitucional los Programas Sociales del Gobierno de la Republica*

*La presente Iniciativa sobre el Ingreso Básico Universal para Emergencias, puede representar no nada más un gran alivio y aliento para los mexicanos que están viviendo una falta de ingresos, sino también será un verdadero aliciente para generar mayor confianza en la inversión para la estabilización económica del país, de ahí, que contradecir u obstaculizar este programa emergente de ingreso básico, sería tanto como traicionar los más altos intereses de nuestra comunidad”.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el estudio y análisis del contenido y alcances de la iniciativa de lo cual se desprende que la misma tiene por objeto establecer expresamente dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el estado deberá garantizar un ingreso básico universal para emergencias.

El derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales para el adecuado desarrollo de la sociedad, en base a ello la Organización Mundial de la Salud expone que:

*“Los Estados partes en esta Constitución declaran, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que los siguientes principios son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos:*

*El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.*

*La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.*

*Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos.*

*La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común.*

*El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para este desarrollo.*

*La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud.*

*Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo.*

*Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas”.*

De lo anterior podemos destacar el hecho de que el Estado es responsable de velar por la obtención del máximo grado de bienestar de sus ciudadanos, por lo cual nuestra Carta Magna en su artículo 4 salvaguarda el derecho de la protección de la salud de las personas.

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el brote de COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Inicialmente, la mayoría de los casos se notificaron en China y en personas que habían viajado a China, posteriormente observamos brotes en Estados Unidos, Italia y España, y en todas las regiones del mundo.

El pasado 23 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de México anunciaron formalmente que el país había entrado en la fase 2 de la pandemia del coronavirus, y el 30 de marzo de este mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza Mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el Virus SARS-Co V2.

Derivado de dicho Acuerdo y de la necesidad de tomar medidas indispensables para salvaguardar la salud y la vida, millones de personas se vieron en la necesidad de suspender sus actividades laborales y otras.

La Organización Internacional del Trabajo contempla para los países de ingresos medio-altos, como México, la pérdida de 1.7 millones de empleos, en caso de impacto económico bajo; de 4.1 millones si hay un impacto medio y 7.4 millones si el impacto es alto.

Esto ha provocado una crisis económica que afecta a la mayoría de la población de nuestro país, principalmente a los sectores más vulnerables, es por ello que dentro de la exposición de motivos se alude que lapresente propuesta tiene como *“finalidad apoyar a los trabajadores formales e informales del país, para que ante la falta de ingresos para ellos y sus familias, derivadas de una parálisis económica como la que estamos padeciendo, se les otorgue a todos ellos un apoyo económico directo, que se denominaría* ***“INGRESO BASICO UNIVERSAL PARA EMERGENCIAS”****, con al menos una cobertura elemental que recomienda el CONEVAL, que asciende a la cantidad mensual de* ***$ 3,207. 00 (TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M. N.)****, debiéndose elevar tal prestación laboral al rango constitucional, como un apoyo social y económico en beneficio de todos aquellos mexicanos desempleados que hoy más que nunca lo necesitan”.*

Del análisis de distintos estudios sobre el futuro financiero a nivel mundial y en nuestro país, podemos concluir que no se muestra un panorama muy favorable para la economía, por lo que resulta oportuno integrar dentro de nuestra Constitución General dicho apoyo a fin de proteger a las familias mexicanas en situaciones como la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando.

Resulta indispensable destacar que, para alcanzar el grado máximo de la salud y el bienestar de la sociedad, se requieren diversos elementos, tal como lo es vivir en un ambiente idóneo lo cual va de la mano de que cada familia cuente con ingresos para cubrir sus necesidades básicas, tales como la alimentación y la vivienda, lo cual no se puede obtener sin que exista una protección a la economía de las personas.

Es por todo lo anteriormente expuesto que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos con el iniciador de la presente propuesta de reforma al artículo 4° de nuestra Carta Magna, la cual tiene como objeto contemplar en dicho ordenamiento, que el estado deberá garantizar un ingreso básico universal para emergencias, consistente en la entrega de un apoyo económico no contributivo a todas las personas económicamente activas formales o informales, en caso de suspensión de labores, derivada de una contingencia o emergencia sanitaria que sea declarada por la autoridad competente.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone adicionar un párrafo catorce al artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se adiciona un párrafo catorce al artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

**Artículo 4…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

El Estado garantizará un Ingreso Básico Universal para emergencias, consistente en la entrega de un apoyo económico no contributivo a todas las personas económicamente activas, formales o informales, en caso de suspensión de labores o trabajos, derivado de una contingencia sanitaria que declare la autoridad sanitaria competente o la autoridad en la materia en otras circunstancias de emergencia formalmente decretada; este apoyo será otorgado, siempre que se vean impactadas negativamente por las emergencias señaladas. De igual forma se otorgará el mismo apoyo a aquellas personas cuyas empresas lleven a cabo suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, en términos de la Ley Federal del Trabajo. El apoyo anteriormente señalado deberá ser suficiente para cubrir, al menos, la Línea de Bienestar establecida por el CONEVAL. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las personas que pierdan su empleo o suspendan temporalmente labores si son formales o vean impactado su trabajo u oficio si son informales.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**T R A N S I T O R I OS**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 31 de agosto de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura, con relación al oficio del Lic. Gerardo Xavier de Hoyos Perales, Presidente Municipal de Morelos, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa del fallecimiento de la Profesora María Magdalena de Hoyos de Hoyos, Regidora Plurinominal del Ayuntamiento de dicho municipio, lo anterior para lo que corresponda; y,

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso el día 19 del mes de agosto de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio del Lic. Gerardo Xavier de Hoyos Perales, Presidente Municipal de Morelos, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa del fallecimiento de la Profesora María Magdalena de Hoyos de Hoyos, Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento de dicho municipio, lo anterior para lo que corresponda.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio antes mencionado y sus anexos, para su estudio y dictamen; y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que esta comisión es competente para emitir el presente dictamen, lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo 90 fracciones IV, V, VI y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.** Que el día 15 de enero de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, la lista de integración de Cabildos de los Ayuntamientos electos que estarían en funciones durante el periodo de 2019-2021.

**TERCERO.** Que conforme a la publicación mencionada, la C. María Magdalena de Hoyos de Hoyos, fue electa para desempeñar el cargo de Regidora de Representación Proporcional del R. Ayuntamiento de Morelos, Coahuila de Zaragoza.

**CUARTO.** Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 fracciones XI, XVIII y XIX, en relación con el 158-U fracción I numeral 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y los artículos 90 fracciones IV, V y VI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es facultad de éste conceder licencias a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos y nombrar a quienes deban suplir las faltas temporales o absolutas de los mismos.

**QUINTO.** Que esta comisión realizó el análisis del expediente formado con motivo del el oficio del Lic. Gerardo Xavier de Hoyos Perales, Presidente Municipal de Morelos, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa del fallecimiento de la Profesora María Magdalena de Hoyos de Hoyos, Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento de dicho municipio, lo anterior para lo que corresponda.

**SEXTO.** Que de acuerdo a lo referido en el oficio citado, y a lo que consta en el acta de defunción expedida por la Dirección del Registro Civil del Estado, la C. María Magdalena de Hoyos de Hoyos falleció el 26 de julio del presente año.

**SÉPTIMO.** Que en el caso de que la vacante de un miembro de un ayuntamiento se presente con posterioridad a la protesta de ley que haya rendido, el artículo 58 del Código Municipal para el Estado de Coahuila con relación al 59 del mismo ordenamiento legal, faculta al Congreso del Estado, para nombrar a los sustitutos que cubran las vacantes de los munícipes de los Ayuntamientos del Estado.

**OCTAVO.** Que en virtud del fallecimiento de la C. María Magdalena de Hoyos de Hoyos, corresponde a este Congreso realizar la designación de quien habrá de cubrir la vacante originada por el fallecimiento del titular de esa Regiduría.

**NOVENO.** Que la designación del sustituto de un Regidor de Representación Proporcional, debe realizarse conforme a lo previsto en la fracción VII del artículo 158–K de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el artículo 21 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y en los ya citados artículos 58 y 59 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, que a la letra dicen:

***CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

***Artículo 158-K.*** *Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que establezca la ley de la materia.*

***El Ayuntamiento se conformará de acuerdo con las bases siguientes:***

***I.*** *Sus integrantes serán electos en la forma que establezca la ley de la materia.*

***II.*** *La elección consecutiva será permitida en los términos del artículo 30 de esta Constitución por un período adicional.*

***III.*** *Se renovará en su totalidad cada tres años.*

***IV.*** *Iniciará sus funciones el primero de enero del año inmediato siguiente al de la elección y concluirá el día anterior a aquel en que inicie funciones el que lo sucederá.*

***V.*** *La ley de la materia introducirá el principio de representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos, en todos los Municipios del Estado.*

***VI.*** *Cuando el presidente municipal electo no se presente a tomar posesión del cargo o en caso de falta absoluta, el Congreso del Estado, con la concurrencia de cuando menos dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos a un presidente municipal, quien se encargará de concluir el período. El nombramiento se hará conforme a la propuesta que realice la dirigencia estatal del partido político que haya obtenido el triunfo en el municipio correspondiente.*

*En el caso de coaliciones la ley reglamentaria determinará el procedimiento correspondiente.*

***VII.*** *Si alguno de los miembros de un Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido conforme el sistema de suplentes o se procederá de otra forma con arreglo a la ley.*

***CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

***Artículo 21.***

1. *Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los noventa días siguientes a la declaración de la misma.*
2. *En el caso de vacantes de miembros del Congreso, electos por el principio de mayoría relativa, el Instituto convocará a elecciones extraordinarias en un plazo de noventa días siguientes a la notificación de la diputación vacante.*
3. *Las vacantes de miembros del Congreso electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.*
4. *Las vacantes de presidentes, regidores y síndicos se cubrirán en la forma en que establece la Constitución y el Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Las de los regidores de representación proporcional se cubrirán por aquellos candidatos del mismo partido político que le sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los que le hubieren correspondido.*

***CÓDIGO MUNICIPAL DE COAHUILA***

***ARTÍCULO 58.*** *En caso de que no se presenten a rendir protesta el síndico y los regidores electos, el Congreso mandará llamar a quienes figuren en la lista de suplentes, y de entre éstos designará a quienes deban de cubrir las vacantes.*

*Cuando un regidor de representación proporcional no se presente a tomar posesión de su cargo, el Congreso del Estado mandará llamar al que siga en el orden dentro de la lista de preferencia de regidores que fue propuesta por el partido político o coalición de que se trate.*

***ARTÍCULO 59.*** *En caso de que la vacante se presente con posterioridad a la toma de protesta del presidente, síndico o alguno de los regidores de un ayuntamiento, se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores.*

**DÉCIMO.** Que la designación de los Regidores de Representación Proporcional del Ayuntamiento, se realizará por aquellos que figuren en la lista de preferencia de Regidores, registrada ante el Instituto Electoral de Coahuila por el partido político correspondiente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 numeral 4 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de los artículos 57, 58 y 59 y demás relativos del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**DÉCIMO PRIMERO.** Que teniendo a la vista la lista publicada en el Periódico Oficial del Estado, para la elección del referido Ayuntamiento y el convenio de coalición respectivo, esta comisión propone a la C. Marisa García Ontiveros, en virtud del lugar que ocupa en el orden dentro de dicho listado, con el fin de que el Pleno de este Congreso lo designe como Séptimo Regidor del R. Ayuntamiento de Morelos, Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, esta comisión somete a consideración, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se designa a la C. Marisa García Ontiveros, para desempeñar las funciones de Regidora de Representación Proporcional del R. Ayuntamiento de Morelos, Coahuila de Zaragoza; en sustitución de la C. María Magdalena de Hoyos de Hoyos, cargo que deberá desempeñar a partir de que rinda la protesta de ley.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Comuníquese en forma oficial al Ayuntamiento de Morelos, la designación de la C. Marisa García Ontiveros, a efecto de que se le llame a rendir protesta y se incorpore a sus funciones como Regidora de Representación Proporcional del R. Ayuntamiento de Morelos, Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Comuníquese lo anterior al Ejecutivo del Estado para los efectos procedentes.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 31 de agosto de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura, con relación al oficio de la Tec. Nadia Haidé Jaramillo Rodríguez, Presidenta Municipal de Viesca, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa del fallecimiento del C. Nabor Rodríguez García, Séptimo Regidor del Ayuntamiento de dicho municipio, lo anterior para lo que corresponda; y,

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente, en fecha 10 de agosto del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio de la Tec. Nadia Haidé Jaramillo Rodríguez, Presidenta Municipal de Viesca, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa del fallecimiento del C. Nabor Rodríguez García, Séptimo Regidor del Ayuntamiento de dicho municipio, lo anterior para lo que corresponda.

**SEGUNDO.** Que en fecha 17 de agosto del presente año, conforme a lo acordado en la sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se recibieron en esta comisión dictaminadora los documentos y anexos antes mencionados, para su estudio y dictamen; y,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que esta comisión es competente para emitir el presente dictamen, lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo 90 fracciones IV, V, VI y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.** Que el día 15 de enero de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, la lista de integración de Cabildos de los Ayuntamientos electos que estarían en funciones durante el periodo de 2019-2021.

**TERCERO.** Que conforme a la publicación mencionada, el C. Nabor Rodríguez García, fue electo para desempeñar el cargo de Regidor de Representación Proporcional del R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila de Zaragoza.

**CUARTO.** Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 fracciones XI, XVIII y XIX, en relación con el 158-U fracción I numeral 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y los artículos 90 fracciones IV, V y VI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es facultad de éste conceder licencias a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos y nombrar a quienes deban suplir las faltas temporales o absolutas de los mismos.

**QUINTO.** Que esta comisión realizó el análisis del expediente formado con motivo del el oficio de la Tec. Nadia Haidé Jaramillo Rodríguez, Presidenta Municipal de Viesca, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa del fallecimiento del C. Nabor Rodríguez García, Regidor de Representación Proporcional del Ayuntamiento de dicho municipio, lo anterior para lo que corresponda.

**SEXTO.** Que de acuerdo a lo referido en el oficio citado, y a lo que consta en el acta de defunción expedida por la Dirección del Registro Civil del Estado, el C. Nabor Rodríguez García falleció el 21 de julio del presente año.

**SÉPTIMO.** Que en el caso de que la vacante de un miembro de un ayuntamiento se presente con posterioridad a la protesta de ley que haya rendido, el artículo 58 del Código Municipal para el Estado de Coahuila con relación al 59 del mismo ordenamiento legal, faculta al Congreso del Estado, para nombrar a los sustitutos que cubran las vacantes de los munícipes de los Ayuntamientos del Estado.

**OCTAVO.** Que en virtud del fallecimiento del C. Nabor Rodríguez García, corresponde a este Congreso realizar la designación de quien habrá de cubrir la vacante originada por el fallecimiento del titular de esa Regiduría.

**NOVENO.** Que la designación del sustituto de un Regidor de Representación Proporcional, debe realizarse conforme a lo previsto en la fracción VII del artículo 158–K de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el artículo 21 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y en los ya citados artículos 58 y 59 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, que a la letra dicen:

***CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

***Artículo 158-K.*** *Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que establezca la ley de la materia.*

***El Ayuntamiento se conformará de acuerdo con las bases siguientes:***

***I.*** *Sus integrantes serán electos en la forma que establezca la ley de la materia.*

***II.*** *La elección consecutiva será permitida en los términos del artículo 30 de esta Constitución por un período adicional.*

***III.*** *Se renovará en su totalidad cada tres años.*

***IV.*** *Iniciará sus funciones el primero de enero del año inmediato siguiente al de la elección y concluirá el día anterior a aquel en que inicie funciones el que lo sucederá.*

***V.*** *La ley de la materia introducirá el principio de representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos, en todos los Municipios del Estado.*

***VI.*** *Cuando el presidente municipal electo no se presente a tomar posesión del cargo o en caso de falta absoluta, el Congreso del Estado, con la concurrencia de cuando menos dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos a un presidente municipal, quien se encargará de concluir el período. El nombramiento se hará conforme a la propuesta que realice la dirigencia estatal del partido político que haya obtenido el triunfo en el municipio correspondiente.*

*En el caso de coaliciones la ley reglamentaria determinará el procedimiento correspondiente.*

***VII.*** *Si alguno de los miembros de un Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido conforme el sistema de suplentes o se procederá de otra forma con arreglo a la ley.*

***CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

***Artículo 21.***

1. *Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los noventa días siguientes a la declaración de la misma.*
2. *En el caso de vacantes de miembros del Congreso, electos por el principio de mayoría relativa, el Instituto convocará a elecciones extraordinarias en un plazo de noventa días siguientes a la notificación de la diputación vacante.*
3. *Las vacantes de miembros del Congreso electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.*
4. *Las vacantes de presidentes, regidores y síndicos se cubrirán en la forma en que establece la Constitución y el Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Las de los regidores de representación proporcional se cubrirán por aquellos candidatos del mismo partido político que le sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los que le hubieren correspondido.*

***CÓDIGO MUNICIPAL DE COAHUILA***

***ARTÍCULO 58.*** *En caso de que no se presenten a rendir protesta el síndico y los regidores electos, el Congreso mandará llamar a quienes figuren en la lista de suplentes, y de entre éstos designará a quienes deban de cubrir las vacantes.*

*Cuando un regidor de representación proporcional no se presente a tomar posesión de su cargo, el Congreso del Estado mandará llamar al que siga en el orden dentro de la lista de preferencia de regidores que fue propuesta por el partido político o coalición de que se trate.*

***ARTÍCULO 59.*** *En caso de que la vacante se presente con posterioridad a la toma de protesta del presidente, síndico o alguno de los regidores de un ayuntamiento, se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores.*

**DÉCIMO.** Que la designación de los Regidores de Representación Proporcional del Ayuntamiento, se realizará por aquellos que figuren en la lista de preferencia de Regidores, registrada ante el Instituto Electoral de Coahuila por el partido político correspondiente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 numeral 4 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de los artículos 57, 58 y 59 y demás relativos del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**DÉCIMO PRIMERO.** Que teniendo a la vista la lista publicada en el Periódico Oficial del Estado, para la elección del referido Ayuntamiento y el convenio de coalición respectivo, esta comisión propone al C. Magdaleno Guerrero Ramírez, en virtud del lugar que ocupa en el orden dentro de dicho listado, con el fin de que el Pleno de este Congreso lo designe como Regidor de Representación Proporcional del R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, esta comisión somete a consideración, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se designa al C. Magdaleno Guerrero Ramírez, para desempeñar las funciones de Regidor de Representación Proporcional del R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila de Zaragoza; en sustitución del C. Nabor Rodríguez García, cargo que deberá desempeñar a partir de que rinda la protesta de ley.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Comuníquese en forma oficial al Ayuntamiento de Viesca, la designación del C. Magdaleno Guerrero Ramírez, a efecto de que se le llame a rendir protesta y se incorpore a sus funciones como Regidor de Representación Proporcional del R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Comuníquese lo anterior al Ejecutivo del Estado para los efectos procedentes.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 31 de agosto de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al escrito de denuncia formulada por los CC. César Flores Sosa, Theodoro Kalionchiz de la Fuente y José Ariel Venegas Castilla Regidores del Ayuntamiento de Monclova, mediante la cual solicitan se inicie el Procedimiento de Juicio Político en contra del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, por incurrir en actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, previstos en las fracciones II, V, VII y VIII del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**R E S U L T A N D O**

**ÚNICO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 20 de enero del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia el escrito de denuncia formulada por los CC. César Flores Sosa, Theodoro Kalionchiz de la Fuente y José Ariel Venegas Castilla, regidores del Ayuntamiento de Monclova, en contra del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, para los efectos procedentes; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 14 de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que elescrito de denuncia formulada por los CC. César Flores Sosa, Theodoro Kalionchiz de la Fuente y José Ariel Venegas Castilla, Regidores del Ayuntamiento de Monclova, mediante la cual solicitan se inicie el Procedimiento de Juicio Político en contra del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, por incurrir en actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, previstos en las fracciones II, V, VII y VIII del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, se funda entre otras en las consideraciones siguientes:

***PRIMERO.- El Presidente Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza C. JESUS ALFREDO PAREDES LOPEZ ha incurrido en actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, que constituyen un ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, y popular del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, e infracciones a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, a las leyes estatales vigentes, que causan graves perjuicios a la Hacienda Pública Municipal de Monclova, Coahuila, que inclusive incurre en usurpación de atribuciones,******consistentes en la adjudicación y celebración de contratos de Obra Pública, Prestación de Servicios, Arrendamiento, Adquisición de bienes, Publicidad, entre otros, sin la autorización del Cabildo de Monclova, Coahuila de Zaragoza durante todo el ejercicio fiscal 2019****, a mayor abundamiento, nos permitimos precisar los siguientes antecedentes;*

*En fecha 01 de enero de 2019 quedó instalado formalmente el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio constitucional 2019-2021, integrado de la siguiente manera; JESÚS ALFREDO PAREDES LOPEZ, Primer Regidor JOSE ARIEL VENEGAS CASTILLA, Segundo Regidor MA. TERESA DE LEON FLORES, Tercer Regidor THEODOROS KALIONCHIZ DE LA FUENTE, Cuarto Regidor WENDDY MAYLEN CARLOS PIZAÑA, Quinto Regidor RICARDO ALFONSO MALDONADO ESCOBEDO, Sexto Regidor MARIA AURORA BARRIOS GUTIERREZ, Séptimo Regidor CESAR MENCHACA LUNA, Octavo Regidor GRISELDA IRAZEMA ARREGUIN CUELLAR, Noveno Regidor ERICK GUILLERMO ZAPATA HERNANDEZ, Decimo Regidor HILDA RIVERA CAZARES, Decimo Primer Regidor EDUARDO GARCIA ANDRADE, Primer Regidor de Representación Proporcional LOURDES KAMAR GOMEZ (Ausencia), Segundo Regidor de Representación Proporcional DELFINA VILLA CANDELARIA, Tercer Regidor de Representación Proporcional CESAR FLORES SOSA, Cuarto Regidor de Representación Proporcional PEDRO MAGAÑA HUITRON, Quinto Regidor de Representación Proporcional MERCEDES ARLET BOTELLO MALDONADO, Sexto Regidor de Representación Proporcional ELVA LUCILA GARZA DE LA CERDA, Síndico de Mayoría MARLENE GRICELDA MONTELONGO VALLES, y Síndico de Representación Proporcional JOSE ARTURO MARTINEZ GONZALEZ.*

*En la primera sesión ordinaria de cabildo de la presente administración, celebrada en fecha 01 de enero de 2019 por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, Ejercicio Constitucional 2019-2021 la Síndico de Mayoría* *MARLENE GRISELDA MONTELONGO VALLES realizó una propuesta consistente en;* ***“autorización al presidente municipal Ing. Jesús Alfredo Paredes López para que durante el periodo de la presente administración pública celebre convenios, contratos y demás actos jurídicos que fueren favorables o necesarios en los distintos ramos de la administración pública municipal, con los gobiernos federal, estatal y otros gobiernos municipales de la entidad o de otras entidades, así como con personas físicas o morales; con la condicionante que sean conforme a la ley y no cause daño o perjuicio a la hacienda pública ni al patrimonio municipal; se exceptúan a la presente propuesta, aquellos que de acuerdo a la normatividad aplicable requieran aprobación específica”****, aprobado por la mayoría de los integrantes del cabildo actual.*

***El acuerdo descrito en el párrafo anterior*** ***vulnera*** ***los artículos 26, 158-N, 158-P fracción V, 158-U fracción I numerales 1, 10, fracción II numeral 2, fracción III numeral 7, 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza****, motivo por el cual se interpuso un juicio de Acción de Inconstitucionalidad Local reclamando la invalidez del mismo, ante el Tribunal Superior de Justicia en su carácter de Tribunal Constitucional Local, la cual se radicó bajo la estadística AIL-1/2019, e incluso en fecha 20 de marzo de 2019, el Magistrado Instructor de ese H. Tribunal Constitucional Local* ***emitió sentencia interlocutoria concediendo la Suspensión del acuerdo impugnado****, toralmente para los siguientes efectos;*

*“… Ya que el origen de este procedimiento constitucional local, es el acuerdo antes señalado, emitido por el Cabildo en sesión de uno de enero de dos mil diecinueve, que* ***se encuentra directamente relacionado con la aplicación de recursos públicos y con disposiciones legales referentes a la adquisición y contratación de bienes y servicios, todo lo cual constituye un tema de interés social, ya que la disposición, en su caso, de recursos públicos y la adquisición de bienes al margen de las disposiciones legales aplicables, es decir, sin la intervención del cabildo, para su aprobación y autorización en cada caso en particular, pudiera acarrear perjuicio a la sociedad y a la propia entidad municipal, por lo que la concesión de la medida suspensional tiene por objeto prevenir el daño que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general hasta en tanto se resuelva el juicio principa****l, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate.*

*Se suspenden los efectos del acuerdo identificado en el acta de la sesión de cabildo, con el número octavo para que el presidente municipal, a partir de la fecha en que se les notifique esta resolución, se abstenga en lo sucesivo de realizar actos de los que se autorizó o delegaron facultades en dichos acuerdos; lo anterior hasta en tanto se les comunique otra cosa, ya por la modificación o revocación de la medida o porque se resuelva en el fondo la acción de inconstitucionalidad.”*

*Derivado de la promoción de la* *Acción de Inconstitucionalidad Local descrita,* ***en sesión ordinaria de cabildo número trece, celebrada en fecha 09 de agosto de 2019, la Sindica de Mayoría MARLENE GRISELDA MONTELONGO VALLES, realizó la propuesta de revocar el acuerdo impugnado, propuesta que fue aprobada por el cabildo, remitiéndole copia certificada del Acta de dicha sesión al Tribunal Superior de Justicia en su carácter de Tribunal Constitucional Local, emitiendo sentencia definitiva en la que determina sobreseer el procedimiento de Acción de Inconstitucionalidad Local, por considerar que han cesado los efectos del acuerdo impugnado en virtud de su revocación por el propio cabildo****, consideración que no es compartida por los suscritos, motivo por el cual promovimos demanda de Amparo Directo en contra de dicha sentencia definitiva, la cual se encuentra en trámite pendiente de resolución en el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, bajo la estadística* ***Amparo Directo 496/2019.***

*Relatado lo anterior, nos permitimos insistir en que todos los contratos que ha celebrado el Presidente Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza, desde el 01 de enero de 2019 hasta la fecha de presentación de la presente denuncia han sido sin la aprobación y autorización específica del Cabildo, sin embargo,* ***cabe hacer la importante precisión que los mismos se firmaron bajo tres estatus jurídicos diferentes****, siendo de la siguiente manera;*

* ***Los contratos que su celebración aconteció en el periodo del 01 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019, sin aprobación y autorización específica del Cabildo, se realizaron bajo el amparo del acuerdo número ocho de Cabildo de la primer sesión ordinaria del Cabildo de Monclova, Coahuila*** *de fecha 01 de enero de 2019, el cual ha sido descrito en líneas anteriores, acuerdo que es importante recalcar que infringe lo dispuesto en los artículos 26, 158-N, 158-P fracción V, 158-U fracción I numerales 1, 10, fracción II numeral 2, fracción III numeral 7, 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.*
* *Ahora bien, no obstante que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de* *Coahuila de Zaragoza, en su carácter de Tribunal Constitucional Local, emitió en fecha 22 de marzo de 2019 sentencia interlocutoria dentro de los autos de la Acción de Inconstitucionalidad Local número 1/2019, en la que* ***se determinó la suspensión*** *de los efectos del acuerdo identificado en el acta de la sesión de cabildo, con el número octavo* ***para que el presidente municipal, a partir de la fecha en que se les notifique esta resolución, se abstenga en lo sucesivo de realizar actos de los que se autorizó o delegaron facultades en dichos acuerdos,*** *lo cual le fue notificado en fecha 28 de marzo de 2019, sin embargo en evidente incumplimiento a dicha determinación emitida por el más Alto Tribunal de Justicia del Estado, el aquí denunciado siguió adjudicando y celebrando contratos de toda índole, sin la previa autorización y aprobación especifica del Cabildo de Monclova, Coahuila de Zaragoza****, es decir del periodo comprendido del 28 de marzo de 2019 al 09 de agosto de 2019*** ***(fecha en la que se revocó en sesión de Cabildo el acuerdo impugnado en la Acción de Inconstitucionalidad Local) el Presidente Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza, C. JESUS ALFREDO PAREDES LOPEZ, en claro incumplimiento a la suspensión decretada por el Tribunal Superior de Justicia, adjudicó y celebró múltiples contratos y convenios, sin la previa aprobación y autorización específica del Cabildo.***
* *Por último,* ***en el periodo comprendido del 09 de agosto de 2019*** *(fecha en la que se revocó en sesión de Cabildo el acuerdo impugnado en la Acción de Inconstitucionalidad Local)* ***a la fecha de presentación de la presente denuncia, de manera ilegal e inexplicable el aquí denunciado ha adjudicado y firmado diversos contratos y convenios, sin la previa aprobación y autorización del Cabildo****, no obstante que no existe acuerdo o ley alguna que lo faculte para celebrar contratos y convenios sin la aprobación y autorización del Ayuntamiento.*

*A fin de acreditar los hechos aquí narrados, nos permitimos enlistar los contratos de obra pública que se han celebrado desde el 01 de enero de 2019 hasta la fecha de presentación de la presente denuncia de juicio político, de los cuales tenemos conocimiento porque dicha información fue obtenida del portal de internet del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), en el link I*[*http://www2.icai.org.mx/ipo/dependencia.php?dep=48#pageload*](http://www2.icai.org.mx/ipo/dependencia.php?dep=48#pageload) *que corresponde a la Información Pública de Oficio del municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, toda vez que* ***el Presidente Municipal aquí denunciado y los directores bajo su subordinación, se han negado sistemáticamente a otorgarnos la información relativa a cuantos contratos se han celebrado durante el año 2019, así como copias de los mismos, no obstante que se los hemos solicitado en las sesiones de cabildo, y mediante peticiones por escrito, sin que hasta la fecha hayan dado respuesta a nuestras peticiones****, tal y como se acredita con los acuse de recibo que se anexan a la* *presente, siendo los siguientes:*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*En efecto, la totalidad de los contratos arriba detallados, se han adjudicado y celebrado por el Presidente Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza C. JESUS ALFREDO PAREDES LOPEZ, sin la autorización y aprobación especifica del Ayuntamiento* *de Monclova, Coahuila de Zaragoza, Ejercicio Constitucional 2019-2021,* ***lo que constituye una clara violación vulnera los artículos 26, 158-N, 158-P fracción V, 158-U fracción I numerales 1, 10, fracción II numeral 2, fracción III numeral 7, 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que actualiza la procedencia del juicio político por encuadrarse en las hipótesis previstas en las fracciones II, V, VI y VIII del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del estado de Coahuila de Zaragoza****, que a la letra dicen;*

*Articulo 8o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:*

*II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular; así como a los niveles de gobierno federal, estatal y municipal;*

*V.- La usurpación de atribuciones;*

*VI.- Cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado, a las leyes federales estatales que de ellas emanen,* ***cuando cause perjuicios graves a la Federación, al Estado, a uno o varios Municipios del Estado, a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;***

*VIII.- Las* ***violaciones sistemáticas*** *o* ***graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal o de los Municipios; a las leyes y demás ordenamientos que determinen el manejo de los recursos económicos estatales y municipales, y a los convenios y acuerdos de coordinación que para la transferencia de dichos recursos se celebren.***

*Luego, los actos del Presidente Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza, consistente en adjudicar y celebrar todo tipo de contratos y convenios, sin solicitar la autorización y aprobación del Cabildo, se encuentra directamente relacionado con la aplicación de recursos públicos y con disposiciones legales referentes a la adquisición y contratación de bienes y servicios, todo lo cual constituye un tema de interés social, ya que la disposición, en su caso, de recursos públicos y la adquisición de bienes al margen de las disposiciones legales aplicables, es decir, sin la intervención del cabildo, para su aprobación y autorización en cada caso en particular, pudiera acarrear perjuicio a la sociedad y a la propia entidad municipal, tal y como lo consideró el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su carácter de Tribunal Constitucional Local, al emitir resolución interlocutoria en el juicio de Acción de Inconstitucionalidad Local AIL-1/2019, lo que* ***constituye un ataque evidente a la forma de gobierno municipal dispuesto en la Constitución Federal y de la Entidad, que establecen que será de forma republicano, representativo, y popular, es decir que será gobernado por la institución democrática del Ayuntamiento, el cual está integrado por regidores que representan a diferentes minorías e intereses de la sociedad, estableciéndose así, que la Hacienda Pública Municipal sea ejercida por el Ayuntamiento, siendo el Presidente Municipal solamente el encargado de ejecutar las decisiones de éste, así mismo, la Constitución y Código Municipal de la Entidad también establecen de manera expresa y clara que todo contrato que pretenda celebrar la administración pública municipal por conducto del Alcalde, debe contar con la previa autorización y aprobación del Ayuntamiento****,* ***esto, a fin de garantizar la forma de gobierno republicano, representativo, y popular del municipio, toda vez que la forma en que el Ayuntamiento toma decisiones y acuerdos es mediante sesiones de cabildo, en las que se discuten y aprueban, en su caso, las iniciativas, o acuerdos propuestos por sus integrantes, respetándose el derecho de las minorías a ser oídos y tomados en cuenta, por conducto de los regidores integrantes del órgano colegiado citado.***

*Por tanto, la conducta desplegada por el aquí denunciado durante el ejercicio constitucional 2019, al celebrar durante todo el año anterior contratos de la administración pública municipal, sin la autorización y aprobación del Ayuntamiento, e inclusive en desacato a la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional Local, es un ataque a la forma de gobierno municipal establecido en la Constitución Federal y la de la Entidad, incurriendo en usurpación de atribuciones, que actualiza la procedencia del Juicio Político en su contra, toda vez que el Ayuntamiento es quien debe ejercer y administrar la hacienda pública municipal, y controlar la aplicación del presupuesto de egresos aprobado previamente tal y como lo dispone la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, sin embargo al no observar lo dispuesto por la Constitución Local y el Código Municipal de la Entidad, el Alcalde denunciado ha ejercido de manera unilateral la administración de la hacienda municipal de Monclova, así como el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019, además de que no únicamente no ha solicitado la autorización y aprobación del Cabildo para la celebración de contratos, sino que inclusive se ha negado sistemáticamente a proporcionarnos la información de cuantos contratos se celebraron en el año 2019, así como el contenido de las mismos, ya que no han subido la información completa a las paginas oficiales de transparencia, por lo que los regidores integrantes del Ayuntamiento de Monclova, hasta esta fecha desconocemos como se ejerció efectivamente el presupuesto de egresos en el año 2019, no obstante que desde el mes de enero los suscritos regidores se lo hemos solicitado por escrito, así como en las sesiones de cabildo que se han celebrado, sin obtener respuesta a nuestras peticiones.*

***SEGUNDO.-*** *Aunado a los hechos anteriormente narrados****, el Presidente Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza, C. ALFREDO PAREDES LOPEZ desde el inicio de la administración 2019-2021 ha incurrido en actos y omisiones de manera sistemática que constituyen un ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del municipio, violación a la Constitución y Código Municipal del Estado, y que han motivado un trastorno en el funcionamiento del Ayuntamiento del Monclova****, actualizándose las causales previstas en las fracciones II, VI y VII del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, procediendo el juicio político en su contra, los cuales nos permitimos detallar:*

***1.-******El denunciado ha sido omiso en convocar a sesión ordinaria de cabildo por lo menos dos veces por mes, es decir desde en los meses de febrero, mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2019, no ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 87,y 90,*** ***104 inciso A), fracción I del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza****, pues no ha convocado al menos a dos sesiones ordinarias por mes que establecen los dispositivos antes mencionados, no obstante que los suscritos se lo hemos solicitado por escrito,* ***lo que ha generado un trastorno en el funcionamiento del Ayuntamiento, ya que al no haber sesiones ordinarias de cabildo se nos ha impedido ejercer el Poder Público del municipio de Monclova a través de la discusión y en su caso aprobación de temas relevantes y acuerdos de competencia municipal, amén de que con tal omisión de citar a sesiones ordinarias de cabildo, también se nos ha impedido ejercer la administración y control de la hacienda pública municipal de forma mensual****, por las omisiones siguientes;*

***2.- Ha incurrido en incumplimiento del******artículo 104****, inciso A) fracción VI, inciso B) fracción I,* ***inciso E) fracción II*** *del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que* ***hasta la fecha no han sido sometidos a consideración de cabildo los estados financieros mensuales correspondientes a los meses de julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, y diciembre del año 2019, así como el Tercer Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2019, en virtud de que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública no los han podido analizar, glosar y dictaminar, por dos motivos torales, el primero es por la falta de respuesta a la información requerida a la Tesorería Municipal, y de la Dirección de Obras Públicas****, entre otras dependencias de la administración municipal, así como por la inasistencia sistemática e injustificada a las sesiones de dicha Comisión por parte de los regidores integrantes de la misma RICARDO ALFONSO MALDONADO ESCOBEDO, HILDA RIVERA CAZARES y CESAR LUNA MENCHACA****, lo cual ha sido puesto del conocimiento del aquí denunciado mediante los oficios PMM.R.1 058/2019 de fecha 10 de septiembre de 2019, y PMM.R1. 079/2019 de fecha 28 de octubre de 2019, girados por el suscrito JOSE ARIEL VENEGAS CASTILLA****, anexando a la presente los acuse de recibo, sin embargo,* ***el Alcalde JESUS ALFREDO PAREDES LOPEZ a pesar de tener pleno conocimiento de las graves omisiones de sus subordinados no realizó ninguna gestión a fin de conminarlos a cumplir con su obligación de brindar la información y documentación requerida por la Comisión de Hacienda, a fin de que se puedan dictaminar los estados financieros mensuales citados y avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del 2019, y tampoco convocó a sesión de cabildo a fin de exponer la situación de los diversos regidores integrantes de la ya citada Comisión, y el Ayuntamiento en pleno tomará las acciones y acuerdos que en derecho procedieran, para lograr se efectúen los dictámenes correspondientes****, a fin de cumplir con la obligación constitucional del Ayuntamiento de administrar la Hacienda Pública Municipal y controlar el ejercicio del presupuesto de egresos;*

***3.- El Presupuesto de Egresos para el ejercicio constitucional 2019*** *del municipio de Monclova fue aprobado por la cantidad total de* ***$ 620, 882, 363.19****, sin embargo, del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2019 proporcionado por el Tesorero Municipal JUAN CARLOS TERRAZAS HERNANDEZ a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública nos percatamos que* ***existe una modificación a dicho presupuesto, aumentándose a la cantidad de $ 789,537, 288.99, es decir existe una ampliación por la cantidad de $ 168, 654, 925.80, pero dicha modificación al Presupuesto de Egresos jamás fue informado al Cabildo en pleno, siendo éste el único facultado para realizar modificaciones al multicitado presupuesto y forma de ejercerlo****, por lo que el Presidente Municipal aquí denunciado por conducto del Tesorero Municipal de manera unilateral y en clara usurpación de atribuciones ha realizado dicha modificación al presupuesto de egresos y ha decidido también sin consultarlo al Cabildo la forma de ejercer dicha ampliación, lo cual se demuestra con el Estado Analítico descrito con anterioridad que se anexa al presente, el cual es signado por el citado Presidente Municipal, Tesorero y Contralor Municipal.*

*El Presidente Municipal denunciado, convocó a sesión de cabildo para celebrarse en fecha 03 de octubre de 2019, dentro del orden del día se señaló la discusión y en su caso aprobación del proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, Ejercicio Fiscal 2020, sin embargo,* ***dicho orden del día no fue aprobado por la mayoría de los integrantes del Cabildo, en virtud de que se hizo ver, que la Comisión de Hacienda no pudo emitir dictamen del citado Proyecto de Ley de Ingresos, por falta de información y documentación requerida, entre la cual se solicitaba la información y documentación relativa a la modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019*** *mencionado en líneas anteriores, lo cual se había solicitado oportunamente al Tesorero Municipal sin que la haya proporcionado****, por tanto, no fue posible en dicha sesión de cabildo analizar, discutir y en su caso aprobar el Proyecto de la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 2020****, acordándose en dicha sesión que el Presidente Municipal solicitaría al Tesorero brindará la información necesaria para emitir su dictamen a la Comisión de Hacienda, a fin de convocar de nueva cuenta a sesión de cabildo para discutir y aprobar el Proyecto de Ley referido, no obstante lo anterior,* ***el aquí denunciado fue omiso en conminar al Tesorero Municipal para que proporcionará a la Comisión de Hacienda la información requerida, así como en convocar de nueva cuenta a sesión de cabildo para abordar el tema de la formulación del Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, Ejercicio Fiscal 2020 en los plazos establecidos en la Constitución del Estado y leyes aplicables****, siendo un hecho notorio para este H. Congreso que efectivamente no se les envió el multicitado proyecto por el Cabildo de Monclova, Coahuila, para su aprobación.*

***4.-*** *Ahora bien,* ***respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2020, el mismo no fue emitido mediante dictamen por la Comisión de Hacienda, Patrimonio, y Cuenta Pública, por la falta de respuesta a la información y documentación*** *que ya se citó en líneas anteriores, no obstante lo anterior en fecha 09 de enero del presente año 2020 los regidores integrantes del Ayuntamiento de Monclova, fuimos convocados por el Presidente Municipal a sesión extraordinaria de cabildo que tuvo verificativo al siguiente día 10 de enero de 2020, iniciando a las 13: 00 horas y concluyendo a las 15:30 horas aproximadamente, en la que se discutió y aprobó el Proyecto del Presupuesto de Egresos del municipio para el ejercicio fiscal 2020,* ***el cual fue propuesto directamente por el Alcalde aquí denunciado, inobservando lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Municipal de la Entidad, toda vez que inexplicablemente dicho Proyecto de Egresos no lo hizo del conocimiento de la Comisión de Hacienda antes de presentarlo al cabildo, a fin de que ésta emitiera un dictamen respecto al mismo, y proponerlo por su conducto al Ayuntamiento en pleno, sin embargo el hecho más grave en que incurrió el Alcalde denunciado en conjunto con el Secretario del Ayuntamiento de Monclova, se hace consistir en la simulación, y falsificación de documentos oficiales, toda vez que ordenó publicar en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila un*** ***Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2020, que no se había analizado, discutido y aprobado por el Ayuntamiento de Monclova, esto queda en evidencia porque en la publicación de fecha 10 de enero de 2020 del Periódico Oficial del Estado aparece publicado el Presupuesto de Egresos citado, no obstante que apenas en ese mismo día 10 de enero de 2020 se discutió y aprobó el Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2020, por lo que es imposible materialmente que se pudiera publicar en ese mismo día en el Periódico Oficial del Estado****, reservándonos el derecho de interponer las denuncias penales ante las autoridades competentes del Estado y a nivel federal, por los delitos que se actualicen por dicha conducta desplegada por el Presidente y Tesorero Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza.*

***En suma, todas las conductas y omisiones narradas en el presente hecho constituyen una violación y ataque sistemático a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del municipio de Monclova, toda vez que el denunciado ha establecido y propiciado un sistema de opacidad en el manejo de los recursos públicos municipales, a fin de él ejercer a su arbitrio los recursos públicos municipales sin intervención del cabildo , impidiendo el ejercicio de nuestra facultad de administración y control del ejercicio de la hacienda pública municipal, al no convocar al número de sesiones ordinarias por mes que marca la ley, lo cual limita el margen de actuación de los integrantes del Ayuntamiento****, toda vez que es precisa y exclusivamente en las sesiones de cabildo donde el Ayuntamiento ejerce sus facultades, porque es donde se discute, analiza, y aprueban en su caso los acuerdos relevantes de competencia municipal, así mismo por la omisión de hacer del conocimiento del cabildo las modificaciones en los ingresos y egresos del municipio, a fin de éste decida si aprueba dichas modificaciones y en su caso la forma de ejercerlo,* ***todo lo cual ha motivado un grave trastorno en el funcionamiento del Ayuntamiento de Monclova, lo cual quedo palpable con la no formulación del Proyecto de la Ley de Ingresos*** ***del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2020, y la aprobación fuera de los plazos legales del Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2020****, lo que hace plenamente procedente el Juicio Político que se propone.*

**TERCERO.-** En el expediente los CC. César Flores Sosa, Thoedoro Kalionchiz de la Fuente y José Ariel Venegas Castilla, anexaron las pruebas siguientes:

**DOCUMENTAL.-** Consistente en Copia Certificada de la resolución interlocutoria de fecha 20 de marzo de 2019 emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, actuando como Tribunal Constitucional Local, mediante la cual se concede la suspensión de los actos impugnados en la Acción de Inconstitucionalidad Local 1/2019, a fin de acreditar el hecho primero de la presente.

**DOCUMENTAL.-** Consistente en la convocatoria de fecha 09 de enero de 2020, que contiene la citación para las 14:00 horas del 10 de enero de 2020 para llevar a cabo sesión número 17 de carácter extraordinaria, cuyo orden del día fue presentación, y en su caso autorización del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.

**DOCUMENTAL.-** Consistente en los acuses de recibo de los oficios PMM.R.1 88/2019, PMM.R.1 052/2019**, PMM.R.1 058/2019, PMM.R.1 079/2019,** PMM.R.1 066/2019, PMM R.1 064/2019, PMM R.1 083/2019, PMM R.1 074/2019, PMM R.1 053/2019, PMM R.1 062/2019, PMM R.1 059/2019, PMM R.1 086/2019, a fin de acreditar los hechos narrados en la presente, en específico lo concerniente a que se ha requerido diversa información al Tesorero Municipal de Monclova, y a otros directores, los cuales han sido omisos en brindar dicha información, así mismo, que se le ha hecho saber lo anterior al Presidente Municipal aquí denunciado, sin que realice gestión alguna.

**DOCUMENTAL.-** Consistente en Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2019, con el cual se acredita las modificaciones al Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo de la administración anterior, para el ejercicio fiscal 2020.

**DOCUMENTAL.-** Consistente en archivo electrónico que contiene todas las actas de sesiones de cabildo celebradas por el R. Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, Ejercicio Constitucional 2019, que se encuentran disponibles en la página oficial del municipio de Monclova, con el siguiente link; <https://monclova.gob.mx/sitio/informacion-publica-de-oficio/>, en memoria USB, a fin de acreditar los hechos narrados en la presente.

**DOCUMENTAL.-** Consistente en dos documentos electrónicos denominados “Resultados Procedimientos Adj. de Obras P. COPLADEM Septiembre 2019”, y “Resultados Procedimientos Adjudicación de Obras P. Enero - Septiembre 2019” en archivo excel “.xls”, que se encuentran disponibles en la página oficial del municipio de Monclova, con el siguiente link; <https://monclova.gob.mx/sitio/informacion-publica-de-oficio/> , en dispositivo USB.

**DOCUMENTAL.-** Consistente en videograbaciones correspondientes a diversas Sesiones de Cabildo, los cuales se relacionan con lo narrado en los hechos primero y segundo de la presente, lo cual se ofrece en dispositivo USB.

**CUARTO.-** Que para estar en posibilidades de determinar si las conductas atribuidas al C. Alfredo Paredes López,corresponde a las enumeradas en el artículo 8º y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, analizamos la normativa aplicable, y todos y cada uno de los dispositivos legales a los que se refieren los promoventes, a saber:

**Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Artículo 26.** El Poder Público del Estado como expresión constitutiva, concreta y dinámica de la soberanía, emana del pueblo y se instituye para su beneficio en un marco de respeto a la dignidad, igualdad y libre desarrollo del ser humano, sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales y legales.

El pueblo, en quien reside esencial y originariamente la soberanía que deposita formalmente en esta Constitución, tendrá siempre el derecho de elegir o nombrar, conforme a las leyes, a sus representantes en los poderes públicos del estado y de los municipios y de los organismos públicos autónomos, los cuales ejercerán sus funciones de acuerdo a los principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 158-P.** Los Municipios administrarán libremente su hacienda conforme a las bases siguientes:

**I.** Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos o, en su caso, por los Concejos Municipales, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley y su reglamento;

**II.** El Congreso del Estado discutirá y aprobará las leyes de ingresos de los Municipios, en los términos de las disposiciones aplicables. La deuda pública municipal se sujetará a los principios que establece esta Constitución y demás disposiciones aplicables;

**En el caso de no aprobarse alguna de las leyes de ingresos, continuarán en vigor las del año inmediato anterior del municipio o municipios de que se trate, con las actualizaciones a que se refiere el tercer párrafo de la fracción XXXIII del artículo 67 de esta Constitución.**

**III.** El Congreso del Estado revisará por conducto de la Auditoría Superior del Estado, la gestión financiera y las cuentas públicas de los municipios, en los términos de las disposiciones aplicables; la cual en coordinación con los municipios garantizará la disposición de la información correspondiente a la gestión financiera y de la cuenta pública municipal a la comunidad en general, a través de instrumentos confiables, oportunos y transparentes;

**IV.** Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y de acuerdo a la programación de sus actividades gubernamentales y administrativas, observando para tal efecto las disposiciones aplicables.

El Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderos en dicho ejercicio:

**a)** Que constituyan deuda pública del Ayuntamiento o de las entidades paramunicipales que cuenta con la garantía del Ayuntamiento o el Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y

**b)** Que se deriven de contratos para asociaciones público privadas aprobados por el Ayuntamiento conforme a las leyes aplicables.

El ejercicio presupuestal del Municipio deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, a los integrantes de los Concejos Municipales. La infracción hace responsable solidariamente, por su devolución, a la autoridad que ordene el pago de la percepción extraordinaria; al servidor público que lo ejecute y al que lo reciba, sin perjuicio de la responsabilidad establecida por la ley de la materia;

**V. El Ayuntamiento manejará prudentemente el patrimonio municipal conforme a la ley.**

**La ley establecerá los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento. El convenio siempre será por un tiempo determinado y con un objeto preciso.**

**En ambos casos, el Congreso del Estado podrá invalidar las resoluciones de los Ayuntamientos cuando contravengan el interés público y social. La ley de la materia establecerá el procedimiento a que deberá sujetarse la invalidez de las resoluciones de los Ayuntamientos;**

**VI.** Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones que tiene derecho de percibir el Municipio;

**VII.** Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura del Estado, con arreglo a la ley y de acuerdo a los principios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

**Artículo 158-N.** El Municipio Libre tiene un ámbito de competencia exclusiva y distinta a los Gobiernos Federal o Estatal, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás leyes aplicables.

La competencia municipal se ejercerá por el Ayuntamiento o, en su caso, por el Concejo Municipal y no podrá ser vulnerada o restringida por los Gobiernos Federal o Estatal. Sin perjuicio de su competencia municipal, los Ayuntamientos deberán observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales, siempre que estas leyes no contravengan la competencia municipal que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás disposiciones que emanen de ellas.

Los Gobiernos Municipales, en la esfera de su competencia y de conformidad con las disposiciones aplicables, mantendrán con las partes integrantes de la Federación una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo político, económico, social y cultural del país. Los Municipios ejercerán de manera coordinada, en los términos de las disposiciones aplicables, las facultades coincidentes o concurrentes con la Federación o el Estado.

**Artículo 158-U.** Los Ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes:

**I.** En materia de gobierno y régimen interior:

**1.** **Formular, aprobar y publicar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; el Reglamento de Seguridad Pública Municipal deberá ser ajustado a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y a las Leyes federales y estatales aplicables.**

**2.** Intervenir en el proceso legislativo constitucional u ordinario de conformidad con los artículos 59, 62 y 196 de esta Constitución.

**3.** Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**4.** Promover ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad locales a que se refiere el artículo 158 de esta Constitución.

**5.** Formular, aprobar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal, con arreglo a la ley.

**6.** Nombrar entre los munícipes, comisiones permanentes y temporales, para la atención de los asuntos públicos, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia y la reglamentación respectiva.

**7.** Actualizar la información demográfica, económica y social que coadyuve a la mejor toma de decisiones de gobierno y colaborar con las autoridades federales y estatales en la formación de censos y estadísticas de toda índole.

**8.** Conceder licencias hasta por quince días para separarse en lo individual de sus cargos, al presidente municipal, síndicos y regidores, En el caso de que las ausencias excedan de los plazos señalados, se requerirá autorización del Congreso del Estado.

**9.** Dictar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, las resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, con arreglo a la ley.

**10. Aprobar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, los actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento, con arreglo a la ley.**

**11.** Integrar un Comité Municipal de Seguridad Pública y organizar rondines de seguridad y tranquilidad social. Para tal efecto, el presidente municipal aprobará la designación y el funcionamiento del personal que integre los rondines de seguridad pública, los que tendrán el carácter de policía auxiliar.

**12.** Turnar al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, las renuncias y las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los miembros de los ayuntamientos y de los Concejos Municipales, para que se resuelva sobre las mismas, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y demás disposiciones aplicables. En estos casos, el Ayuntamiento respectivo deberá dar aviso al Ejecutivo del Estado.

**II.** En materia de administración pública municipal:

**1.** Crear las dependencias y entidades de la administración pública municipal centralizada, desconcentrada y paramunicipal. En éste último caso, el Ayuntamiento notificará al Congreso la creación de la entidad paramunicipal.

El Congreso del Estado podrá crear entidades paramunicipales sólo a iniciativa del Ayuntamiento interesado.

**2. Celebrar, con arreglo a la ley, convenios y contratos que fueren favorables o necesarios en los distintos ramos de la administración pública municipal, con los gobiernos federal, estatal y otros gobiernos municipales de la entidad o de otras entidades.**

**3.** Aprobar, cada año, el informe del estado que guarda la administración pública municipal, el cual será rendido por conducto del presidente municipal en sesión pública y solemne.

**4.** Nombrar y remover al secretario del Ayuntamiento, al tesorero municipal y demás funcionarios de la administración pública municipal, a propuesta del presidente municipal y sin menoscabo del servicio profesional de carrera en el Municipio.

**5.** Nombrar al titular del órgano de control interno municipal. Podrán establecerse contralorías sociales.

**6.** Ordenar la comparecencia de cualquier servidor público municipal, para que informe sobre los asuntos de su competencia.

**7.** Establecer el Servicio Profesional de Carrera Municipal, el cual es un sistema de administración del personal, que debe contener las reglas, requisitos, criterios y parámetros para el ingreso, el desarrollo laboral y el retiro, con el objetivo de que los funcionarios municipales logren su profesionalización y aseguren un plan de vida y de carrera.

**8.** Organizar cursos, seminarios y programas de educación y capacitación continua tendientes a eficientar el cumplimiento de las funciones de los integrantes del Ayuntamiento y demás servidores públicos municipales.

**III.** En materia de desarrollo urbano y obra pública:

**1.** Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

**a)** Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Los Planes de Desarrollo Urbano Municipal deberán establecer la prohibición de usos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el Estado;

**b)** Participar en la creación y administración de las reservas territoriales municipales;

**c)** Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional, en estos se deberá asegurar la participación de los Municipios;

**d)** Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus respectivas jurisdicciones territoriales. No estará permitido en el Estado el uso de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el Estado;

**e)** Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

**f)** Otorgar licencias y permisos para construcciones. No estarán permitidos en el Estado los permisos o licencias de construcción para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el Estado;

**g)** Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

**h)** Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten el ámbito territorial de los Municipios;

**i)** Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales;

**j)** Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, en lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**2.** Planear y regular, en el ámbito de sus competencias y dentro de sus jurisdicciones respectivas, el desarrollo de centros urbanos situados en territorios municipales que pertenezcan también a otras entidades federativas y que formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, con apego a la ley federal de la materia y lo dispuesto por la fracción VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**3.** Acordar la división territorial del municipio, determinando las unidades políticas y administrativas y su denominación.

**4.** Solicitar al Ejecutivo del Estado, la expropiación de bienes inmuebles por causa de utilidad pública.

**5.** Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente.

**6.** Participar en la creación y administración de las zonas ecológicas y áreas naturales protegidas de competencia local.

**7. Aprobar el programa municipal de obra pública; así como convenir y contratar su ejecución.**

**8.** Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales competentes, en la planeación y aplicación, en su caso, de inversiones públicas federales y estatales.

**9.** Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos, así como el alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles, conforme al reglamento respectivo, dando aviso a los organismos correspondientes.

**IV.** En materia de servicios públicos municipales:

**1.** Prestar los servicios públicos municipales siguientes:

**a)** Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

**b)** Alumbrado público;

**c)** Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

**d)** Mercados y centrales de abasto;

**e)** Panteones;

**f)** Rastro;

**g)** Calles, parques y jardines y su equipamiento;

**h)** Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la policía preventiva municipal;

**i)** Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

**2.** Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos.

**3.** Crear, con arreglo a la ley, los órganos operadores necesarios para prestar los servicios públicos municipales.

**4.** Aprobar, con arreglo a la ley, las concesiones a los particulares para que éstos presten los servicios públicos municipales.

**V.** En materia de hacienda pública municipal:

**1.** Administrar libremente su hacienda y controlar la aplicación del presupuesto de egresos del municipio, estableciendo un órgano de funciones de control y evaluación del gasto público municipal.

**2.** Discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del Estado, a más tardar el 15 de octubre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente a cada ejercicio fiscal.

**3.** Discutir y analizar el Presupuesto de Egresos del Municipio y aprobarlo a más tardar el día 31 de diciembre del año anterior a su ejercicio y disponer su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y difundirlo por los medios más amplios de que se disponga.

**4.** Coordinar, supervisar y vigilar con toda oportunidad los ingresos municipales.

**5.** Enviar al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, los proyectos de contratación de créditos que afecten los ingresos de la administración municipal.

**6.** Aprobar los estados financieros mensuales que presente el tesorero municipal y publicarlos en el Periódico Oficial del Estado, cada tres meses.

**7.** Presentar al Congreso del Estado la cuenta pública de la hacienda municipal, así como los informes de avance de gestión financiera, en los términos y plazos que para tal efecto establezca la ley de la materia; asimismo verificar la presentación de la cuenta pública y de los informes correspondientes del sector paramunicipal.

**8.** Proponer al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre de cada año, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los términos de las leyes fiscales y conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva.

**9.** Determinar la forma en que el tesorero y demás servidores públicos que manejen caudales públicos municipales, deban caucionar suficientemente su manejo.

**10.** Aceptar herencias, legados o donaciones que se hagan al Municipio, siempre que no sean onerosas; en caso contrario solicitar autorización al Congreso para aceptarlas.

**11.** Aprobar los movimientos de altas y bajas en el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal.

**VI.** En materia de desarrollo económico y social:

**1.** Conceder subsidios, apoyos administrativos o estímulos fiscales, en los términos de la legislación de la materia, con la finalidad de impulsar la actividad económica del municipio, así como el establecimiento de nuevas empresas y la generación de empleos.

**2.** Promover y apoyar los programas estatales y federales de desarrollo económico y de creación de empleos.

**VII.** En materia de educación y cultura, asistencia y salud públicas:

**1.** Fomentar las actividades educativas, científicas, tecnológicas, culturales, recreativas y deportivas.

**2.** Velar por el mantenimiento y conservación del patrimonio histórico, cultural y ecológico del Municipio.

**3.** Contar con un registro del acontecer histórico local y con el archivo de los documentos históricos municipales.

**4.** Promover y procurar la salud pública en el Municipio y auxiliar a las autoridades sanitarias estatales y municipales en la planeación y ejecución de sus disposiciones.

**5.** Prevenir y combatir los juegos prohibidos, la vagancia, el alcoholismo, la prostitución, la farmacodependencia y toda actividad que implique una conducta antisocial, con el apoyo de las distintas dependencias oficiales.

**6.** Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia electoral, de cultos y de protección integral a menores.

**7.** Organizar y promover la instrucción cívica que fomente entre los habitantes del Municipio, el conocimiento de sus derechos y obligaciones.

**VIII.** En materia de participación ciudadana y vecinal:

**1.** Formular programas de organización y participación social que permitan una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del Municipio.

**2.** Promover la participación de los diferentes sectores organizados del Municipio y de los habitantes interesados en la solución de la problemática municipal y en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.

**3.** Promover la organización de asociaciones de ciudadanos.

**4.** Reglamentar y establecer las bases que organicen la participación, colaboración y cooperación de los vecinos en la prestación, construcción y conservación de los servicios y obras públicas.

**5.** Establecer e instrumentar mecanismos efectivos, funcionales y democráticos de participación comunitaria directa para la toma de decisiones fundamentales hacia el interior del gobierno municipal.

**Artículo 171.** Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezca el Estado, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 67 fracción XXXIV y 158P fracción III.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes; la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras, que realicen el Estado, los Municipios y las entidades paraestatales y paramunicipales, se adjudicarán o llevarán a cabo mediante convocatorias y licitaciones públicas, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, el cual será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que se refiere el párrafo anterior, no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, se observaran las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos que establezcan los ordenamientos legales aplicables, para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad y honradez requeridas.

Asimismo, el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas, según corresponda.

El manejo de los recursos económicos del Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en sus correspondientes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas, en los términos del Título Séptimo de esta Constitución.

En los talleres tipográficos del Gobierno, se publicará el Periódico Oficial del Estado y se harán únicamente lo trabajos oficiales del mismo Gobierno. En consecuencia, queda prohibido utilizar dichos talleres para hacer otros trabajos que no sean los expresados en el presente Artículo.

**CÓDIGO MUNICIPAL.**

**ARTÍCULO 87.** Por acuerdo del presidente municipal **o de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, el secretario citará a las sesiones del mismo.** La citación deberá ser por escrito, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, contener el orden del día; y además, la información necesaria para el tratamiento de los asuntos previstos, así como el lugar, día y hora. De no existir el número de miembros necesarios para celebrar las sesiones, se citará nuevamente, y éstas se llevarán a cabo con los que asistan.

**ARTÍCULO 90.** En las sesiones ordinarias el ayuntamiento tratará los asuntos de su competencia y de su funcionamiento y celebrará el número de ellas que señale su reglamento interior pero no podrán ser menos de dos sesiones ordinarias públicas al mes.

La inobservancia del mínimo de sesiones por mes será sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, excepto en aquellos casos en que las sesiones no se celebren por causa justificada.

**ARTÍCULO 104.** El presidente municipal, será el órgano ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento y tendrá las siguientes competencias, facultades y obligaciones:

A). Gobierno y régimen interior:

**I. Convocar al ayuntamiento a las sesiones de Cabildo de conformidad con lo que establece este código y el Reglamento Interior del Ayuntamiento.**

II. Presidir las sesiones del Ayuntamiento en las que tendrá, en caso de empate, además de su voto individual, voto de calidad.

III. Presentar al Ayuntamiento iniciativas de bandos, reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia general o de reformas y adiciones en su caso, de conformidad con lo dispuesto por el título quinto de este código.

IV. Ser el conducto para presentar iniciativas de ley en materia municipal.

V. Mandar publicar en la gaceta oficial del municipio o en el periódico oficial del Gobierno del Estado, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones de observancia general, en los términos de la fracción V del artículo 176 de este código.

VI. Cumplir y hacer cumplir las leyes, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y demás disposiciones legales del orden municipal, estatal y federal.

VII. En los municipios que no tengan jueces municipales, imponer las sanciones que se deriven de las infracciones a este código, o a cualquier ordenamiento legal del municipio, en los casos y términos previstos por el capítulo V, del título décimo del presente código.

VIII. Vigilar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, y los programas operativos anuales correspondientes a su periodo constitucional.

IX. Armonizar el funcionamiento de los distintos órganos de gobierno municipal.

X. Ser el conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y los Poderes Públicos del Estado, la Federación y demás ayuntamientos, y coadyuvar con las autoridades federales y estatales en el ejercicio de sus atribuciones.

XI. Representar al Ayuntamiento en la celebración de actos y contratos previamente aprobados por el Ayuntamiento y, en su caso, autorizados por el Congreso del Estado; representarlo, además, en todos los actos oficiales y delegar, esta representación.

XII. Suscribir, a nombre y con autorización del Ayuntamiento, los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios.

XIII. Resolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos que dada su urgencia no admitan demora, dando cuenta de ellos al Ayuntamiento en la siguiente sesión de cabildo.

XIV. Otorgar, previo acuerdo del Ayuntamiento, autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en los términos que establezcan las leyes y reglamentos.

XV. Residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y solicitar autorización del Ayuntamiento, para ausentarse del Municipio por no más de quince días.

B). Administración Pública Municipal:

I. Dirigir, coordinar, organizar, supervisar y evaluar a la administración pública municipal en la totalidad de sus órganos tanto centralizados como desconcentrados, descentralizados y entidades paramunicipales.

II. Proponer al Ayuntamiento, las personas que deban ocupar los cargos de secretario, tesorero, jueces municipales y a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a excepción del contralor.

III. Nombrar y remover del cargo, a los servidores públicos municipales no previstos en la fracción anterior, así como conceder o negar licencias. Estas facultades las podrá delegar a los titulares de las dependencias o entidades.

IV. Rendir en el mes de diciembre, en sesión pública y solemne, el informe anual, aprobado por el Ayuntamiento, sobre el estado que guarda la administración pública municipal.

C). Desarrollo urbano y obra pública:

I. Integrar la información que requiere el Ayuntamiento para el ejercicio de sus facultades y competencias en esta materia.

II. Ejecutar las acciones y medidas que determine el Ayuntamiento en esta materia.

D). Servicios públicos:

I. Asegurar y vigilar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos municipales.

II. Disponer de los elementos de la policía preventiva municipal, para la conservación del orden y la tranquilidad pública, con las salvedades que establece la Constitución General de la República y la particular del Estado.

E). Hacienda Pública Municipal:

I. Mandar publicar en la gaceta oficial del municipio o en el periódico oficial del Gobierno del Estado, el presupuesto de egresos.

II. Vigilar la oportuna presentación de los estados financieros mensuales, los informes trimestrales de avance de gestión financiera y la cuenta pública anual, en los términos de la legislación aplicable.

III. Practicar visitas a la Tesorería Municipal y demás oficinas que tengan a su cargo el manejo de fondos y valores, informando de su resultado al Ayuntamiento.

IV. Vigilar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios del municipio se realicen conforme a las leyes aplicables.

V. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio municipal.

VI. Vigilar que el gasto público municipal, se realice conforme al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento.

F). Desarrollo económico y social:

I. Integrar la información que requiere el Ayuntamiento para el ejercicio de sus facultades y competencias en esta materia.

II. Ejecutar las acciones y medidas que determine el Ayuntamiento en esta materia.

G). Educación y cultura:

I. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias públicas, conforme al calendario cívico oficial.

II. Promover las actividades culturales y artísticas.

III. Las demás que le señalen las leyes o reglamentos

**Ley del Procedimiento Administrativo del Estado:**

**Artículo 4.** Son elementos y requisitos del acto administrativo:

**I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;**

**II.** Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;

**III.** Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse distintos fines;

**IV.** Constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;

**V.** Estar fundado y motivado;

**VI.** Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en ésta ley;

**VII.** Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;

**VIII.** Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;

**IX.** Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;

**X.** Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;

**XI.** Mencionar la dependencia, órgano o entidad del cual emana;

**XII.** Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;

**XIII.** Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y

**XIV.** Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.

**Artículo 5.** Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas técnicas estatales o los municipios, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados o desconcentradosde la administración pública estatal o municipal, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en su caso en La Gaceta Municipal para que produzcan efectos jurídicos.

**Artículo 6.** La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el Artículo 4 de ésta ley o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo.

**Artículo 7.** La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a IX del artículo 4 de la presente ley, **producirá la nulidad del acto administrativo**, **la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, entidad, órgano descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal, en cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo, incurriendo en responsabilidad de no hacerlo.**

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; **será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto**. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos.

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere emitido u ordenado.

**QUINTO.-** Quede conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia es competente para conocer de los asuntos relacionados con la Declaración de procedencia en materia de responsabilidad política de los Servidores Públicos.

En este sentido, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, en su artículo 14 textualmente señala:

***ARTICULO 14.-*** *Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y presentando los elementos de prueba correspondientes, podrá formular por escrito denuncia, fundada y motivada, ante el Congreso del Estado por las conductas de los servidores públicos a que se refiere el artículo 6o. de la presente Ley.*

*Presentada la denuncia, y ratificada que sea ésta dentro de los tres días naturales de la fecha de su presentación, se turnará con la documentación correspondiente, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que dictamine si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas, en el artículo 8o.; y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 6o. de esta Ley; así como si la denuncia es procedente, y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento.*

*Una vez acreditados estos supuestos, la denuncia se turnará a la Comisión Instructora. En caso contrario, declarará su improcedencia archivándose el expediente. Las denuncias anónimas o que no están suscritas o ratificadas por el denunciante, no producirán ningún efecto.*

Por su parte los artículos 6 y 8 del mismo ordenamiento estipulan lo siguiente:

***ARTICULO 6o.-*** *Podrán ser sujetos de juicio político los Diputados del Congreso del Estado; el Auditor Superior del Estado; el Gobernador del Estado; los Secretarios del ramo; los subsecretarios; el Fiscal General del Estado; los Fiscales Especializados; los directores generales o su equivalente en las entidades y los directores de las dependencias del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los Jueces de Primera Instancia;* ***los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos del Estado;*** *los integrantes de los Concejos Municipales; los directores generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales y paramunicipales; así como los titulares e integrantes de los consejos y asambleas generales de los organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su denominación*.

***ARTICULO 8o.-*** *Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:*

*I.- El ataque a las instituciones democráticas;*

***II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular; así como a los niveles de gobierno federal, estatal y municipal;***

*III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;*

*IV.- El ataque a la libertad de sufragio;*

***V.- La usurpación de atribuciones;***

*VI.- Cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado, a las leyes federales estatales que de ellas emanen,* ***cuando cause perjuicios graves a la******Federación, al Estado, a uno o varios Municipios del Estado, a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;***

*VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior;*

***VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal o de los Municipios; a las leyes y demás ordenamientos que determinen el manejo de los recursos económicos estatales y municipales, y a los convenios y acuerdos de coordinación que para la transferencia de dichos recursos se celebren.***

*No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.*

*El Congreso del Estado* ***valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo****. Cuando aquéllos tengan carácter delictuoso se estará a lo dispuesto por la legislación penal aplicable al caso concreto.*

Así las cosas, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia una vez realizado un exhaustivo análisis del escrito de denuncia, las pruebas y la normativa aplicable, previo a pronunciarnos con respecto a si las conductas atribuidas corresponden a las enumeradas, en el artículo 8º de la Ley citada y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 6o. de esta Ley, estima oportuno referir lo siguiente:

1. No hay controversia alguna con respecto a que el C. Alfredo Paredes López, encuadra en los supuestos contenidos en el artículo 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, específicamente por lo que hace a los ***presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos del Estado, al haber sido electo como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Monclova para el periodo 2019-2021 por lo que esta dictaminadora se abocará a revisar si las conductas descritas en la denuncia efectivamente corresponden a las causales para iniciar el procedimiento de juicio político y la gravedad de las mismas.***
2. En la denuncia se menciona que el C. Alfredo Paredes López incurrió en una serie de violaciones a la Constitución Local y las leyes, que “*pudiera acarrear perjuicio a la sociedad y a la entidad municipal”*, al realizar distintas contrataciones primero utilizando un acuerdo que consideran inconstitucional, después contratando en contravención a una suspensión de dicho acuerdo decretada por el Tribunal Constitucional Local y por último haciendo contrataciones sin la autorización del cabildo.

En este sentido, consideran que se vulneró lo establecido en el artículo 26 Constitucional, referente a la forma de gobierno, 158-P fracción V, en la que se dispone que el ayuntamiento **manejará prudentemente el patrimonio municipal conforme a la ley y que la ley establecerá los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento,** 158-N, concerniente a que la competencia municipal se ejercerá por el Ayuntamiento, 158-U fracción I, numeral 1 concerniente a la facultad reglamentaria del Ayuntamiento y numeral 10, en el que se establece la obligación de someter a la consideración del Ayuntamiento las contrataciones que comprometan la hacienda pública por un tiempo mayor al que dure el periodo constitucional, requiriéndose para tal efecto la votación de las 2/3 partes de los presentes, Fracción II numeral 2, concerniente a la facultad del ayuntamiento de celebrar convenios y contrataos con otros gobiernos, o entidades públicas y fracción III, numeral 7 del mismo artículo, que precisa la facultad del ayuntamiento de aprobar el programa municipal de obra pública; así como convenir y contratar su ejecución.

Así, del análisis de estas disposiciones y de los hechos aludidos por las partes, esta dictaminadora observa que la contratación de obras y servicios públicos sin la autorización del cabildo, no guarda relación con la facultad reglamentaria del R. Ayuntamiento, al tratarse la celebración de contratos y convenios de actos que no tienen naturaleza general, como sí lo tienen necesariamente las disposiciones reglamentarias.

En similar sentido se verifica que del análisis de los contratos, y de la descripción de las conductas realizadas por los promoventes, no se infiere que la hacienda pública municipal se haya comprometido por un periodo mayor al ejercicio constitucional del ayuntamiento en funciones, a mayor abundamiento se verificó que la ejecución de las obras en ningún caso excedía del mencionado ejercicio constitucional y los montos no rebasaban los seis millones de pesos.

Por lo que hace a la facultad del Ayuntamiento para celebrar contratos y convenios con otros Gobiernos, ayuntamientos o entidades de naturaleza pública, esta dictaminadora observa que, dicho artículo tampoco es aplicable al caso concreto, al tratarse de contratos entre el Ayuntamiento y particulares, tal y como se verifica de la revisión de los mismos.

Los promoventes asimismo estiman, que las conductas son violatorias de los artículos 26 puesto que con las mismas se “ataca, la forma de gobierno representativa y popular”, cuestión que se abordará con mayor profundidad en este documento, mismo caso del artículo 171 en el que se fijan los principios a los que habrá de sujetarse el gasto público.

En este mismo contexto, los promoventes estiman que se violentó la fracción III numeral 7 del ya referido artículo 158-U en el que se plasma la facultad del Ayuntamiento de aprobar el programa de obra pública **así como convenir y contratar su ejecución, equiparando esta omisión a una usurpación de funciones.**

Con respecto a este punto los denunciantes distinguen tres momentos, el primero de ellos, refieren se da cuando los contratos se celebraron bajo el amparo del acuerdo del cabildo de fecha 01 de enero del 2019, acuerdo que fue objeto de una Acción de Inconstitucionalidad identificada bajo el número AIL/1/2019 y del que el Tribunal Constitucional Local decretó, en marzo, su suspensión.

El segundo momento, indican, ocurrió cuando el alcalde siguió utilizando dicho acuerdo como autorización para contratar y convenir, una vez que los efectos del mismo habían sido suspendidos.

Por último, el tercer momento ocurre a decir de los promoventes, cuando una vez revocado por el Ayuntamiento el Acuerdo de fecha 01 de enero de 2019, el Presidente Municipal siguió celebrando contratos de obras y servicios públicos sin autorización del cabildo**.**

Así, de la revisión de los contratos proporcionados, esta dictaminadora observa que no se desprende que se haya utilizado el Acuerdo referido en ningún caso, puesto que en los mismos no se hace referencia a tal acuerdo.

Aunado a lo anterior, no se anexa prueba alguna de acciones promovidas ante el Tribunal Constitucional Local, con lo que se pudiera acreditar el supuesto desacato una vez que el referido tribunal declaró la suspensión del mismo.

Otro hecho que tomamos en consideración quienes integramos la presente Comisión, es que, la acción AIL/1/2019, quedó sin materia y fue sobreseída por el Tribunal Superior de Justica en su calidad de Tribunal Constitucional Local, dada la revocación del Acuerdo por el Ayuntamiento, no se resolvió el fondo del asunto, por lo que suponiendo sin conceder que dicho acuerdo se hubiera utilizado como autorización para contratar obras y servicios en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de marzo del 2019, la mera medida suspensiva dictada por el Tribunal no es suficiente para considerar que el Acuerdo y las contrataciones derivadas del mismo fuesen inconstitucionales, dado lo cual quienes dictaminamos no tenemos un elemento que permita conocer si el Acuerdo vulneraba preceptos constitucionales o no, y pronunciarnos al respecto está fuera de nuestro ámbito competencial.

Es menester referir con respecto a este punto, que los promoventes no anexan el programa de obra pública ni abundan en cómo las contrataciones se hicieron en contravención del mismo.

Ahora, si bien es cierto, conforme a lo previsto tanto en la Constitución como en el Código Municipal, corresponde al Ayuntamiento la celebración de las contrataciones en este caso de obras y servicios públicos, siendo el Presidente Municipal solamente un ejecutor de las decisiones de este órgano colegiado y de la revisión de los contratos no se infiere que la misma se haya realizado, es indispensable considerar que estos contratos son por la naturaleza de los mismos contratos públicos que se rigen por la Ley del Procedimiento Administrativo.

En este orden de ideas, hay que distinguir que la Administración Pública celebra contratos sometidos al Derecho Público y al Derecho Privado, a los primeros corresponden los contratos administrativos y a los segundos corresponden los contratos civiles. En este caso nos encontramos frente a contratos de naturaleza administrativa, por tratarse de contratos para la ejecución de obras y prestación de servicios públicos.

Un contrato administrativo[[46]](#footnote-46) es el que celebra la administración pública con los particulares **con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público**. Gabino Fraga[[47]](#footnote-47)considera que ***“cuando el objeto o la finalidad del contrato estén íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones estatales de tal manera que la satisfacción de las necesidades colectivas no sea indiferente a la forma de ejecución de las obligaciones contractuales, entonces se estará en el dominio del contrato administrativo”*.**

Por su parte, Andrés Serra Rojas[[48]](#footnote-48) lo define como *“****un acuerdo de voluntades celebrado, por una parte la Administración Pública y por la otra personas privadas o públicas, con la finalidad de crear, modificar o extinguir una situación jurídica de interés general, o en particular relacionada con los servicios públicos, que unen a las partes en una relación de estricto derecho público, sobre las bases exorbitantes del Estado. Por el contrato administrativo se asegura el régimen de los servicios públicos o la realización de los fines del Estado. El interés general o la utilidad pública son elementos básicos de este contrato”*.**

De las definiciones anteriores, podemos concluir que el contrato administrativo se caracteriza porque en su suscripción participa el Estado, por conducto de la Administración Pública, sea centralizada o descentralizada, y su objeto está vinculado estrechamente con el cumplimiento de servicios públicos.

Este tipo de contratos administrativos se diferencia del régimen de los contratos civiles celebrados por la Administración, debido a que en los primeros, ésta obra como Poder, mientras que en los segundos actúa como simple persona jurídica[[49]](#footnote-49). Así, el contrato administrativo a diferencia del civil, supone una desigualdad jurídica de las partes contratantes; ya que significa que el Estado, en situación de superioridad respecto de su co-contratante, puede imponer a éste las cláusulas del convenio, no quedando al particular ni la posibilidad jurídica de discutirlas[[50]](#footnote-50).

Así, dada la naturaleza de estos contratos los mismos deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4 de la señalada ley del Procedimiento Administrativo entre los cuales figura en primer lugar el que el acto sea “expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo”.

Esta misma ley señala las consecuencias de que estos actos no reúnan los requisitos referidos, fijando que en caso de que el acto no fuera expedido por dicha autoridad competente, producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, entidad, órgano descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal, en cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo, incurriendo en responsabilidad de no hacerlo.

En este caso, la dictaminadora observa que es el Ayuntamiento el órgano facultado para declarar la nulidad de estos actos administrativos, incurriendo en responsabilidad de no hacerlo.

**El mismo artículo señala que “**el acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; **será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto**.” **Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos.**

**Derivado de lo anterior, si bien es cierto, el procedimiento de responsabilidad política es autónomo a otros procedimientos, quienes dictaminamos observamos que los denunciantes no acompañan prueba alguna de que hayan promovido acciones legales para declarar la nulidad de estos actos que presuntamente se efectuaron sin autorización de la autoridad competente, aun y cuando recae en ellos la facultad para hacerlo, por lo que concluimos que faltan elementos que nos permitan saber si efectivamente la celebración de los mismos se realizó sin la autorización correspondiente.**

**Además de que existe la posibilidad de que los mismos sean convalidados, lo que también estimamos es necesario tomar en consideración.**

**Otro punto a valorar, es el relativo a la acreditación del perjuicio a la hacienda pública y la violación al artículo 171 de la Constitución Local, en este sentido es importante hacer un recuento del marco normativo que impera en nuestro Estado a partir de la instauración del Sistema Anticorrupción, específicamente por lo que hace al régimen de responsabilidades.**

**Como sabemos existen responsabilidades administrativas, penales, civiles y políticas y si bien es cierto los procedimientos de las mismas son autónomos, también debemos notar que los mismos guardan una estrecha relación entre sí.**

Por lo cual nos referiremos brevemente a esta reforma, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2015.

Del análisis del contenido de dicha reforma, resalta lo siguiente:

**Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción**

Con respecto a este punto, la Constitución General determina que “el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, **así como en la fiscalización y control de recursos públicos**. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

**- Comité Coordinador**

La Constitución fija que el Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la **Auditoría Superior de la Federación**, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

* **Comité de Participación Ciudadana**

Se crea el Comité de Participación Ciudadana, mismo que tiene como objetivo coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional.

El Comité está integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley establece para ser nombrado Secretario Técnico.

* **Facultad del Congreso para expedir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.**

A través del Sistema se pretende homologar acciones entre los diferentes órdenes de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública y combate a la corrupción, por lo que se consideró complementar el marco constitucional con la facultad del Congreso de la Unión, en su carácter de autoridad del orden constitucional, de emitir una ley general que establezca las bases de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en las materias ya referidas.

* **Fortalecimiento de la Auditoria Superior de la Federación.**

Se le otorgó la facultad de revisión durante el ejercicio fiscal (“auditoría en tiempo real”) y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores, eliminándose los principios de anualidad y posterioridad**, del mismo modo se ampliaron los plazos para la fiscalización de la cuenta pública,** se fortaleció y amplió el ámbito de competencia de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que se fijara la nueva facultad incluida en la reciente reforma en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, relativa a la facultad de fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de deuda pública, cuando las entidades federativas y municipios contraten deuda que esté garantizada por la Federación.

En el mismo sentido, se previó un **nuevo esquema para el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, a los particulares que participen en la comisión de faltas administrativas.**

Al efecto, **en lugar de que la Auditoría Superior de la Federación finque directamente las responsabilidades resarcitorias correspondientes**, a partir de la reforma le compete investigar las irregularidades que detecte en la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores, y promover el fincamiento de responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.

* **Órganos Internos de Control.**

La reforma contempla la obligación de los entes públicos federales, estatales y municipales, de contar con órganos internos de control y otorga la facultad al Congreso de la Unión de nombrar a los titulares de los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos.

En este orden de ideas, se fija que los órganos internos de control tendrán las facultades para, en los términos que establezca la ley, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de los tribunales de justicia administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución.

* **Tribunal de Justicia Administrativa.**

A través de esta reforma constitucional se le dota de una doble jurisdicción, así este órgano es competente para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, lo cual incluye la actual competencia en materia fiscal y administrativa y también para imponer las sanciones a los servidores públicos de los tres poderes y órganos constitucionales autónomos de la Federación, por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en hechos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias.

También es la autoridad competente para llevar los procedimientos de resarcitorios.

* **Régimen de Responsabilidades**

Se introdujo en el texto constitucional una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y las no graves. **Por una parte, se prevé que las responsabilidades administrativas graves, serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Internos de Control, y su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas**. Por otra parte, aquéllas que la ley determine como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los Órganos Internos de Control.

* **Prescripción de Responsabilidades**

Se amplió el plazo de prescripción a 7 años por las faltas administrativas graves que prevé la legislación secundaria. En este sentido, el objetivo que se persigue, justamente está encaminado a que la prescripción tenga un carácter transexenal, es decir, que aquellos servidores públicos que incurrieran en alguna falta administrativa grave, puedan ser incluso investigados y sancionados por una administración distinta en la que ejercían sus funciones cuando cometieron alguna de dichas faltas.

**Una vez hecho este recuento, quienes dictaminamos, observamos que la sola, y presunta omisión de la autorización, no es prueba suficiente para determinar un perjuicio a la hacienda pública, máxime si para cuantificarlo debe realizarse un procedimiento resarcitorio.**

1. Con respecto a las conductas del servidor público que se estiman constituyen un ataque sistemático a la forma de Gobierno representativo, al no convocar a las sesiones del Cabildo mínimas señaladas en la ley, violentando con ello lo dispuesto por los artículos 87, 90 y 104 inciso A) del Código Municipal, impidiendo con ello la participación de los promoventes en diversos temas. Los integrantes de esta comisión dictaminadora observamos que si bien es cierto, existe una obligación legal de celebrar por lo menos dos sesiones al mes, y a las mismas ha de citar el Secretario del Ayuntamiento por Acuerdo del Presidente Municipal, también es cierto que dicha facultado no es exclusiva del alcalde pudiendo el Ayuntamiento acordar el citatorio a solicitud de las 2/3 partes del mismo, para tratar cualquier tema relevante para el funcionamiento del municipio, incluidos los estados financieros, avances trimestrales de avance de gestión financiera, por mencionar algunos. Razón por la cual no se estima que se les haya obstruido su derecho a ejercer el cargo y que el mismo haya causado un trastorno al funcionamiento del municipio, puesto que hay que considerar los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se sostiene que no basta con que se realice un perjuicio a los servidores públicos para que se considere este trastorno, sino que debe acreditarse un perjuicio a la población del municipio, cuestión que tampoco se acredita con los documentos proporcionados por los denunciantes.
2. Esta Comisión tomando en consideración el carácter excepcional del juicio político, a su vez estima que la sola falta de la entrega de información proporcionada o la obstaculización a los integrantes de una Comisión no es suficiente para iniciar un juicio político, aunado a que este derecho pudo haberse protegido tramitando un juico de protección de derechos políticos.
3. En el mismo orden de ideas esta dictaminadora observa que, efectivamente el Ayuntamiento tiene la facultad de aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes, no obstante ello, como ya se ha señalado anteriormente por tratarse de actos de autoridad es el mismo cabildo el facultado para dejar sin efectos un acto administrativo, que no cumple con los requisitos legales para su emisión, siendo aplicable para este punto los argumentos ya vertidos en torno a la acreditación del daño ocasionado al funcionamiento municipal y el perjuicio a la hacienda pública, que como ya se refirió no se acreditan.
4. ***Los promoventes aluden que el hecho más grave en que incurrió el Alcalde denunciado en conjunto con el Secretario del Ayuntamiento de Monclova, se hace consistir en la simulación, y falsificación de documentos oficiales, toda vez que ordenó publicar en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila un Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2020, que no se había analizado, discutido y aprobado por el Ayuntamiento de Monclova, esto queda en evidencia porque en la publicación de fecha 10 de enero de 2020 del Periódico Oficial del Estado aparece publicado el Presupuesto de Egresos citado, no obstante que apenas en ese mismo día 10 de enero de 2020 se discutió y aprobó el Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2020, por lo que es imposible materialmente que se pudiera publicar en ese mismo día en el Periódico Oficial del Estado****, reservándonos el derecho de interponer las denuncias penales ante las autoridades competentes del Estado y a nivel federal, por los delitos que se actualicen por dicha conducta desplegada por el Presidente y Tesorero Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza.*

**No obstante lo anteriormente señalado por los promoventes no se acompaña denuncia penal, que aunque ya hemos referido el procedimiento político es autónomo de los otros, si nos hubiera proporcionado un elemento importante para determinar si la conducta efectivamente encuadra en el tipo penal al que se alude.**

*Por último un criterio importante para la determinación contenida en este dictamen es el carácter excepcional tal y como lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintos criterios como lo son los siguientes: "MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LA FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA INCOAR, JUICIO POLITICO* ***EN SU CONTRA ES DE CARACTER EXCEPCIONAL Y SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA SALVAGUARDA DE VALORES COLECTIVOS",*** *y "JUICIO POLITICO. LA FACULTAD CONFERIDA AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO PARA INCOARLO, CONSTITUYE UNA ATRIBUCION E****XCEPCIONAL Y SU EJERCICIO DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMIA, RESERVA DE DERECHO Y DIVISION DE PODERES CONTENIDOS EN LA CONSTITUCION FEDERAL, SUJETANDOSE, ADEMAS, A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR EL LEGISLADOR ORDINARIO".***

Lo cual también se desprende del análisis del sentido y alcance del artículo 115 de la Constitución Federal, atendiendo a la propia y especial naturaleza de los Municipios, estudio que fue plasmado en la parte considerativa de la sentencia emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de fecha 22 de febrero de 1999, que resolvió la Controversia Constitucional 32/97.

**Al respecto, el Supremo Tribunal ha establecido que la trayectoria del artículo en mención en nuestra Constitución, ha sufrido diversas reformas, de las cuales cobra especial relevancia, atento al principio de libertad municipal, la que tuvo lugar el 3 de febrero de 1983, a partir de la cual se fortalece la libertad política, económica, administrativa y de gobierno de los municipios.**

Es decir, reforma en la que se integran al texto constitucional los principios de libertad y autonomía municipal.

En este mismo orden de ideas, quienes dictaminamos coincidimos en que esta disposición debe interpretarse en forma sistemática con las otras disposiciones referidas con anterioridad.

En este contexto, resalta que para dar inicio al procedimiento de juicio político es necesario que en la denuncia se acrediten mediante los alegatos y medios probatorios **idóneos que se ha afectado de manera grave el funcionamiento del municipio.**

Así para que esta se dé, deben presentarse las causas graves y las mismas deben afectar el interés de la comunidad y no simplemente **el particular de los miembros del ayuntamiento, además ellas deben de afectar de manera severa la estructura del ente municipal o su funcionamiento.**

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que “Las causas graves a que se refiere el artículo 115 de la CPEUM afectan el interés de la comunidad y no simplemente el particular de los miembros del Ayuntamiento, pues lo que protege este precepto **es la independencia del Municipio como ente integrante de la Federación**, y por ello, para que el Estado pueda intervenir, debe existir una afectación severa a la estructura del municipio o a su funcionamiento, lo que no se actualiza cuando la afectación que se aduce se refiere a intereses de alguno de los miembros del ayuntamiento. **Por tanto, si no se acredita que se hubieran actualizado las causas graves en que la legislatura funde su resolución para incoar el juicio político, éste no puede iniciarse.**

Así las cosas, se concluye que no hay elementos suficientes que permitan acreditar que el C. Alfredo Paredes López, Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Monclova haya realizado conductas u omisiones que encuadren en los supuestos contemplados en el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila.

Consecuentes con las consideraciones que anteceden y por las razones que en ellas se expresan, resulta pertinente emitir el siguiente:

**D I C T A M E N**

**PRIMERO.-** Por las razones expuestas, no ha lugar a iniciar la incoación del procedimiento en contra el C. Alfredo Paredes López, Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Monclova, dejando a salvo los derechos de los denunciantes para que los hagan valer en la forma y términos que estimen oportunos.

**SEGUNDO.-** Notifíquese a los promoventes este Dictamen.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 08 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación al oficio enviado por el Lic. Alejandro González Farías, Secretario del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa e insta se dé trámite correspondiente a la solicitud de licencia por más de quince días y por tiempo indefinido al C. Carlos Alberto Rodríguez Alcantar, al cargo de Primer Regidor de dicho Ayuntamiento, así como la sustitución respectiva.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en fecha 27 de agosto de 2020, se recibió en la Oficialía Mayor de este Congreso, el oficio enviado por el Lic. Alejandro González Farías, Secretario del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa e insta se dé trámite correspondiente a la solicitud de licencia por más de quince días y por tiempo indefinido al C. Carlos Alberto Rodríguez Alcantar, al cargo de Primer Regidor de dicho Ayuntamiento, así como la sustitución respectiva.

**SEGUNDO.-** Que en fecha 01 de septiembre el presente año, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, se dispuso que el documento antes mencionado y sus anexos, fueran turnados a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para su estudio y dictamen; y

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión es competente para emitir el presente Dictamen, lo anterior de acuerdo a lo previsto por los artículos 88 y 90 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que el día 15 de enero de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, la lista de integración de Cabildos de los Ayuntamientos electos que estarían en funciones durante el periodo de 2019-2021.

**TERCERO.-** Que conforme a la publicación mencionada, el C. Carlos Alberto Rodríguez Alcantar, fue electo para desempeñar el cargo de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza.

**CUARTO.-** Que conforme a lo dispuesto por el artículo 67 fracciones XI, XVIII y XIX, en relación con el 158-U fracción I numeral 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 90 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es facultad de este Congreso, conceder licencias a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos.

**QUINTO.-** Que esta Comisión una vez que analizó el expediente formado con motivo de la solicitud de licencia por más de quince días y por tiempo indefinido del C. Carlos Alberto Rodríguez Alcantar, al cargo de Primer Regidor de dicho Ayuntamiento, mismo que fue remitido a este Congreso por el Lic. Alejandro González Farías, Secretario del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, acuerda que es procedente otorgar dicha licencia.

**SEXTO.-** Que al otorgarle el Pleno del Congreso del Estado, al C. Carlos Alberto Rodríguez Alcantar, una licencia para separarse por más de 15 días y por tiempo indefinido, al cargo de Primer Regidor de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, corresponde a la misma realizar la designación de quien habrá de cubrir el cargo por el tiempo que le fue otorgada.

**SÉPTIMO.-** Que la designación de quien habrá de fungir como Primer Regidor del Ayuntamiento, durante el período de tiempo que dure la licencia otorgada, se realizará por aquellos que figuren en la lista de suplentes, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 158-U fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, el artículo 21 numeral 4 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de los artículos 58 y 59 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra dicen:

***CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

*Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes:*

*I. En materia de gobierno y régimen interior:*

*1. Formular, aprobar y publicar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; el Reglamento de Seguridad Pública Municipal deberá ser ajustado a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y a las Leyes federales y estatales aplicables.*

*2. Intervenir en el proceso legislativo constitucional u ordinario de conformidad con los artículos 59, 62 y 196 de esta Constitución.*

*3. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*4. Promover ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad locales a que se refiere el artículo 158 de esta Constitución.*

*5. Formular, aprobar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal, con arreglo a la ley.*

*6. Nombrar entre los munícipes, comisiones permanentes y temporales, para la atención de los asuntos públicos, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia y la reglamentación respectiva.*

*7. Actualizar la información demográfica, económica y social que coadyuve a la mejor toma de decisiones de gobierno y colaborar con las autoridades federales y estatales en la formación de censos y estadísticas de toda índole.*

*8. Conceder licencias hasta por quince días para separarse en lo individual de sus cargos, al presidente municipal, síndicos y regidores, En el caso de que las ausencias excedan de los plazos señalados, se requerirá autorización del Congreso del Estado.*

*9. Dictar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, las resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, con arreglo a la ley.*

*10. Aprobar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, los actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento, con arreglo a la ley.*

*11. Integrar un Comité Municipal de Seguridad Pública y organizar rondines de seguridad y tranquilidad social. Para tal efecto, el presidente municipal aprobará la designación y el funcionamiento del personal que integre los rondines de seguridad pública, los que tendrán el carácter de policía auxiliar.*

*12. Turnar al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, las renuncias y las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los miembros de los ayuntamientos y de los Concejos Municipales, para que se resuelva sobre las mismas, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y demás disposiciones aplicables. En estos casos, el Ayuntamiento respectivo deberá dar aviso al Ejecutivo del Estado.*

***…***

***CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

***Artículo 21.***

1. *Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los noventa días siguientes a la declaración de la misma.*
2. *En el caso de vacantes de miembros del Congreso, electos por el principio de mayoría relativa, el Instituto convocará a elecciones extraordinarias en un plazo de noventa días siguientes a la notificación de la diputación vacante.*
3. *Las vacantes de miembros del Congreso electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.*
4. *Las vacantes de presidentes, regidores y síndicos se cubrirán en la forma en que establece la Constitución y el Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Las de los regidores de representación proporcional se cubrirán por aquellos candidatos del mismo partido político que le sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los que le hubieren correspondido.*

***CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

***ARTÍCULO 58.*** *En caso de que no se presenten a rendir protesta el síndico y los regidores electos, el Congreso mandará llamar a quienes figuren* **en la lista de suplentes***, y de entre éstos designará a quienes deban de cubrir las vacantes.*

*Cuando un regidor de representación proporcional no se presente a tomar posesión de su cargo, el Congreso del Estado mandará llamar al que siga en el orden dentro de la lista de preferencia de regidores que fue propuesta por el partido político o coalición de que se trate.*

***ARTÍCULO 59.*** *En caso de que la vacante se presente con posterioridad a la toma de protesta del presidente, síndico o alguno de los regidores de un ayuntamiento, se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores.*

**OCTAVO.-** Que teniendo a la vista la lista de suplentes, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 15 de enero de 2019, corresponde ocupar el cargo al C. Jesús Gerardo Gutiérrez González, en virtud del lugar que ocupa en el orden dentro de dicho listado.

**NOVENO.-** Que en virtud de lo anterior, esta Comisión somete a su consideración, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se otorga licencia mayor a quince días y por tiempo indefinido al C. Carlos Alberto Rodríguez Alcantar para separarse del cargo de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, con efectos a partir de la aprobación del presente decreto.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se designa al C. Jesús Gerardo Gutiérrez González, para desempeñar las funciones de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, cargo que deberá desempeñar a partir de que rinda la protesta de ley, por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Comuníquese en forma oficial al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, la designación del C. Jesús Gerardo Gutiérrez González, a efecto de que se le llame a rendir protesta y se incorpore a sus funciones como Primer Regidor del Ayuntamiento referido.

**ARTÍCULO CUARTO.-** Comuníquese lo anterior al Ejecutivo del Estado, para los efectos procedentes.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 08 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone reformar el primer párrafo del artículo 98 del Código Municipal para Estado de Coahuila de Zaragoza.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 17 de junio del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván,conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, mediante la cual propone reformar el primer párrafo del Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de establecer que en las actas de cabildo sea plasmado el sentido del voto de cada integrante del cabildo, salvo en aquellos casos que la votación se establezca como secreta o por cédula.

**SEGUNDO. -** Que, en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de Decreto en la que se propone reformar el primer párrafo del Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa en la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Nuestra obligación como legislatura es modernizar y adecuar el acervo legal de nuestra entidad, mejorar y contribuir con reformas a la vida institucional y del ciudadano, durante toda la vida han existido prácticas y costumbres no plasmadas en la ley, pero que de manera regular se dan y se ejecutan, y que al no estar en la legislación generan una laguna jurídica y confusión, caso concreto, y siendo idéntico, en los cuerpos colegiados municipales, los cabildos, es por eso que hoy queremos presentar ante ustedes la presente Iniciativa.*

*Durante esta legislatura he presentado iniciativas de reforma al código municipal para el estado de Coahuila de Zaragoza, así como a la ley Orgánica del Congreso libre y soberano del estado de Coahuila, derivadas de la importancia de establecer mecanismos claros y que permitan mayor transparencia en los actos de gobierno, y más cuando los ayuntamientos deliberan y deciden en los cabildos. Muchas veces al realizarse los debates, discusiones, aclaraciones que le dan sentido y razonamiento previo a una votación que determinara en un sentido la decisión del R. ayuntamiento, se dan fundamentos y se establece los sentidos de las votaciones que cada integrante del cuerpo colegiado emitirá, esta práctica parlamentaria se lleva y se registra en distintos órganos colegiados, en el Estado ( poder legislativo, poder judicial en Coahuila), pero no en los cabildos, en órganos federales y en el Congreso de la Unión, se lleva el registro del diario de debates, donde se plasma el espíritu del legislador, y de donde se puede desprender el sentido de cual o tal reforma o decisión, que no es otra cosa que el compendio donde se publica la memoria de debates parlamentarios, así como el desarrollo de las sesiones, el sentido de los oradores y posturas en lo individual o de grupos parlamentarios, sobre un asunto en particular resuelto por el órgano colegiado.*

*Aunque los acuerdos se adopten por el voto favorable de la mayoría de sus miembros, sí que es relevante conocer el sentido del voto de cada uno de ellos para incrementar el control, la integridad y la transparencia sobre el funcionamiento de dicho órgano colegiado, por ejemplo, al objeto de denunciar posibles incumplimientos del deber de abstención de alguno de sus miembros o la importancia en el resultado final de la votación que haya podido tener el voto favorable y determinante de algún miembro incurso en causa de abstención.*

*Para mejorar nuestro marco normativo necesitamos establecer con precisión y con claridad el sentido del voto de cada uno de los integrantes del R. Ayuntamiento al momento de plasmarse en las actas de cabildo, práctica que definitivamente se lleva a cabo en todos los municipios del Estado, y que incluso se encuentra ya plasmado en algunos reglamentos que regulan la vida municipal del algunos municipios o bien con los elementos tecnológicos que se utilizan en la actualidad con transmisiones en vivo, se puede dar seguimiento al sentido de las discusiones y votaciones.”*

**TERCERO. -** Habiendo sido analizada la iniciativa planteada, quienes aquí dictaminamos consideramos que es muy importante que los ciudadanos tengan, sin duda, confianza en sus autoridades, así como en la continuidad de las acciones que benefician a los ciudadanos, para que cuando llegue una nueva administración municipal, no se trate de anular todo lo que hizo la anterior administración, simplemente por ser de otro partido. De lo que se trata es de mejorar las acciones y generar otras más que fortalezcan el rumbo de una comunidad, sin quitar las acciones buenas e importantes que se hayan realizado.

Los integrantes de esta Comisión estamos a favor de la Iniciativa planteada, ya que implica abonar una mayor transparencia y confianza en las acciones y acuerdos generadas y en la toma de decisiones dentro de los cabildos.

Además, que al plasmar el sentido del voto de los integrantes de los miembros del R. Ayuntamiento proyecta mayor transparencia y certeza de las decisiones de cada miembro, que si bien es cierto, no se trata de “desagregar o individualizar el voto de cada miembro” sino que cada voto cuente hasta que sea conformado el sentido de mayoría, además de que refleja la integridad del proceso de votaciones para la toma de decisiones, de manera que pueda conocerse, quién votó a favor, en contra o se abstuvo.

Se considera a su vez, que al revelar el sentido del voto no se está perjudicando ningún interés privado o público, ya que la entidad pública debe siempre buscar la satisfacción de los intereses colectivos, garantizando, además la transparencia y honestidad de cada Municipio.

En virtud de lo anterior, quienes aquí dictaminamos nos permitimos hacer algunas precisiones y adecuaciones de técnica legislativa a fin de que sea acorde con las disposiciones constitucionales y con las propio del Código Municipal.

Finalmente, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se reforma el primer párrafo del Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 98**. El secretario del ayuntamiento hará constar en un libro de actas el desarrollo de las sesiones; en él se describirán en forma extractada los asuntos tratados, los acuerdos tomados**,** los resultados de las votaciones, ***y el sentido del voto de cada integrante del Cabildo, salvo en aquellos casos que la votación se establezca como secreta o por cedula.*** Cuando el acuerdo de Ayuntamiento se refiera a normas de carácter general o informes financieros, se harán constar en el libro de actas y se anexarán íntegramente en el apéndice del mismo.

…

…

**T R A N S I T O R I O S**

**Único.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado; y

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a agosto de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN(SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión para la Igualdad y no Discriminación, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el contenido de la fracción VI, pasando la actual redacción a la siguiente fracción, que se crea, del artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza**; con objeto de fortalecer las competencias de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social que le otorga esta ley;** planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -**  Que en Sesión celebrada por el pleno el día 13 de mayo del presente año, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el proemio de este dictamen

**SEGUNDO. -** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen.

**TERCERO. -** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 103, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, esta Comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta de la promovente se basa en modificar el contenido de la fracción VI, pasando la actual redacción a la siguiente fracción del artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, estableciendo como atribución de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, lo siguiente:

…*Promover la realización de capacitaciones, talleres y cursos dirigidos a identificar conductas que constituyan todo tipo de violencia en contra de las mujeres, como el acoso laboral; asimismo se fomente el desarrollo económico con sentido social que propicie el acceso a un empleo libre de violencia y acoso.*

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Organización Internacional del Trabajo a través del Convenio 190, reconoce el derecho de toda persona a un trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

El acoso laboral constituye una violación a los derechos humanos de las personas y una amenaza para la igualdad de oportunidades de empleo, de ahí que sea una prioridad el reconocer e identificar este tipo de conductas que afectan la dignidad humana a fin de prevenirlas y erradicarlas, pues cuando inician estas pueden surgir de aparentes bromas, pero cuando se realizan de manera consecutiva o sistemática se constituyen en abuso o acoso.

El acoso laboral suele manifestarse en diversas maneras, que van desde burlas o bromas pesadas, degradación, intimidación, humillaciones o carga excesiva de trabajo hasta agresiones físicas o sexuales y este tipo de conductas inadecuadas pueden provenir generalmente de jefes a subordinados y que si bien, este tipo de comportamientos reiterados, pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, suelen ser más vulnerables las mujeres.

En nuestro país, de acuerdo con cifras dadas a conocer en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el último trimestre de 2016, revela las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de quince años en adelante, en diversos ámbitos entre ellos el laboral.

Se estima que un 66.1% de mujeres han enfrentado al menos un incidente de violencia en su vida y un 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.

Como legisladores tenemos la responsabilidad de propiciar normas que promuevan el bienestar de la sociedad en los diferentes ámbitos, en ese sentido, nuestro Grupo Parlamentario considera necesario promover leyes que impulsen la dignidad humana, el respeto a sus derechos humanos y que inhiban todo tipo de violencia, principalmente a quienes son más vulnerables, las mujeres.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene entre sus principales objetos, el de establecer las bases para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres de cualquier edad en los diferentes ámbitos, entre ellos el laboral.

Esta iniciativa propone incluir dentro de las competencias en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que se otorgan a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, como dependencia encargada de fomentar un desarrollo económico con sentido social que propicie el acceso y conservación del empleo, la de propiciar la realización de capacitaciones, talleres y cursos dirigidos a la prevención de la violencia laboral en contra de las mujeres, pues consideramos necesario hacer conciencia para identificar este tipo de conductas inadecuadas a fin de erradicarlas y hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

**TERCERO. -** Analizada la propuesta, procedimos a realizar las siguientes consideraciones:

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila, en concordancia con la Ley General de la materia, establece en relación con el acoso laboral, lo siguiente:

Artículo 9. Las modalidades de la violencia contra las mujeres son:

*….*

*IV. Violencia en el ámbito laboral y escolar: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, escolar o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.*

*Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el acoso laboral o el hostigamiento laboral.*

*…*

*Constituye violencia laboral, la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género; además de exigir como requisito para el ingreso o ascenso a un empleo la presentación de certificado médico de no embarazo, despedir a una trabajadora o coaccionarla para que renuncie por estar embarazada…*

Asimismo, esta ley contempla y describe todos los tipos y modalidades de violencia contra la mujer en el mismo artículo nueve, comprendiendo: la familiar, en el noviazgo, en el ámbito institucional, la escolar, en la comunidad, la política, la feminicida, la publicitaria y la digital.

Por otra parte, como lo señala la promovente, la realidad acerca de la violencia que deben enfrentar las mujeres todos los días en México nos rebasa ampliamente, y toda medida, plan y programa para prevenir y erradicar este fenómeno es insuficiente; legisladores, gobiernos e instituciones deben explorar frecuentemente todas las posibilidades dentro del ámbito de sus respectivas competencias para contribuir a combatir este flagelo en todas sus modalidades.

Ahora bien, el artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila, establece las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en dicho rubro de prevención de la violencia; esto de conformidad a lo siguiente:

*Artículo 54. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social:*

*I. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia;*

*II. Promover y difundir los derechos humanos de las mujeres a través de los programas sociales;*

*III. Formular la política de desarrollo social del Estado, considerando el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida;*

*IV. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y la familia de estas, que se encuentren en situación de exclusión y pobreza;*

*V. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las mujeres para su empoderamiento y la eliminación de las brechas y desventajas de género; y*

*VI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.*

Hicimos un análisis de estas disposiciones, en aras de establecer si es en este apartado donde debe ir la propuesta que se analiza, y no en otro, dado la naturaleza de esta. Y, en efecto, la ley en cita confiere a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social atribuciones en temas similares a los que plantea la Diputada Fernández Almaraz, nos referimos a temas como: *Promover y difundir los derechos humanos de las mujeres a través de los programas sociales y Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las mujeres para su empoderamiento y la eliminación de las brechas y desventajas de género…*

Cuando se plantea la adición de nuevas atribuciones a una autoridad, es menester revisar entre otros aspectos, si no existen estas ya en la ley; si más bien, por su naturaleza, no corresponden a otra institución o secretaría (en este caso); sino son redundantes u ociosas, etcétera.

Sobra tales bases, analizamos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad, encontrando que se cumple satisfactoriamente con dichos extremos, pero, el texto de la propuesta debe ser ajustado para que mantenga armonía y correlación con las demás instancias que este ordenamiento contempla y sus atribuciones, especialmente a lo relacionado con las atribuciones del Instituto Coahuilense de las Mujeres, en las fracciones VIII, IX, XI, XVI y XVII del artículo 55; así como en relación a la fracción XV del artículo 48, que se refiere a la Secretaría del Trabajo, del multicitado ordenamiento.

**CUARTO. –**  Es así como, luego de analizar la propuesta, consideramos que es viable y que, con algunos ajustes y precisiones que esta comisión propone, se estima que es un proyecto que cumple con plantear adecuaciones necesarias en la materia.

**QUINTO. -** Atentos a lo señalado, los integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

**Decreto**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se **reforma** la fracción VI y se **adiciona** la fracción VII del artículo 54 de la **Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza,** para quedar como sigue:

**Artículo 54.-**

**I. a la V. …**

**VI.- Promover, en su caso, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Coahuilense de las Mujeres, la realización de capacitaciones, talleres y cursos dirigidos a identificar conductas que constituyan todo tipo de violencia en contra de las mujeres, especialmente en el ámbito laboral; fomentando el desarrollo económico con sentido social que propicie el acceso a un empleo libre de violencia y acoso.**

**VII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.**

…

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad y no Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los 31 días del mes de Agosto de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES  COORDINADORA |  |  |  |
| DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO  SECRETARIA |  |  |  |
| DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES  VOCAL |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Deporte y Juventud, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por **la cual** **se reforman los artículos 9, 20, 24, 25 y 26 de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de** **homologar la denominación de las Secretarías del ramo conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila;** Planteada por la Diputada Josefina Garza Barrera, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -**  Que en Sesión celebrada por el Pleno el día 24 de junio del año 2020, se acordó turnar a la Comisión de Deporte y Juventud la iniciativa de decreto con el objetivo ya descrito en el proemio de la presente.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la mencionada iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen

**TERCERO. -** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 101, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta de la promovente se basa en establecer en el ordenamiento **en cita la homologación de la denominación de las Secretarías del ramo conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.**

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**Exposición de Motivos**

En México contamos con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, cuyo objeto es promover y fortalecer las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad y no discriminación, dirigido a la población de entre los 12 y los 29 años de edad.

Por lo que corresponde a Coahuila, se encuentra publicada la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado, cuyo propósito primordial es dar reconocimiento a los derechos humanos que por naturaleza son inherentes a las y los jóvenes de Coahuila, sin distinción de ningún tipo, instrumentando políticas públicas buscando contar con elementos formativos que los conviertan en personas desarrolladas integralmente durante todas y cada una de sus etapas de maduración tanto físicas, psicológicas y sociales.

Dicha normatividad local cuenta con un Sistema Estatal para la Participación Social de la Juventud, el cual tiene como objetivos específicos establecer acciones para la difusión, promoción, fomento, investigación, práctica, supervisión y evaluación de las actividades de atención a la juventud.

Dicho Sistema se encuentra integrado por un Consejo Directivo, en el cual participan representantes de diversas dependencias del Gobierno del Estado, quienes fungen con una serie de atribuciones a favor del objeto de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud en el Estado.

Sin embargo, con las reformas que tuvo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en el 2017 y 2018 algunas Secretarías Estatales tuvieron algunos cambios tales como: la Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la Secretaría de las Mujeres por el Instituto Coahuilense de las Mujeres, Secretaría de Economía y Turismo por Secretaría de Economía; y la Secretaría de Turismo por la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Por lo anterior es que consideramos importante armonizar el nombre de las dependencias que integran del Sistema Estatal para la Participación Social de la Juventud y con el objetivo de que el marco legal de la ley en comento, se encuentre homologada con las definiciones correctas de las Secretarías del ramo que participan en base a sus funciones dentro del Sistema Estatal para la Participación Social de la Juventud y no exista confusión alguna de los términos en la competencia de funciones a desempeñar.

**TERCERO. -** Analizada la iniciativa, esta Comisión desea expresar las siguientes consideraciones:

La propuesta se basa en lo que se entiende por “armonizar definiciones”; y es un ejercicio que de forma constante deben hacer las legislaturas en aras de mantener actualizadas las leyes y su correlación entre todas ellas cuando hacen referencia a nombres de dependencias e instituciones, programas, planes, sistemas, conceptos y catálogos de definiciones en general.

Las leyes orgánicas de la administración pública son constantemente reformadas en aras de actualizar y ajustar las necesidades y retos del poder ejecutivo de cada estado, y esto implica cambios de nombres y denominaciones, entre otros.

En efecto, como lo señala la autora de la iniciativa, las definiciones y referencias de plasmadas en los artículos 9, 20, 24, 25 y 26, de la Ley de para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila, deben ser actualizadas conforme a las definiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; ya que actualmente hacen mención a dependencias que han cambiado oficialmente de nombre de acuerdo a la ley antes citada.

**CUARTO. -** Atentos a lo señalado, las integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

PROYECTO DE DECRETO

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se **reforma** el quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo segundo, décimo tercer y décimo cuarto párrafos del artículo 9, el primer párrafo del artículo 20, el primer párrafo del artículo 24, el primer párrafo del artículo 25 y el primer párrafo del artículo 26, de la **Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza**, para quedar como sigue:

Artículo 9.- …

...

...

...

Vocal: Titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

…

Vocal: Titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

Vocal: Titular de la Secretaría de Economía.

Vocal: Titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

...

...

Vocal: Titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres.

Vocal: Titular de la Fiscalía General del Estado.

Vocal: Titular del Instituto Estatal del Deporte.

...

…

...

...

Artículo 20.- La Secretaría de Economía, podrá proponer actividades como las que a continuación se mencionan:

I. a la V. …

Artículo 24.- Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, poder realizar las siguientes actividades:

I. a la IV. …

Artículo 25.- El Instituto Coahuilense de las Mujeres, impulsará, entre otras, actividades para:

I. a la IV. …

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, podrá proponer de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, acciones como las siguientes:

I. a la III. …

T R A N S I T O R I O S

**PRIMERO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión de Deporte y Juventud de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

POR LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| GERARDO ABRAHAM AGUAD GÓMEZ |  |  |  |
| EDGAR GERARDO SANCHEZ GARZA |  |  |  |
| FERNANDO IZAGUIRRE VALDEZ |  |  |  |
| DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA |  |  |  |
| DIP. MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Deporte y Juventud, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por **la cual** **se reforma el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza;** Planteada por la Diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -**  Que en Sesión celebrada por el Pleno el día17 de junio del año 2020, se acordó turnar a la Comisión de Deporte y Juventud la iniciativa de decreto con el objetivo ya descrito en el proemio de la presente.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la mencionada iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen

**TERCERO. -** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 101, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta de la promovente se basa en establecer en el ordenamiento **en cita la armonización sobre el derecho de toda persona a la práctica de la cultura física y el deporte, acorde a las disposiciones constitucionales y federales, sin discriminación, restricción o exclusión por su origen, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, condición social o económica.**

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**Exposición de Motivos**

El derecho al deporte es reconocido en instrumentos internacionales de carácter sectorial, como en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En cada uno de estos instrumentos internacionales, reconocen el derecho al deporte y a las actividades recreativas para estos grupos vulnerables en particular y tienen un carácter vinculante para los estados miembros, entre ellos México.

También se ha regulado en otros documentos que, si bien no tienen ese carácter vinculante, constituyen un referente importante para implementarse y aplicarse en los países miembros de la UNESCO, como es la Carta Internacional Revisada de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, en la cual declara la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte como un derecho fundamental para todos.

De acuerdo a un estudio realizado por la UNAM, sobre la cultura física y la práctica del deporte en México , señala que el terminó de “Cultura Física” es respectivamente nuevo en comparación de otros conceptos más adaptados en nuestro país como “educación física y el deporte”, por lo que tratando de abarcar en un concepto a todas esas manifestaciones físico-deportivas y recreativas desde un plano sociocultural, el deporte encierra un amplio catálogo de representaciones, valores, normas y comportamientos que lo identifican y diferencian claramente de otras prácticas sociales ya que el deporte delimita un ámbito cultural especifico.

La Ley General de Cultura Física y Deporte define a la cultura física como “Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo” y al deporte como la “actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones”.

Asimismo, establece que la educación física es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura física.

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, considera dentro de las medidas para prevenir la discriminación, el restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales, señalando como discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar” o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

La discriminación en la actividad deportiva ha permeado por diferentes enfoques, principalmente en la equidad de género, buscando acceder a terrenos equitativos en el ámbito deportivo.

La edad, el origen étnico, la condición social y económica, la discapacidad, la orientación sexual entre otras han sido factores que han limitado el libre ejercicio de este derecho humano de acceder a la educación física y el deporte, siendo que debiera ser ejercido sin que existan discriminación, exclusión y estigmatización.

En ese sentido, consideramos necesario recoger y plasmar en la Ley de Cultura y Deporte del Estado, lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, protegiendo la organización y el desarrollo de la familia, y contemplando que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

Por lo que este proyecto de iniciativa propone complementar en cuanto al reconocimiento de las autoridades estatales, sobre el derecho a la cultura y el deporte, como un derecho de toda persona a su práctica, como lo establece la Constitución, e incluir lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, referente a que no se obstaculice, restrinja, o se impida su ejercicio por su origen, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual o condición social o económica a ninguna persona que quiera practicar cultura física y deporte en el Estado.

Definitivamente el deporte como derecho permitirá alcanzar la inclusión, armonizar con los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación acercando a la comunidad a que cuente con las posibilidades de disfrutar como derecho humano el practicar y contar con información de cultura física y deporte.

**TERCERO. -** Analizada la iniciativa, esta Comisión desea expresar las siguientes consideraciones:

La propuesta se basa en realizar la siguiente adecuación al párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza:

Las autoridades estatales reconocen a la cultura física y el deporte como **un derecho de toda persona a su práctica y** componentes insustituibles para el desarrollo integral**, sin obstaculizar, restringir, impedir por su origen, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, condición social o económica.**

…

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Artículo 1o.

…

*Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.*

Artículo 4o.-…

…

*Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.*

Por otra parte, es legitimo que las leyes relacionadas con los derechos humanos, como en este caso, el derecho a la actividad deportiva, reproduzcan o consideren las disposiciones relativas a no sufrir discriminación o rechazo de ningún tipo para acceder a este derecho, y que las autoridades deban proteger y tutelar estas garantías.

Para el caso que se analiza, debemos establecer un comparativo entre la reforma planteada y lo que ya considera la ley vigente, el siguiente cuadro que no leeremos, ilustra las diferencias:

Propuesta de Reforma Ley de CFYD vigente

|  |  |
| --- | --- |
| **ARTÍCULO 1.-** …    Las autoridades estatales reconocen a la cultura física y el deporte como **un derecho de toda persona a su práctica y** componentes insustituibles para el desarrollo integral**, sin obstaculizar, restringir, impedir por su origen, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, condición social o económica.** | **ARTÍCULO 4.-** Las acciones que, en materia deportiva, lleven a cabo el Estado, los municipios y las organizaciones deportivas que cuenten con registro, deberán respetar y garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de la población en general y evitarán cualquier decisión o disposición discriminatoria por razones de sexo, edad, estado físico, preferencias sexuales, poseer marcas, tatuajes o perforaciones corporales, antecedentes penales o cualquier otra que signifique un detrimento hacia la igualdad de las personas. |

En tal sentido, para evitar confusiones, esta dictaminadora estimó necesario realizar los siguientes ajustes a la propuesta original:

**ARTÍCULO 1.-** …

Las autoridades estatales **reconocen el derecho de todas las personas** de acceder a la cultura física y el deporte comocomponentes insustituibles para el desarrollo integral**, sin restricciones o impedimentos de ningún tipo, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

…

**CUARTO. -** Atentos a lo señalado, las integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma contenido del segundo párrafo del artículo 1° de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 1.-** …

Las autoridades estatales **reconocen el derecho de todas las personas** de acceder a la cultura física y el deporte comocomponentes insustituibles para el desarrollo integral**, sin restricciones o impedimentos de ningún tipo, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

…

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión de Deporte y Juventud de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, a los 26 días del mes de Agosto de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| GERARDO ABRAHAM AGUAD GÓMEZ |  |  |  |
| EDGAR GERARDO SANCHEZ GARZA |  |  |  |
| FERNANDO IZAGUIRRE VALDEZ |  |  |  |
| DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA |  |  |  |
| DIP. MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Igualdad y no Discriminación, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por **la cual** **se reforma diverso contenido de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza**; cuya propuesta es  **garantizar la vigencia plena del estado de derecho, así como el impulso de una cultura de respeto a los derechos humanos y de denuncia de actos de violencia, mediante la adopción de garantías y soluciones a las personas que denuncien tales conductas**; suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Y;

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-** Que en Sesión celebrada por el Pleno el día 29 de noviembre del año 2019, se acordó turnar a la Comisión de Igualdad y no Discriminación la iniciativa de decreto con el objetivo ya descrito en el proemio de la presente”.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la mencionada iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen, en fecha 10 de diciembre del mismo año.

**TERCERO.-** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 103, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís y las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, se basa en establecer en el ordenamiento  **en cita las adecuaciones necesarias para garantizar la vigencia plena del estado de derecho, así como el impulso de una cultura de respeto a los derechos humanos y de denuncia de actos de violencia, mediante la adopción de garantías y soluciones a las personas que denuncien tales conductas.**

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**Exposición de Motivos**

La violencia contra las mujeres es una problemática compleja, enraizada en los patrones socioculturales como en los comportamientos sociales cotidianos. La cotidianidad y escala de violencia es tan grave, que prácticamente todas las mujeres en México han sufrido, por lo menos en algún momento de su vida, alguno de los varios tipos de violencia de género, que va desde el acoso callejero hasta el feminicidio.

La violencia contra la mujer es definida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

En razón de lo anterior, se colige que el derecho a una vida libre de violencia se vincula con el derecho a la no discriminación por razón de género y con el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, por lo cual la violencia contra las mujeres, se comprende en términos generales como el conjunto de acciones que se sustentan en prácticas asimétricas de poder, y que se superponen en las interacciones entre mujeres y hombres donde las primeras se encuentran subordinadas por nociones, referencias y estereotipos constitutivos del orden patriarcal.

En ese sentido, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo, por la cual las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros, teniendo como máxima expresión el feminicidio.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres sufre violencia física y/o sexual a lo largo de su vida y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10, A ello se le añade que el 38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal.

Según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de América Latina y el Caribe.

Ante la gravedad del fenómeno, 18 países latinoamericanos han modificado sus leyes para sancionar este delito, tipificándolo como feminicidio, femicidio u homicidio agravado por razones de género: Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile y El Salvador (2010), Argentina, México y Nicaragua (2012), Bolivia, Honduras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República Dominicana y Venezuela (2014), Brasil y Colombia (2015), Paraguay (2016) y Uruguay (2017).

Considerando este panorama, desde la comunidad internacional se han constituido medidas, principios y derechos de las mujeres y niñas en diferentes instrumentos internacionales que constituyen hoy en día la base para impulsar el desarrollo de las mujeres y garantizar sus derechos en su integración en los ámbitos político, económico, cultural y social.

Dentro de los principales instrumentos universales y regionales relacionados con la erradicación de la violencia en contra de la mujer podemos mencionar:

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumento internacional de carácter vinculante que aborda los derechos de las mujeres y las niñas y que es considerado como la carta fundamental de los derechos de las mujeres.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, denominada “Convención de Belém Do Pará”, este tratado es de gran importancia ya que versa sobre los deberes de los Estados y los derechos de las mujeres para garantizarles el acceso a una vida libre de violencia. Define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 1°). Distingue que dentro de la violencia hacia la mujer se incluyen las modalidades física, sexual o psicológica, y que esta puede ser efectuada en los ámbitos domésticos, comunitarios y tolerada o perpetrada por el Estado (artículo 2°).

En este contexto, es relevante señalar la importancia de la CEDAW y sus recomendaciones en materia de armonización, ya que constituyen un referente obligado para el Estado Mexicano debido al carácter vinculatorio de este instrumento internacional. Por esta razón, el Estado Mexicano debe rendir un informe cada cuatro años, que tiene por objetivo señalar el grado de avance en cada recomendación planteada por el Comité de la CEDAW.

Hay que mencionar, además, la relevancia de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan impulsar e intensificar los esfuerzos para poner fin a la pobreza, para reducir la desigualdad y para luchar contra el cambio climático. Los 17 ODS forman parte de la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se aprobó en 2015 y entró en vigor el 01 de enero del 2016. Los temas que se comprenden dentro de los 17 objetivos cruzan con el interés por promover la igualdad entre mujeres y hombres como una condición indispensable para el desarrollo de los países.

Bajo este tenor y en línea con los principales tratados de protección de derechos humanos, México ha adoptado medidas tendientes a asegurar y dar cumplimiento a estos compromisos internacionales y constitucionales; por lo que emprendió una revisión exhaustiva y detallada de la legislación federal y estatal, lo que se ha traducido en la emisión de diferentes leyes que promueven la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra la mujer.

Así, a nivel federal se ha aprobado la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), al mismo tiempo las entidades federativas han realizado las adecuaciones correspondientes a su marco normativo.

En este tenor, la aprobación y promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia marca el logro de uno de los compromisos y objetivos fundamentales de la política nacional e internacional en el tema de los derechos fundamentales de la mujer desde 1975, toda vez que esta ley responde a las acciones propuestas en Beijing +5 y +10 en el sentido de la necesidad existente de que sean implementadas las siguientes acciones:

Adecuación de las leyes estatales para que en todas las entidades federativas se prevean los medios para contrarrestar la violencia familiar y contra las mujeres.

En materia penal, el delito de violencia familiar debe perseguirse de oficio, para que no se pueda retirar la denuncia sin que antes se solucione el problema.

Que, en los casos de delitos sexuales con menores, no se obligue al careo, y cuando la víctima lo solicite, no sea necesario enfrentarse al agresor en la audiencia, y su declaración sea tomada por separado.

Enlaces con las procuradurías estatales, para crear agencias especializadas en atención de menores en toda la República.

Elaborar un programa de capacitación para los agentes del Ministerio Público especializados en la atención de menores y personas con discapacidad.

Proponer la tipificación del delito de violencia intrafamiliar en los códigos penales en las entidades federativas.

Difundir entre la población indígena la información referida a los derechos de las mujeres y las niñas, y legislar en sus comunidades contra la violencia intrafamiliar.

Proporcionar a las mujeres indígenas atención legal y psicológica bilingüe en caso de ser víctimas de violencia intrafamiliar.

También es importante dimensionar que, de acuerdo con esta ley, todas las medidas que emanan de ella buscan garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, entre ellas las órdenes de protección, sobre las cuales la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha señalado que han demostrado ser uno de los mecanismos legales más eficaces en los esfuerzos para proteger a las mujeres contra la violencia de cualquier tipo y en cualquier ámbito, que va desde protección de la violencia ejercida en el entorno familiar, contra la mutilación genital, los matrimonios forzados y los matrimonios de niñas y niños.

De ahí que esta ley debe considerarse como el mínimo indispensable que se debe cumplir en la legislación de cada entidad federativa en materia de asistencia, prevención y sanción de la violencia, es un referente legislativo para crear, reformar y/u homologar las normas locales, dando respuesta a las necesidades reales de las víctimas de violencia, y a los compromisos y acciones establecidas a través de las políticas públicas, a más de una década atrás, y en la vigencia plena de los derechos humanos como condición necesaria para el eficaz y eficiente goce y ejercicio del derecho a una vida libre de violencia.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2018, Coahuila registra 5 presuntos delitos de feminicidio; para este mismo periodo, la entidad registra 8 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso. Adicional a lo anterior, y dado que la violencia feminicida no se dimensiona únicamente con el número de mujeres asesinadas, la información provista por la ENDIREH 2016, indica que el porcentaje de mujeres que han padecido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en Coahuila es con un promedio de 66.3%, frente asimismo, el porcentaje de mujeres que han experimentado violencia laboral a lo largo de su vida a nivel estatal, es del 34.1%.

Por otra parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023, en su Eje Rector 2 “Seguridad y Justicia”, contempla como Objetivo 2.9 “Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, el crear las condiciones para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, contemplando estrategias para su cumplimiento, entre las cuales se encuentra el fortalecer la prevención de la violencia ejercida contra mujeres y niñas a través de un programa integral y transversal.

En ese sentido, el Gobierno del Estado trabaja en el marco del Programa Especial de Igualdad de Género 2017 - 2023, el cual es el principal instrumento de la planeación estatal en el tema y el cual contribuye a la generación de políticas públicas equitativas que garanticen el desarrollo pleno de los derechos y capacidades de todas las mujeres y niñas coahuilenses, por lo que en la línea 3.14 sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se establece el objetivo de fortalecer la política pública en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El Gobierno del Estado, preocupado por lograr la materialización de la igualdad de todas las mujeres y niñas, promovió la realización de foros en las distintas regiones del Estado, en los que se trataron aquellos temas que representan una problemática para las mujeres en la vida cotidiana, así como las propuestas para eliminar esta brecha de desigualdad y fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres.

En estos foros se tuvo la participación destacada de representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que cuentan con la experiencia en temas de derechos de las mujeres, muchas de ellas por haber vivido circunstancias personales que las han llevado a luchar por ellas mismas y por otras mujeres que se encuentran en su misma situación, estas mujeres representan también, la voz de las mujeres que de alguna manera no han logrado superar los obstáculos que les impiden alcanzar el disfrute pleno de sus derechos humanos, así como también representantes de la administración pública del estado, la Fiscalía General del Estado, integrantes del Congreso del Estado de Coahuila y del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Es así que durante los foros que se realizaron en diferentes municipios del Estado, como Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Sabinas y Monclova, se presentaron las propuestas y se lograron los acuerdos que ayudaron a la elaboración de esta iniciativa.

En consecuencia, contar con una legislación en materia de acceso a una vida libre de violencia actualizada y que reconozca la inclusión de un mayor número de definiciones es una condición indispensable para el disfrute de una mayor garantía de acceso a los derechos humanos y de acceso a la justicia para todas las mujeres que se encuentra en situación de violencia en razón del género, por lo que en mi gobierno estamos convencidos que la obligación estatal de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, debe tener como base un adecuado planteamiento y abstracción del problema de la violencia contra las mujeres, es decir, se requiere precisión en las definiciones, identificación adecuada de las condiciones bajo las cuales se da la violencia, así como de la diversidad de tipos y modalidades en que puede reconocerse.

En la entidad se han dado pasos para eliminar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, a través de la aprobación de diversos ordenamientos tales como la

Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como la incorporación de regulaciones en esta materia en otros ordenamientos como la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, sin embargo es necesario continuar construyendo un marco institucional sólido que garantice la vigencia plena del estado de derecho, así como el impulso de una cultura de respeto a los derechos humanos y de denuncia de actos de violencia, mediante la adopción de garantías y soluciones a las personas que denuncien tales conductas, por lo que propondremos al H. Congreso del Estado la presente iniciativa de reforma a varios artículos de la Ley, que consistirá en las siguientes propuestas:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Se reforma el artículo 1 a fin de incluir acciones más amplias a este ordenamiento jurídico y establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, deben tomarse en cuenta para el diseño de la política pública a favor de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en el Estado.

Se reforma el artículo 3 con el objeto de ampliar los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, incorporándose la interculturalidad, la accesibilidad y la corresponsabilidad familiar, con lo cual queda patente la necesidad de incluir medidas que favorezcan la consecución de la igualdad de género, y, por tanto, la eliminación de barreras y formas de discriminación que afectan particularmente a las mujeres, por lo que incorporar estos principios logrará establecer las orientaciones que se deben atender para reducir la brecha de género que existe en todas las sociedades y en todos los ámbitos, por lo que estos principios orientadores se suman a las acciones pertinentes que se establecen para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Se reforma el artículo 7 relativo a los derechos de las víctimas de la violencia, entre los cuales se incorpora el derecho a la no re victimización o victimización secundaria, es decir, aquella lesión y/o daño que es producto del desenvolvimiento del aparato estatal, imponiéndole la obligación de tomar medidas y acciones para corregir dicho fenómeno. En tal sentido, el derecho a la no re-victimización es una expectativa constitucionalmente reconocida, que prohíbe y condena la lesión continuada o repetitiva sobre la base o por causa de los procedimientos institucionales, tomando en consideración las particularidades de la víctima, en cuanto esta es un ente social, cultural y biológicamente condicionado.

En el artículo 8 relativo a los tipos y modalidades de violencia, se actualiza el contenido del precepto relacionado con la violencia obstétrica.

Así mismo, se incluye el concepto jurídico de violencia en el espacio o transporte público, ya que actualmente se ha puesto sobre la mesa la problemática de la violencia de carácter sexual, que día a día se ejerce en los espacios públicos, por lo cual el Estado de Coahuila asume con compromiso su prevención y atención.

Además, se modifica el concepto de violencia digital para incorporar formas de comunicación dentro de las plataformas de redes sociales, de los sistemas de mensajería instantánea, del correo electrónico o cualquier otro similar, que no estaban contemplados anteriormente como son: imágenes o grabaciones de audio, sonidos o la voz, de una persona, con el objeto de considerar la diferentes hipótesis en las que puede manifestarse esta violencia, así como la definición de tecnologías de la información y la comunicación con el objeto de acotar el concepto.

Se propone derogar los artículos 8 bis y 8 ter derivado de que estos artículos amplían en demasiado la definición jurídica de violencia obstetricia dejando una notoria diferencia con el resto de las definiciones que se desarrollan en el artículo 8, además de que la redacción redunda en diferentes ocasiones sobre los elementos que integra el concepto, contemplando elementos constantes que son innecesarios repetir en su definición.

Se elimina del primer párrafo del artículo 14 la denominada Ley de Procuración de Justicia y se aclara su redacción.

Se redefine todo el contenido del Capítulo IV relativo a las órdenes de protección, esto con el objeto de distinguir de forma más detallada el procedimiento para decretar una orden de protección, para lo cual se retomó las recomendaciones y mandatos establecidos en la Convención Interamericana de Belén do Pará y en otros instrumentos internacionales, así como lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

En este sentido, la propuesta busca establecer criterios, lineamientos y procedimientos más claros para la tramitación y el otorgamiento de órdenes de protección, considerando el estado de riesgo en que se encuentren las mujeres y sus hijas e hijos, a efecto de garantizar plenamente la seguridad e integridad física y emocional de quienes se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de algún tipo de violencia de género. Con esto lograremos que las mujeres recuperen la seguridad frente a una situación de riesgo y vulnerabilidad, a efecto de que se respete el derecho a vivir libre de cualquier tipo de violencia, así como instrumentar todas las acciones necesarias para verificar y supervisar el adecuado cumplimiento por medio de un control y seguimiento, o en su caso ampliar la orden de protección, establecer las autoridades que emitirán y ejecutarán la orden, para que su actuación sea pronta, oportuna y expedita y se evalué el grado de riesgo de las mujeres y de sus menores hijas e hijos.

En ese sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a México acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo.

En este mismo tenor, la Recomendación General número 33 también del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el acceso de las mujeres a la justicia, ha señalado que los Estados deben generar los mecanismos de protección adecuados y accesibles para evitar una posible violencia o más actos de la misma a víctimas, supervivientes y testigos, y señala también que los mecanismos deberían incluir la evaluación inmediata de los riesgos y la protección, compuesta por una gran variedad de medidas eficaces, y, cuando corresponda, la emisión y seguimiento de órdenes de desalojo, protección, alejamiento o seguridad de emergencia contra los presuntos autores, incluidas sanciones adecuadas en caso de incumplimiento.

Atendiendo a lo anterior, se incorpora en este Capítulo IV la redacción necesaria para fortalecer el deber de toda autoridad competente de garantizar los derechos de las víctimas de la violencia por razones de género.

Por lo que la propuesta a esta Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza ha sido redactada para establecer que las órdenes de protección podrán otorgarse e instrumentarse de oficio o a petición de parte, por el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes en materia penal, civil y familiar, en el momento en que tenga conocimiento de los hechos de violencia contra las mujeres presuntamente constitutivos de infracciones o delitos, de conformidad con el procedimiento que determine la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza y se abunda en la redacción que en virtud de la notoria urgencia, en los municipios, la aplicación de las órdenes de protección preventivas y de emergencia podrá corresponder a los jueces municipales.

Lo anterior, toda vez que se reconocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que muchas de las mujeres pueden encontrarse para poder llegar a la autoridad más inmediata que deba conocer de la situación de violencia y que muchas veces es la autoridad municipal, las cuales deben otorgarla sólo por 72 horas, dando aviso al Ministerio Público adscrito al municipio de que se trate o al juez competente.

En el artículo 41 relativo al Sistema Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorporan nuevos integrantes.

Se reforma el artículo 42 a fin de establecer que podrán asistir otras instituciones a las sesiones del Consejo, con el carácter de invitados, para el desahogo de alguno de los puntos del orden del día, que por acuerdo de la Presidencia o Secretaría Técnica del Consejo deban participar en la misma.

En el Capítulo VII relativo a la distribución de competencias en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se modifica el artículo 50 en relación las facultades de la Fiscalía General del Estado, para incorporar las tareas de capacitación al personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres, tipos de violencia contra las mujeres, delitos que se cometen por razones de género, protocolos de actuación, entre otros.

Se modifica el artículo 92 a fin de establecer que el personal policial del Estado y los municipios coadyuven en el estricto cumplimiento de las órdenes de protección dictadas a favor de mujeres y niñas víctimas de violencia.

Lo anterior a fin de reforzar el control y seguimiento eficiente al cumplimiento de las órdenes de protección y la reacción frente al quebrantamiento de éstas, ya que lo anterior permitirá salvaguardar la integridad física de la víctima.

**TERCERO. -** Analizada la iniciativa, procedimos a realizar las siguientes consideraciones:

I.- La violencia contra la mujer representa la violación de derechos humanos más extendida del planeta, y se manifiesta de formas muy variadas, desde los insultos y agresiones verbales, la violencia patrimonial, económica, sicológica, sexual, mediática, política, publicitaria, digital y, violencia feminicida, siendo esta última la forma de expresión más brutal de violencia contra una mujer.

II.- En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país refleja cifras alarmantes que apuntan hacia una progresividad evidente de todas las formas de violencia reconocidas por la legislación nacional contra el género femenino.

III.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como sus similares en los estados, tienen, entre otras finalidades, el garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, entre ellas las órdenes de protección, sobre las cuales la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha señalado que han demostrado ser uno de los mecanismos legales más eficaces en los esfuerzos para proteger a las mujeres contra la violencia de cualquier tipo y en cualquier ámbito.

Asimismo, establecer las bases institucionales para implementar las acciones administrativas, de procuración de justicia, de planeación y de coordinación entre autoridades a fin de erradicar la violencia contra la mujer.

IV.- Como en todo el país, las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia deben ser adecuadas constantemente de acuerdo a las realidades de este fenómeno y a la evolución que presentan; y se deben atender las experiencias de la puesta en práctica de todos los ordenamientos a fin de detectar sus deficiencias y aspectos no contemplados para subsanarlos legislativa y administrativamente.

Es así que las propuestas que los autores hacen en esta iniciativa son muy acertadas, destacando:

1. **La ampliación de los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, incorporándose la interculturalidad, la accesibilidad y la corresponsabilidad familiar.**
2. **La incorporación del derecho a la no re victimización o victimización secundaria.**
3. **La redefinición de los conceptos de violencia obstétrica.**
4. **La incorporación del concepto de concepto jurídico de violencia en el espacio o transporte público.**
5. **La modificación del concepto de violencia digital para incorporar formas de comunicación dentro de las plataformas de redes sociales, de los sistemas de mensajería instantánea, del correo electrónico o cualquier otro similar, que no estaban contemplados anteriormente.**
6. **Las mejoras al procedimiento para decretar una orden de protección.**
7. **La modificación al artículo 50 en relación las facultades de la Fiscalía General del Estado, para incorporar las tareas de capacitación al personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres, tipos de violencia contra las mujeres, delitos que se cometen por razones de género, protocolos de actuación. Y;**
8. **La modificación del artículo 92 a fin de establecer que el personal policial del Estado y los municipios coadyuven en el estricto cumplimiento de las órdenes de protección dictadas a favor de mujeres y niñas víctimas de violencia.**

Todas estas son propuestas que aportan un notable avance y mejoras a nuestro marco de prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer en la entidad.

**CUARTO. -** Atentos a lo señalado, los integrantes de esta Comisión, tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

**Decreto**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se **reforma** el artículo 1; las fracciones X y XI del artículo 3; las fracciones XII y XIII del artículo 7; el párrafo primero de la fracción VII y las fracciones IX, XI y XII del artículo 8; el párrafo primero del artículo 14; el artículo 17; la fracción III del artículo 18; el artículo 19; el párrafo segundo del artículo 21; los párrafos primero y segundo del artículo 22; la fracción I del artículo 23; el párrafo primero del artículo 24; los párrafos primero y segundo del artículo 25; el párrafo primero del artículo 28; el artículo 29; las fracciones IX, XII, XVII y XVIII del artículo 41; el párrafo primero del artículo 42; la fracción II del artículo 50; y la fracción III del artículo 92; se **adicionan** las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3; las fracciones XIV y XV al artículo 7; la fracción XIII al artículo 8; el párrafo tercero al artículo 21; la fracción V al artículo 24; el párrafo tercero al artículo 26; los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 28; el artículo 28 bis; las fracciones XIX, XX y XXI del artículo 41; y el párrafo segundo al artículo 42; y se **derogan** los artículos 8 Bis y 8 Ter, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 1.** Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria y establece los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado Mexicano.

**Artículo 3.** ...

**I.** a **IX.** ...

**X.** La integración de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado;

**XI.** La interculturalidad;

**XII.** La accesibilidad;

**XIII.** La corresponsabilidad familiar; y

**XIV.** La debida diligencia.

**Artículo 7.** ...

**l.** a **XI.** ...

**XII.** La reparación integral del daño;

**XIII.** La garantía de no victimización secundaria;

**XIV.** La integración plena a la vida democrática y productiva; y

**XV.** Los demás que establezcan esta Ley, su reglamento y otras disposiciones legales aplicables.

**Artículo 8.** ...

**I.** a **VI.** ...

**VII. Violencia obstétrica:** Es toda acción u omisión por parte del personal de salud, de tipo médico o administrativo, que dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia en su atención médica; se expresa en la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, un trato inhumano o degradante, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre sus cuerpos y los procesos reproductivos y su sexualidad, que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién nacido. Se caracteriza por:

**a)** a **f)** ...

**VIII. …**

**IX. Violencia feminicida:** Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, culminando en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres;

**X.** …

**XI. Violencia en el espacio o transporte público:** Son aquellas conductas físicas o verbales ejercida en contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público e instalaciones o vehículos destinados al transporte de pasajeros, con connotación sexista o sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil, intimidatorio u ofensivo;

**XII. Violencia digital:** Cualquier acto que se presenta a través de las tecnologías de la información y comunicación, o cualquier espacio digital, mediante la divulgación sin consentimiento de textos, videos u otras impresiones gráficas, imágenes o grabaciones de audio, sonidos o la voz de una persona, de contenido íntimo, erótico o imágenes sugerentemente sexuales, verdaderas o alteradas, ya sean propias o de otra persona, que cause daño o perjuicio y que atenta contra la integridad y dignidad de las mujeres.

Para efectos de la presente fracción se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación a aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos;

**XIII.** Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

….

**Artículo 8 Bis.-** Se deroga

**Artículo 8 Ter.-** Se deroga

**Artículo 14.** Las entidades públicas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, en materia de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres y, con este fin, deberán:

**I.** a **VIII.** ...

**Artículo 17.** Las órdenes de protección, son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, podrán otorgarse e instrumentarse de oficio o a petición de parte, por el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes en materia penal, civil y familiar, en el momento en que tenga conocimiento de los hechos de violencia contra las mujeres presuntamente constitutivos de infracciones o delitos, evitando en todo momento que la persona agresora, por sí o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo ya sea con la víctima directa, indirectas o ambas.

En virtud de la notoria urgencia, en los municipios, la expedición e instrumentación de las órdenes de protección de emergencia y preventivas de carácter temporal hasta por 72 horas, les corresponderá a los jueces municipales, una vez concedida dicha orden de protección, el juez municipal deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio Público o de la autoridad jurisdiccional competente.

Para la ejecución y seguimiento de las órdenes de protección, se contará con el auxilio de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal o Municipal, pudiendo utilizar en caso de ser necesaria la fuerza pública para su efectividad, de conformidad con el procedimiento y observancia que determine la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Las órdenes de protección serán giradas de oficio tratándose de niñas, niños y adolescentes o incapaces y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y de naturaleza precautorias y cautelares, en los términos de la Ley de la materia.

**Artículo 18.** …

**I.** y **II.** …

**III**. De naturaleza civil o familiar.

**Artículo 19.** Las órdenes de protección deberán ser otorgadas e implementadas por el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes inmediatamente que tenga conocimiento de los hechos que las generen, en todos los casos relacionados con violencia familiar, violencia de género y delitos contra la libertad, la seguridad sexual y contra la familia, y deberán tomar en consideración:

1. El riesgo o peligro existente;
2. La seguridad de la víctima o víctimas indirectas; y
3. Los demás elementos de convicción con que se cuente.

Las órdenes de protección tendrán una duración que dependerá directamente con que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo, garantizando la vida, integridad y seguridad de las víctimas, y en su caso de las víctimas indirectas.

**Artículo 21.** …

**I.** a **VI.** ...

Las medidas a que se refiere el presente artículo podrán ser emitidas por cualquier autoridad competente en el momento en que tenga conocimiento de los hechos de violencia contra las mujeres que ponga en peligro la vida y/o libertad de la víctima. Para su emisión, bastará únicamente con la declaración de la víctima.

Para la aplicación de estas medidas se atenderá a lo dispuesto en la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 22.** Para la emisión de las órdenes de protección de emergencia, cualquier autoridad competente en el momento en que tenga conocimiento de los hechos de violencia contra las mujeres, tomará en consideración:

**I.** a **V.** …

Para la tramitación de las órdenes de protección de emergencia, se atenderá a lo establecido por la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Nacional de Procedimientos Penales para las medidas de protección.

**Artículo 23.**  …

**I.** La retención y guarda de armas de fuego que estén en custodia o posesión o sean de la propiedad del agresor, o de alguna institución pública o privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia.

Lo anterior es aplicable a las armas punzocortantes y punzo contundentes, que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima.

En los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos de policía, militares o de seguridad, ya sea de corporaciones públicas o privadas, la autoridad deberá retirar el arma de cargo, así como cualquier otra que tenga registrada.

**II.** a **V.** ...

**Artículo 24.** Son órdenes de protección de naturaleza civil y familiar las siguientes:

**I.** a **IV.** …

**V**. Tratándose de alimentos, se fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, una pensión alimenticia provisional e inmediata, mientras se resuelve el juicio, para lo cual el órgano jurisdiccional en materia familiar cuando reciba la demanda, o a solicitud del Ministerio Público cuando reciba la denuncia de incumplimiento injustificado de obligaciones alimenticias, girará oficio al lugar o empresa donde labore el agresor ordenando el descuento provisional y la entrega a la mujer.

**Artículo 25.** Las órdenes de protección preventivas, civiles y familiares serán tramitadas ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Para la tramitación, emisión y ejecución de las órdenes de protección preventivas, se atenderá a lo establecido por esta Ley, la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

...

**Artículo 26.** ...

...

Para los efectos previstos en este capítulo, los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal, cumplirán y vigilarán la ejecución de las órdenes de protección previstas en esta Ley.

**Artículo 28.** Las autoridades competentes deberán de atender los lineamientos básicos para la implementación de las órdenes de protección, en coordinación con las instancias responsables de atender a las mujeres y niñas en situación de violencia, observando lo establecido por la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

…

Cuando una mujer o una niña víctima de violencia soliciten una orden de protección a la autoridad competente, se le deberá bridar toda la información disponible sobre el procedimiento relacionado con la propia orden.

La autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer o niña víctima de violencia sobre las órdenes de protección, y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud.

La autoridad deberá de realizar a la mujer o niña víctima de violencia, la medición y valoración del riesgo, la valoración médica en caso de requerirla, así como la valoración psicológica.

**Artículo 28 Bis**. La autoridad ministerial o judicial responsable, con el auxilio de la policía preventiva estatal o municipal, deberá de realizar las gestiones necesarias para notificar a la persona agresora, para informar a las autoridades responsables de la implementación de la medida, así como para verificar que la misma se cumpla en los términos para los que fue dictada.

Por ninguna circunstancia el Ministerio Público notificará de sus actuaciones a la persona agresora a través de la víctima. Cualquier notificación es responsabilidad exclusiva de la autoridad.

Las autoridades que intervengan en el cumplimiento de una orden de protección también serán las responsables de informar a la autoridad ordenadora sobre su implementación conforme a la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 29.** Las órdenes de protección deberán ser registradas dentro del Banco de Datos respecto a las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, que podrá ser consultable por todas las autoridades de primer contacto con hechos de violencia contra mujeres y niñas y estará cargo de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Banco de Datos contará con la información del Ministerio Público, de las autoridades judiciales competentes y demás autoridades estatales y municipales que emitan, implementen o den seguimiento a las órdenes de protección, impulsando el efectivo intercambio de la información.

**Artículo 41.** ...

**I.** a **VIII.** ...

**IX.** Secretaría de Economía;

**X.** y **XI.** ...

**XII.** Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos;

**XIII.** a **XVI.** ...

**XVII.** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza;

**XVIII.** Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia;

**XIX.** Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

**XX.** Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación; y

**XXI.** Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

**Artículo 42.** Cuando se trate de asuntos de su competencia, puede convocarse a las sesiones del Consejo a:

**I.** a **IV.** ...

Podrán asistir también otras instituciones con el carácter de invitados para el desahogo de alguno de los puntos del orden del día, que por acuerdo de la Presidencia o Secretaría Técnica del Consejo deban participar en la sesión que corresponda.

**Artículo 50.** ...

**l.** ...

**II.** Capacitar de manera permanente y con perspectiva de género al personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres, tipos de violencia contra las mujeres, delitos que se cometen por razones de género, protocolos de actuación y atención a mujeres víctimas de violencia, perfiles y patrones de conducta de víctimas y sujetos activos, así como de lineamientos para la integración adecuada de carpetas de investigación;

**III.** a **IX.** ...

**Artículo 92.** ...

**I.** y **II.** ...

**III.** Coadyuvar en el estricto cumplimiento de las órdenes de protección dictadas a favor de mujeres y niñas víctimas de violencia, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, la Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables;

1. y **V.** ...

T R A N S I T O R I O S

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**DADO.** En la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los 31 días del mes de Agosto de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| BLANCA EPPEN CANALES |  |  |  |
| ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES |  |  |  |
| DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO |  |  |  |

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO C) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5º, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 28 BIS Y 28 BIS 1 A LA LEY PARA EL IMPULSO EMPRENDEDOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE IMPULSAR LOS APOYOS Y FINANCIAMIENTOS DIRIGIDOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO.**

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.–** Que en la Décima Octava Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, celebrada el día 24 de junio de 2020, se presentó la iniciativa que motiva este Dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el inciso c) a la fracción I del artículo 5º, así como los artículos 28 bis y 28 bis 1 a la Ley para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de impulsar los apoyos y financiamientos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado, y que fue planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, fue turnada a esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a la realización del dictamen respectivo.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, con fundamento en los artículos 83, 95, 116 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente Dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa mediante la cual se plantea una reforma a la Ley para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila de Zaragoza, se realizó bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Las micro, pequeñas y medianas empresa tienen especial importancia para las economías de los países, al contribuir no sólo en la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por su gran potencial de generación de empleos, siendo un factor clave en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo.

Según los datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, este tipo de negocios, pertenezcan al sector formal o informal de la economía, representan más del 90% del total de empresas, generan entre el 60% y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial.

De manera particular en nuestro país, según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México había durante el año 2018 un total de 4 millones 169 mil 677 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), lo que representa el 97.6% de todas las unidades económicas existentes. Éstas son el motor que impulsa la creación de empleo del 78% de los puestos de trabajo y aportan los ingresos equivalentes al 42% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, las micro, pequeñas y medianas empresas tienden a emplear a una gran proporción de trabajadores pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, como mujeres, jóvenes y personas de hogares desfavorecidos. En muchas zonas son casi la única fuente de empleo.

En el año 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconociendo la necesidad de centrar la atención en la importancia de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la promoción de la innovación, la creatividad y el trabajo decente para todos, resolvió designar el 27 de junio como el Día de las Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas, para concienciar acerca de su contribución al desarrollo sostenible.

De acuerdo con este organismo internacional, las pequeñas empresas, incluidas las dirigidas por mujeres y jóvenes emprendedores, están siendo las más afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. Las medidas de bloqueo sin precedentes promulgadas para contener la propagación del coronavirus han conducido a interrupciones de la cadena de suministro y una caída masiva de la demanda en la mayoría de los sectores.

Aunque su composición las hace sumamente flexibles y adaptables a los cambios que se suscitan, es también cierto que su tamaño las hace vulnerables. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan suele ser el acceso a la financiación. En muchos casos, tanto la identificación de oportunidades internacionales y locales, así como la gestión comercial suelen ser más difíciles para las pequeñas empresas que para sus competidores de mayor tamaño.

Para continuar desempeñando su papel crucial en la creación de empleos decentes y la mejora de las vías de subsistencia, las pequeñas empresas dependen más que nunca de un entorno empresarial propicio, incluido el apoyo para el acceso a la financiación, la información y los mercados.

Para apoyar a sostener la economía local y la liquidez necesaria para conservar los empleos que estas empresas producen, se presenta esta iniciativa de reforma a la Ley del Impulso Emprendedor para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de incorporar diversos criterios a considerar para la distribución del Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora e Impulsar a los Emprendedores, que contribuyan a acelerar la entrega de apoyos y financiamientos a este sector, a la vez que promueva una mayor participación de mujeres y jóvenes en el desarrollo económico del Estado.

**TERCERO. –** Que esta Comisión se avocó al estudio de la iniciativa presentada, así como a la relevancia que conlleva realizar las reformas planteadas a la Ley para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que consideramos viable realizar las siguientes consideraciones:

1. Que el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) es un programa de simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites municipales para el inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo en locales previamente construidos, cuyo objetivo es la resolución de las solicitudes en un plazo no mayor a tres días hábiles, y sin trámites previos, lo que supone una ventanilla única municipal para tal efecto. A partir de su diseño e implementación en el año 2002, se ha convertido en una herramienta fundamental para los municipios, caracterizada por ser una buena práctica de mejora regulatoria en el ámbito local.
2. Que es importante promover las reglas bajo las cuales funcionará la aplicación del Fondo Estatal, ya que en la actualidad y derivado de los problemas económicos que atraviesa nuestra economía por la pandemia de COVID 19, resulta relevante que la Secretaría de Economía impulse el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que, en su mayoría, son quienes generan el mayor número de empleos formales en nuestro Estado.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo estiman pertinente emitir el siguiente:

**D I C T A M E N**

**ÚNICO.** Se adicionan el inciso c) a la fracción I del artículo 5º, así como los artículos 28 bis y 28 bis 1, de la Ley para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.-** …

**I.** ...

a) …

b) …

c) **Fomentar la implementación permanente, en todos los municipios del Estado, de un sistema de apertura rápida de empresas**.

**II.** …

**III.** …

**Artículo 28 bis. En la aplicación del Fondo Estatal se deben considerar y razonar las decisiones de los apoyos en base a los siguientes criterios:**

**I. Promover una mayor participación de las mujeres y jóvenes en el desarrollo económico del Estado;**

**II. Contribuir a la creación, fortalecimiento, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la mejora de sus procesos;**

**III. Promover, capacitar y difundir los programas, instrumentos, productos, herramientas y acciones para elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresa, como estudios de factibilidad, capacitación de personal, fondos de garantía, entre otros;**

**IV. Fomentar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas;**

**V. Facilitar y fomentar la constitución de incubadoras de empresas, aceleradoras de negocios, empresas de reciente creación y formación de emprendedores, mediante la implementación de programas de apoyo dirigidos a mujeres jefas de familia y jóvenes;**

**VI. Facilitar y fomentar la integración de las micro, pequeña y medianas empresas a las cadenas globales de valor;**

**VII. Promover la investigación y el desarrollo de tecnología en las micro, pequeñas y medianas empresas;**

**VIII. Fomentar la generación de empleos en las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado; y**

**IX. Apoyar a las incubadoras, aceleradoras y talleres especializados a través de mecanismos para vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas con las universidades, así como los centros de investigación científicos y tecnológicos del Estado.**

**Artículo 28 bis 1**. **La Secretaría de Economía, con la aprobación del Consejo General Ciudadano, generará una serie de estímulos y programas, en el marco de la política integral de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que facilite el financiamiento y otorgamiento de créditos para el fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.**

**La Secretaría deberá crear un esquema integral y de fácil acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas, donde se presente el conjunto de apoyos, actividades de fomento y estímulos dedicados a este segmento.**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 31 días del mes de agosto de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO,**

**COMPETITIVIDAD Y TURISMO.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COAHUila, PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE OFRECE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES.**

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.–** Que en la Cuarta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, celebrada el día 18 de marzo de 2020, se presentó la iniciativa que motiva este Dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción VIII del artículo 5, la fracción VII del artículo 6 y el artículo 41 y su fracción I; y se adicionan las fracciones II, III y IV, recorriendo el numeral de las que ocupaban dicha posición del artículo 41, los artículos 41 bis y 41 bis 1, de la Ley de Turismo del Estado, con el fin de regular la prestación del servicio de hospedaje que se ofrece a través de plataformas digitales, planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, fue turnada a esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a la realización del dictamen respectivo.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, con fundamento en los artículos 83, 95, 116 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente Dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa mediante la cual se plantea una reforma a la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, se realizó bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Actualmente vivimos en una corriente social de cambio y evolución, en donde la tecnología y la modernidad le están ganando el terreno a lo tradicional; la aplicación de estas, se observa durante la realización de cualquier actividad diaria y en todo ámbito donde se encuentre interactuando la persona; por ejemplo, para desempeñar su trabajo, para hacer compras de comida, víveres, ropa, reservar y comprar boletos de transporte, habitaciones de hotel, y hoy en día, para contratar servicios de uso diario, como el del transporte privado o de alojamiento y hospedaje, mediante servicios web o aplicaciones móviles.

Esto ha llevado a las sociedades modernas a dar un giro de 180 grados; han apostado por crear normatividades vanguardistas, que atienden las nuevas corrientes y acciones sociales y que contemplen de manera integral una regulación sana y garante de derechos; se encargan de darle forma al desarrollo de actividades rutinarias que traen consigo la aplicación de un método no tradicional, y a su vez, la implementación de métodos nuevos.

Es entonces cuando entra el actuar del orden público con la única intención de crear o modificar ciertas disposiciones legales para llegar al desarrollo y modernización de nuestras normas, logrando así, la adaptación y familiarización de nuestros ciudadanos ante el cambio y evolución del entorno en el que vive.

Aquí en nuestro Estado lo tenemos más que claro, e inclusive fomentamos desde los más pequeños, hasta los más adultos el uso de la tecnología; igualmente lo vemos representado cuando por ejemplo entramos al portal de trámites y servicios para el pago de derechos, cuando vamos por un acta de nacimiento a la maquina expedidora, durante el proceso de inscripción escolar de nuestros hijos, en fin, muchos ejemplos más donde vemos que la gente accede a la tecnología por sus propios medios, a través de su computadora o celular, porque les resulta más fácil y rápido.

Una vez que la gente se acostumbró a dichos métodos modernos, es menester del Estado complementar lo iniciado, y continuar con los cambios y actualizaciones normativas que aseguren lo que empezó como el proceso al cambio y a la modernidad.

El siguiente paso es continuar con las modificaciones, cubriendo puntos específicos muy importantes, como la accesibilidad a dichos métodos, la aplicación, respuesta y aceptación de la ciudadanía frente al uso de los mismos, y sobre todo, la garantía de que existe una seguridad jurídica para quienes los realizan.

Bajo este orden de acción, es que hoy presentamos la siguiente propuesta que contempla modificaciones a la Ley de Turismo Estatal, con el fin de dotar de certeza jurídica, de seguridad y de protección a todos los usuarios que optan por contratar servicios de hospedaje o alojamiento mediante plataformas digitales o métodos no tradicionales. Lo anterior con la finalidad de que espacios, inmuebles o casas-habitaciones ofrecidos en plataformas como “AirBnB” o “Home Away” tengan un servicio formal y de calidad, que brinde el sentimiento de tranquilidad y seguridad al usuario por el hecho de estar regulados por las leyes locales en la materia.

Buscamos ampliar el concepto de dicha modalidad para precisar cuándo un prestador de servicio turístico se encuentre o no en tal supuesto; igualmente se pretende ampliar los requisitos y obligaciones que estos deben de cumplir para garantizar que su servicio de hospedaje o alojamiento está en regla.

Y es que nuestra ley local en comento ya regula la prestación de servicios de hospedaje a través de plataformas digitales; pero muy vagamente define esta modalidad, impone solo algunas cargas y obligaciones a los prestadores de servicios turísticos de este giro, delega pocas atribuciones al órgano competente para llevar el control de estos, y además, existen lagunas jurídicas que no pueden seguir en el limbo, y que mediante la presente iniciativa tratamos de cubrir para beneficio del sector turístico.

**TERCERO. –** Que esta Comisión se avocó al estudio de la iniciativa presentada, así como a la relevancia que conlleva realizar las reformas planteadas a la Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que consideramos viable realizar las siguientes consideraciones:

1. Que la Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene como objetivos los citados en el artículo 2, que son:
2. *Establecer las bases para la planeación, programación, formación de la cultura turística y desarrollo de políticas públicas en todo el territorio estatal, de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los municipios, a corto, mediano y largo plazo, así como la participación de los sectores social y privado;*
3. *Determinar los mecanismos e instrumentos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del estado, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente;*
4. *Fomentar una formación en cultura turística entre la sociedad, orientada al conocimiento y valoración de la actividad turística, buscando la satisfacción del visitante y la obtención del mayor beneficio para las comunidades receptoras del estado; y*
5. *En general, promover lo conducente, para dirigir la actividad y profesionalización relacionada con el sector turístico en el estado.*
6. Las reformas que se plantean al artículo 41 fracciones II y IV advierten una sobre regulación a quienes brinden la prestación de servicios de hospedaje mediante modalidades no tradicionales; además de que se está desarrollado, de nueva cuenta, lo que ya existe en la propia Ley de Turismo, cuando bastaría con señalar que deben cumplir con todo, igual que los prestadores tradicionales y, en su caso, dejar establecidas las cosas con las que no cumplirán de manera excepcional.
7. Por último, esta Comisión considera importante se pueda tener una primera reunión con el Consejo Estatal de Turismo, y posteriores mesas de trabajo con los involucrados en la materia, a fin de analizar los criterios a considerar al respecto de quienes brindan el servicio de hospedaje con fines turísticos a través de Plataformas Digitales o no tradicionales.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, estiman pertinente emitir el siguiente:

**D I C T A M E N**

**ÚNICO.** Se **reforma** la fracción VIII del artículo 5, la fracción VII del artículo 6, el primer párrafo y las fracciones I, II, III y IV del artículo 41; se **adiciona** la fracción V al artículo 41, los artículos 41 bis y 41 bis 1, de la **Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza**, para quedar como sigue:

Artículo 5. …:

**I**. a la **VII.** …

**VIII. Servicio de hospedaje mediante modalidades no tradicionales. Aquellos por los que se conceda, ya sea de forma parcial o total, el uso de inmuebles amueblados destinados a la casa habitación, siempre que tales servicios se presten de forma habitual por más de seis meses al año a una o más personas. Este servicio puede ser provisto mediante el uso de plataformas digitales.**

**IX**. al **XXVIII. …**

**Artículo 6.** …:

**I**. a la **VI. …**

**VII.** Llevar el control y seguimiento del padrón de aquellas personas físicas o morales que proporcionen el servicio de hospedaje **mediante modalidades no tradicionales;**

**VIII**. a la **XXVII. …**

**Artículo 41.** Tratándose de los prestadores de servicio de hospedaje mediante **modalidades no tradicionales, deberán cumplir los siguientes requisitos**:

**I. El inmueble o casa habitación deberá contar con los certificados, permisos, licencias o autorizaciones tramitados ante el municipio correspondiente, para satisfacer así, los requisitos de seguridad, accesibilidad, higiene, comodidad y buen aspecto, exigibles en la legislación aplicable;**

**II. La publicidad o información divulgada a través de cualquier medio para la contratación de este tipo de servicios de hospedaje deberá ser extensa y sin dolo o error, para que los usuarios conozcan si es un inmueble o casa habitación dedicada exclusivamente a dicho servicio, así como la calidad y reconocimiento que este tiene respecto a su función.**

**Informarán a sus usuarios de manera impresa o electrónica la descripción de los servicios de hospedaje contratados, los horarios de entrada y salida, número de noches a pernoctar, tarifa, y en su caso, depósito de dinero en garantía exigible al usuario para la prestación del servicio, así como todas las demás condiciones particulares aplicables.**

**En caso de que el inmueble no cuente con medidas o instalaciones adecuadas para personas con algún tipo de discapacidad, deberá señalarse expresamente al usuario.**

**La información proporcionada al usuario hará las veces de contrato una vez aceptada por el huésped, así como los términos en particular acordados por escrito, se redactará en idioma español y señalará la tarifa total aplicable, así como las condiciones y políticas de cancelación.**

**En caso de que estos servicios se anuncien a través de una plataforma digital operada por un tercero, la misma deberá implementar mecanismos a través de los cuales los usuarios puedan presentar quejas, así como crear mecanismos alternativos para la solución de conflictos. La plataforma digital por la que se anuncien este tipo de servicios de hospedaje deberá expresar la dirección, teléfono y/o correo electrónico, del tercero operador de la plataforma electrónica ante quien se puedan presentar quejas, así como la forma para recibirlas;**

**III.** Colaborar con las autoridades que, con motivo de la solicitud **de los tramites marcados en la fracción I del presente artículo**, tengan que realizar visitas de inspección a fin de obtener la información de seguridad e higiene necesarias para emitir el dictamen de factibilidad y viabilidad de funcionamiento, así como cuando las autoridades competentes los requieran;

**IV.** Cumplir con las obligaciones de los prestadores de servicios turísticos previstas en el artículo 39 de esta ley, y;

**V.** Cumplir con las obligaciones fiscales que establecen las leyes correspondientes a la materia, así como con las normas de seguridad, protección civil e higiene que se marcan dentro de las respectivas leyes que norman la materia.

**Artículo 41 bis. Los prestadores de servicios a los que se refiere el artículo anterior de esta Ley quedarán obligados a inscribirse en el Registro de Turismo del Estado de Coahuila, excepto cuando el prestador del servicio de hospedaje sea solo un tercero operador del servicio o cuando encuadren en lo dispuesto por el artículo 41 bis 1.**

**En el Reglamento de esta Ley se establecerá un mecanismo simplificado** **y disponible en línea para cumplir esta obligación.**

**Artículo 41 bis 1. No se considerará prestación de servicios de hospedaje mediante modalidades no tradicionales, aquellos que:**

**I. Se presten en los mismos espacios amueblados y habitados por quien ofrece el servicio de hospedaje, otorgando para ello, temporal y parcialmente, el uso de éste; y**

**II. Se presten por periodos equivalentes o mayores a lo que constituya un arrendamiento según la legislación civil aplicable.**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 31 días del mes de agosto de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO,**

**COMPETITIVIDAD Y TURISMO.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por la Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, para que rectifique la decisión de reducir el presupuesto de los centros de atención para estudiantes con discapacidad (CAED).

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 17 de junio de 2020, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, para que rectifique la decisión de reducir el presupuesto de los centros de atención para estudiantes con discapacidad (CAED).

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor turnó a la Coordinadora de esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual “se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, para que rectifique la decisión de reducir el presupuesto de los centros de atención para estudiantes con discapacidad (CAED)”, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

*“Nuestro paisano, el expresidente Francisco I. Madero, en su lucha por desterrar de nuestro país la tiranía de un dictador, dijo: “Un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos”. A estas sabias palabras, yo le sumaría que, para tener buenos ciudadanos, se requiere de una buena educación.*

*Compañeras y compañeros integrantes del Congreso del Estado de Coahuila: hace algunos días, se hicieron públicos los recortes planteados por la Secretaría de Hacienda, encabezada por Arturo Herrera Gutiérrez, dentro de dichos recortes, se tiene contemplado disminuir el presupuesto a la ciencia, a la tecnología, a la protección del medio ambiente y por si fuera poco, a la educación de los niños con discapacidad.*

*Peor aún que hacer recortes en áreas tan vitales e importantes para el desarrollo de nuestro país, es que dichos recursos se trasladarán a obras con alto impacto ambiental y nulo impacto social. El tren maya, la refinería dos bocas y el nuevo aeropuerto.*

*Recortar el presupuesto a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED)[[51]](#footnote-51). quedará inoperable el sistema que atiende a 334 mil jóvenes en su modalidad no escolarizada y 621 mil en educación especial, además, deja a la deriva a miles de maestros, maestras y personal de apoyo que dependen de estos centros.*

*Los CAED son muy importantes, dado que garantizan a las personas con discapacidad el que no queden al margen del desarrollo, además, garantizan su integración al sistema educativo nacional, para que posteriormente pasen a formar parte de las fuerzas productivas del país.*

*Existen más de 291 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad en el país, de los cuales, 7 se encuentras en nuestra entidad, distribuidos de la siguiente manera: uno en Acuña, uno en Monclova, uno en Piedras Negras, uno en San Pedro, uno en Torreón y dos en Saltillo[[52]](#footnote-52).*

*Si queremos ser un país incluyente, debemos generar los mecanismos para que todas las personas puedan formar parte de nuestra sociedad, independiente de su condición, religión, educación, orientación sexual, raza o género. Es por ello por lo que son vitales los procesos de integración a la sociedad de las personas con discapacidad.*

*En muchas ocasiones, algunas consecuencias funcionales y emocionales de vivir con discapacidad no son originadas por su condición, sino que son fruto de la interacción con su entorno social, por lo que es nuestra obligación como servidores públicos, transformar y construir un contexto en donde cualquier persona pueda desarrollarse, aceptando su diversidad.*

*Uno de estos entornos, es el educativo. Nuestro país se distinguió como uno de los pioneros en otorgar derechos sociales a sus ciudadanos.*

*Con la promulgación de la Constitución Política de 1917, en el artículo 3° se inscribió el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, aunque desde nuestra primer Carta Magna, promulgada en 1824, encontramos la voluntad del Estado Mexicano de ofrecer educación a sus habitantes.*

*Con el paso de los años, se ha consolidado la educación pública de nuestro país. Se ampliaron los niveles educativos que deben ser cursados de manera obligatoria, lo que se traduce en que el Estado está obligado a garantizar, ya no solo la educación básica de manera gratuita a las niñas, niños y jóvenes del país, sino que también debe crear instituciones de educación media superior para que sus habitantes puedan continuar con sus estudios.*

*Además de ampliar los niveles educativos obligatorios, también se han creado programas para integrar a distintos grupos minoritarios del país que lamentablemente habían quedado marginados y no podían garantizar su derecho a la educación. Grupos de personas indígenas y de personas con discapacidad fueron integrados al sistema educativo nacional, con centros como los CAED, que como mencioné antes, son instituciones que apoyan a las personas con discapacidad para que concluyan su educación media superior.*

*No podemos negar que aún hay muchos retos que enfrentar en materia de integración de grupos minoritarios. La ciudadanía nos exige soluciones y no quitar el dedo del renglón.*

*Hoy alzo la voz desde esta tribuna para pedir al Secretario de Hacienda y Crédito Público, que no elimine el presupuesto para las familias de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad.*

*Tal vez, si las condiciones económicas por las que atraviesa el país fueran favorables, podríamos debatir los proyectos que se han denominado como prioritarios. Sin embargo, la posición de nuestro país es vulnerable y las acciones deben ir encaminadas a atender temas que realmente si son prioritarios como la salud y en este caso la educación de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.****”***

**TERCERO. –** Estamos conscientes que la educación de todos los niveles y que se dirige a aquellos grupos vulnerables como lo son los grupos indígenas y las personas con discapacidad deben contar indudablemente con todo el apoyo posible para que puedan continuar o culminar su preparación escolar.

Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad son espacios relevantes para la inclusión de las personas con discapacidad en las que se dan asesorías de gran importancia, por personal profesional, sensible y especializado que le brindan valores importantes a este sector vulnerable de la sociedad.

Además, es preocupante la situación de desempleo por la que tendrá que pasar el personal que labora en estos centros de atención.

Los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas nos sumamos a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada y analizada en el cuerpo del presente, y coincidimos que es necesario que las niñas, niños y jóvenes con discapacidades puedan contar con mayor acceso a escuelas en cualquier nivel, en las cuales se incluyan programas específicos que permitan la continuación de sus estudios para que sus tasas de permanencia y de graduación puedan aumentar dentro de estos grupos vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se estima procedente enviar un atento exhorto al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, para que rectifique la decisión de reducir el presupuesto de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).

**SEGUNDO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a agosto de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS**

**Y ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA LXI LEGISLATURA.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**

**COORDINADORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **SECRETARIO** |  | **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  | **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS, CON RELACIÓN AL OFICIO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE GENERAL CEPEDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA QUE EL PLENO DEL CONGRESO ACUERDE HACER UN EXTRAÑAMIENTO A LOS REGIDORES LUIS ENRIQUE ALEMÁN ESPINOZA Y JUAN AMADO MARINES HERNÁNDEZ PARA QUE SE ABSTENGAN DE HACER ACUSACIONES INFUNDADAS.**

La Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, con fundamento en los artículos 102, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir este acuerdo, en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERO.-** Que en el *Informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado* de la sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 11 de marzo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión el oficio suscrito por la Secretaria del Ayuntamiento de General Cepeda mediante el cual señala una serie de acciones llevadas a cabo por los regidores de dicho Ayuntamiento Luis Enrique Alemán Espinoza y Juan Amado Marines Hernández, solicitando de ser procedente el Pleno de este Congreso acuerde hacer un extrañamiento a los Regidores antes mencionados para que se abstengan de hacer acusaciones infundadas y carentes de prueba y en su caso denuncien los hechos que presumiblemente puedan ser constitutivos de un delito atribuible a un servidor público.

**SEGUNDO.-** Que con fecha 13 de marzo del presente año, esta Comisión recibió de la Oficialía Mayor el oficio mediante el cual turna el oficio referido con anterioridad, para los efectos procedentes.

**TERCERO.-** Que del oficio de la Secretaria del Ayuntamiento de General Cepeda se desprende que los regidores Luis Enrique Alemán Espinoza y Juan Amado Marines Hernández, presuntamente acudieron al Congreso del Estado para denunciar diversas irregularidades que han ocurrido en el dicho municipio.

Así mismo se señala en el oficio de referencia que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la investigación y persecución de los delitos, advirtiendo que el Municipio debe pronunciarse respecto a que la fiscalía investigue o determine si existe algún delito por parte de los servidores públicos de General Cepeda.

En virtud de lo anterior, la Secretaria del Ayuntamiento de General Cepeda solicita a este Congreso del Estado que, en caso de ser procedente, se acuerde hacer un severo extrañamiento a los regidores antes señalados para que se abstengan de realizar acusaciones infundadas y carentes de pruebas.

**CUARTO.-** El objeto de las disposiciones del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es normar el gobierno, la estructura orgánica y el funcionamiento de los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, en plena concordancia con las disposiciones constitucionales.

Son precisamente las disposiciones constitucionales de nuestro país, las que dan la pauta para su regulación y establecen los principios que rigen el municipio.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio libre, cada uno gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa y sin que haya autoridades intermedias entre estos y el gobierno del Estado.

En esa tesitura, queda claro que corresponde a los Ayuntamientos gobernar al interior de los Municipios, gozan de la autonomía que le otorga el orden constitucional y el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que esta Soberanía no puede, ni debe intervenir para dirimir controversias que se susciten al interior del mismo, salvo en los casos en los que la propia Constitución le faculta.

Además, no se advierte del escrito objeto de estudio, soporte o documentación que acredite de manera fehaciente lo vertido por la promovente, por lo que no se estima procedente la solicitud planteada por la Secretaria del R. Ayuntamiento de General Cepeda, toda vez que no somos la autoridad competente para dirimir las controversias que se suscitan en el interior del Ayuntamiento.

Por las razones expuestas anteriormente, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, tenemos a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se hace un atento llamado al R. Ayuntamiento de General Cepeda, a que resuelvan sus diferencias conforme lo establece el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y cumplan cada uno con sus obligaciones que le corresponden conforme a su encargo, con estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de agosto de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN (SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS, CON RELACIÓN AL ESCRITO SUSCRITO POR LA SÍNDICA DE MINORÍA Y LOS REGIDORES TERCERO, CUARTA, SEXTA, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERA, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERA, DÉCIMO CUARTO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A ESTE CONGRESO INTEGRE UNA COMISIÓN PARA QUE SE REALICEN LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES SOBRE ACTOS Y OMISIONES EN QUE HAN INCURRIDO SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO.**

La Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, con fundamento en los artículos 102, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir este acuerdo, en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** Que el tres de junio de año en curso, la Oficialía Mayor de este H. Congreso recibió un escrito dirigido al Presidente de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura, suscrito por la Síndica de Minoría y los Regidores Tercero, Cuarta, Sexta, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primera, Décimo Segundo, Décimo Tercera, Décimo Cuarto del Ayuntamiento de Matamoros, mediante el cual solicitan a este Congreso integre una Comisión para que se realicen las investigaciones pertinentes sobre actos y omisiones en que han incurrido servidores públicos de la administración municipal de dicho municipio.

**SEGUNDA.-** Que en sesión celebrada por el H. Pleno del Congreso del Estado el 17 de junio del presente año, se acordó turnar a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas el escrito al que se ha hecho referencia.

**TERCERO.-** Que en el escrito suscrito por la Síndica de Minoría y los Regidores Tercero, Cuarta, Sexta, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primera, Décimo Segundo, Décimo Tercera, Décimo Cuarto del Ayuntamiento de Matamoros señalan que derivado del acuerdo por unanimidad, tomado en la vigésima quinta sesión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2020, solicitan que conforme las atribuciones del Poder Legislativo que se establecen en el Artículo 67 de la Constitución Local, se integre una Comisión para que realice las investigaciones pertinentes sobre actos y omisiones en que presuntamente han incurrido servidores públicos de la administración municipal de Matamoros, tales como, manipulación de datos de los cuadernillos de la información financiera, contratos de adjudicación directa para obra pública a empresas fantasmas, inflación de la nómina municipal y nepotismo, otorgamiento de nombramientos por parte del Presidente Municipal sin previa designación del Ayuntamiento, omisiones en las funciones del Secretario del Ayuntamiento, imposición de contribuciones y aprovechamientos que no se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos, despido injustificado de empleados municipales; por señalar algunos.

**CUARTO.-** Del estudio realizado al escrito en mención turnado a esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, podemos advertir que se trata de asuntos que tienen que dirimirse al interior del Ayuntamiento de Matamoros, pues se refiere a situaciones que ocurren en el ejercicio de las obligaciones como servidores públicos municipales, tales como las funciones de Alcalde, Síndicos y Tesorero del Municipio.

Además, esta Comisión analizó las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, la propia del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley Orgánica del Congreso del Estado y demás normatividad aplicable, de lo cual se desprende lo siguiente:

La Constitución General de la República, prevé las bases normativas a las que habrá de ajustarse la responsabilidad de los servidores públicos, al respecto se prevé lo siguiente:

***Artículo 108.*** *Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.*

*El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.*

*Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.*

*Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.*

*Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.*

***Artículo 109.*** *Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:*

***I.*** *Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.*

*No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.*

***II.*** *La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.*

*Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;*

***III.*** *Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.*

*Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.*

*Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.*

*La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.*

*Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.*

*Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y*

***IV.*** *Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.*

*Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.*

*Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.*

*En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.*

*La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente.*

*La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.*

Por su parte la Constitución Política del Estado, con respecto al régimen de responsabilidades de los servidores públicos contempla lo que a continuación se precisa:

***Artículo 159.*** *Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se considerarán servidores públicos, los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, los funcionarios y empleados del Estado, y de los Municipios, y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública, Estatal o Municipal y en las entidades paraestatales y paramunicipales, así como a los integrantes de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos y omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.*

*Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes y disposiciones aplicables.*

*Asimismo, serán sujetos de responsabilidad, los particulares que intervengan en hechos vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, de conformidad con lo que determinen las leyes.*

***Artículo 160.*** *Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:*

***I.*** *Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones señaladas en el artículo 164 a los servidores públicos a que se refiere el artículo 163, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.*

*No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.*

***II.*** *La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particular que incurran por hechos de corrupción, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal.*

***III.*** *Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones de conformidad con la Ley General de la materia y demás ordenamientos legales aplicables. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.*

*Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán investigadas, substanciadas y resueltas por los órganos internos de control.*

*Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado se estará a lo previsto por el artículo 143 de esta Constitución y las leyes aplicables, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización del manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos.*

*La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.*

*La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III de este artículo. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos no serán inferiores a siete años.*

*Las dependencias y entidades estatales y municipales, así como los Organismos Públicos Autónomos, tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para substanciar y sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; substanciar y promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza los procedimientos para la sanción de faltas administrativas graves y de particulares vinculados con las mismas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado a que se refiere esta Constitución.*

***IV.*** *El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas estatales o municipales, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal o municipal, a las dependencias o entidades estatales o municipales o a los Organismos Públicos Autónomos.*

*Las personas morales serán sancionadas en los términos de la ley, cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.*

*Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas, serán autónomos en su desarrollo. No podrán imponerse dos veces, por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.*

*Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.*

*En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley de la materia establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.*

*La Auditoría Superior del Estado y la secretaría del ejecutivo estatal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en la fracción V, Apartado C del artículo 157 de esta Constitución, y demás leyes aplicables.*

*La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.*

***Artículo 161.*** *La ley de la materia determinará, los casos y las circunstancias en que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o con motivo del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio y no puedan acreditar la legítima procedencia de los bienes que hayan adquirido o de aquellos respecto de los cuales actúen como dueños.*

*Las leyes aplicables, sancionarán el enriquecimiento ilícito con el decomiso, o en su caso, con la extinción de dominio de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.*

***Artículo 162.*** *Todo ciudadano, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a que se refieren los dos artículos anteriores.*

***Artículo 163.*** *Podrán ser sujetos de juicio político los diputados del Congreso del Estado; el Auditor Superior del Estado; el Gobernador del Estado; los Secretarios del ramo; los subsecretarios; el Fiscal General del Estado, los fiscales, los fiscales especializados; los directores generales o su equivalente en las entidades y los directores de las dependencias del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los jueces de primera instancia; los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos del Estado; los integrantes de los concejos municipales; los directores generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales y paramunicipales; así como los titulares e integrantes de los consejos y asambleas generales de los organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su denominación.*

*El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso Local y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, serán sujetos de juicio político en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando incurran en violaciones graves a este supremo ordenamiento y a las leyes federales que de él emanen, así como en el caso de manejo indebido de fondos y recursos federales.*

***Artículo 164****. Las sanciones que deberán imponerse mediante juicio político, consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.*

*Para la aplicación de dichas sanciones, el Congreso del Estado conocerá de las acusaciones presentadas en contra de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior y se erigirá en jurado de sentencia, que impondrá la sanción correspondiente, mediante la resolución de las dos terceras partes del total de sus miembros, previa la substanciación del procedimiento respectivo, conforme a lo que establezcan los ordenamientos legales aplicables y con audiencia del inculpado.*

*Las declaraciones y resoluciones que emita el Congreso del Estado en estos casos, serán inatacables.*

***Artículo 165.*** *Se podrá proceder penalmente contra el Gobernador del Estado; los Diputados del Congreso del Estado; el Auditor Superior del Estado; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los jueces de primera instancia; los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; los secretarios del ramo; el Fiscal General del Estado, los fiscales y fiscales especializados; los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos; los integrantes de los consejos municipales; y así como los titulares e integrantes de los consejos o asambleas generales de los organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su denominación, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, éstos quedaran sujetos a la acción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual fallará en definitiva, previas las formalidades esenciales del procedimiento y con audiencia del inculpado y del acusador, si lo hubiere.*

*Lo anterior se realizará conforme a las bases siguientes:*

*Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su encargo salvo que se le imponga alguna medida cautelar consistente en prisión preventiva, o alguna otra medida que restrinja o limite su libertad, según lo establezca la ley de la materia aplicable. Las medidas cautelares no podrán consistir en prisión preventiva, restricción o limitación de la libertad, salvo en los casos de delincuencia organizada, delitos relacionados con hechos de corrupción, suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación y de la salud.*

*En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo, se separará al sentenciado de sus funciones. La separación del cargo, tendrá efectos mientras se extingue la pena.*

***Artículo 166.*** *Si el delito que se impute a algún funcionario se hubiere cometido antes de que ejerza el cargo, se estará al procedimiento establecido en el artículo anterior.*

*Cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 165 de esta Constitución cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado de su cargo, no se aplicará lo que señala dicho precepto.*

*Si el servidor público ha vuelto a ejercer sus funciones propias o ha sido nombrado electo para desempeñar un cargo distinto, pero de los enumerados en el artículo anterior, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de este ordenamiento.”*

En este mismo sentido es menester referir que, como resultado del proceso de armonización de las normas locales con las normas generales en materia de combate a la corrupción, se derogó gran parte de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de adoptar la legislación general en la materia.

De lo anterior se concluye que, toda vez que las conductas que se señalan en el escrito pudieran constituir faltas administrativas, o generar responsabilidad penal, este órgano legislativo no es el competente para investigarlas, substanciarlas o sancionarlas.

Aunado a lo anterior y en relación a la solicitud de que este Congreso integre una Comisión para realizar las investigaciones pertinentes sobre actos y omisiones en que han incurrido servidores públicos de la Administración Municipal, es importante señalar que este órgano Legislativo puede nombrar comisiones permanentes y especiales solamente para el estudio de proyectos de leyes y decretos y para atender asuntos de su competencia, y las responsabilidades administrativas en las que puedan incurrir los servidores públicos de los municipios se deben de investigar por los órganos internos de Control que establece la Ley General de Responsabilidades.

En esa tesitura, queda claro que corresponde a los Ayuntamientos gobernar al interior de los Municipios, gozan de la autonomía que le otorga el orden constitucional y el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que esta Soberanía no puede, ni debe intervenir para dirimir controversias que se susciten al interior del mismo, salvo en los casos en los que la propia Constitución le faculta.

Sin embargo, nos preocupa lo que ocurre en el Municipio de Matamoros, en relación a las situaciones que aquejan al interior de dicho Ayuntamiento, las cuales deben ser atendidas conforme a las disposiciones legales aplicables y en estricto apego a los principios que rigen la actuación de los servidores públicos municipales.

No obstante, consideramos pertinente hacer un llamado a los integrantes de dicho Ayuntamiento, a que ejerzan sus funciones como servidores públicos municipales con total y estricto apego a las disposiciones legales que le son aplicables.

Por las razones expuestas anteriormente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, tenemos a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Remítase copia del escrito suscrito por la Síndica de Minoría y los Regidores Tercero, Cuarta, Sexta, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primera, Décimo Segundo, Décimo Tercera, Décimo Cuarto del Ayuntamiento de Matamoros que obra en los archivos de esta Comisión al Ayuntamiento de Matamoros Coahuila para que gire sus instrucciones a su Órgano Interno de Control e investiguen las presuntas violaciones a la legislación municipal que son descritas en dicho documento, y en caso de resultar ciertas, en uso de las facultades que les confieren el Código Municipal del Estado de Coahuila, la Constitución Local y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable, finquen las sanciones correspondientes o promuevan las acciones legales adecuadas ante las autoridades competentes.

**SEGUNDO.-** Se exhorta de manera respetuosa a los miembros del R. Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, a que sujeten sus actuaciones conforme a lo previsto por las leyes y demás normatividad aplicable.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de agosto de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN (SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “mediante el cual se exhorta respetuosamente a los propietarios de las rutas, de camiones, unidades de taxis, y en general todos los que pertenezcan a algún transporte público del Estado, para que en la medida de sus posibilidades, consideren instalar unidades de cámaras y monitoreo satelital, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios”.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 26 de febrero del año en curso, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “mediante el cual se exhorta respetuosamente a los propietarios de las rutas, de camiones, unidades de taxis, y en general todos los que pertenezcan a algún transporte público del Estado, para que en la medida de sus posibilidades, consideren instalar unidades de cámaras y monitoreo satelital, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios”.

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor en fecha 5 de marzo de 2020, turnó al Coordinador de esta Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “mediante el cual se exhorta respetuosamente a los propietarios de las rutas, de camiones, unidades de taxis, y en general todos los que pertenezcan a algún transporte público del Estado, para que en la medida de sus posibilidades, consideren instalar unidades de cámaras y monitoreo satelital, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios”, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

“El Gobierno Coahuilense ha trabajado intensamente para cambiar los índices de violencia que nuestro país ha estado sufriendo, mediante programas de seguridad, y políticas públicas implementadas en los distintos municipios del estado.

Y aunque los esfuerzos han sido grandes, los feminicidios han ido al alza, secuestros, robos, entre otros crímenes que se comenten en contra de las personas; siendo muy común y el tema que abordaremos, las situaciones que se presentan cada día, con los usuarios del transporte público, quienes, en cumplimiento de sus labores diarias, tienen que hacer uso de este y se ven afectados en cuanto a su seguridad, siendo objeto, en su mayoría mujeres, de acoso sexual, violencia verbal, etc.

Es necesario considerar establecer nuevas estrategias con el fin de proteger la integridad de quienes utilizan los transportes públicos, así como de quienes operan las unidades, es que exhortamos a los dueños, concesionarios o responsables de las unidades de transportes públicos, que, en medida de su posibilidad, instalen en sus unidades cámaras de seguridad, con el fin de salvaguardar la integridad física de quienes hacen uso de dichas unidades.

Que dichas cámaras de seguridad estén vinculadas con las distintas corporaciones de seguridad, así como a las unidades de emergencia y rescate de nuestro Estado, con el fin de que en algún caso de emergencia sea más rápida su respuesta y su detección del lugar en el cual ha estado siendo solicitada tal ayuda a los cuerpos de emergencia o corporaciones policiacas.

Las cámaras podrán ser instaladas en una zona estratégica con el fin de que sean captados todos los pasajeros quienes estén a bordo de las unidades, así como el audio y grabación este en poder de los concesionarios, con el fin de que se proporcione en caso de que sea necesario por alguna unidad policiaca o de investigación de igual manera garantizar a las mujeres, no sufran más algún acto de molestia, como acoso sexual, mediante tocamientos o bien con algún comentario inapropiado.

Siendo las mujeres uno de los grupos más vulnerables en la actualidad, que enfrentan diariamente algunas barreras para acceder plenamente y efectivamente a sus derechos de movilidad segura, accesible y digna.

Las percepciones de inseguridad, violencia, así como la sensación que se genera por el miedo, entre las mujeres, niñas, niños y adolescentes, se puede entender observando la prevalencia de las situaciones las cuales enfrentan cotidianamente en las unidades de transportes públicos, taxis, microbuses, rutas o unidades de transportes mediante aplicaciones.

Ser víctima de acoso o violencia sexual en el transporte público, genera en la mayoría de las ocasiones efectos psicológicos importantes en las personas que sufren dichos actos, es por eso que consideramos que paulatinamente se pueden ir implementando medidas preventivas, como la de colocar cámaras de seguridad y monitoreo, para lograr de prevenir cualquier hecho ilícito, que se comenta en contra de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres, así como en contra de cualquier adulto mayor sin importar todos ellos su sexo.

Ser víctima de algún acoso sexual o asalto en el transporte público, no solo genera caos, frustración, enojos, o si nos vamos a algo más violento, pues algunas lesiones, incluso llegar hasta la muerte.

Aunque el plan suena un poco costoso es posible establecer un plan de acción para que los dueños o concesionarios en medida de sus posibilidades, instalen las cámaras de seguridad en sus unidades de transporte, y mediante un plan coordinado con las unidades de seguridad pública del Estado garanticen la vigilancia y supervisión permanente de dichas unidades.

Todo esto con el fin de garantizar plenamente el uso de las unidades, sin el miedo que actualmente estamos viviendo como sociedad, nuestro trabajo debe de ser firme y arduo en beneficio de nuestros ciudadanos coahuilenses.

**TERCERO. –** Del análisisde la proposición con punto de acuerdo planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, se desprende que estamos totalmente de acuerdo con la ponente, en el sentido de que las unidades de transporte cualquiera que sea, deben proporcionar seguridad, pero sobre todo tranquilidad a quienes las utilizan, de ahí que sea buena la propuesta en que debe solicitárseles que se instale una cámara de seguridad a fin de resguardar la integridad física de los usuarios.

Por el simple hecho de que se empiecen a instalar cámaras de seguridad en las unidades de transporte, estamos seguros que empezaran a bajar estadísticamente el número de delitos principalmente los que se cometen sobre las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se pronuncia a favor de la Proposición con Punto de Acuerdo planteada y por ello tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO. -** Envíese un atento exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; exhortándolo a que analice la posibilidad de que le solicite por su conducto a los propietarios de las rutas, de camiones, unidades de taxis, y en general todos los que pertenezcan a algún transporte público del Estado, para que en la medida de sus posibilidades, consideren instalar unidades de cámaras y monitoreo satelital, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios.

**SEGUNDO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 agosto de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. EDGAR GERARDO SANCHEZ GARZA**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JESUS BERINO GRANADOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada Rosa Nilda González Noriega, “con objeto de que esta Soberanía por conducto de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, considere la posibilidad de solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado, reconsidere los lineamientos que tiene para la operación de las unidades de transporte público, buscando que puedan brindar el servicio las que se encuentran en buenas condiciones físicas y mecánicas, y no solo por su modelo.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 03 de junio del año en curso, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada Rosa Nilda González Noriega, “con objeto de que esta Soberanía por conducto de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, considere la posibilidad de solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado, reconsidere los lineamientos que tiene para la operación de las unidades de transporte público, buscando que puedan brindar el servicio las que se encuentran en buenas condiciones físicas y mecánicas, y no solo por su modelo.

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor turnó al Coordinador de esta Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, “con objeto de que esta Soberanía por conducto de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, considere la posibilidad de solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado, reconsidere los lineamientos que tiene para la operación de las unidades de transporte público, buscando que puedan brindar el servicio las que se encuentran en buenas condiciones físicas y mecánicas, y no solo por su modelo, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

“La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno de Coahuila establece que solo las unidades de modelo 2006 en adelante pueden ofrecer el servicio de transporte público, de personal y escolar al considerar que se encuentran en buenas condiciones físicas y mecánicas.

Las unidades modelos anteriores al 2006 no pueden actualizar su refrendo por ser de modelo anterior al establecido por las autoridades, sin importar que se encuentren en buenas condiciones para brindar el servicio.

A decir de los concesionarios actualmente existen unidades de modelos recientes que están brindando el servicio en muy malas condiciones, debido que no se les da el cuidado ni el mantenimiento necesario, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios.

Esta situación demuestra que el requisito establecido por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad que establece que las unidades sean modelos 2006 en adelante para operar, no necesariamente garantiza condiciones óptimas, por lo que debería excluirse esa parte y contemplar a los vehículos abajo de este modelo que cumplan con las condiciones físicas y mecánicas puedan prestar el servicio.

De esta manera una gran cantidad de unidades en buenas condiciones que se han quedado fuera de servicio volverían a trabajar, representando un beneficio tanto para el usuario como para el estado al captar los recursos de estos permisos y refrendos.

Las unidades sin importar modelo ni procedencia deberían pasar por una exhaustiva revisión, que incluso podría ser por un taller externo a la dependencia, para que acredite las que se encuentren en buenas condiciones para seguir prestando el servicio.

Es necesario que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; no autorice el funcionamiento de las unidades únicamente por no estar dentro del modelo permitido, sino porque cumplan con las condiciones físicas y mecánicas que se necesita para ofrecer un servicio de calidad y eficiente para los usuarios.”

**TERCERO. –** Del análisisde la proposición con punto de acuerdo planteada por la Dip. Rosa Nilda González Noriega, se desprende que estamos totalmente de acuerdo con la ponente, en el sentido de que existen muchas unidades del servicio público que aun y cuando son de modelo anterior al año 2006, se encuentran en mucho mejores condiciones físicas y mecánicas para poder brindar el servicio de transporte a la ciudadanos coahuilenses.

Así mismo, también coincidimos plenamente con la ponente de la proposición en el sentido de que si bien es cierto existen unidades de transporte de años recientes y cuentan con su refrendo para trabajar, éstas se encuentran en condiciones físicas o mecánicas no aptas para brindar un servicio de calidad, poniendo en riesgo la integridad física de quienes hacen uso de esas unidades en mal estado.

Consideramos que debe haber flexibilidad por parte de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad para que una vez que se realicen exhaustivas revisiones mecánicas se pueda permitir el proporcionar el servicio de transporte a todas las unidades que se encuentren acreditadas para ello.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se pronuncia a favor de la Proposición con Punto de Acuerdo planteada y por ello tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO. -** Envíese un atento exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; solicitándole que analice la posibilidad de que se autorice el funcionamiento de las unidades del servicio público no solamente por estar dentro del modelo permitido, sino que se puedan dar refrendos para operar a todas las unidades de modelos anteriores al año 2006, que cumplan con las condiciones físicas y mecánicas que se necesita para ofrecer un servicio de calidad y eficiente para los usuarios.

**SEGUNDO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 agosto de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. EDGAR GERARDO SANCHEZ GARZA**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JESUS BERINO GRANADOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos de esta LXI Legislatura, con el objeto de que esta Soberanía solicite a la Secretaría de Salud Federal, al Consejo Nacional de Salud y al Instituto Nacional de Migración, informen a este Poder Legislativo las cifras y datos en su poder referentes al impacto el Cóvid-19 en la población migrante del país, y en su caso, el total de recursos financieros, de infraestructura y humanos que fueron destinados para apoyar a dicho sector durante la pandemia y hasta la fecha presente; lo anterior con base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

En fecha 18 de marzo del presente año, a través de los medios de comunicación, se dio a conocer lo siguiente:

<https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/18/el-inm-promete-tomar-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19-entre-migrantes?utm_source=internal&utm_medium=branded>

“…El Instituto Nacional de Migración (INM) informó este martes que aplicará las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a fin de evitar el hacinamiento y contagio masivo del COVID-19 entre los extranjeros que se encuentren en sus estaciones o estancias.

En un comunicado, la institución indicó que desde enero se realizan las acciones sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, como contar con los insumos necesarios y suficientes de higiene (jabón y gel antibacterial a base de alcohol) para mitigar al máximo los riesgos del virus en las sedes donde se recibe y atiende a las personas migrantes.

El INM tiene una capacidad para alojar 6,728 personas y, a la fecha, la ocupación es de 3,059, lo que representa un 45.46%. El instituto asegura que ninguno de sus recintos migratorios registra hacinamiento de extranjeros.

Aunado a lo anterior, Migración destacó que monitorea y supervisa las condiciones de salud de la comunidad migrante bajo su resguardo, con atención especial a grupos vulnerables como adultos mayores, niñas y niños acompañados; además, difunde las campañas de información de la Secretaría de Salud a fin de prevenir a personas migrantes nacionales y extranjeras sobre el contagio del coronavirus.

Este martes, la CNDH emitió un comunicado en el que pidió tomar acciones urgentes para evitar condiciones de hacinamiento en esas instalaciones y evitar con ello contagios masivos. También urgió a mantener informada a la población en contexto de migración en esos sitios, y a la población visitante, sobre las acciones y medidas preventivas que deben adoptarse de acuerdo con la evolución de la contingencia para prevenir y atender la enfermedad.

La CNDH también expresó su preocupación ya que, de no generarse acciones inmediatas, se cometerían hechos violatorios que "pudieran afectar la salud, la integridad, la seguridad y la vida" de las personas bajo resguardo…” **Fin de la cita.**

Pese a lo anterior, para el 25 de marzo la situación de los migrantes ya era alarmante debido a factores diversos, empezado por le hecho de que los albergues a lo largo y ancho de la frontera mexicana empezaron a cerrar sus puertas ante el temor generado por el Covid-19, al mismo tiempo que se incrementaba el número de repatriados por Estados Unidos a suelo nacional.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reportó que, del primero al 18 de marzo, habían sido repatriadas 13 mil personas de Estados Unidos, más de los que llegaron en todo el mes de febrero, cuando fueron repatriadas 12 mil 400 personas.

Los albergues anunciaron cierres en unos casos, y la restricción absoluta de nuevos ingresos en otros, todo esto durante el mes de marzo, cuando apenas empezaba todo.

Para el 08 de abril, se dio a conocer la siguiente noticia:

<https://www.msf.es/actualidad/mexico/covid-19-mexico-la-situacion-los-migrantes-frente-la-pandemia-alarmante>

“ COVID-19 en México: la situación de los migrantes frente a la pandemia es alarmante.

Como constataron nuestros equipos durante visitas realizadas en 2019 a diversas Estaciones Migratorias en el sur de México, estos espacios no contaban con atención médica regular ni disponían entonces de servicios básicos como agua, entre otros factores que los convertían en caldos de cultivo ideales para la propagación de brotes de enfermedades, la COVID-19 entre ellas.

Médicos Sin Fronteras pedimos a las autoridades de México que liberen a todos los migrantes que actualmente se encuentran en los centros de detención y aseguren el diagnóstico y la asistencia médica de aquellos que lo requieran para evitar posibles contagios.

“Teniendo en cuenta el grado de expansión de la epidemia de COVID-19 en México, mantener migrantes detenidos en las estaciones migratorias pone en serio riesgo la salud de estas personas”, señala Sergio Martin, nuestro

responsable de operaciones en México…” **Fin de la cita.**

Del 20 de marzo al 12 de abril, diversas organizaciones reportaron que más de 10 mil migrantes habían sido deportados por Estados Unidos a través de sus fronteras con México. Cuando se trató de acceder a información oficial de cifras, nacionalidades y condiciones de salud de estos repatriados, las autoridades nacionales evadieron los requerimientos de información.

El 15 de abril se dio a conocer que las autoridades migratorias mexicanas habían transportado (el 08 de abril) en camiones a cientos de migrantes hacia la frontera con Guatemala, para abandonarlos ahí a su suerte, y pedirles que por sus propios medios retornaran a sus países. Transportación que se llevó a cabo sin observar ningún protocolo sanitario.

El Instituto Nacional de Migración sostuvo durante abril que habría liberado voluntariamente a casi todos los migrantes que se hallaban en los 65 albergues y estaciones migratorias a su cargo.

Para el 03 de junio, se conoció de manera oficial que 46 migrantes habían contraído covid-19, sobre todo en los estados de Baja California, Tamaulipas y Ciudad de México, aunque diversas organizaciones apuntaban a que los contagios eran más.

El 02 de julio la UNAM dio a conocer lo siguiente:

<https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/07/01/en-mexico-hay-100-mil-migrantes-en-riesgo-por-covid-19-alerta-la-unam-4683.html>

“En México hay 100 mil migrantes en riesgo por Covid-19, alerta la UNAM.

La emergencia sanitaria en México por la Covid-19 a colocado a decenas de miles de migrantes en peligro, pero las acciones y omisiones del Estado mexicano en materia migratoria suman a este riesgo y vulneran los derechos de alrededor de 100 mil personas migrantes y solicitantes de asilo, de acuerdo con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

En el informe “Propuesta de rutas de alternativas a la detención para la población migrante y solicitante de asilo en México durante la pandemia del Covid-19”, presentado este jueves por el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) UNAM, se señala que a pesar de las acciones paliativas recientemente anunciadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), la autoridad migratoria ha sido omisa en garantizar condiciones adecuadas de atención de los migrantes que son detenidos en México, y en prevenir el riesgo de contagio.

El informe indica que en México hay unos 100 mil migrantes en riesgo ante la pandemia, entre ciudadanos mexicanos y centroamericanos que han sido deportados de Estados Unidos, ciudadanos detenidos por las autoridades migratorias mexicanas y solicitantes de asilo que están esperando la resolución de sus casos en diferentes partes de México.

Y, aunque hay resoluciones judiciales en favor de las personas migrantes, y requerimientos específicos al respecto de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “la respuesta de las autoridades mexicanas impide garantizar los derechos vulnerados y es consistentemente elusiva”. El informe añade que ninguna autoridad han definido una estrategia o acciones dispersas para atender a las personas migrantes en condición de riesgo ante la pandemia…” **Fin de la cita.**

La situación de la población migrante en México es una historia de vulnerabilidad, violaciones de derechos humanos, condiciones inhumanas y una constante privación de derechos esenciales.

A la fecha, la información sobre la realidad de lo que están viviendo por la pandemia no se conoce, y debemos conocerla todos. Se trata de un asunto de derechos humanos, y como lo establece la Ley General de Transparencia, estos temas no están sujetos de reserva o confidencialidad y toda información al respecto debiera tener carácter público; de tal suerte que como legisladores hagamos lo que nos corresponde tanto en el aspecto de proponer soluciones inmediatas, como en el de ejercitar el derecho de denuncia en representación de estos grupos humanos.

Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:

**Proposición con Puntos de Acuerdo**

**Que, por las características del caso, solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**ÚNICO. Este H. Pleno solicita a la Secretaría de Salud Federal, al Consejo Nacional de Salud y al Instituto Nacional de Migración, informen a este Poder Legislativo las cifras y datos en su poder referentes al impacto el Cóvid-19 en la población migrante del país, y en su caso, el total de recursos financieros, de infraestructura y humanos que fueron destinados para apoyar a dicho sector durante la pandemia y hasta la fecha presente.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 105, fracción IV, 179, 180 y 182 párrafo segundo de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván (Coordinadora)** | **Dip. María Esperanza Chapa García**  **(Secretaria)** |
| **Dip. Verónica Boreque Martínez González** | **Dip. Blanca Eppen Canales** |
|  |  |

**Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor.**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO, CON EL OBJETO DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA QUE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO DEL OXÍMETRO DE PULSO O PULSIOXÍMETRO EN LAS FAMILIAS MEXICANAS COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, YA QUE PERMITE DETECTAR ALTERACIONES EN LA SATURACIÓN DE OXÍGENO Y ASÍ BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE QUE PRESENTEN MAYORES COMPLICACIONES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Diana Patricia González Soto, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada de urgente y obvia resolución en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS), informa que el nuevo coronavirus podría convertirse en un patógeno endémico, sabemos que la vacuna puede tardar aún algunos meses más para empezar a aplicarse, lo que deja a la detención oportuna en un arma disponible para combatirlo.

En estos momentos hablar de más de 67 mil defunciones y más de 623 mil casos de contagios de Covid-19 en México, nos lleve a reflexionar sobre miles de experiencias vividas en los pacientes infectados por Covid-19 y por lo familiares que vivimos muy de cerca estos difíciles y dolorosos momentos, de ver a un ser querido que va agonizando frente a ti y que no puedes hacer nada para remediarlo.

A diferencia de hace 6 meses, cuando se detectaron los primeros casos de Covid-19 en nuestro país, mucha gente incrédula siguió haciendo su vida normal como si nada pasara…. Y al trascurrir el tiempo y con el incremento de los contagios, la ciudadanía nos fuimos dando cuenta que ésta era real, porque empezó a afectar a nuestros amigos, a conocidos, a compañeros, a familiares y a nuestros seres queridos.

A lo largo de estos meses hemos aprendido más acerca del comportamiento del virus, hemos respetado las medidas y protocolos de salubridad, que tan atinadamente nuestro Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, nos ha marcado a través de los subcomités técnicos regionales covid-19.

Y poco a poco hemos ido erradicando los mitos y los miedos que surgieron en torno a esta pandemia, como el hecho de no llevar a nuestros pacientes a los hospitales porque inmediatamente iban a ser intubados.

Hoy aprovecho esta tribuna para dar mi testimonio de vida. Porque estoy segura de que a cientos o miles de personas nos ha sucedido por desconocimiento de las manifestaciones de esta infección viral y evitar que a más familias de México y de Coahuila les pueda suceder.

El Covid-19 se presenta de diversas maneras y sus síntomas son muy variados, dolor de garganta, conjuntivitis, dolor de cabeza, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del gusto, fiebre, tos seca y cansancio, que las personas nos podemos confundir fácilmente con cualquier otro padecimiento y de un dolor de estómago, se complica en diarrea, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, tos, dolor muscular, entre otros y empezamos a recetar medicamentos pensando que es algo normal y que pronto va pasar.

Checamos temperatura, presión y hasta los niveles de azúcar, pero nunca checamos el oxígeno, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, perdemos días tratando con remedios caseros y cuando vemos que el paciente no mejora lo llevamos al médico que te pide la prueba del covid-19 y al hacerla, mientras esperamos 3 o 4 días más para que den el resultado, la salud del paciente cada vez se deteriora más y es que puede existir la baja oxigenación de manera asintomática y los pacientes no suelen detectar la falta de oxígeno hasta que ya es demasiado tarde y con claros síntomas hipoxia feliz o neumonía silenciosa, pues se ha detectado a miles de pacientes que ni siquiera llegan a sentir asfixia o falta de aire.

La mayor parte de los pacientes hospitalizados de manera urgente es porque su saturación del oxígeno es muy baja y porque se perdieron muchos días en casa sin saber que estaban infectados de Covid-19.

En estos tiempos de pandemia los especialistas aconsejan que tengamos un oxímetro de pulso en casa.

El oxímetro de pulso se encarga de medir el porcentaje de oxígeno que viaja a través de la sangre, es una medición muy rápida y son dispositivos muy sencillos que los puedes conseguir en las farmacias, no invasivos y muy fáciles de usar, completos, ligeros y prácticos.

Es un pequeño aparato que se puede tener en casa, como el termómetro o el baumanómetro de muñeca y que no necesita muestra de sangre, a través de una pinza donde se pone la yema del dedo, donde se mide la saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardiaca.

El uso de estos dispositivos es clave para verificar el estado de aquellas personas que presentan síntomas de coronavirus o contrajeron la enfermedad, de hecho, quienes resultan positivo en la prueba de Covid-19, lo primero que le sugiere el neumólogo o médico de cabecera es monitorear constantemente la saturación de oxígeno durante el aislamiento en casa.

Quienes estuvieron contagiados o tienen o han tenido a un familiar infectado saben de lo estoy hablando….. pero debo de ser honesta y compartir con ustedes que yo no tenía idea de lo que era un oxímetro y cuál era su uso y en estos momentos de pandemia este dispositivo puede salvar la vida del paciente.

Los oxímetros son muy útiles para pacientes con enfermedades de asma, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, insuficiencia cardiaca cognitiva entre otras, ya que permite monitorear la enfermedad y detectar las alteraciones en la saturación de oxígeno a tiempo y así buscar atención médica antes de presentar mayores complicaciones

En condiciones normales la concentración de oxígeno debe de fluctuar entre 95% y 100% y cuando baja de 90% debemos poner atención porque podemos presentar alguna insuficiencia respiratoria.

Es por ello que, en este punto de acuerdo, queremos exhortar a concientizar a las autoridades de salud federal a que promuevan a través de campañas, el uso del oxímetro, informando sus ventajas, con el fin de familiarizarnos con su uso ya que podría ser un factor determinante para la detención oportuna y una oportunidad única de detectar a tiempo la falta de oxigenación que puede hacer la diferencia de atención hospitalaria.

Quien hemos vivido de cerca esta enfermedad, sabemos la importancia de incorporar el oxímetro a la nueva normalidad, es por ello la urgente medida de su difusión como una alternativa o herramienta más de prevención contra el Covid-19

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. - ESTE H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, ENVÍE UN EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA QUE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO DEL OXÍMETRO DE PULSO O PULSIOXÍMETRO EN LAS FAMILIAS MEXICANAS COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, YA QUE PERMITE DETECTAR ALTERACIONES EN LA SATURACIÓN DE OXÍGENO Y ASÍ BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE QUE PRESENTEN MAYORES COMPLICACIONES.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

**DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**

**DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA**

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ**

**DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**

**DIP. JESÚS BERINO GRANADOS**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo que en la Vía de Urgente y Obvia Resolución presenta la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos de Coahuila (CEAS) a fin de que realice las gestiones y acciones necesarias para obtener el pago del adeudo que Altos Hornos de México (AHMSA) tiene con ellos, y que a su vez le permita cumplir con el pago al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS) de Monclova-Frontera, con quien la CEAS tiene un considerable adeudo; lo anterior base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

La difícil situación económica de Altos Hornos de México ha ocasionado un severo problema económico al incumplir con sus compromisos de pago a proveedores, por servicios, materias primas e insumos para sus operaciones.

A decir del director de la CEAS, Antonio Nerio Maltos, la empresa AHMSA les adeuda alrededor de 200 millones de pesos; y a su vez, la CEAS adeuda cerca de 90 millones de pesos al SIMAS Monclova- Frontera por del agua tratada que proporciona a la empresa siderúrgica AHMSA para el uso en sus procesos industriales.

Aunque AHMSA ha manifestado su intención de cubrir el adeudo, incluso en especie con algunos activos, hasta el momento no se ha concretado, lo que mantiene paralizado el flujo económico que beneficiaría a los municipios de Monclova y Frontera, vía innumerables proyectos que permitirían mejorar la calidad de vida de los habitantes además de la derrama económica que generarían por el suministro del vital líquido, y que, como sabemos, es uno de los primordiales derechos humanos en el mundo, lo que muchas veces no es una realidad al menos no para todos los sectores de nuestra población.

Mientras empresas como AHMSA reciben agua, incluso aunque presenten meses de un atraso considerable en el pago del servicio, existen muchas personas a las que les fue interrumpido por no poder pagar su recibo en medio de la pandemia.

Además, al haber recibido AHMSA el servicio, es su obligación cumplir con el pago, para que a su vez puedan seguir concretándose proyectos y obras que mejoren el servicio que recibe la comunidad.

Es importante que las autoridades establezcan un sistema de cobro efectivo a la empresa para que pueda cubrir este adeudo a la mayor brevedad posible, para que SIMAS pueda emprender proyectos que permitan llevar el vital líquido en cantidad y calidad suficientes a los ciudadanos que aún carecen de él y por ende más lo necesitan.

Actualmente existen comunidades rurales ubicadas a lo largo y ancho de nuestros municipios que requieren de manera urgente el abastecimiento del servicio, lo que sería mucho más sencillo si CEAS logra que AHMSA cubra el adeudo que presenta y que esta a su vez, pueda cumplir con los pagos pendientes con el SIMAS Monclova-Frontera.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.

**ÚNICO. Este H. Pleno envíe una atenta solicitud a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos de Coahuila (CEAS) a fin de que realice las gestiones y acciones necesarias para obtener el pago del adeudo que Altos Hornos de México (AHMSA) tiene con ellos, y que a su vez le permita cumplir con el pago al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS) de Monclova-Frontera con quien la CEAS tiene un considerable adeudo.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

GRUPO PARLAMENTARIO DEL “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA CON LA FINALIDAD DE EXHORTAR A LA JUNTA LOCAL DEL INE A BRINDAR INFORMACION OPORTUNA PARA QUIENES TRAMITAN SU CREDENCIAL DE ELECTOR.**

**DIPUTADO PRESIDENTE. -**

**H. Congreso del Estado de la Sexagésima Primera Legislatura**

**PRESENTE. -**

**Su servidora Zulmma Verenice Guerrero Cázares con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, conjuntamente con mi compañero Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de las siguientes:**

**CONSIDERACIONES**

**La ciudadanía encuentra en la credencial para votar con fotografía en un instrumento que le da identidad, y le permite ejercer derechos ciudadanos como el ir a votar.**

**Es el documento por excelencia para identificar nuestra identidad como mexicanos y nos es útil para realizar trámites ante instituciones públicas y privadas, y también es el documento que nos permite ejercer nuestra ciudadanía y elegir a las autoridades en procesos electorales. De esta manera es el documento que da vida a nuestra voluntad ciudadana.**

**La pandemia como hemos venido reflexionando ha afectado diversos derechos humanos ante el escenario de restringir actividades para reducir contagios. De los que más se han visto afectados son: los derechos civiles y políticos.**

**Como recordarán la elección donde se elegirán Diputados locales fue pospuesta por el Consejo General del INE en el mes de abril pasado y fue el mismo Consejo quien decidió reanundarla para que se lleven las campanas en todo este mes, parte de octubre y realizarse los comicios el 18 de octubre.**

**La declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 21 que:**

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Nuestra Constitución Política Mexicana en el artículo 35 enuncia que son derechos de la ciudadanía:

1. Votar en las elecciones populares;
2. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación
3. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; Fracción reformada DOF 06-04-1990, 22-08-1996
4. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes.

**A propósito del actual contexto electoral y la pandemia es importante recordar que los módulos del INE cerraron y recientemente en agosto abrieron con ciertas medidas restrictivas entre ella a través de citas. De acuerdo a la información institucional las credenciales autorizadas para votar son aquellas que se expidieron antes del 15 de enero aunque la entrega se ha demorado por la pandemia.**

**Ante toda esta situación de la pandemia Covid-19 ha habido confusiones entre los ciudadanos como se consideran los tiempos, y las formas de entrega de la credencial**

Si bien el delegado del INE en Coahuila indicó que a partir del 1 de septiembre y hasta el 2 de octubre se podrán realizar trámites de reimpresión de la credencial para votar de las ciudadanas y ciudadanos que la hayan extraviado y la fecha límite para entregar las credenciales será el 16 de octubre.

Es necesario dar claridad a la ciudadanía de quienes y que tramites realizarán y sobre todo que trato darán a las personas adultas mayores que acuden a los módulos a tramitar dicho servicio.

La confusión ha girado en torno a si las credenciales que están aprobadas para votar se harán antes del 18 de octubre día de la elección y cuáles se entregarán en una fecha posterior.

Aunque existe una aviso en la pagina de internet que indica: *“En relación con las solicitudes de inscripción al Padrón Electoral, así como otros trámites de actualización de la credencial, José Luis Vázquez López indicó que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se encuentra haciendo los análisis correspondientes, por lo que más adelante se dará a conocer lo que se defina en este tema”,* por ello es necesario tener información actualizada y sobre todo ahora que iniciaron las campanas para no confundir a la ciudadanía.

Y aunque la apertura será paulatina es pertinente fortalecer esquemas de comunicación y accesibilidad sobre todo a personas adultas mayores y con alguna discapacidad. Para atender 38 municipios 11 módulos en proceso electoral resultan insuficientes.

**El grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila ha recibido inquietudes de ciudadanas y ciudadanos que acuden a los módulos correspondientes de una ciudad a otra y los encuentran cerrados o simplemente no los reciben.**

**Es por lo anteriormente expuesto que proponemos con carácter de urgente y obvia resolución:**

**PRIMERO. - Que este H. Congreso del Estado exhorte a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) para ampliar el número de módulos de atención ciudadana y de esa manera garantizar la entrega de credenciales de elector de las personas que tienen derecho a votar en la elección del 18 de octubre o que requieren dicho documento para otro tramite.**

**SEGUNDO. - Que H. Congreso Local exhorte a la Junta Local del INE de Coahuila a informar bajo los principios de máxima certeza y publicidad los requisitos o pasos que deben realizar las personas para tramitar o reponer su credencial de elector más allá de las plataformas tecnológicas, sobre todo en lugares de difícil acceso a la tecnología.**

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”**

**UNIDAD DEMOCRATICA DE COAHUILA**

**SALTILLO, COAHUILA A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), CON OBJETO DE EXHORTAR AL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA A DIFUNDIR, POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES, LOS PROTOCOLOS Y MEDIDAS SANITARIAS QUE SE ADOPTARÁN PARA PREVENIR Y EVITAR CONTAGIOS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.**

La suscrita, **DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ,** del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (**MORENA**), con fundamento en las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso, comparezco para presentar Proposición con Punto de Acuerdo, para que el Pleno del Congreso exhorta al Instituto Electoral de Coahuila a difundir, por todos los medios posibles, los protocolos y medidas sanitarias para prevenir y evitar contagios durante la jornada electoral del 18 de octubre del presente año.

Sustento mi proposición al tenor de las siguientes consideraciones:

Después de mucha polémica y controversias, algunas de las cuales llegaron hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por fin se reanudó el proceso electoral y serán las y los ciudadanos quienes, con su voto, determinarán la integración de la próxima legislatura.

Por supuesto que, como en cualquier juicio, la parte desfavorecida en sus pretensiones criticará la sentencia. Es natural que la frustración derive en la descalificación. Sin embargo, la resolución de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral es firme y definitiva, lo que significa que, contra ella, no procede recurso alguno.

A diferencia de otros, yo celebro que la Sala Superior haya ratificado el acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Considero que el ejercicio del voto es una actividad esencial para mantener el Estado Democrático de Derecho.

También considero que no hay colisión entre el derecho a la vida y la salud y los derechos político electorales de la ciudadanía. El derecho al voto no excluye, de ninguna manera, el derecho a la vida y la salud.

Ya son varios los países en el mundo que, en los tiempos del coronavirus, han celebrado procesos electorales sin que la realización de los mismos haya provocado rebrotes o mayores tasas de contagio.

Por supuesto que las elecciones y su jornada electoral deben adecuarse a la nueva normalidad. En España, donde realizaron elecciones el País Vasco y Galicia, se prohibió que los ciudadanos diagnosticados como casos activos pudieran ejercer su voto.

No obstante, en Corea del Sur, se diseñaron casillas especiales para que los enfermos pudieran ejercer su derecho al voto.

Debemos aprender de estas experiencias y aplicar las que han sido exitosas. Por ejemplo, el personal encargado de recibir los sufragios debe contar con equipo de seguridad; se deben evitar las aglomeraciones y, de preferencia, señalizar los lugares en la fila a fin de garantizar la sana distancia.

El documento con el que se identifica el elector no debe entregarse sino solo mostrarse, para evitar cualquier riesgo de contagio; Se deben proveer las casillas de gel desinfectante y equipo para tomar la temperatura.

Se pueden y se deben diseñar protocolos y medidas sanitarias para prevenir y evitar los contagios en las casillas, de tal manera que se garantice la salud de los votantes.

Estoy segura que el Instituto Electoral de Coahuila tomara estas y otras medidas similares para garantizar la salud, pero de poco servirán estos protocolos y medidas si no se difunden ampliamente entre los potenciales electores.

Ante la campaña del miedo que algunos utilizaron para evitar la celebración de la elección y cuyo impacto es imposible de medir, el órgano electoral debe responder con una amplia campaña de difusión que le brinde confianza a los electores para que concurran a emitir su voto el 18 de octubre.

Todos sabemos que las elecciones donde solo se eligen diputados locales, las mal llamadas elecciones huérfanas, se han caracterizado por su baja participación ciudadana y su alto nivel de abstencionismo.

Ahora, en los tiempos del coronavirus, se pronostica que el abstencionismo será aún mayor. Por ello es vital que todos, pero en especial el Instituto Electoral de Coahuila, promovamos que las y los ciudadanos cumplan con su derecho democrático de votar y elegir libremente a sus representantes.

En nuestro país el sufragio es un derecho y una obligación. Pero el incumplimiento de esta obligación no causa ninguna sanción y está bien. La ciudadanía no debe ejercer el voto solo por temor a ser sancionado: La ciudadanía debe ejercer su derecho al voto como una expresión de libertad, responsabilidad y compromiso con la democracia.

Por lo expuesto, solicito al Pleno del Congreso del Estado, se sirva calificar como de urgente y obvia la resolución y, en su caso, aprobación, de la siguiente

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO:** El Pleno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, respetuosamente exhorta al Instituto Electoral de Coahuila a difundir, por todos los medios posibles, los protocolos y medidas sanitarias para prevenir y evitar contagios durante la jornada electoral del 18 de octubre del presente año.

Saltillo, Coahuila, a 9 de septiembre de 2020.

**DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE**  **A LA JUEZA PENAL SILVIA CATALINA ORTIZ CASTAÑEDA Y AL MINISTERIO PÚBLICO JESÚS OSVALDO HERNÁNDEZ SANTOS, ASÍ COMO AL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO A LA MUJER, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SANCIONAR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL CONTENIDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1653/2020.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 21 fracciones VI y VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través de la que se exhorta respetuosamente a la Jueza Silvia Catalina Ortiz Castañeda y al Ministerio Público Jesús Osvaldo Hernández Santos así como al Centro de Justicia y Empoderamiento a la Mujer, a que en el ámbito de sus competencias, realicen todas las acciones necesarias para sancionar el delito de abuso sexual contenido en la carpeta de investigación 1653/2020

**MOTIVOS DE ESTA PROPOSICIÓN.**

En días pasados un grupo de mujeres pertenecientes al Frente Feminista de Saltillo, expusieron a través de sus redes sociales una serie de irregularidades y omisiones por parte de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales en el caso de una joven saltillense que presentó una denuncia por abuso sexual.

En su comunicado el Frente Feminista de Saltillo y sus colectivas exigen a la Jueza Silvia Catalina Ortiz Castañeda y al Ministerio Público Jesús Osvaldo Hernández Santos, reabrir la carpeta de investigación y que se lleve a cabo un proceso judicial con debida diligencia, perspectiva de género y víctimal, ya que como ellas mencionan, desde el inicio de la investigación acontecieron una serie de negligencias por parte del ministerio público ya que no se aplicó norma 046 ni se permitió que se presentaran testigos.

Recordemos que la Norma Oficial Mexicana 046, tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación al ministerio público de los casos de abuso sexual.

De la misma forma el derecho a presentar testigos, constituye una garantía básica que debe seguirse en todo procedimiento penal, por lo que de no permitir a cualquiera de las partes, la presentación de sus testigos, constituye una grave violación a los derechos humanos en especial a los relacionados con el debido proceso.

Como lo hemos manifestado en infinidad de ocasiones, la violencia contra la mujer es un mal estructural, institucionalizado y normalizado que debemos combatir desde todas las trincheras. No estamos prejuzgando el trabajo de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales, pero sí queremos exhortarles a que en todo momento se conduzcan con total apego a la justicia con perspectiva de género y a que realicen todas las acciones necesarias para eliminar la impunidad que desgraciadamente sigue siendo un tema pendiente en todo el país.

Desde esta tribuna parlamentaria, nos sumamos a la exigencia de Justicia de las víctimas de abuso sexual, y solicitamos respetuosamente a las autoridades correspondientes a que en este tipo de casos se actúe con la debida diligencia y cuidado para evitar mayores daños y sufrimientos a las víctimas.

Es por estas razones que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar ante esta H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

Misma que solicitamos sea tramitada como de urgente y obvia resolución.

**ÚNICO.-** Se exhorta respetuosamente a la Jueza Silvia Catalina Ortiz Castañeda y al Ministerio Público Jesús Osvaldo Hernández Santos así como al Centro de Justicia y Empoderamiento a la Mujer, a que en el ámbito de sus competencias, realicen todas las acciones necesarias para sancionar el delito de abuso sexual contenido en la carpeta de investigación 1653/2020, apegados en todo momento a los principios rectores de la investigación y justicia con perspectiva de género y de las víctimas.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 9 de septiembre de 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.**

Proposición con punto de acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, por medio del cual solicita a la Comisión Federal de Electricidad, proporcione el suministro de energía eléctrica de manera adecuada, en el municipio de San Pedro, Coahuila, toda vez, que tanto en la zona urbana como rural del mismo, desde hace más de un mes, existe un pésimo servicio de energía, que está ocasionando problemas a la ciudadanía.

**H. Pleno del Congreso del Estado**

**de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.-**

El Suscrito Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a este H. Pleno del Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

Sin lugar a duda, la energía eléctrica, representa uno de los servicios más importantes prestados por el Estado para todos los habitantes de este país, por tanto, es necesario abordar el desafío que representa para quien encabeza el gobierno, el brindar de manera eficiente y justa a la población, uno de los elementos más básicos para la vida de todos los ciudadanos, pues sin acceso a energía eléctrica serían inalcanzables otros derechos.

En efecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en todo momento, la obligación de asegurar para la población el acceso a la electricidad de forma suficiente con calidad continua, segura, aceptable, económicamente asequible, pero sobre todo justa bajo los principios de respeto a la dignidad humana.

Si bien es cierto, está establecido que los ciudadanos debemos pagar por ese servicio de suministro de energía eléctrica, es imperdonable que en tiempos de severa crisis económica como por los que estamos atravesando actualmente producto de la pandemia denominada Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le niegue o proporcione un deficiente servicio a los mexicanos, pues con ello se vulneran los derechos humanos de éstos y los ponen en condiciones aún más precarias.

De igual forma, les comento que en estos ya casi seis meses de que nuestro Estado se ha visto afectado duramente por los estragos de la enfermedad denominada coronavirus, donde entre otras medidas para evitar la propagación del virus, aún sigue prevaleciendo el permanecer en casa, en el municipio de San Pedro, Coahuila durante este tiempo de aislamiento social, se ha estado proporcionando un pésimo servicio de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad.

En efecto, durante estos últimos meses, prácticamente todas las colonias y ejidos de mi municipio, se han visto afectados continuamente, pues han existido fallas en el servicio de energía eléctrica, lo cual ha provocado muchos problemas para la ciudadanía, desde alimentos echados a perder, como la imposibilidad de los estudiantes de todos los niveles educativos de acceder a su educación escolar de manera virtual o a distancia, como es la manera en que al día de hoy se está impartiendo.

Solo por mencionar un ejemplo de esas fallas en el suministro de energía eléctrica, colonias como Luis Donaldo Colosio, Barrio Monterrey, Ancora, así como los ejidos Concordia o Mayran, han pasado hasta días sin servicio provocando como les comente muchas incomodidades para los habitantes de esos lugares, principalmente con lo concerniente a la educación a distancia.

Así mismo, la oficina regional de servicios educativos, del municipio de San Pedro, Coahuila, en la cual se atienden diariamente muchos trámites tanto de estudiantes como docentes, está prácticamente desde hace días sin poder operar, debido al bajo voltaje de electricidad, lo cual sin lugar a duda, genera con justa razón molestia entre la población.

Cabe señalar, que existen muchas quejas por diversos medios, por parte de la ciudadanía, dirigidas al señor Alfredo Zuñiga Quintero, Gerente de Comisión Federal de Electricidad en San Pedro, Coahuila, a efecto de que atienda tales irregularidades, sin que hasta la fecha este servidor público que es el responsable en todo el municipio, les haya comentado el porqué de esas fallas en el suministro en el servicio, ni mucho menos les haya dado solución al problema de la falta de energía eléctrica.

Compañeras y compañeros diputados, considero que la Comisión Federal de Electricidad, debe atender de manera inmediata esta mala prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio de San pedro, Coahuila, pues tal y como se está otorgando dicho servicio, se está perjudicando a miles de personas especialmente a estudiantes de todos los niveles educativos, que están viendo restringida su educación a distancia, en esta nueva normalidad que vivimos hoy.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

Misma que solicito sea turnado a la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos, para que de considerarlo procedente apruebe lo siguiente:

**Primero.-** Que éste H. Pleno del Congreso del Estado, envíe un exhorto al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a efecto de hacer de su conocimiento el mal servicio de energía eléctrica que se está brindando por parte de esa Empresa Productiva del Estado, propiedad del Gobierno de la República, en el municipio de San Pedro, Coahuila, solicitándole además dentro de sus atribuciones el atender con prontitud ese deficiente suministro de electricidad en el municipio antes mencionado.

**Segundo.-** Que éste H. Pleno del Congreso del Estado, envíe un exhorto al señor Alfredo Zuñiga Quintero, Gerente de Comisión Federal de Electricidad en el municipio de San Pedro, Coahuila, a efecto de solicitarle que de manera urgente restablezca de manera adecuada el suministro de energía eléctrica en las colonias y ejidos del municipio de San Pedro, Coahuila, pues el mejor que nadie sabe perfectamente del pésimo servicio de energía que se está proporcionando actualmente a la ciudadanía y los efectos negativos que ello con lleva.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 9 de Septiembre de 2020.**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

**H. PLENO DEL CONGRESO**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con objeto de que este H. Pleno solicite al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública que informe a este Poder Legislativo lo siguiente: 1) Las razones por las que fue retirada de su sitio web la información de las controversias constitucionales interpuestas por la ASE, identificadas con los números C.C. 02/2019 y C.C. 03/ 2019; 2) El contenido de estas controversias y su estatus actual, y; 3) En caso de estar concluidas, se entregue a este H. Congreso, por conducto de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, una copia de ambas, incluyendo la sentencia recaída a cada una; lo anterior con base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

En Coahuila, de acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las controversias constitucionales se ejercitan en los supuestos siguientes:

*Artículo 7. Las controversias constitucionales locales. Las controversias constitucionales locales tienen por objeto dirimir los conflictos de competencia constitucional entre los Poderes del Estado, con excepción del Judicial; los que se susciten entre estos Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del propio Estado; así como los que tengan lugar con los organismos públicos autónomos, las entidades paraestatales o paramunicipales, o de éstas entre sí; que se susciten por invasión de las esferas de competencia establecidas en la Constitución Política del Estado, con base en el principio de supremacía constitucional, y por vía de consecuencia, se declare la validez o invalidez de la ley o del acto reclamado.*

*Artículo 9. La materia de las controversias constitucionales. Son controversias constitucionales, las que con excepción de las que se refieren a la materia electoral en los términos del artículo 136 de la Constitución del Estado, se suscitan entre:*

*…*

*VIII. Uno o más organismos públicos autónomos y otro u otros órganos del Gobierno Estatal o Municipal.*

En los hechos, ya tuvimos la experiencia en años anteriores, donde algunos sujetos obligados, como lo fue en su momento (años 2011 y 2012), la presidencia municipal de Piedras Negras, Coahuila, acudieron como medida dilatoria a la interposición de controversias constitucionales para evitar dar cumplimiento a los resolutivos del ICAI, hablamos, de acuerdo con la información de que tenemos en nuestro poder, de 8 controversias. Al final, el Tribunal Constitucional dio la razón en siete de las controversias al Instituto, y por ende al solicitante de la información.

Pero eso no es lo relevante, lo destacable es que no debió la presidencia municipal acudir en vía de controversia local para recurrir los resolutivos del organismo garante del acceso a la información, situación que generó un amplio debate entre constitucionalistas sobre dicho tema.

Desde 2009, es decir, dos años antes de las controversias a que hacemos mención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido los siguientes criterios:

Novena Época

Registro: 166197

Instancia: Primera Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXX, Octubre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CLXXXIII/2009

Página: 1003

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS EMITIDAS POR ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, CUANDO NO EXISTA UN PLANTEAMIENTO DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES.

Si bien es cierto que la controversia constitucional es una acción reservada para preservar el orden constitucional entre órganos, entes o poderes en sus actos ordinarios, también lo es que en esa vía pueden estudiarse las resoluciones dictadas en procedimientos ordinarios, siempre y cuando se compruebe la existencia de una posible invasión al ámbito de sus competencias. En ese sentido, se concluye que la controversia constitucional es improcedente para controvertir una resolución emitida por un órgano constitucional autónomo estatal especializado en transparencia y acceso a la información, cuando no exista un planteamiento de invasión de esferas competenciales, toda vez que estimar lo contrario haría de ese juicio un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma litis debatida en el procedimiento administrativo natural, siendo que no es la vía idónea para revisar la legalidad de las resoluciones emitidas en procedimientos de adjudicación de carácter administrativo.

Novena Época

Registro: 167531

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIX, Abril de 2009

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.15o.A.118 A

Página: 1880

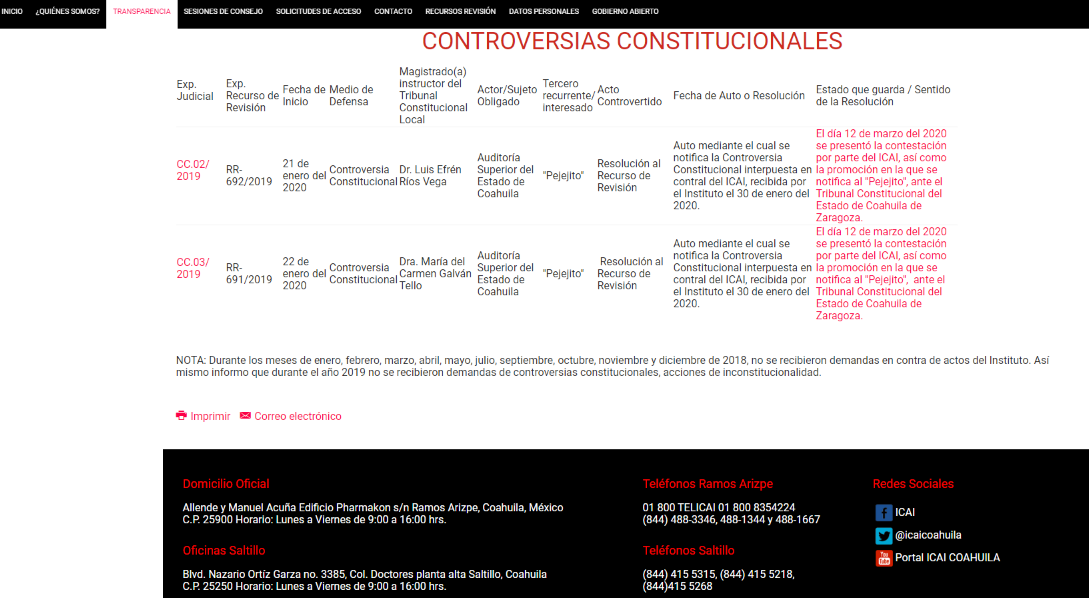
DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN DE ESA PRERROGATIVA.

….

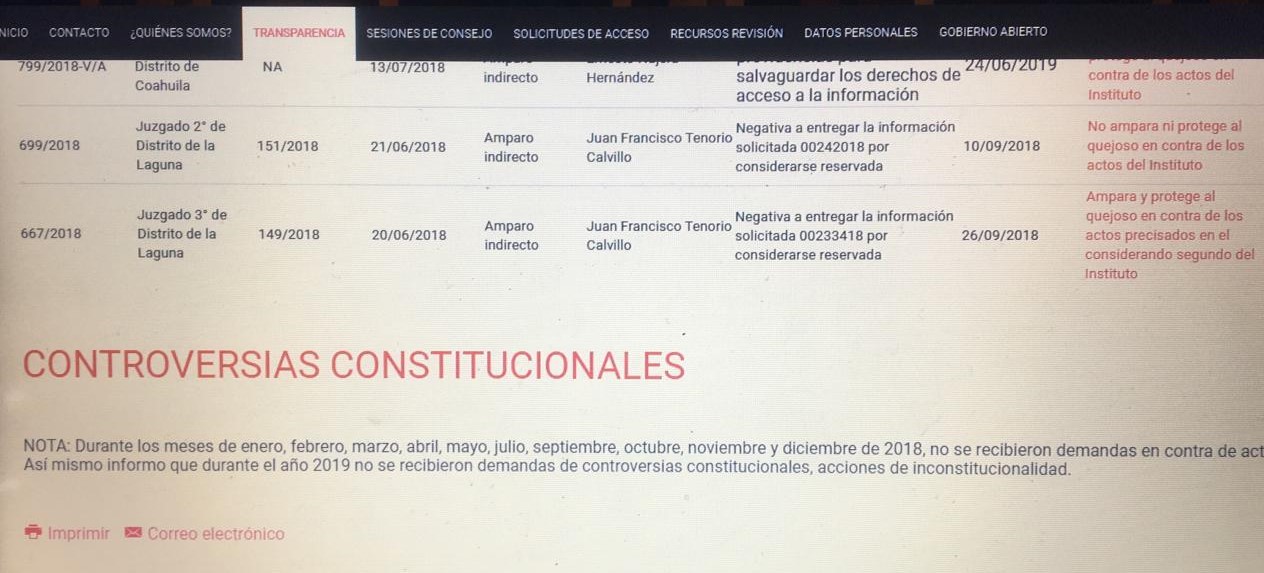
….

…en el que se facultó a los Estados y al Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias, regulen el ejercicio del derecho de acceso a la información, al tenor de los principios mínimos y bases especificados en el citado numeral. Los antecedentes constitucionales legislativos descritos son reveladores de que el Poder Constituyente dejó al arbitrio de las legislaturas de las entidades federativas elegir la forma en que deben constituir mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión, con la única condición de que deben caracterizarse por su prontitud, así como sustanciarse ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y decisión, comúnmente conocidos como órganos constitucionales autónomos. En esa tesitura, es patente que por el momento no existe disposición constitucional alguna que fije la manera en que deben impugnarse las resoluciones de los entes encargados de garantizar la eficacia del derecho de mérito, pues corresponde a los parlamentos estatales regular tal cuestión.

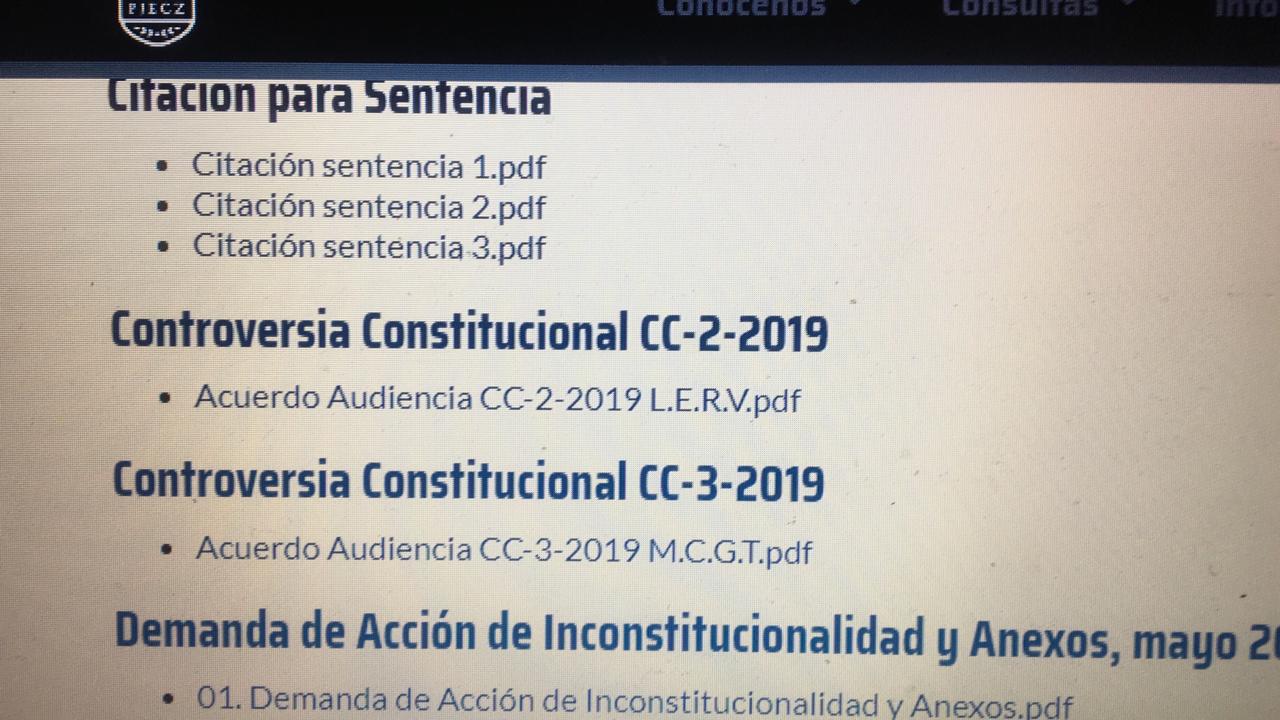
En este orden de ideas, en marzo del presente año, pudimos verificar que, en el sitio WEB del ICAI; en la pestaña de transparencia, “artículo 36”, aparecía que se habían interpuesto dos controversias constitucionales de parte de la Auditoría Superior del Estado, identificadas así:



Se supone, como antes lo hizo el organismo, que dicha información es parte de sus deberes de transparencia; sin embargo, al ingresar de nueva cuenta el sábado 06 del presente mes al sitio WEB del organismo, encontramos que esta información desapareció, incluso niegan que hayan existido dichas controversias, como se acredita con la captura siguiente:



En este sentido y en aras de rastrear dichas controversias, acudimos al sitio WEB del Tribunal Constitucional del Estado, encontrando lo siguiente:



Ambos acuerdos son del 19 de junio del presente.

Sin embargo, es toda la información con la que contamos. Por tratarse de una situación extraordinaria, por involucrar como actor a la ASE en su calidad de sujeto obligado que se niega a cumplir dos resolutivos del ICAI, y por el conflicto que existe en cuanto a la constitucionalidad del ejercicio de este tipo de medios de control constitucional que, como ya se dijo, no son la vía para combatir los resolutivos de los órganos garantes de la transparencia, es que como Poder Legislativo debemos conocer todos los pormenores.

. Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:

**Proposición con Puntos de Acuerdo:**

**Que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**Único.- Este H. Pleno solicita al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública que informe a este Poder Legislativo lo siguiente: 1) Las razones por las que fue retirada de su sitio web la información de las controversias constitucionales interpuestas por la ASE, identificadas con los números C.C. 02/2019 y C.C. 03/ 2019; 2) El contenido de estas controversias y su estatus actual, y; 3) En caso de estar concluidas, se entregue a este H. Congreso, por conducto de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, una copia de ambas, incluyendo la sentencia recaída a cada una.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

*ATENTAMENTE*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 09 de septiembre de 2020**

DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS, CON EL OBJETO DE SOLICITAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL MARCO DEL MES DEL TESTAMENTO, NO INCLUIR EN SU AGENDA LEGISLATIVA REFORMA ALGUNA QUE TENGA POR OBJETO GRAVAR CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA LA ADQUISICIÓN DE BIENES A TRAVÉS DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES,** **PUES ESTO CONSTITUIRÍA UNA CARGA FISCAL ADICIONAL EN LA REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Berino Granados en conjunto con las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada de urgente y obvia resolución en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Desde el inicio de la actual administración del Gobierno Federal que encabeza el señor Andrés Manuel López Obrador, el discurso oficial ha sido *“Primero los Pobres”*; un día sí y otro también, el presidente de la República, al menos en el discurso, refrenda su apego y compromiso con los que menos tienen.

Fue propuesta y aprobada la reforma al artículo 4 Constitucional para elevar a este rango los programas sociales del presidente, dentro de los cuales se encuentran los apoyos a discapacitados, becas a estudiantes, apoyos a adultos mayores, entre otros, esto en el papel, aún y cuando no se establece una estrategia clara de cómo garantizar estos apoyos.

Hace apenas unos días el 1° de septiembre para ser exactos, en la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la Administración Pública Federal, el mensaje estuvo cargado de los supuestos avances, apoyos y recursos que el Gobierno de la República ha destinado al pueblo y a los pobres. Esto no pretende ser un análisis del discurso oficial o de las cifras que el presidente presentó en su informe y en sus clásicas mañaneras. Pero llama poderosamente la atención que mientras por un lado el Titular del Ejecutivo Federal, se desvive por mostrar su apego a los más desfavorecidos económicamente hablando, su partido Morena en las Cámaras de Senadores y Diputados, promuevan dentro de su agenda legislativa, la reforma para gravar con Impuesto Sobre la Renta la adquisición de bienes por herencias, legados y donaciones.

Esto no es nuevo, en el año 2018 ya se había presentado una iniciativa con proyecto de reforma al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual regula la exención de este impuesto cuando la obtención de ingresos proviene de herencias, legados o donaciones en algunos supuestos, como cuando los ingresos rebasarán el umbral de los diez millones de pesos. Esta iniciativa propuesta por legisladores de Movimiento Ciudadano al final no prosperó y no llegó, ni siquiera a discusión, pues la ciudadanía externó su rechazo a la misma a través de las redes sociales.

Sin embargo, en fechas recientes nos enteramos por la prensa nacional de que dentro de la Agenda Legislativa de Morena en el Senado se propondría una reforma con la finalidad de gravar con Impuesto Sobre la Renta la adquisición de bienes que provengan de herencias, legados y donaciones.

No se abunda más, ni se presentan datos más claros al respecto, no se menciona si solo se aplicará de manera homogénea o en forma progresiva, en términos coloquiales no refiere si esto será a partir de cierta cantidad de ingreso (herencia) como lo especificaba la iniciativa de 2018 o en todos los supuestos.

Esto genera incertidumbre, sobre todo en el sector de la población más desprotegida económicamente hablando, o en palabras del presidente: *“en el Pueblo o quienes menos tienen”*.

La clase obrera y trabajadora, a la cual conozco y de la cual provengo, no está exenta de obtener ingresos por herencias, legados y donaciones, es común que la casa de los padres, en gran parte de los casos, el único patrimonio inmobiliario que lograron conformar en su larga vida de trabajo y esfuerzo se regularice vía el procedimiento sucesorio y con gran esfuerzo económico, dada la carga tributaria se logre obtener la escritura a nombre de tal o cual persona.

Si a este gran esfuerzo, se le adiciona otra carga tributaria adicional es casi seguro que el patrimonio de muchas familias de esta clase trabajadora quede a la deriva y sin certeza jurídica de tener un dueño definido. Gravar con Impuesto Sobre la Renta la adquisición de un bien inmueble proveniente de la herencia, sería ir en contra del discurso oficial y más grave aún, en contra de la clase obrera y de la certeza jurídica del patrimonio inmobiliario.

Las herencias y legados no solo se conforman por grandes masas de bienes, casas o terrenos o cuentas bancarias, estas son las menos; la gran mayoría de las herencias se conforman por un solo bien, la casa habitación que con tanto esfuerzo se logró pagar a través de un crédito de Infonavit o de un banco.

Desde hace algunos años, en este mes se promueve a nivel nacional la campaña *Septiembre Mes del Testamento*, como una forma de incentivar que todas las personas dejen claro el destino que tendrán los bienes que con tanto esfuerzo lograron conformar en su vida laboral. Sin embargo, de nada servirá que una persona plasme su voluntad respecto al destino de sus bienes, si para que llegue a consolidarse esa voluntad deberá de pagarse un impuesto adicional.

Es por ello, que presentamos esta proposición con punto de acuerdo, para que esta Legislatura se dirija al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado de la Republica y respetuosamente solicite que no se incluya en la agenda legislativa reforma alguna que tenga por objeto gravar con Impuesto Sobre la Renta la adquisición de bienes a través de herencias, legados y donaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante esta Soberanía, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. – EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL MARCO DEL MES DEL TESTAMENTO, NO INCLUIR EN SU AGENDA LEGISLATIVA REFORMA ALGUNA QUE TENGA POR OBJETO GRAVAR CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA LA ADQUISICIÓN DE BIENES A TRAVÉS DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES,** **PUES ESTO CONSTITUIRÍA UNA CARGA FISCAL ADICIONAL EN LA REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre del 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con objeto de que este H. Pleno solicite a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, inicien de oficio una amplia investigación a las instituciones bancarias del país que presentan los mayores índices de quejas por fraudes cometidos en perjuicio de sus clientes, especialmente en los delitos relacionados con autorización de créditos no solicitados y pagados a suplantadores, saqueo de los recursos de las cuentas de débito, ahorro y nomina, y pagos y transferencias no autorizadas por el cuentahabiente, a fin de deslindar responsabilidades por los fraudes cometidos en perjuicio de miles de personas, y verificar si no existe responsabilidad de los bancos en esto, y en su caso, si están aplicando los protocolos de seguridad y las garantías que por ley deben proveer para protegerlos de este tipo de acciones; lo anterior con base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

¿Por qué lleva la gente su dinero al banco? Con esta pregunta queremos iniciar. Y la respuesta es muy simple: Por seguridad, para que sus ahorros, consten de poco dinero o mucho, no sean robados al tenerlo en casa.

Por seguridad, todas y todos llevamos nuestro dinero al banco; la seguridad de saber que ahí estará siempre que lo necesitemos, la certeza de saber que podemos movilizarlo mediante trámites tradicionales de ventanilla (personales) o por medio de la llamada banca electrónica.

El primer servicio que el banco debe garantizar a todos sus cuentahabientes es la seguridad. El más importante de todos, el que más les interesa a todos sin excepción; desde una persona que tiene mil pesos en su tarjeta de débito, hasta un empresario, deportista o artista que tiene millones en su cuenta.

De manera secundaria, muchos llevan su dinero al banco para tratar de ganar rendimientos, en especial quienes cuentan con montos superiores a los $250 mil pesos; esto por medio de instrumentos de inversión debidamente regulados. Otros depositan su dinero en la banca para, desde ahí, realizar todos sus movimientos empresariales: nómina, pagos a proveedores, compra de activos, transferencias nacionales e internacionales, etc.

Sin embargo, en todos estos casos, el primer servicio que buscan los inversionistas, los que participan en la bolsa de valores y los empresarios, es también la seguridad de que sus recursos están a salvo y que siempre podrán contar con ellos.

Con la evolución de la informática, los servicios bancarios se modernizaron a pasos acelerados, aparecieron las tarjetas de crédito y débito, luego las tarjetas con chip, la banca electrónica y los cajeros de uso múltiple, por citar algunas de las bondades más notorias de la tecnología. En todo esto, no desaparece el deber primordial de la banca: garantizar la seguridad y protección de los recursos financieros de sus clientes.

**Los fraudes bancarios modernos; un fenómeno que crece de manera exponencial**

**Un ciudadano, al que llamaremos “Enrique”,** nos contó de manera personal, como hace poco, sin que él lo autorizara, ni lo tramitara, y mucho menos recibiera esos recursos, su banco, en el que había confiado por más de diez años, “tramita, autoriza y entrega un crédito por $230 mil pesos a su nombre”. El problema es que Enrique ni por enterado se dio, sino hasta que en su tarjeta de crédito le aparece el cobro de su primer abono a la deuda. Alarmado y al borde del infarto, acudió a realizar las aclaraciones del caso; no niega que lo atendieron bien, tanto por teléfono como en persona. Pero esto cambió desde el momento en que los empleados bancarios se dieron cuenta de que decía la verdad; él no tuvo nada que ver. Una persona suplantó su identidad, y se presentó a cobrar en efectivo el dinero ante la institución; situación que es materialmente imposible, si atendemos a los estrictos protocolos bancarios de identificación, de trámites bancarios de créditos personales y de entrega de recursos que superan cantidades comunes, es decir, por encima de los $35 mil pesos. Este tipo de fraude, llamado “autorización ilegal de créditos personales”, señalan los expertos en seguridad bancaria, sólo puede hacerse en plena complicidad con empleados bancarios, de otro modo es virtualmente imposible. El banco le dijo a Enrique que, en efecto, ya comprobaron que él no tramitó ni retiró el dinero. Que fue suplantado. Pero, le dicen que es “su culpa”… y además lo acusan de haber realizado un auto fraude, es decir, le imputan haberse puesto de acuerdo con el suplantador para realizar la operación y luego hacerse la víctima. Esto es, por más surrealista o kafkiano que parezca, un absurdo total. Enrique pasó de ser la víctima de un fraude bancario a ser el autor de un *auto fraude* bancario. Y listo, el banco se lavó las manos. Por lo pronto está pagando el crédito que no debe, tuvo que contratar a un abogado muy competente, que es sinónimo de costoso, para que enderece demandas mercantiles y penales contra el banco. Y, además, lo defienda, pues el banco reviró con una denuncia penal en su contra. Es seguro en un 99% por ciento, que al final ganará todos sus procesos, y que el banco deberá regresarle lo cobrado, además de salir absuelto de la acusación de auto fraude bancario. Enrique, su esposa e hijos han sufrido estrés, angustia, temor, perdida de recursos, y además deberán pagar un costoso abogado que no tenían por qué haber contratado si el banco fuese honesto y aplicara sus protocolos de seguridad, y además aplicara el principio de justicia elemental en su favor.

¿Quieren saber algo peor aún? Este tipo de operaciones, de créditos no solicitados ni autorizados, son comunes desde hace más de 8 años en México, y crecen todos los años en cientos de casos más. Si bien algunas veces los bancos reaccionan con apego a la ley, y suspenden todo en beneficio del cuentahabiente, reinstalando sus derechos y regresando lo descontado de su tarjeta, en muchos casos, aplican la misma infamia que le aplicaron a Enrique.

**Vaciar las cuentas**

**El fraude más reciente, que representa una verdadera amenaza para la ciudadanía y sus ahorros e inversiones.**

Se sabe, no son casos aislados, no son tan recientes, y la mayor verdad de todas, crecen cada día. Nos referimos a las quejas de usuarios de la banca que reportan cómo los fondos de sus tarjetas de débito y de nómina son robados en forma impune, y al presentar sus reclamos, si bien en algunos casos, como lo hemos reconocido antes, la institución bancaria, luego de una investigación interna decide reintegrarles dichos recursos, lo cierto es que en muchos casos, se topan con que en el banco simplemente les dicen que fue culpa de ellos por no ser cuidadosos con sus contraseñas o por haber caído en una trampa virtual como el pishing, o en llamadas fraudulentas; siendo el caso, que en muchas ocasiones esto es falso, la persona no fue víctima de una trampa ni fue descuidada con su contraseña. Además, los bancos se niegan a reintegrarles su dinero. UN VERDADERO, CÍNICO, ABSURDO E INFAME ROBO EN DESPOBLADO.

Esto es como si una aseguradora le dice al cliente que reporta su auto robado, que la culpa es suya por no haberle puesto triple sistema de alarmas. Que la culpa es suya por haberlo dejado afuera y no guardarlo en su cochera. Que la culpa es suya por no haber dormido toda la noche arriba del auto.

En fecha reciente conocimos el caso de los saltillenses que valientemente acusan a la institución conocida como BANORTE de ser corresponsables (por lo menos) de la sustracción indebida del dinero de sus tarjetas de débito y nómina. Señalando que el Banco los hace responsables a ellos por “descuidados”, por caer en trampas virtuales y por otras causas donde el banco, en apariencia, no tiene nada qué ver. Hechos que niegan los afectados.

Si alguien pretende decir que son casos aislados, le tendremos que decir que se equivoca, este banco, y repito su denominación, BANORTE. Desee hace años está ligado a una elevada incidencia, cada año mayor, de clientes suyos que se ven afectados por este tipo de fraudes. Reportes de medios de comunicación sustentados en cifras de la Condusef, revelan que este banco ha enfrentado desde 2019, más de un millón doscientas mil quejas por motivos como cargos indebidos, créditos no solicitados, y vaciado de cuentas de débito y nómina.

A la par de BANORTE están los bancos HSBC, Citibanamex, Bancomer y Santander.

Otros fraudes.

Cargos no autorizados a las tarjetas de crédito o débito. Cobro de seguros que no fueron autorizado por el cliente, comisiones ilegales, recargos arbitrarios.

Por ley, los bancos deben garantizar la seguridad de sus cuentahabientes, deben contar con estrictos protocolos de seguridad y, además, contar con fondos y seguros de protección suficientes para garantizar la reposición de los recursos robados o estafados a los clientes.

**El doble escenario: O son los bancos los responsables o son delincuentes informáticos que han superado los controles de la banca, trasladando esta última la culpa de todo al usuario en forma injusta.**

Al final, queda sólo una pregunta en el aire, ¿de quién es la culpa y quién debe responder por los fraudes cometidos contra los usuarios de la banca?

Es claro, y lo ha reconocido la propia Condusef en el pasado que, en muchos casos, como el de los créditos no solicitados, existe una evidente responsabilidad de empleados bancarios.

En un porcentaje mayor, son verdaderos fraudes cibernéticos, y, en efecto, em muchos de esos casos, la persona no tiene culpa, sino la vulnerabilidad del sistema bancario y la falta de protocolos y controles electrónicos.

El 27 de noviembre de 2018, fue publicada la nota siguiente:

<https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-es-el-pais-con-mas-fraude-digital-de-America-Latina-despues-de-Brasil-20181127-0093.html>

México es el país con más fraude digital de América Latina después de Brasil

27 noviembre 2018

Las empresas de servicios financieros en México pierden 3.8 veces el monto del valor de cada transacción fraudulenta, pues al costo relacionado con la transacción se añade el de los gastos derivados de la investigación del ilícito, así como los intereses generados y otros más.

En América Latina, México es en términos de volumen el segundo país con mayor incidencia de fraudes digitales, después de Brasil. La principal modalidad del fraude por canales digitales es el robo de identidad. Con la sustitución de la banda magnética por chip como medida de seguridad en las tarjetas de crédito, los delincuentes realizaron el tránsito a los canales digitales, y ahora tienen en las transacciones realizadas con las tarjetas de crédito su principal objetivo. 45% del total de los fraudes se realizan contra esta forma de pago. Fin de la cita.

La banca nacional insistió en migrar cuanto antes al sistema de banca electrónica. Y al hacerlo se supone que lo hace en la capacidad de garantizar tecnológica y financieramente los ahorros y recursos de sus clientes.

Es infame y muy torpe que la banca espere que los clientes, los usuarios promedio, los titulares de las tarjetas de crédito y débito que permiten que los bancos existan, sean expertos en seguridad informática, que personas sencillas y trabajadores sean expertos en medidas anti hackers. Que adultos mayores que tienen sus pequeños ahorros o pensiones en los bancos sean expertos en tecnología y medidas antifraude y, además, “adivinar” todas las medidas y acciones de los delincuentes para defraudarlos y saquear sus recursos financieros. Es tonto, es absurdo.

Por otra parte, es una realidad que hay fraudes que se cometen desde dentro de los bancos, y deben ser investigados y castigados con todo el peso de la ley.

**Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:**

**Proposición con Puntos de Acuerdo**

**Que, por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**Único. - Este H. Pleno solicita a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, inicien de oficio una amplia investigación a las instituciones bancarias del país que presentan los mayores índices de quejas por fraudes cometidos en perjuicio de sus clientes, especialmente en los delitos relacionados con autorización de créditos no solicitados y pagados a suplantadores, saqueo de los recursos de las cuentas de débito, ahorro y nomina, y pagos y transferencias no autorizadas por el cuentahabiente, a fin de deslindar responsabilidades por los fraudes cometidos en perjuicio de miles de personas, y verificar si no existe responsabilidad de los bancos en esto, y en su caso, si están aplicando los protocolos de seguridad y las garantías que por ley deben proveer para protegerlos de este tipo de acciones.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**ATENTAMENTE**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 09 de septiembre de 2020**

DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo en la Vía de Urgente y Obvia Resolución, que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en conjunto con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, con el objeto de que esta Soberanía, efectúe un respetuoso exhorto al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores “INFONAVIT”, Carlos Martínez Velázquez, para que velando por la función principal de interés social y de orden público de dicho Instituto, que es el de proporcionar a los trabajadores mexicanos créditos hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la adquisición y mejoras materiales de viviendas, ordene inmediatamente una investigación por un presunto fraude a la ley, al simularse en perjuicio de los trabajadores acreditados o deudores de dicho Instituto, un falso procedimiento de Mediación Civil-Mercantil, ante mediadores privados certificados por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyo procedimiento es simulado o falso, dado que no se llevan a cabo, sino que solo se hace constar tal procedimiento en formatos ya elaborados con cláusulas ya predeterminadas por el “INFONAVIT”, en donde bajo la promesa de reducir el costo de las mensualidades de las hipotecas, les hacen firmar clausulas perjudiciales en contra de los derechos de los trabajadores, mismos que han sido engañados por esa ilegal forma de operación, entre los que hay muchos ciudadanos Coahuilenses afectados, investigación que deberá de concluir en la sanción a los responsables de esa indebida y fraudulenta operación contractual, y que además se deje sin efecto alguno las cláusulas identificadas en tales formatos de convenio como “NOVENA”, en la que indebida e ilegalmente, se están traicionando los principios y la naturaleza social del Instituto, porque se está obligando a los trabajadores deudores del “INFONAVIT”, a renunciar al cargo de “Depositario Judicial” del inmueble que habitan, para que inmediatamente el acreedor, es decir, el propio Instituto, tome posesión material del inmueble objeto de la hipoteca, lo cual conlleva al desalojo automático del trabajador de su vivienda, lo cual aparte de provenir de un acto simulado y falso, dicha cláusula atenta en contra de los derechos de posesión y habitación de la vivienda por parte de los trabajadores, lo anterior con base en las siguientes:**

**CONSIDERACIONES:**

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mejor conocido por sus siglas **“INFONAVIT”**, es una Institución Mexicana administrada por representantes del sector de trabajadores, el sector empresarial y el gobierno, fue fundada en el año 1972 con el objetivo fundamental dar cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores, reuniendo en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores y así, darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos.

Desde entonces, ha funcionado como una Institución clave en el ámbito laboral del país, encargada de brindar diferentes créditos hipotecarios y no hipotecarios a cada uno de los trabajadores interesados, para contribuir con el fortalecimiento familiar y social de los empleados públicos y privados.

Ahora bien, conforme a la normativa que regula al **“INFONAVIT”**, este órgano tiene como **Misión** el de generar valor para las y los trabajadores, sus familias y comunidades a través de soluciones de vivienda y ahorro, que les permitan incrementar su patrimonio y calidad de vida de forma sostenible, a lo largo de su vida laboral y durante su retiro, acorde con ello, se plantean como **Visión** el de ser de las mejores instituciones del Estado mexicano, reconocida por su autonomía de gestión, solidaridad social y modelo de gobierno tripartita, que ofrezca productos financieros a la medida de las necesidades de vivienda y para el retiro de cada derechohabiente, buscando en todo momento consolidar un sistema que aspire en el tiempo a lograr los rendimientos más competitivos a su ahorro, con servicios de calidad, transparencia y rendición de cuentas.

Sobre esas bases el **“INFONAVIT”**, estableció un Código de Ética, mediante el cual se compromete a cumplir los principios y deberes éticos que rigen la actuación del Instituto bajo los más altos estándares de eficiencia, transparencia, legalidad, integridad, y mejores prácticas de gobierno institucional; estructurado sobre una administración tripartita, y asegurando el estricto apego a las normas, políticas y procedimientos vigentes en el Instituto, en donde las y los trabajadores del Infonavit, las y los integrantes de los Órganos del Instituto incluyendo sus Comités, así como toda persona que trabaje con los mismos o que represente al Instituto directa o indirectamente, serán los responsables de promover el cumplimiento del Código de Ética, y quien conocerá de los casos de incumplimiento, será la Contraloría General quien vigilará su cumplimiento puntual, siendo competente para investigar y sancionar posibles incumplimientos, resultando también sujetos a al Código de Ética, las y los proveedores que presten servicios al Instituto en los términos previstos en el mismo.

En ese sentido, las y los trabajadores del Infonavit, las y los integrantes de los Órganos del Instituto, así como toda persona que represente a la Institución directa o indirectamente, deben observar, tanto en el ámbito interno de trabajo como en el externo, en la atención de las y los derechohabientes y de la sociedad, los siguientes principios, **Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Eficacia, e Integridad,** que los obliga a actuar conforme a las leyes, reglamentos, normas generales, normatividad institucional y demás disposiciones aplicables y al interés de los derechohabientes; con ética y transparencia; cumpliendo las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de cada persona, sin buscar el beneficio personal, resistiéndose a cualquier presión política; ateniéndose a las decisiones tomadas en interés de la Institución y de sus trabajadores.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con la normatividad que regula el funcionamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, **“INFONAVIT”**, el Director General de dicho Organismo Público, el señor **Carlos Martínez Velázquez**,es la máxima autoridad ejecutiva y tiene todas las facultades que le corresponden a un Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, y demás facultades necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos sociales que le dieron origen al Instituto.

En base a las facultades conferidas a tal Director General, a dicho funcionario le corresponde investigar y sancionar las burlas a la ley que se están cometiendo dentro del Instituto a su cargo, en lo que respecta a la forma de operación de recuperación de créditos de los adeudos que tienen los trabajadores acreditados, porque a través de un falso procedimiento de Mediación Privada que denominan Civil-Mercantil, mismo que físicamente o presencialmente nunca se llevó a cabo, entre los afectados por ese fraude procesal, y quienes lo suscriben, al cual denominan **“CONVENIOS DE TRANSACCIÓN COMO RESULTADO DE UN PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ANTE MEDIADORES PRIVADOS CERTIFICADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”,** se están reconociendo indebidamente compromisos monetarios y obligaciones desventajosas en perjuicio de los trabajadores, porque en formatos que ya están predeterminados con cláusulas que son de adhesión, donde el acreditado nunca participo en su elaboración, y que funcionarios del INFONAVIT, en complicidad con Mediadores Privados y el Poder Judicial de la Ciudad de México, se simularon hechos que en realidad nunca sucedieron, dado que esos documentos solo se envían para firma de los deudores trabajadores, acción fraudulenta en la que muchos coahuilenses han sido afectados, porque en la que denominan Clausula **“NOVENA”** de dichos Convenios de Transacción, que se reitera nunca fueron materia física de un procedimiento de Mediación como en ellos se afirma, literalmente comprometen al trabajador a lo siguiente: **“… INCUMPLIMIENTO.-** Los mediados aceptan y reconocen que en caso de que **“LA PARTE DEUDORA”**, no diera cumplimiento a cualquiera de las obligaciones pactadas en este convenio, **“LA PARTE ACREDORA**”, podrá requerir por cualquiera de los medios ordinarios los documentos que amparen el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma y en caso de no hacerlo se procederá a su ejecución, ….” Los mediados están de acuerdo en establecer desde este momento que **“LA PARTE DEUDORA”,** renuncia expresamente al cargo de depositario judicial del **INMUEBLE** que garantiza el cumplimiento de las obligaciones, pactadas, ….. **“LA PARTE ACREDORA”**, podrá solicitar en cualquier momento y en virtud de la renuncia al cargo de depositario judicial tomar la posesión, ...ordenando las medidas de apremio más eficaces para obtener la posesión inmediata del inmueble…,” en donde también de forma ilegal y en franca violación a un derecho procesal se le hace renunciar al deudor trabajador a su derecho para designar un perito valuador de su inmueble, allanadose ilegítimamente lo que el perito del instituto determine como el valor del inmueble hipotecado, lo cual es una verdadera injusticia que por simple lógica resulta contraria a la naturaleza social del “**INFONAVIT”**, de ahí, que por dicha razón, presente a esta Soberanía en la Vía de Urgente y de Obvia Resolución la siguiente:

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. Que esta Soberanía efectúe un respetuoso exhorto al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores “INFONAVIT”, Carlos Martínez Velázquez, para que velando por la función principal de interés social y de orden público de dicho Instituto, que es el de proporcionar a los trabajadores mexicanos créditos hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la adquisición y mejoras materiales de viviendas, ordene inmediatamente una investigación por un presunto fraude a la ley, al simularse en perjuicio de los trabajadores acreditados o deudores de dicho Instituto, un falso procedimiento de Mediación Civil-Mercantil, ante mediadores privados certificados por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyo procedimiento es simulado o falso, dado que no se llevan a cabo, sino que solo se hace constar tal procedimiento en formatos ya elaborados con cláusulas ya predeterminadas por el “INFONAVIT”, en donde bajo la promesa de reducir el costo de las mensualidades de las hipotecas, les hacen firmar clausulas perjudiciales en contra de los derechos de los trabajadores, mismos que han sido engañados por esa ilegal forma de operación, entre los que hay muchos ciudadanos Coahuilenses afectados, investigación que deberá de concluir en la sanción a los responsables de esa indebida y fraudulenta operación contractual, y que además se deje sin efecto alguno las cláusulas identificadas en tales formatos de convenio como “NOVENA”, en la que indebida e ilegalmente, se están traicionando los principios y la naturaleza social del Instituto, porque se está obligando a los trabajadores deudores del “INFONAVIT”, a renunciar al cargo de “Depositario Judicial” del inmueble que habitan, para que inmediatamente el acreedor, es decir, el propio Instituto, tome posesión material del inmueble objeto de la hipoteca, lo cual conlleva al desalojo automático del trabajador de su vivienda, lo cual aparte de provenir de un acto simulado y falso, dicha cláusula atenta en contra de los derechos de posesión y habitación de la vivienda por parte de los trabajadores.**

*ATENTAMENTE*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 09 de septiembre de 2020**

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE FINANZAS Y SALUD, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, A QUE PRESENTEN ANTE ESTA LEGISLATURA UNA PROPUESTA DE APOYO INTEGRAL A LOS FAMILIARES DEL PERSONAL DE SALUD QUE HA PERDIDO LA VIDA EN EL ESTADO DE COAHUILA, A CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19.**

**DIPUTADO PRESIDENTE.**

**H. Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura**

**PRESENTE.**

El Suscrito Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Partido Unidad Democrática de Coahuila, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

El pasado viernes 4 de septiembre, la primera plana del periódico Vanguardia decía: “Durante los seis meses de la lucha contra la pandemia, Mata COVID-19 a 28 de Salud.” A esto se suman las cerca de mil quinientas muertes en total por este motivo, en nuestro estado. El panorama es muy triste. Si bien hemos dado lo mejor que tenemos como sociedad y gobierno, no podemos dejar de sentir un profundo pesar por estos coahuilenses y sus familiares.

En cualquier gobierno, en México o alrededor del mundo, por tradición, por cultura y por elemental sentido del agradecimiento, solemos reconocer y recordar a quienes arriesgaron y perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en el servicio público. Sabemos que hay heroicidad cuando se va más allá del cumplimiento de la obligación laboral. Las 28 personas del sector salud que han perdido la vida, además pusieron en riesgo la vida de sus familiares. Muchos de ellos tuvieron que sacrificar presencia física y afectuosa con sus seres queridos. La guerra de la humanidad contra la pandemia no daba tregua a nuestros valientes soldados, mujeres y hombres, médicos, enfermeras, personal de limpieza y administrativo.

Es por ello que acudo a ustedes compañeras y compañeros legisladores. Para en primer lugar reconocer como es debido, la heroicidad de estos servidores públicos. Pero la heroicidad no puede quedar en el mero aplauso y reconocimiento, por más sentido que este sea. Las familias de estas personas perdieron, ante todo, a su padre o a su madre. El afecto necesario del papá, la mamá, el esposo o la esposa. De ello se desprende también la totalidad o una parte del sustento familiar. ¿Qué pasará con estos niños, que futuro les depara? Sus padres dieron lo vida por Coahuila, ¿qué hará Coahuila por ellos?

Es por ello que como representantes populares debemos cuando menos ocuparnos del caso. Cuestionar a los empleadores de nuestros héroes, sobre los beneficios laborales para sus familiares, si es que estos existen y en qué consisten. No podemos ni debemos caer en el juego perverso de las facultades. Que si son del Seguro Social, del ISSSTE, del INSABI, eso no nos corresponde. No amigos, esta guerra no distingue ni de clases sociales ni de niveles de gobierno, nuestra respuesta tampoco debe de distinguir.

Seamos pues representantes del dolor de nuestros representados y actuemos en consecuencia. Pidamos la información necesaria y destinemos los recursos que sean necesarios para que los familiares de nuestros héroes puedan paliar en algo el enorme dolor que implica perder a un ser querido. No sería justo que aquellos por los que dieron la vida, simplemente sigamos nuestro camino ignorando las necesidades que dejan tras de sí. En este proceso se hace indispensable escuchar a estas personas, saber quiénes son, buscarlas en nuestros distritos, entender sus necesidades y colaborar en su solución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

**PRIMERO.** La Sexagésima Primera Legislatura exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Finanzas y de Salud del Gobierno del Estado a que informen a esta legislatura cuantos miembros del personal de salud han perdido la vida a causa del Coronavirus Covid-19 en Coahuila, así como las dependencias en las que laboraban, el número de dependientes económicos que dejan y los beneficios o derechos económicos que tienen estos familiares.

**SEGUNDO.** La Sexagésima Primera Legislatura exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Finanzas y de Salud del Gobierno del Estado a queEntreguen a esta legislatura un plan de apoyo integral inmediato y otro que sea permanente, para las familias de estos Coahuilenses.

**TERCERO.** La Sexagésima Primera Legislatura exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Finanzas y de Salud del Gobierno del Estado a que incorporen estos beneficios en el presupuesto de egresos 2021, y se extiendan a todos aquellos que pierdan la vida a causa de la pandemia en los días, meses y quizás años por venir.

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ"**

**SALTILLO, COAHUILA A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**PRONUNCIAMIENTO**

La semana pasada dio inició el actual y último periodo de sesiones ordinarias, que en menos de cuatro meses habrá de concluir, junto con esta LXI Legislatura. Quizá algunos consideren que ya es el momento de hacer un balance de la legislatura, bajo el supuesto de que en el corto tiempo que falta se considera imposible –o cuando menos muy difícil-- hacer lo no realizado en casi tres años.

Antes de entrar propiamente en materia, estimo necesario hacer algunas consideraciones previas que desconocemos o bien ya no tenemos presente sobre estas asambleas legislativas, de una de las cuales formamos parte.

Hace poco más de medio siglo, Adolfo Christlieb Ibarrola, extraordinario mexicano y jefe sobresaliente que fue de mi partido, Acción Nacional, lamentablemente fallecido de manera prematura, escribió que el ciudadano común de entonces ni la más remota idea tenía de la existencia de los Congresos locales, aun los preparados o con cierta cultura política. Tal vez ustedes no lo crean, pero literalmente así era.

Esa realidad de los años 60 del siglo pasado Christlieb la describió de manera gráfica así: “De las legislaturas estatales poco es lo que puede decirse, no por falta de interés sino por ausencia de materia”. Por eso los medios de comunicación de la época rara vez incluían notas sobre esos cuerpos legislativos o de los diputados que los integraban. Con ironía, alguna vez dijo que si alguna información se publicaba sobre algún diputado, era en la página roja de los periódicos. Y tenía razón.

En aquellos tiempos todos, absolutamente todos los diputados locales, sin excepción alguna, pertenecían a un mismo partido: el PRI. Su papel como legisladores consistía en simular la existencia de un Poder Legislativo, que en la realidad no era auténtico Poder y mucho menos legislaba, porque sus integrantes eran meros levantadedos y aplaudidores, muy dados a la lisonja y a la adulación del gobernador en turno, como ahora aún lamentablemente sucede.

Lo que voy a expresar a continuación lo diré sin ánimo de ofender a nadie. De veras. Si alguien así lo llega a considerar, le pido de antemano una disculpa. Todos cometemos errores y tenemos deficiencias, porque somos limitados y falibles. Tenemos lealtades políticas que debemos guardar y disciplina de partido con la que estamos comprometidos. Pero todo tiene un límite. No se puede llegar más allá de lo que dicta el decoro y la honra. Porque somos seres humanos con inteligencia y voluntad propia, con dignidad que debemos exigir se nos respete. Y con mayor razón si advertimos que las lealtades y la disciplina riñen, como frecuentemente sucede, con las exigencias del bien común. No podemos traicionar los legítimos intereses públicos o sacrificar nuestra libertad, en aras de intereses parciales o de grupo, y peor aún si éstos son ilegítimos o deleznables. Todo tiene un límite, y por más prudente que alguien sea, claramente llega a ver cuáles son las fronteras de tal límite.

Pues bien, ¿habrá alguien que considere que esta Legislatura es en su funcionamiento muy diferente a como operaban las legislaturas de Coahuila hace 50 o más años?

Si así lo creen, ¿cómo justifican los diputados de la mayoría priista que en las comisiones legislativas rara vez intervienen para discutir los dictámenes? ¿Por qué razón en el Pleno sólo obedecen la consigna de votar como se les indica y de rechazar, a manera de reflejo condicionado, todo cuanto otros diputados proponemos y razonamos con argumentos, sólo atenidos al número de votos con que cuentan, incluidos los de sus conocidos y permanentes aliados? ¿Por qué no debaten, por qué rehúyen la discusión? ¿No les resulta inadmisible no dar en el Pleno las explicaciones que sobre alguna cuestión se les solicita, como sucedió la semana pasada, con el pobrísimo argumento de que como en comisiones el punto se aprobó por unanimidad no procede dar explicación alguna? ¿Creen que esa actitud es digna? ¿Cómo es posible que no expongan ideas, argumentos, razones? ¿De verdad están satisfechos con el papel que hasta ahora, y a menos de cuatro meses de concluir los tres años, han jugado en esta Legislatura?

Es una lástima que en los últimos años no hayamos tenido en Coahuila un Poder Legislativo que reivindique su categoría de auténtico Poder, digno, respetado y eficaz.

Muchos creen que la principal y más importante función de los Congresos locales es expedir nuevas leyes o reformar las existentes. Sí es, desde luego, importante esta tarea, pero no es modernamente la más importante o trascendente. Menos aún, por supuesto, la llamada gestoría, porque frecuentemente se trata de tráfico de influencias o de vulgar coyotaje. Actualmente los Parlamentos tienen como función mayor la relativa al **control**, a ser contrapeso legal y legítimo en el ámbito del Poder, principalmente a través de la correcta orientación de la administración pública, por la vía de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos y la verdadera rendición y revisión de cuentas.

Si este Congreso hubiere asumido plenamente sus funciones de control cuando menos entre 2005 y 2017, no tendría hoy el estado de Coahuila la escandalosa deuda pública que registra, cuyo monto más importante desconocemos hasta ahora a dónde fue a parar. Y les recuerdo a los señores diputados que por esta estratosférica deuda, sólo por el servicio de la misma, es decir, por el pago de intereses y comisiones y sin disminuir un solo peso su saldo, cada año se pagan alrededor de 4 mil 500 millones de pesos.

Las anteriores legislaturas fueron ciertamente omisas en este punto. Pero la actual también lo ha sido, porque no ha hecho, ni permitido que se haga, absolutamente nada para recuperar así sea parte de los miles de millones de pesos escamoteados al patrimonio público ni permitir tampoco iniciar el proceso sancionatorio de los responsables.

Si la mayoría de esta asamblea tiene disposición y voluntad, en los cuatro meses que aún faltan, esta Legislatura puede perfectamente reivindicarse y pasar a la historia como un Congreso que asumió con dignidad y categoría su función de representación calificada del pueblo de Coahuila.

Gracias.

**ATENTAMENTE**

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL P.A.N.**

**POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS**

**Saltillo, Coah., a 9 de septiembre de 2020.**

|  |
| --- |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO |  | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES |  | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTÍNEZ |
|  |  |  |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA |  | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS |
|  |  |  |
| DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |  | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,**

**LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PRESENTE. -**

**Pronunciamiento por la conmemoración de la heroica defensa del territorio nacional ante la invasión norteamericana, y la batalla del Castillo de Chapultepec que presenta la diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, juntamente con los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.**

La Historia de México esta fraguada con momentos épicos y actos de heroísmo en diversos momentos y con distintos personajes a través de los siglos, desde nuestros orígenes prehispánicos hasta nuestros días,

Hoy quiero traer ante la máxima tribuna de Coahuila, el recuerdo heroísmo y pundonor demostrado por un grupo de cadetes y soldados del ejército mexicano, que aun en desventaja, aun estando perdidos prefirieron morir a rendirse ante el ejército invasor, Los Niños Héroes, la historia de los infantes que defendieron la patria, el 13 de Septiembre hace 173 años

Seis cadetes del Colegio Militar pasaron a la posteridad de nuestra patria debido a su valentía y sentido de amor por México a pesar de su corta edad.

Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez defendieron con su vida el Castillo a pesar de la superioridad de las tropas mexicanas y escribieron sus nombres con letras de oro en la historia de la patria por asegurar la dignidad del país.

Después de la declaración de guerra por parte de Estados Unidos a México (13 de mayo de 1846), las tropas de aquel país avanzaron hacia la capital mexicana con el objetivo claro de tomar el Castillo de Chapultepec.

De la mano de Winfield Scott, el 11 de septiembre las tropas norteamericanas bombardearon el Castillo. La defensa mexicana estaba conformada por 200 cadetes al mando de Nicolás Bravo y Mariano Escobedo, sumado a 632 soldados del Batallón de San Blas dirigidos por Santiago Xicoténcatl.

Además, para sumar fuerzas Antonio López Santa Anna envió a más de 2000 soldados para ayudar a los antes mencionados, pero fueron nulos sus esfuerzos ya que los invasores eran 7000 soldados. El mismo Bravo fue designado para defender el inmueble y pidió a los cadetes del Colegio que se retirarán, pero la mayoría se quedó para defender su escuela.

Las instalaciones del Colegio servirían de cuartel general, el coronel Nicolás Bravo ordenó desalojar a los cadetes que en sus diferentes grupos tenían edades comprendidas entre los 12 y 19 años. Muchos obedecieron, otros fueron llevados por sus familias y solo 46 cadetes solicitaron quedarse para defender su plantel. A este grupo se unieron varios cadetes recientemente graduados, los cuales aún no recibían una asignación en el Ejército Nacional, además de 19 miembros de la administración incluidos el director, instructores, maestros, y hasta el despensero del plantel militar.

En septiembre de 1847, varios grupos del Ejército del Norte que se había retirado bajo las órdenes de Antonio López de Santa Anna se fortificaron en los alrededores del bosque y cerro de Chapultepec. El ejército estadounidense mientras tanto tomó el palacio del Ex Arzobispado en Tacubaya como base de operaciones y llevó a cabo parte del proceso marcial contra los integrantes del Batallón de San Patricio. El día 11 avanzaron y tomaron la casamata ubicada al poniente del bosque, el día 12 bombardearon el Castillo de Chapultepec y otras posiciones y finalmente, el 13 de septiembre, la infantería estadounidense tomó por asalto el castillo

**Niños Héroes**

Juan Escutia es el nombre que más recordamos debido a su acción en la cual toma la bandera de México, se enrolla en ella y se lanza desde el Castillo para que los norteamericanos no la tomarán.

Agustín Melgar y Vicente Suárez murieron en combate cuando intentaban detener a los invasores por las escaleras.

Francisco Márquez era un niño literalmente, a sus 13 años fue hallado muerto junto a Juan Escutia en la colina alrededor del castillo.

Juan de la Barrera ayudó a los que se encargaban de hacer trincheras en la Calzada Tacubaya y Fernando Montes de Oca murió cuando saltó por la ventana intentando salir al bosque y ayudar a los soldados mexicanos.

**Fecha histórica**

Desde 1881 se instauró el 13 de septiembre como fiesta cívica del país para recordar a todos los soldados que defendieron el Castillo de Chapultepec y especialmente a los seis niños héroes que defendieron con su vida el país

Es motivo de gloria para nuestras fuerzas armadas y nos recuerda a todos la trascendencia y el papel fundamental en la vida nacional, de cómo en un momento determinado cuando la patria así lo amerita, el coraje, amor decisión pueden marcar la historia de una nación, como un grupo de cadetes, con honor y decidieron defender su Colegio, su patria ante el invasor, cuando veteranos de otras guerras durante la noche previa en el bombardeo al castillo desertaron, hoy recordamos este valor extraordinario que los llevo a la memoria y gloria de la patria, y gracias a estos actos de heroísmo hoy tenemos esta nación y su recuerdo es garante no sólo de la soberanía, sino de la paz y la tranquilidad de que hemos gozado durante décadas.

Por lo anterior, los que suscriben la presente, se pronuncian al tenor de lo siguiente: Este Grupo Parlamentario se congratula con el recuerdo de la batalla del Castillo de Chapultepec, los Niños Héroes, el 13 de septiembre de 1847, hace 173 años, la historia de los infantes que defendieron la patria, y le rinde honor a los mexicanos que lucharon con valor y determinación en defensa de nuestra Nación.

**ATENTAMENTE**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS”**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 09 de septiembre de 2020**

DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTA LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES, CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRÍGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”, DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, EN TORNO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS FEMINICIDIOS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,**

**LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PRESENTE. -**

**Su servidora Zulmma Verenice Guerrero Cázares con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, conjuntamente con mi compañero Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor nos permitimos presentar a esta soberanía el presente pronunciamiento.**

La violencia contra las mujeres se han vuelto la noticia cotidiana en esta pandemia. Se presenta con tal frecuencia que muchos lo ven como parte del escenario actual. Y ese es el gran problema acostumbrarnos, no hacerle casos, ni como sociedad y autoridades y dejar que miles de mujeres pierdan la vida a manos de sus agresores, en la mayoría de los casos sus parejas.

Autoridades internacionales y nacionales han advertido sobre este fenómeno que se ha incrementado con la cuarentena de esta pandemia Covid-19 y ha dejado vulnerables a millones de mujeres en el mundo.

La pregunta que muchos se hacen es ¿Por qué deberían preocuparse por los casos de violencia contra las mujeres que suceden en su familia, colonia, comunidad, país o en el mundo entero?

La Organización Mundial de la Salud destaca que a violencia contra la mujer constituye una grave violación de los derechos humanos de la mujer, independientemente de cuándo, dónde y cómo se produzca. Hay muchas formas de violencia contra la mujer, las cuales pueden tener numerosas consecuencias sanitarias negativas para ellas y sus hijos.

La violencia contra la mujer puede provocar traumatismos y problemas graves de salud física, mental y sexual y reproductiva, incluidas infecciones de transmisión sexual, infección por el VIH y embarazos no planificados.  En casos extremos puede provocar la muerte.

La OMS advierte que muy a menudo los efectos de la violencia perduran toda la vida. La violencia, en todas sus formas, puede afectar al bienestar de la mujer para el resto de su vida. Es algo inaceptable y por eso no puede ignorarse el riesgo de violencia al que se enfrentan las mujeres y sus hijos durante la crisis actual debida a la pandemia de COVID-19. Prevenir la violencia es cuestión de derechos humanos, de salud física, mental y bienestar.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2240 mujeres fueron asesinadas , durante primeros siete meses del año, lo que representa el 3.1% en comparación del 2019. El informe destaca 1674 casos de homicidios dolos y 566 feminicidios.

Esos casos de 2240 de mujeres representan un promedio diario de 10.5 casos de mujeres. La ONU Mujeres ha sostenido que la violencia contra las mujeres se expande con un virus sin control, y con pocas medidas, la violencia doméstica, basada en género, está acabando con la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el mundo sin importar su origen, credo, condición social u orientación sexual.

La investigación “Quedarse en casa aumentó el riesgo de sufrir violencia” elaborada por María José Martínez destaca un problema esencial que señala pocas las víctimas que se atreven a denunciar o buscar ayuda: menos del 40%. Mientras que quienes sí deciden hacerlo representan menos del 10% que acuden a la policía. En segundo aspecto, por las propias trabas en las instituciones para investigar y publicar los reportes oficiales, de manera actualizada

“En aquellos países donde existe acceso a la información pública las cifras fueron comparadas con el registro que también llevan las organizaciones civiles, quienes en determinadas situaciones consideran casos de violencia como femicidios o intentos de femicidios cuando se atenta contra la vida de una mujer, pero que para algunas instituciones pueden ser solo homicidios o lesiones leves, tal como ocurre en Perú o  en México, entre otros países”. Refiero dicha investigación.

Y a esto, le tenemos que sumar la indolencia de las autoridades, la desinformación o el hacer caso omiso ante las diferentes denuncias o llamadas de atención de las victimas ante los vecinos, la comunidad o la familia.

Desde este espacio quiero llamar la atención de todas las autoridades de todos los niveles de gobierno, medios de comunicación, actores políticos y sociales para fortalecer una cultura de prevención. Para fortalecer las acciones de solidaridad con las víctimas. Para comprender y hacer saber a otros que la violencia machista engendra mas violencia y mayor desigualdad.

La indiferencia, la tolerancia y la normalización genera el aumento de este tipo de acciones.

En Coahuila y en Sabinas en los últimos meses ha incrementado el número de agresiones contra mujeres. Y ante ello es importante tomar en cuenta todo tipo de denuncias por mínimas que sean, debe tener los causes necesarios y activar los protocolos adecuados para proteger a la víctima de su agresor.

En memoria de María y de muchas otras mujeres, es tiempo de actuar sin prejuicios y sin juzgar a la víctima. Es momento de actuar para prevenir, para no lamentar y asumir que la responsabilidad la tenemos todas y todos.

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”**

**SALTILLO, COAHUILA A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

Pronunciamiento **que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” de la Honorable LXI Legislatura del Congreso del Estado, en relación con la consulta ciudadana para el eventual enjuiciamiento a los ex presidentes de la República: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país.**

Con el proceso penal al que seguramente serán sometidos los últimos cinco ex presidentes de la República, está por saldarse una deuda histórica con la nación.

A estas alturas, resulta absurdo que los gobiernos emanados del PRI y del PAN intenten disimular los serios agravios cometidos en perjuicio de toda una nación.

Ha llegado la hora de hacer justicia al pueblo, no de vengarse, ni de iniciar una persecución política, como mañosamente los enemigos de la Cuarta Transformación tratan de hacer creer a la opinión pública.

Compañeras y compañeros diputados, y todos cuantos aún tenían dudas: la regeneración nacional era en serio, y ya empezó a cristalizar.

Incluso en Coahuila, están próximas a desplomarse las acusaciones de quienes, sin autoridad moral, han subido a esta tribuna para curarse en salud propia y enlodar al Gobierno de la Cuarta Transformación. Esto no ha pasado de ser un intento desesperado por conservar los privilegios de la mafia en el poder que, desgraciadamente, extiende sus tentáculos hasta nuestro Estado.

Así lo evidencia, por ejemplo, la falta de voluntad política de la actual Legislatura, y particularmente de la Auditoría Superior del Estado, para someter al imperio de la ley a los culpables del mayor atraco cometido en Coahuila, con motivo de la ilegal contratación de la llamada megadeuda.

Al quedar menos de un tercio de este último año de ejercicio constitucional, el Poder Legislativo estatal sigue siendo señalado por su notoria falta de interés en combatir la corrupción, ni siquiera en el caso tan evidente del ex alcalde de Parras de la Fuente, Evaristo Madero Marcos.

Aprovechando la complicidad y el proteccionismo que le otorga su círculo de amigos, el ex munícipe se dio el lujo de mofarse de la solicitud que el de la voz planteó, en julio de 2018, a fin de que esta Soberanía le iniciara un juicio político, para lo cual existen elementos suficientes y contundentes.

Por supuesto, tampoco prosperó el requerimiento que en tal sentido también hizo el compañero Diputado Édgar Sánchez, pero ahora en contra del sucesor de dicho alcalde, el priista disfrazado de morenista Ramiro Pérez Arciniega, a quien se le acusa de nepotismo, desvío de recursos públicos e ingobernabilidad.

Como ya se sabe, se encuentra en curso un proceso de consulta popular acerca de si deben ser enjuiciados los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuyos sexenios abarcaron el periodo comprendido entre 1988 y 2018.

A pesar de la extraña resistencia del Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar dicha auscultación, argumentando que para ello necesita ocho millones de pesos, *“es muy probable”* que se enjuicie a los ex mandatarios nacionales. Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo federal, por lo que el INE debe prepararse para, al menos, validar las firmas que se recaben.

Por lo pronto, el Pleno de la Cámara de Diputados ya aprobó el formato para la obtención de firmas utilizado para preguntar a la población. Oportunamente, la Cámara Baja también recibió y validó la aprobación del INE de dicho formato y de la pregunta que se formula a los ciudadanos.

Por su parte, el pasado 31 de agosto, el consejo nacional de Morena determinó, por unanimidad, recolectar las firmas en una intensa cruzada que aún se realiza. Paralelamente, militantes y simpatizantes del mismo partido, en diversas plazas del país y del extranjero, colocaron mesas de recolección, a la vez que promueven la consulta en redes sociales y en un portal de Internet para descargar los formatos de registro de autógrafos de los ciudadanos interesados.

El dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que se buscará recabar incluso 2 millones de firmas, y no un millón 800 mil, como lo requiere la ley, esto, *“para que no haya pretextos”*.

Después del conteo previo, al viernes 4 de septiembre, se llevan recaudadas 194 mil 314 firmas. Se tiene hasta el 13 de septiembre para lograrlo, pues esa es la fecha límite, de lo contrario, habrá que esperar hasta la siguiente elección. Viendo esto, los partidos de oposición apuestan a que no se alcance la meta a tiempo.

La pregunta concreta que se le plantea al ciudadano es la siguiente: *“¿Estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre* *presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso?”*.

Lo anterior de conformidad con el Artículo 15, párrafo II, así como de las fracciones I, II, III, IV y V del Artículo 33 de la Ley Federal de Consulta Popular, y considerando que la consulta popular es un mecanismo de democracia participativa, en la que, a través de un voto, los ciudadanos podemos expresar nuestra opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional.

Pueden solicitar una consulta: el presidente de la república, o bien, el equivalente al 33% de los miembros de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o el equivalente, por lo menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

A marzo de 2020, la lista nominal del INE es de 90 millones 36 mil 367, por lo que se requiere reunir al menos 1 millón 800 mil 727 firmas. La petición de consulta popular podrá presentarse a partir del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura (en este caso a partir del 1 de septiembre de 2019) y hasta el 15 de septiembre del 2020.

Por lo demás, se debe seguir un procedimiento establecido en la Ley Federal de Consulta Popular y cumplir con ciertos requisitos. Las firmas reunidas se presentarán ante el Senado, que las validará con el INE, para luego consultar su constitucionalidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con la ampliación, en marzo de 2019, del catálogo de delitos respectivo, ahora es posible juzgar al presidente del país y a integrantes del Congreso de la Unión, por corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas, entre otros.

Se trata de reformas del Congreso de la Unión a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permiten someter a proceso penal incluso al presidente de la República, y ya no sólo por traición a la patria, como estaba estipulado.

En tales modificaciones, fueron incluidos los delitos señalados en el segundo párrafo del artículo 19, que son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

En todos los casos se actuará conforme al artículo 111 constitucional, que establece que, para proceder penalmente contra el presidente, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, referente al juicio político. Así, el Senado resolverá según la legislación penal aplicable.

A juicio del senador Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación, están sentadas ya las bases constitucionales para combatir, erradicar y sancionar la corrupción, tal como lo demanda la sociedad.

Como ya lo dije inicialmente: con el enjuiciamiento al que seguramente serán sometidos los últimos cinco ex presidentes de la República, está a punto de saldarse una deuda histórica con la nación... Así sea, por el bien de todos.

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 07 de septiembre de 2020**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ [↑](#footnote-ref-1)
2. https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/PED2017-2023/Plan\_Estatal\_Desarrollo\_baja.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.gob.mx/sener/articulos/el-gobierno-de-mexico-fortalece-el-sistema-electrico-nacional [↑](#footnote-ref-3)
4. Época: Décima Época Registro; 2015305 instancia: Primera Sala Tipo de Tesis; Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, octubre de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis; 1 a./J. 85/2017 (1 0a.) Página: 189 PRINCIPIO DEPROGRES'VIDAD DEIOS DERECHOS HUMAA'OS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. [↑](#footnote-ref-4)
5. Controversia Constitucional 56/2017, Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión del 11 de febrero de 2019 y siguientes. Visible en www.scjn.gob.mx [↑](#footnote-ref-5)
6. Suprema Corte de Justicia de la Nación (2020). Comunicado de prensa 65/2020. Disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6108 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ídem [↑](#footnote-ref-7)
8. Ídem. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://mexico.as.com/mexico/2020/09/04/actualidad/1599237298_051016.html> [↑](#footnote-ref-9)
10. Mil 77 de Estados Unidos, 649 del Reino Unido y 634 de Brasi. [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.elfinanciero.com.mx/salud/mexico-primer-lugar-mundial-en-personal-de-salud-fallecido-por-covid-19-amnistia-internacional> [↑](#footnote-ref-11)
12. Idem. [↑](#footnote-ref-12)
13. <http://www.alejandroencinas.mx/wp-content/uploads/2020/07/OBSERVACIONES-SOBRE-VIOLACIONES-A-DDHHCOVID-19.SEGUNDAPARTE.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforma la fracción XIII del artículo 184 y se adicionan: un último párrafo al artículo 201, un antepenúltimo párrafo recorriéndose los siguientes párrafos del artículo 239, las fracciones VIII y IX al artículo 303 y el artículo 314Bis del Código Penal de Coahuila de Zaragoza. [↑](#footnote-ref-14)
15. Guevara Bermudez, J. y Chávez Vargas, L. (2020). La prisión preventiva oficiosa: contraria a derechos, ineficaz y costosa. Revista Nexos. Disponible en: <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=jose-antonio-guevara-bermudez> [↑](#footnote-ref-15)
16. Idem. [↑](#footnote-ref-16)
17. INEGI (2017). En números “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México”. Documentos de análisis y Estadistica. Disponible en: <http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_numeros2.pdf> [↑](#footnote-ref-17)
18. Angel, Arturo (2019). Aumenta la población penitenciaria tras 5 años de tendencia a la baja. Animal Político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/09/poblacion-carceles-aumento-prision-preventiva/ [↑](#footnote-ref-18)
19. Zepeda Leucona, Guillermo. (2004). Los mitos de la Prisión preventiva en México. Open Society Justice Initiative. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/23256.pdf> [↑](#footnote-ref-19)
20. Guevara Bermudez, J. y Chávez Vargas, L. (2020). La prisión preventiva oficiosa: contraria a derechos, ineficaz y costosa. Revista Nexos. Disponible en: <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=jose-antonio-guevara-bermudez> [↑](#footnote-ref-20)
21. Idem. [↑](#footnote-ref-21)
22. INEGI (2017). En números “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México”. Documentos de análisis y Estadistica. Disponible en: <http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_numeros2.pdf> [↑](#footnote-ref-22)
23. Angel, Arturo (2019). Aumenta la población penitenciaria tras 5 años de tendencia a la baja. Animal Político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/09/poblacion-carceles-aumento-prision-preventiva/ [↑](#footnote-ref-23)
24. Zepeda Leucona, Guillermo. (2004). Los mitos de la Prisión preventiva en México. Open Society Justice Initiative. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/23256.pdf> [↑](#footnote-ref-24)
25. <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-felix-diaz/como-evitamos-que-violen-ninas-y-ninos> [↑](#footnote-ref-25)
26. <https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/> [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/es-2019-el-ano-con-mas-ataques-sexuales-menores> [↑](#footnote-ref-27)
28. Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas 2019, <https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019-RE_0.pdf> [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://vanguardia.com.mx/articulo/30-de-abusos-sexuales-en-coahuila-son-contra-mujeres-menores-de-15-anos> [↑](#footnote-ref-29)
30. <https://www.unicef.es/noticia/iniciativa-con-el-sector-turistico-hoteles-amigos> [↑](#footnote-ref-30)
31. <https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/10Diag_Trata_Coahuila_c.pdf> [↑](#footnote-ref-31)
32. <https://www.unicef.org/republicadominicana/MANUAL_ESC_Turismo_IMPRENT-18-11-2011.pdf> [↑](#footnote-ref-32)
33. <https://www.forbes.com.mx/negocios-consumo-cerveza-cuarentena-covid-19-nielsen/> [↑](#footnote-ref-33)
34. <https://www.nielsen.com/mx/es/insights/article/2020/coronavirus-covid-19-y-su-evolucion-en-el-consumo-en-mexico/> [↑](#footnote-ref-34)
35. [*https://politica.expansion.mx/estados/2020/05/17/mas-de-120-personas-mueren-en-cuatro-estados-por-alcohol-adulterado*](https://politica.expansion.mx/estados/2020/05/17/mas-de-120-personas-mueren-en-cuatro-estados-por-alcohol-adulterado) [↑](#footnote-ref-35)
36. [*https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/policiaca/joven-muere-al-beber-alcohol-adulterado-en-parras-5279911.html*](https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/policiaca/joven-muere-al-beber-alcohol-adulterado-en-parras-5279911.html) [↑](#footnote-ref-36)
37. <https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=majorepidemiological&alias=1838-norma-sobre-manejo-de-intoxicacion-por-metanol-ministerio-de-salud-de-nicaragua&Itemid=1179&lang=es> [↑](#footnote-ref-37)
38. Artículo 206 de la Ley General de Salud [↑](#footnote-ref-38)
39. Artículo 207 de la Ley General de Salud [↑](#footnote-ref-39)
40. Artículo 208 de la Ley General de Salud [↑](#footnote-ref-40)
41. Artículo 464 de la Ley General de Salud [↑](#footnote-ref-41)
42. Artículo 150 de la Ley Estatal de Salud [↑](#footnote-ref-42)
43. Artículo 156 de la Ley Estatal de Salud [↑](#footnote-ref-43)
44. Artículo 1 de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza [↑](#footnote-ref-44)
45. Capítulo Segundo del Título Cuarto de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza [↑](#footnote-ref-45)
46. Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo A-CH, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Editorial Porrúa, Décima Segunda Edición, México, 1998, página 693. [↑](#footnote-ref-46)
47. Fraga, G., op. cit, página 406. [↑](#footnote-ref-47)
48. Derecho administrativo, segundo curso, Editorial Porrúa, Décima octava Edición, México 1997, página 637. [↑](#footnote-ref-48)
49. Fraga, G., op. cit., página 297. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibídem. Página 398. [↑](#footnote-ref-50)
51. El Universal. Decreto dejaría sin escuela a 1 millón de jóvenes con discapacidad. Consultado en:

    <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/decreto-dejaria-sin-escuela-1-millon-de-jovenes-con-discapacidad?fbclid=IwAR3MmfHoVzREWbnFGJUAf2mk40QBwvAQwUlHp1QMpJi5-Qx9oqMzozj3ydU> [↑](#footnote-ref-51)
52. Secretaria de Educación Pública. Directorios de CAEDS, en el Distrito Federal; y de las Aulas Gilberto Rincón Gallardo, en los estados. Consultado en:

    <http://www.sems.gob.mx/es/sems/directorios_caeds_df_aulas_gilberto_rincon_gallardo_estados> [↑](#footnote-ref-52)